



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Facultad de Trabajo Social

Doctorado en Trabajo Social

Título:

Veinte años no es nada.

**Intervenciones y Prácticas, el Trabajo Social en el campo de la justicia
penal juvenil.**



Doctoranda: Mg. Marcela Velurtas

Directora de Tesis: Dra. Margarita Rozas Pagaza

Co- Directora: Dra. Silvia Guemureman

Agosto, 2015

INDICE

Agradecimientos	Pág. 4
------------------------	---------------

CAPITULO 1

a.	Introducción	Pág. 6
b.	Relevancia del tema.	Pág. 10
c.	Interrogantes y objetivos que orientaron la investigación	Pág. 15
d-	Estado de la cuestión	Pág. 19
e-	Marco teórico-conceptual, las categorías centrales.	Pág. 24
f-	Estrategia Metodológica	Pág. 39

CAPITULO 2: La justicia penal de *menores*

a-	El plano normativo: Las normas y procedimientos que crean, organizan y regulan el campo.	Pág. 51
	El Complejo Tutelar	Pág. 51
	La Protección Integral.	Pág. 55
	Tensiones persistentes	Pág. 64
b-	El plano institucional: Los Juzgados Nacionales de Menores	Pág. 67
	Los Tribunales Orales de Menores.	Pág. 75
c-	El tratamiento tutelar	Pág. 81

CAPITULO 3. El Trabajo Social en la justicia penal de *Menores*

a-	Origen y vigencia del espacio de inserción socio-ocupacional.	Pág. 89
b-	La dimensión histórica en clave documental	Pág. 101
c-	La dimensión histórica según sus protagonistas	Pág. 109
d-	El Cuerpo de Delegadxs Inspectores de <i>Menores</i> . Características generales	Pág. 115
e-	Condiciones de trabajo	Pág. 125
f-	Organización y competencia: la delimitación de tareas	Pág. 128

CAPITULO 4: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

a-	La juventud como condición social	Pág. 139
----	-----------------------------------	-----------------

- b- ¿Quiénes son esos chicos? Condiciones de existencia y algo más **Pág. 141**
- c- Las causas de la intervención judicial **Pág. 157**

CAPITULO 5: Intervenciones y prácticas, el Trabajo Social. **Pág. 162**

- a- El campo y la dinámica del quehacer cotidiano **Pág. 162**
- b- Prácticas e intervención profesional. **Pág. 172**
 - Demandas y expectativas **Pág. 181**
 - Que se hace y que se dice en relación a lo que se hace. Lo prescripto y lo construido. **Pág. 183**
 - La organización de los equipos de trabajo **Pág. 203**
 - Y de nuevo,...que dicen que dicen los jóvenes **Pág. 221**
- c- Los informes sociales, el soporte escrito **Pág. 224**

CONCLUSIONES **Págs. 232**

BIBLIOGRAFIA **Págs. 240**

LEYES Y NORMATIVA CONSULTADA **Págs. 250**

FUENTES DE DATOS OFICIALES **Págs. 251**

ANEXOS **Págs. 252**

- a. Pautas entrevistas a Delegados Inspectores, trabajadores sociales
- b. Pautas de entrevistas a funcionarios y jueces
- c. Cuestionario auto-suministrado para Delegados Inspectores de Menores de la Justicia Nacional Penal
- d. Relevamiento de espacios físicos
- e. Acuerdo General de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Lineamientos informes
- f. Mapa de zonas, provincia de Buenos Aires - Reglamento para la Jurisdicción

Agradecimientos

Terminar esta tesis implica reconocer y agradecer a quienes motivaron, acompañaron y contribuyeron generosamente en este proceso, de distinta manera y desde espacios académicos, profesionales y especialmente personales.

Una merecidísima mención al conjunto de aquellos jugadores de este campo, a la generosa predisposición que tuvieron los entrevistados, muchos de los cuales son, de manera genérica, compañeros de trabajo. También a los compañeros de cursos del Doctorado de la Fac. de Trabajo Social, la cátedra, el equipo de investigación y también a los colegas de la UBA; todos ellos, especialmente en el último periodo de escritura “bancaron” mi atención más concentrada en esta tesis. A aquellos a quienes consulte detalles, pedí que leyeran borradores horribles, los llame por teléfono, envié mails y mensajitos diversos, les pedí datos, los convoque a reuniones y también los sometí a sesiones de cavilaciones y dudas.

Mientras escribo este agradecimiento pienso en la inminente reforma del código procesal penal, que omitió la mención del fuero de “menores” que seguramente será incluido “de prepo” en las leyes de implementación que se discuten, mientras la ley penal juvenil espera.... abandonada, no como la princesa del cuento sino, como una de las demandas pendientes en el Congreso. Pese a la preocupación mediática y social no hay evidencia de un interés que avale su tratamiento.

Quiero agradecer especialmente a mi Directora, que ha sido un apoyo y estímulo permanente en mi trayectoria por la Universidad de La Plata. También a mi co-directora que supo orientarme aún en la desobediencia. En este sentido todas las falencias de este trabajo son mi responsabilidad, ya que he gozado de enorme dedicación por parte de ambas que siempre estuvieron dispuestas a señalar y sugerir caminos superadores.

La tesis en su conjunto estuvo plagada de las alternativas propias de quien no tiene un solo anclaje, me dedique a la profesión con una vocación irrefutable, nunca resigne mi interés por el ejercicio profesional aunque tempranamente entendí que requería de un espacio paralelo y sistemático de reflexión y formación que ejercí en la Universidad, no solo en actividades de docencia sino en el desarrollo de la investigación y la formación sistemática

en el posgrado. Además de una vida, como suelo referirme a todo aquello que es parte del mundo en el que vivo, plataforma crucial para poder hacer y -a veces- hasta disfrutar de esa constelación donde luego se integra el trabajo profesional y el académico.

Es por todo eso que, esta tesis doctoral en este caso, es el corolario de un proceso largo de formación, lecturas, preguntas, muchos borradores y pocas certezas.

CAPITULO 1

a. Introducción

En la sociedad argentina actual, desde distintas posiciones y con diverso interés se desarrollan debates en relación con la justicia, que adquieren particular vigencia cuando el mismo se concentra en la cuestión penal juvenil.

La justicia penal históricamente se encuentra asociada con el control social y las formas que asume la sanción a los infractores a la ley, recientemente los problemas en torno a la llamada inseguridad ciudadana eclipsaron la atención de buena parte de la sociedad. Cuando se trata de la población de menores de edad, y de acuerdo con las normativas nacionales e internacionales existe un consenso relativo a que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, el tratamiento de estas cuestiones asume una forma diferente, dado que se considera que estos sujetos transitan por un período de formación integral, por lo que la respuesta social ante las infracciones de jóvenes a la ley debe estar orientadas en el marco de las llamadas medidas socio-educativas (Reglas Mínimas de Beijing, 1985). Esta delimitación ha sido la plataforma de la organización de una justicia especializada, por la vía de normas que definieron el correspondiente entramado institucional¹, que orientaron la constitución de un abanico de mecanismos y estrategias que, con distintos fundamentos y orientaciones ideológicas, fueron desplegados por agentes encargados de desarrollar las intervenciones sociales para la atención y el tratamiento de esta población, los presuntos infractores y sus grupos familiares y/o convivientes.

Resulta necesario señalar que si bien es el encuadre jurídico/legal² el que hegemoniza los mecanismos de intervención, en la justicia de menores³ existen distintos agentes

¹ El conjunto institucional es amplio, se integra a las instituciones del Poder Judicial y otras instituciones dependientes del poder ejecutivo, especialmente haremos mención a aquellas que dependen a nivel nacional de la actual SENNAF, y a nivel local del CDNNyA, que paulatinamente presentaremos en el curso de esta tesis.

² La distinción entre justicia y ley es desarrollada por numerosos autores pero no será abordada en esta tesis.

³ Haremos mención al debate sobre esta designación, su uso y sus connotaciones, más adelante. Por ahora diremos que alude a los menores de edad, aunque destacamos que el uso del término

profesionales, abogados y no abogados. Es el caso de los Delegados Inspectores de Menores, que fueron incluidos expresamente en este campo⁴ para trabajar con esta población considerada como “sujetos especiales” (Terragni, 2009). Estos agentes han sido mayoritariamente trabajadores sociales, los que desde mediados del Siglo XX toman parte en los procesos “gestión judicial” (Jorolinsky, 2008) en el fuero. La inclusión de estos profesionales es casi contemporánea a la creación y desarrollo del fuero de la justicia nacional de menores y una señal distintiva de su atención a la población de niños, adolescentes y jóvenes. Esto es, ocupan un lugar reconocido desde los orígenes de esta justicia especializada.

En esta tesis nos propusimos desarrollar un proceso de investigación, análisis y reflexión en torno a determinados aspectos y condiciones referidos a las prácticas e intervenciones profesionales que despliegan los Trabajadores Sociales, contratados como Delegados Inspectores de Menores inscriptos en el espacio de los Juzgados Nacionales de Menores y los Tribunales Orales de Menores con jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires, en el fuero nacional penal. Estos profesionales fueron incorporados en este campo como parte del proceso de intervención judicial asociado con esta población. Sus intervenciones se refieren a trayectorias personales y familiares, a situaciones que exceden la administración de la justicia penal propiamente dicha. Las mismas se traducen en informes que se incorporan en las actuaciones judiciales y son puestos a disposición de los jueces con el propósito de contribuir a la toma de decisiones durante el proceso y, especialmente, al momento de resolver la situación legal, establecer o no una sanción.

La elección de la temática no fue azarosa. Desde 1990 ingresé en el Poder Judicial de la Nación como trabajadora social y desde 1992 me desempeñé como Delegada Inspectora de Menores dependiente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, adscripta primero a un Juzgado de Sentencia de Menores el cual posteriormente pasó a constituirse como Juzgado Nacional de Menores. A este trabajo, se

“menor” infringe una regla gramatical al aplicar un adjetivo donde corresponde un sustantivo: niño, niña, adolescente, joven.

⁴ Normativo e institucional del fuero penal de menores, la noción de campo es abordada en el primer capítulo.

incluyó también fines de 1992⁵ el trabajo con los Tribunales Orales de Menores. Asimismo, desde 2006 integró el CEDIM⁶, que es una organización que nuclea a estos profesionales, que se encuentra orientada a generar espacios de diálogo con las distintas instancias institucionales y a desplegar espacios de intercambio y reflexión para cualificar el desarrollo de este trabajo, ello facilitó el acceso a información y a contactos considerados claves para las entrevistas. A esa confluencia aludimos en el título de esta tesis, que se sitúa en simultaneidad temporal en las dos décadas de vigencia del llamado paradigma de la Protección Integral de la Infancia y también a mi trayectoria en este campo.

De tal manera que algunas de estas preocupaciones e inquietudes han sido una constante que ha atravesado mi desempeño laboral y académico de manera persistente desde hace algunos años. Esta tesis, asimismo, tuvo inicio e inscripción en el marco del Proyecto de Investigación “Las condiciones actuales de la intervención profesional en el Trabajo Social: la relación salarial y sus representaciones. Estudio de tres campos de intervención: jurídico, discapacidad y salud”⁷. En el marco de ese proyecto, la búsqueda desarrollada estuvo centrada en la comprensión y análisis de las condiciones de la intervención profesional y sus particularidades en distintos campos, a fin de dar cuenta de las actuales condiciones de dicha intervención, la cual se desarrolla, al decir de la Directora “en un contexto atravesado por tensiones que hacen de dicha práctica profesional un campo en cuestión” (Rozas, 2009).

En este estudio aspiramos alcanzar crecientes niveles de análisis, no como analistas externos sino, como parte activa de este campo con nuestros juicios y prejuicios los cuales pretendemos discutir a partir de identificar distintas dimensiones, indicadores y relatos que nos permitan abordar este universo.

⁵ Acordada 81/92 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 27/11/92 en la que se resolvió que los Delegados Inspectores deberían cumplir tareas de “asistencia tutelar” (Designación utilizada para nombrar a los profesionales que integrarían los equipos que asistirían a los TOM, que no fueron creados).

⁶ Centro de Delegados Inspectores de Menores, asociación civil que nuclea a estos profesionales.

⁷ Proyecto de investigación acreditado en el programa de incentivos a docentes e investigadores MCTeIP de la Nación, radicado en la Facultad de Trabajo Social, UNLP, dirigido por la Dra. M. Rozas Pagaza, período 2010-13 y vinculado al Centro de Estudios en Trabajo Social y Sociedad de la misma Facultad.

Nos interesó visibilizar las modalidades que asumen estas intervenciones a la luz de las profundas modificaciones que el encuadre legal posibilitó desde la reforma que impulsó el reemplazo de la llamada Ley de Patronato por las normas que se derivaron de la suscripción de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, sancionada como ley nacional N° 23.849, de Protección Integral de la Infancia, incorporada en el año 1994 a la Constitución Nacional, que en 2014 acumula veinte años de experiencia. Donde se combinan tendencias distintas que conjugan la amenaza de la sanción penal con las llamadas medidas socioeducativas y de protección.

Visibilizar la dinámica de trabajo en este campo que caracterizaremos como complejo, de tendencias que se implican aunque con sentidos contrapuestos, a fin de problematizar los modos en que se gestionan las contradicciones entre la protección y la sanción. Un campo donde se verifican avances sustantivos en materia normativa, en un contexto nacional con “claros movimientos hacia una mayor igualdad en ciertas dimensiones, pero también la perdurabilidad, o en ciertos casos hasta el reforzamiento, de desigualdades en otras” (Kessler, 2014:18).

La justicia, en general, ha sido un campo poco explorado por los investigadores en Trabajo Social, lo que puede ser atribuido a las dificultades de acceso a la información que ha caracterizado a este campo y también a que pocos profesionales desarrollan simultáneamente intereses académico-científicos sistemáticos. La investigación académica no necesariamente se identifica con los imperativos de conocimiento que se requieren en los procesos de intervención profesional, por lo que es común advertir cierto distanciamiento entre los espacios académicos y profesionales. Estos últimos, más preocupados por resolver demandas cotidianas, limitaciones institucionales, condiciones laborales, entre otros problemas. Ello, sin duda, muchas veces inhibe la apertura a la reflexión sobre el propio quehacer profesional que raramente es propiciado por las mismas instituciones. Consideramos que esta ausencia no solo constituye un área de vacancia sino que, en nuestro caso, también operó como incentivo orientado a visibilizar, desnaturalizar y problematizar un espacio complejo y obturado a la mirada del colectivo profesional.

Asimismo, cabe mencionar que el Trabajo social en Argentina históricamente surge como una profesión considerada de carácter auxiliar, subalterna⁸, respecto de otras disciplinas –la medicina y el derecho– situación que condicionó fuertemente su desarrollo como espacio de inserción socio-ocupacional en el campo de la justicia. Es en el curso del siglo XX, cuando el Trabajo Social alcanza estatus como profesión universitaria en el marco de las ciencias sociales por lo que su acervo disciplinar y la producción de conocimientos, especialmente en este campo, ha estado afectada por las condiciones aludidas.

A partir del análisis de los imperativos y condiciones históricas, normativas, institucionales y profesionales es que, consideramos se organiza un mosaico que encuadra y tensiona la intervención y las prácticas profesionales que pretendemos analizar en esta tesis. Nos interesa reflexionar acerca de las intervenciones que se despliegan con niños, adolescentes y jóvenes acusados de delitos cometidos en la ciudad de Buenos Aires. Estas intervenciones estuvieron encuadradas por mucho tiempo en un marco legal que fue transformado sustancialmente desde la reapertura democrática en Argentina ocurrida en 1983. Sin embargo, persiste la idea de que dichas intervenciones no han sido modificadas significativamente, cuyo eje es el cuestionado “tratamiento tutelar”, ejercido por el juez en conjunto con los profesionales a los que nos referiremos, cuya existencia es portador de la sospecha relativa a la vigencia del encuadre legal que fuera derogado. Esta tesis procura reflexionar también sobre este aspecto.

b- Relevancia del tema.

El reemplazo de los fundamentos de la doctrina de la situación irregular a otra basada en el reconocimiento de los derechos de los sujetos niños, adolescentes y jóvenes supone una modificación sustantiva de los marcos ideológicos y normativos que regulan los dispositivos de intervención institucional. Sin embargo, en su conjunto, se observa que en los procesos de atención e intervención, la persistencia de nominaciones y modalidades de trabajo asociadas con la vieja conceptualización de la tutela, que se expresan en la gestión cotidiana de estos espacios institucionales y consideramos que dan cuenta de tensiones al

⁸ Retomaremos la cuestión de la subordinación y la paulatina incorporación de profesionales en este campo.

interior del campo de la justicia penal juvenil. Estas tensiones pueden ser leídas como persistencia del régimen anterior, parte de lo que se disputa en una época. En este sentido aludimos a tendencias, un recurso que nos permite recuperar el proceso reciente no aislado de otro supuestamente pasado. Eludimos un ejercicio de contrastación entre hitos temporales en una línea de tiempo, supuestamente aislados.

En consonancia con lo expuesto, a más de una década de las reformas de legislación y procedimientos, nuestro interés estuvo orientado al estudio de las prácticas⁹ (Bourdieu, 1997) desarrolladas por profesionales de las ciencias sociales¹⁰ que integran el cuerpo de Delegados¹¹ Inspectores de Menores, las cuales se despliegan en condiciones específicas – que las posibilitan y limitan- en el marco de determinadas configuraciones institucionales (Elias, 1982; Grimson, 2011), los Juzgados Nacionales de Menores del fuero penal y los Tribunales Orales de Menores, en las que dichos agentes profesionales se insertan. Prácticas en las que consideramos es posible observar marcas de la tensión que se expresa entre tutelas y derechos emergentes.

Nuestro punto de partida fueron una serie de inquietudes surgidas en el tránsito simultáneo de la vida profesional y académica que nos permitieron identificar distintas dimensiones que pensamos como nudos problemáticos y tensiones que se expresan en las prácticas profesionales y exhiben marcas inherentes al desarrollo de procesos de institucionalización de las reformas¹² aludidas.

Nuestra indagación pretendió visibilizar las formas en que se procesan las reformas y como se expresan estas tensiones, a través del estudio de las prácticas de los agentes profesionales, en el conjunto de las instancias judiciales aludidas a las que nos referimos

⁹ Nos detendremos en esta conceptualización más adelante.

¹⁰ Mayoritariamente integrado por trabajadores sociales, pero también otros profesionales: sociólogos, psicólogos, etc., que trabajan como “auxiliares del juez”.

¹¹ En adelante utilizaremos la denominación de Delegadxs para referirnos al conjunto de profesionales, varones y mujeres, que se desempeñan bajo esta denominación. Es común que en el lenguaje cotidiano se utilice la designación de Delegadas dada la exigua presencia masculina. El uso del lenguaje considerado neutral suele ser considerado un sesgo sexista, sin embargo y para facilitar la redacción y también la lectura apelamos a esta “convención”.

¹² Cabe señalar que en Argentina hoy se desarrolla un demorado y controvertido debate referido a la reforma del régimen penal de niños y jóvenes.

como campo, e incluye el prejuicio respecto de la persistencia de prácticas vinculadas a normas y procedimientos que caducaron como un distintivo institucional.

Coincidimos con Guemureman y Daroqui (2001) en que a partir de la aparición del concepto de cuestión social¹³ la preocupación desde el orden social dominante ha sido, aunque con distintas configuraciones históricas, identificar quienes la constituyen, su control y su gobernabilidad. El campo de la justicia, el poder judicial concretamente, es una institución especialmente relevante en este sentido.

Asimismo, ha sido un campo de actuación tradicional para los Trabajadores Sociales en Argentina, de hecho, uno de los dos primeros centros de formación universitaria en Buenos Aires tuvo sede en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el otro en la Facultad de Medicina de la misma Universidad¹⁴. En ambos casos, la formación de los agentes profesionales estuvo estrechamente vinculada a una construcción histórica particular de la cuestión social (Zimmermann, 1995), concepto que constituye un fundamento teórico del origen del Trabajo Social, y de la especialización de esta disciplina y su espacio de trabajo, al decir de Iamamoto (2003: 41).

La definición del espacio de la justicia en el fuero de menores, en nuestro país, se remonta a principios de siglo pasado. La ley 10903 Patronato de Menores que data de 1919, conocida como la Ley Agote, fue la plataforma teórica e ideológica en la que se establecieron los conceptos que se proyectaron durante casi todo el siglo XX, dejaron profunda huella en la delimitación de este campo e impregnaron la formación de los agentes judiciales, en general, durante casi un siglo.

Desde fines de la década de 1980 y en el marco de los debates desarrollados por las organizaciones de derechos humanos y de distintos grupos que aunaron su interés por la infancia y los derechos, se fue problematizando y madurando el reconocimiento y la necesidad de revisar el estatuto del Estado en su relación con la infancia. Desde entonces se realizaron reformas significativas, la más importante: la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN) que más tarde tomaría forma de ley

¹³ Tomaremos como referencia el concepto y los desarrollos de Castel, 1999.

¹⁴ Su historia fue documentada por varios autores en Argentina.

nacional, en año 1990. La ratificación de la CDN se configuraba como un horizonte que congregaba los esfuerzos de numerosas instituciones, especialmente de la administración estatal, las políticas públicas y el accionar de la sociedad en los temas que afectan a las personas menores de edad. Incorporada efectivamente al marco legal nacional a través de la ley 23.849, fue incorporada en el año 1994 a la Constitución Nacional y casi una década más tarde, en el año 2005, se sancionaba la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que delineó con mayor precisión las transformaciones que afectaban de manera directa la intervención en este campo, en el que se involucra un número considerable de trabajadores sociales. Cabe señalar que la Ciudad de Buenos Aires a partir de la sanción de la Ley 114 en el año 1999 lideró, a nivel nacional, el proceso de reformas normativas e institucionales iniciado.

En su conjunto, estas leyes implicaron una transformación absoluta de las concepciones, los fundamentos y las prácticas que se desplegaron en el último siglo en materia de infancia, especialmente en el campo de la justicia, que constituye el centro de nuestra atención. El reemplazo de la doctrina de la situación irregular a otra basada en el reconocimiento de los derechos de los sujetos niños, adolescentes y jóvenes, de la Protección Integral, modificó de manera sustantiva los marcos ideológicos y normativos que regulan los dispositivos de intervención institucional. De tal manera se reconocen dos lógicas que tensionan este campo. Una asociada con una dimensión histórica pasada pero persistente y otra que emerge en el contexto contemporáneo. Un proceso que presenta aspectos conflictivos, que tensionan el campo donde es posible observar transformaciones que no terminan de cristalizar. Matices y contradicciones. Visibilizar este proceso, esta tensión, es uno de los ejes que concentra nuestra atención, a partir de sus manifestaciones en las prácticas de los profesionales donde consideramos es posible reconocer las distintas dimensiones que se imbrican.

Nuestra investigación concentra su atención en estos profesionales, Delegados Inspectores de Menores¹⁵: trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, etc., que son parte del sistema penal de menores, juvenil, para la atención específica de la población que tramita situaciones en este fuero, vinculados con los procesos de orientación y supervisión, asociados a lo que se denominó como “tutela”, actualmente enmarcados en una línea de

¹⁵ Esta designación se relaciona con su origen: delegados del Juez para inspeccionar.

trabajo que implica el reconocimiento de los niños y adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos. Sus intervenciones profesionales han estado tradicionalmente asociadas con el desarrollo de un vínculo permanente con instituciones del sistema de políticas sociales. La asunción de estos procesos, sumada a la aludida opacidad y desconocimiento público de los procesos que -en general- se desarrollan en “la justicia”, ha dado lugar a distintos cuestionamientos respecto de cuál es la tarea prescripta y las formas que asume el despliegue de sus intervenciones y los objetivos de las prácticas que se desarrollan con los jóvenes con quienes se vinculan.

Ello se inscribe en un proceso de transición normativa, en este entramado institucional, donde estas prácticas profesionales adquieren densidad problemática por las cuestiones y condiciones normativas, institucionales y sociales, que se expresan en distintos soportes discursivos y escritos, algunas de las cuales abordamos en esta tesis.

Nuestra preocupación, como ya explicitamos, está centrada en el análisis de las prácticas de estos profesionales, sus posibilidades y limitaciones, en la trama institucional, como parte de la gestión judicial, y con los actores con los que se vinculan a través de sus intervenciones. Ello nos ha permitido identificar tensiones entre las distintas lógicas que se encuentran en un campo donde se dirime el tratamiento de los jóvenes acusados de infringir la ley, su punibilidad y la garantía de sus derechos, en una acepción amplia.

Nos propusimos indagar y visibilizar las prácticas de estos profesionales que son parte del campo de la justicia penal para menores de edad cuyo trabajo se desarrolla con la población que se integra con presuntos autores de delitos¹⁶ cometidos en la ciudad de Buenos Aires. Un espacio donde se conjugan, entre otras tensiones, demandas relativas al respeto a las garantías previstas en la ley y el código de proceso penal, el ejercicio pleno de derechos reconocidos a los niños adolescentes y jóvenes; como también demandas relativas con la seguridad ciudadana e imágenes elaboradas por los medios de comunicación social.

¹⁶ Estos acusados pueden tener residencia en esta ciudad y/o en la provincia de Buenos Aires. El Reglamento de la Jurisdicción fija los límites que se establecen para este trabajo territorial en dicha provincia.

Consideramos que existe una vacancia en la producción de conocimientos que escasamente contribuye a elaborar las imágenes cotidianas que los medios de comunicación producen y reproducen, sindicadas como problemas de inseguridad ciudadana asociados con los jóvenes, el riesgo y nociones relativas a la “defensa social”.

En este sentido, este estudio resulta original en tanto que en la producción de las ciencias sociales, en general y en particular de la denominada sociología jurídica, no se identifican estudios que aludan de manera directa a estos agentes ni a los procesos de intervención de los cuales son parte. Los cuales han privilegiado temas referidos a la punibilidad, los procedimientos y los derechos en el proceso; la participación de los actores del ministerio público: defensores oficiales, defensores públicos de menores e incapaces¹⁷ y jueces. En general, obvian incorporar menciones a los profesionales que trabajan en contacto directo con los menores de edad acusados. Esta vacancia ¿puede ser asociada al hecho de que estos profesionales son considerados los operadores de la denostada tutela? Dado que son quienes efectivamente asumieron un trabajo personal –hoy en el marco de las llamadas medidas socio educativas- con estos jóvenes y sus familias, encargados de producir la información -fundada en los procesos de intervención profesional- que puede ser utilizada por jueces, defensores oficiales y defensorías públicas de menores e incapaces. Información especialmente relevante en los debates en juicio, muchas veces determinante a la hora de tomar decisiones relativas a la imposición o no de penas a los menores de edad acusados.

c- Interrogantes y objetivos que orientaron la investigación

No partimos de “hipótesis-a-ser-verificadas sino de modelos-de-relaciones-posibles que, por medio de la investigación, (nos) permitan ir reconstruyendo el segmento de realidad seleccionada como una totalidad interrelacionada y original; siempre abierta a posibles

¹⁷El Asesor/Defensor de Menores e Incapaces es una figura presente en el Código Civil que integraba el Poder Judicial. Su función es asesorar obligatoriamente a los jueces en aquellos casos en los que menores de edad o personas incapaces fueran parte del proceso, para cuidar sus intereses y el cumplimiento de las leyes de protección. Ejercen una representación “de carácter tuitivo y no técnico defensivo” (Terragni, 2010:48). En el año 1994 se reformó la Constitución y se creó un órgano independiente y autónomo, el Ministerio Público. En 1998 se reorganizó el Ministerio Público por ley 24.946, cambiando su denominación por "defensor público de menores e incapaces" dependiente de la Defensoría General de la Nación.

reorganizaciones discursivas mediante otros intentos reconstructivos” (Saltalamacchia, 1992).

Los desarrollos teóricos de Bourdieu habilitaron una vía para nuestra reflexión sobre este espacio de intervención profesional. Es desde este enfoque que analizamos las particularidades en las que se despliega dicha intervención en un acercamiento que retoma –especialmente- la perspectiva relacional y el concepto de campo de este mismo autor.

Las transformaciones del encuadre legal implicaron un proceso de profundas reformas, extremadamente lento. Un proceso de articulación histórica, un devenir que implica conflicto (Lapassade y Lourau, en Escolar 2000). Consideramos que esos cambios requieren de ciertas condiciones, un sistema de apoyo que arbitre los medios que lo posibiliten. Sin embargo, estas reformas se iniciaron en un contexto en el que el deterioro operado en el aparato del Estado exhibía exigua capacidad y recursos para respaldar los desafíos y compromisos a los que se comprometía la nueva legislación¹⁸.

Nos detendremos en los procesos de intervención profesional y las prácticas que, en este campo, despliegan los Delegados Inspectores, Trabajadores Sociales. De tal manera nuestro universo se compone con parte de los profesionales que integran el cuerpo de Delegados Inspectores, aquellos que son adscriptos en los siete Juzgados Nacionales de Menores, del fuero penal, que dependen de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Los profesionales del mencionado Cuerpo de Delegados totalizan ciento dieciocho profesionales, de los cuales desde febrero 2014, noventa y uno están adscriptos en grupos de trece¹⁹, en cada uno de los siete Juzgados de Menores que componen este fuero. Nos interesan especialmente los trabajadores sociales quienes históricamente han hegemonizado este espacio socio-ocupacional.

¹⁸ La población de niños, adolescentes y jóvenes requiere de la garantía de acceso a políticas públicas específicas a servicios y bienes / derechos a los cuales en muchas ocasiones son excluidos por distintas situaciones. Esta población suele presentar severos déficit en relación a la materialización de sus derechos sociales-ciudadanos.

¹⁹ Desde el mes de febrero de 2014, se asignan a cada Juzgado trece profesionales, hasta entonces eran quince. El resto se integró en la dotación de Prosecretaría de Asistencia Social, por decisión de la Excm. Cámara Nacional de la que dependen.

A partir del planteo del problema, formulamos una serie de preguntas que nos permitan adentrarnos en el análisis de esta realidad compleja.

Los interrogantes, que a modo de hipótesis, formulamos en el inicio de esta investigación, se orientaron a visibilizar conceptos y prácticas que integran o se identifican con cada “matriz”, y las lógicas de organización que se configuran, y que expresan como se rearticulan conceptos y concepciones, los matices, sedimentaciones, las tensiones y también las transformaciones que se evidencian:

- ¿Cuáles son las modificaciones legales que afectaron o tienen mayor impacto para la intervención de los trabajadores sociales? Distinguimos un plano normativo y otro referido al lenguaje²⁰ utilizado en el desarrollo de la tarea cotidiana en la institución.
- ¿Qué características presentan las prácticas e intervenciones de los profesionales de las ciencias sociales?, ¿Se han incorporado dispositivos institucionales desde la emergencia de la nueva legislación, cómo inciden / condicionan el despliegue de las intervenciones de estos profesionales? ¿Qué aspectos persisten, asociadas con la vieja normativa y qué modificaciones se evidencian?
- ¿Qué opinión expresan jueces y defensores respecto a la intervención de estos profesionales?, ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles consideran objetivos de la intervención de estos agentes? ¿Que se espera del vínculo que estos profesionales desarrollan con los niños y adolescentes y sus grupos de referencia? ¿Qué opinan los funcionarios judiciales de las demandas que el trabajo de estos profesionales presentan a la justicia, asociadas con las instituciones del sistema de políticas sociales?

²⁰ Bourdieu (2010) cita a Saussure cuando define la lengua como sistema de relaciones objetivas que hace posible tanto la producción de un discurso como su desciframiento. Foucault (1968, 83) cuando habla del lenguaje, expresa: “sobre las palabras ha recaído la tarea y el poder de “representar el pensamiento””. Habermas considera la lengua como un poderoso instrumento que permite estudiar y explicar el discurso en el contexto social donde se produce.

- ¿Qué representaciones y “puntos de vista” (Bourdieu (2010, 62) tienen los propios agentes sobre su intervención profesional, sobre el lugar que ocupan en el campo y su capacidad de afectar los problemas sobre los que intervienen?

Estas preguntas orientaron la indagación que pretende problematizar la gestión judicial cotidiana en este campo, la justicia penal juvenil. Los procedimientos que se despliegan entre lo prescripto y lo construido. Consideramos relevante identificar demandas y expectativas de la institución respecto de la tarea asignada a estos profesionales, especialmente aquellas asociadas con las transformaciones del encuadre legal, que tensionan el campo. También conocer de manera directa la opinión que los profesionales expresan sobre las propias prácticas.

Dado que nuestro interés se focaliza en el análisis de las intervenciones de trabajadores sociales resulta pertinente recuperar el desarrollo de Yamamoto (2001:87) quien contribuye a nuestro propósito de contextualizar el análisis de las prácticas e intervenciones profesionales del Trabajo Social, bajo dos ángulos no disociados, expresiones del mismo fenómeno: uno asociado a la realidad vivida y presentada por sus agentes profesionales expresada en el discurso teórico-ideológico sobre su propio ejercicio profesional; otro, la actuación profesional como actividad socialmente determinada por circunstancias sociales objetivas que confieren una dirección social a la práctica profesional, lo que condiciona y al mismo tiempo sobrepasa la voluntad y/o conciencia de sus agentes individuales. Un procesamiento contradictorio, un desfase, que a entender de la misma autora, se confrontan en términos de intenciones expresadas en el discurso y el propio ejercicio de esa actividad. Desarrollo que retomamos en el último capítulo.

Recapitulando, el objetivo central que orientó esta tesis fue identificar, describir y analizar las tensiones inherentes al proceso de reformas a través del análisis de las prácticas profesionales, especialmente de los trabajadores sociales, en clave de capturar la dinámica de los procesos de institucionalización: instituido-instituyente. Propósito que se inscribe como parte de un interés sistemático, que ha encontrado marco en este Doctorado en Trabajo Social, por producir conocimientos que nos permitan realizar una contribución a los desarrollos teóricos disciplinares referidos a los procesos de intervención profesional.

El abordaje de este objetivo se desarrolló considerando la coexistencia de dos conjuntos normativos que, asociados con ciertos periodos históricos, conviven y tensionan el campo. Por ello hemos dedicado especial atención a, por un lado, - describir y analizar los fundamentos normativos e ideológicos que configuran el mosaico de reglas de juego que condicionan este entramado institucional y los procesos de intervención profesional -de los trabajadores sociales- en este campo de la justicia penal juvenil y; - por otro lado, - identificar condiciones históricas, normativas, institucionales y profesionales en que se desarrolla la intervención profesional.

Consideramos que ello nos permite identificar fundamentos y prácticas profesionales vigentes, visibilizar y analizar las formas institucionales que asumen los procesos de intervención profesional.

d- Estado de la cuestión

Las cuestiones de la justicia y la punibilidad han sido objeto de análisis por parte de numerosos autores procedentes de distintos campos disciplinarios, diferentes perspectivas teóricas y metodológicas. Han tenido relevancia los estudios procedentes del Derecho, de la Sociología, de la Antropología, de la Criminología, de la Psicología y también del Trabajo Social. En todos los casos ha habido entrecruzamientos y abordajes que podríamos considerar híbridos.

La búsqueda bibliográfica desarrollada, orientada por nuestras muchas inquietudes, habilitó la construcción de distintos agrupamientos. Esta alternativa nos permitió organizar en mosaico de estados del arte, a partir de agrupamientos considerados parciales que nos permitieron reconstruir el campo. De tal manera este relevamiento y su exposición, amalgama los distintos aportes que tematizan aspectos que convergen en el campo de la justicia penal juvenil, como el caso de los estudios de la juventud y otros abordajes disciplinares, particularmente, en el caso del Trabajo Social. En algunos casos se suman a los autores nacionales, otros de procedencia regional e internacional.

Resulta ineludible la referencia al abanico de estudios orientados sobre cuestiones relativas a las formas jurídicas que reflexionan acerca de la relación entre poder y derecho como formas de producción y organización de sistemas y relaciones de dominación, autores y obras como: El espíritu de la leyes de Montesquieu (2007), La verdad y las formas jurídicas de Foucault (1978), los estudios desarrollados por Boaventura Dos Santos (2006) y Supliot (2007); este último, referido a la función antropológica del derecho. También estudios asociados con la denominada nueva criminología, Taylor, Walton y Young (2007) a nivel internacional, en una línea de estudios convergentes con la llamada sociología jurídica, particularmente nos interesa nombrar a Zaffaroni (2011) como referente ineludible de un grupo más amplio de autores, a nivel nacional.

En Argentina, otro grupo de estudios, ponen su atención en contextualizar las cuestiones relativas al sentido y las formas que asume el castigo en un marco socio histórico y cultural específico. Por un lado, Caimari (2004) y Miguez (2008), quienes desarrollan un análisis situado en el contexto local. En este grupo, identificamos otras numerosas publicaciones, inscriptas en distintas perspectivas teóricas, atentos a ciertos períodos históricos, que profundizan distintas facetas del tema. En esta línea, encontramos otro grupo de autores que, desde el Derecho, conjugan preocupaciones relacionadas con el castigo penal en sociedades desiguales, aunque no centrado en la cuestión penal juvenil. Gargarella (2012) es referente de un grupo de investigadores con este perfil de trabajos. Con idéntico origen, otra línea de estudios, desde la llamada perspectiva de derechos, que integran Pautassi y Abramovich (2010), quienes identifican en los procesos de judicialización una vía que habilita derechos.

Específicamente, el problema de los menores y su control ha sido objeto de estudios muy relevantes en distintos países, vale mencionar el caso de Donzelot: La policía de las familias, en Francia; de Platt y Los salvadores del niño, en los EEUU, que ponen su atención en los procesos generales y desde una perspectiva adultocéntrica.

A nivel nacional, podemos distinguir las producciones concentradas en la cuestión penal juvenil en dos grupos que han desarrollado numerosos estudios, por un lado un conjunto de autores que desde el campo del derecho García Méndez, Mary Beloff, Noris Pignata, M. Terragni. Este grupo además tiene incidencia sobre los proyectos que lideran el debate

sobre las reformas recientes, y a mediano plazo, en materia de justicia para niños y jóvenes. Algunos de ellos sostienen preocupaciones respecto de la ausencia de empeño dirigido a transformar los arreglos institucionales en los que se debía poner en acto la nueva legalidad (Beloff, 2007). El otro grupo, desde la sociología, lo encabezan Daroqui y Guemureman que desde la publicación de *La Niñez Ajusticiada* (2001) constituyen un referente a nivel nacional y desarrollan un sistemático esfuerzo por dilucidar el entramado de relaciones entre sistema penal y derechos humanos, con un compartido interés sobre la situación de niños, adolescentes y jóvenes, y numerosas publicaciones en el marco de proyectos de investigación y distintas iniciativas como la del Observatorio de Adolescentes y jóvenes IIGG, FSOC, UBA.

Es relevante y pertinente citar a otra serie de autores, una nueva expresión de estudios que han comenzado a describir y analizar los problemas del llamado delito amateur y los pibes chorros, haciendo énfasis en la perspectiva de los actores, las prácticas de las instituciones, los jóvenes y sus familias y los medios de comunicación. En este sentido, han liderado un avance en la sistematización de datos cuantitativos y cualitativos que inician una trayectoria de estudios locales sobre los sujetos, las instituciones y las formas de gestionar los problemas que consideramos se encuentran asociados con este “campo”. Estos estudios dan cuenta de un contexto de creciente complejidad que adquiere lo social y un simultáneo proceso de empobrecimiento de las instituciones clásicas de atención de esta población. Las familias y los chicos que se presentan a la atención de los Juzgado en el fuero penal presentan, en una proporción considerable, necesidades y problemas que no han sido advertidos, atendidos o resueltos en las instancias de asistencia inmediatas o de proximidad con que los chicos y las familias sostienen o sostuvieron una relación cercana. Abordajes de destacados autores de las ciencias sociales, como Gayol y Kessler (2002) Kessler (2004), Miguez (2010), Duschatzky y Corea (2013) entre otros.

Desde los organismos internacionales como UNICEF, se ha desarrollado una importante producción escrita con énfasis en las normativas internacionales y las buenas prácticas, en la perspectiva comparada, que nos permite una mirada respecto de la realidad internacional, regional y nacional que en ocasiones se encuentra asociada con organismos nacionales tales como Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF),

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y centros de formación académica como FLACSO, entre otros.

También son relevantes otro tipo de estudios, nucleados a partir de las reuniones nacionales de Juventud, en espacio de convergencia interdisciplinario de las ciencias humanas y sociales, en el que se han visibilizado numerosas producciones en torno a la cuestión juvenil, especialmente aquellas que desarrollan una mirada crítica frente a la posición adultocéntrica que ha hegemonizado las intervenciones y los estudios orientados a la infancia y la juventud entre quienes destacamos a Chaves (2005, 2014), Margulis y Urresti (1998), Elizalde (2005) Mayer (2009), entre otras numerosas producciones a nivel nacional, que destacamos por sobre otra numerosa y contemporánea producción latinoamericana.

Sin embargo, aún es escasa la producción de estudios referidos a las trayectorias y experiencias de los jóvenes acusados²¹, en relación con la gestión cotidiana y reformas acontecidas en el propio sistema judicial. En este grupo destacamos las producciones de Guemureman (2005, 2011), Guemureman y Daroqui (2001) y Jorolinsky (2008) que circulan especialmente espacios de socialización académicos.

Merecen especial mención las producciones asociadas con el Trabajo Social. Relevamos distintas producciones relativas a la intervención de trabajadores sociales, en los procesos de judicialización de la vida familiar en el fuero civil, se destaca el trabajo de Nicolini (2011), Alday, Ramljak y Nicolini (2001), y el desarrollado por Ferraros y su equipo de cátedra (2010), especialmente referido a representaciones sociales de los propios trabajadores sociales, que indaga en distintos espacios socio-ocupacionales y que incluye el fuero penal de menores.

Otra línea de estudios recientes en el campo disciplinar, que recupera la práctica pericial del Trabajo Social, y refieren a la elaboración y contenido de informes sociales realizados en el campo de las intervenciones judiciales, como Robles (2004), Dell'Aglio (2004), Ponce de León y Krmpotic (2012) los que se orientan a discernir cuestiones atinentes a los

²¹ En este caso es relevante los trabajos desarrollados a partir de la creación en la UBA de estudios de posgrado, particularmente la Especialización en Problemáticas Infanto-Juveniles, hoy Maestría.

problemas de evaluación y diagnóstico en los cuales se ven incorporados Trabajadores Sociales convocados por los distintos fueros judiciales, en que se compilan experiencias a nivel nacional e internacional. En esta línea, la publicación de González Laurino (2013) también alude a los discursos expertos sobre la responsabilidad en la infracción adolescente, en el caso de Uruguay. Estos trabajos fueron relevantes para el desarrollo de nuestro análisis de informes sociales producidos por los trabajadores sociales, delegados inspectores.

Nos interesa destacar a D. Puebla y O. Marcon, que son autores que, desde el Trabajo Social en Argentina, incursionaron en el tema de la justicia penal juvenil; Bruno es otra colega que presentó su tesis de Maestría en el año 2012, en la que expone una interesante investigación acerca del conocimiento de los jóvenes respecto de los agentes con que se relacionan en el proceso penal, con el propósito de recuperar desde esta perspectiva juvenil lo que la autora denomina el cruce de “dos mundos” y la reciente publicación de Bustos (2015) que “desde la perspectiva del actor” se propone reconstruir las trayectorias de vida de los jóvenes afectados por intervenciones judiciales del fuero penal juvenil en la ciudad de Rosario.

Si bien, el Trabajo Social, como ya mencionamos, tiene inserción profesional en la justicia penal desde hace casi un siglo, la producción de conocimientos es reciente. Ello podría vincularse a la aludida posición de subalternidad en este campo como a la escasa tradición en investigación que caracterizó a esta profesión hasta que se estableció un vínculo sistemático con las ciencias sociales.

Finalmente una referencia especial a las producciones concernientes a la intervención profesional en el Trabajo Social. Hemos desarrollado una lectura abarcativa que parte de la numerosa producción de Rozas Pagaza (1998, 2001, 2004, 2014, Cazzaniga (2001, 2006), Iamamoto, Aquin, Karz, Carballada, Matus y Montaña, entre otros autores cuya lectura fue promovida en la trayectoria de este Doctorado, lo cual nos permitió desplegar nuestras preocupaciones e intereses.

e- Marco teórico-conceptual, las categorías centrales.

Desplegamos el marco teórico de manera concomitante con la lógica de la construcción inherente al proceso de investigación. Sin embargo, establecimos como punto de partida, un conjunto de conceptos considerados claves/ordenadores, que reelaboramos a lo largo de toda la tesis, sobre los cuales consideramos necesario definir una posición. Es el caso de la noción de campo, prácticas, intervención profesional y control social, entre otros, que integran una lista ineludible para reflexionar respecto de nuestras preocupaciones.

La justicia penal juvenil como campo, de sus estructuras sociales externas. Bourdieu define como campo (en Gutiérrez, 1997:31) “espacios de juego históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias” Su análisis puede tener distintas vías de ingreso, que señalan aspectos diferenciales en su composición y configuración, a saber: - En su aprehensión sincrónica, los campos se presentan como sistemas de posiciones y relaciones de posiciones. A entender de estos autores pensar campos es pensar relacionamente espacios estructurados de posiciones “ligadas por cierto números de propiedades que pueden ser analizadas independientemente de las características de quienes las ocupan” (en Gutiérrez, 1997:31, 32). Destaca distintas dimensiones que nos permiten adentrarnos en este análisis: lo que está en juego; su estructura histórica; la estructura de relaciones de fuerza comprometidas; las relaciones de poder que lo constituyen como campo de lucha, orientadas a su conservación – transformación; los intereses en juego; aspectos que en su conjunto lo dinamizan y permiten observar los límites y sus relaciones con demás campos.

El poder judicial es uno de los poderes establecidos como pilares de la organización estatal. Tradicionalmente caracterizado por la figura de una mujer ciega, una imagen “pasiva” respecto de los otros dos poderes: legislativo a quien acata y ejecutivo con quien mantiene autonomía. Se diferencia por sus funciones, las cuales requerirían de su ceguera²² que permitiría dar a todos igual atención y trato. La idea de la independencia entre poderes –asociada con su capacidad de establecer ciertas condiciones que le permitan dirimir con objetividad, neutralidad, “juega” persistentemente en el discurso hegemónico instituido que configura el imaginario de este campo.

²² considerada una virtud que le permitiría intervenir desinteresadamente.

Cuando en el marco de la definición del Estado se distinguen poderes: el poder ejecutivo, y legislativo son identificados como los núcleos de LA política y el poder judicial se le atribuye un rol técnico asociado con la aplicación de las normas. Sin embargo, tiene amplia aceptación la idea de que la interpretación de las normas y el poder delegados a los magistrados ha posibilitado que, el poder judicial, constituya un centro de poder político confrontado con la clásica noción de saber técnico que invariablemente se enuncia.

Schmitt (1987) cita a Trescher cuando señala que la teoría de la división de poderes representa “la más viva penetración de todas las esferas sociales por el Estado,... el hecho de que el Estado sea una unidad (política determinante) reposa sobre su carácter político” (op. cit., 73). Este poder es el fundamento de su desarrollo institucional, entre cuyas funciones se encuentra el procesamiento de un enorme abanico de conflictos y tensiones, de distinta naturaleza e intensidad tendientes a procurar paz, orden y seguridad. En el conjunto del Estado, las relaciones de poder se filtran en toda la sociabilidad y sus formas. La institución Estado es por antonomasia el poder. Nuestro análisis pretende visibilizar a la justicia como parte del Estado, como un espacio destinado al procesamiento de la tensión, orden y conflicto, coerción y administración y no como un campo donde existe ausencia de politicidad.

La idea de poder es central para comprender la fuerza que en su conjunto este sistema institucional despliega en la constitución del Estado mismo que se expresan en los modos de entender, construir y procesar las cuestiones que asume como misiones y funciones.

Ello tiene una expresión material, en el poder judicial, por la vía del desarrollo institucional de una estructura territorial y temática por fueros: donde se despliega un modelo piramidal que lo caracteriza en su conjunto, y que finalmente converge en la Corte Suprema de Justicia.

¿En qué consiste la capacidad, el poder en este campo? Delinear a partir de las leyes, su interpretación y reformulación, dictámenes que elaboran una respuesta situada respecto de lo establecido por la ley, respecto a que es lo justo, y la correspondiente dimensión de sanciones para quienes alteran, cuestionan, o transgreden el orden y la seguridad. Estas

respuestas que se expresan como resoluciones y sentencias elaboran un dictamen que se suscita bajo un imperativo que se corresponde con los requerimientos de establecer – garantizar el orden y control social respecto de los conflictos que afectan a la población, para lo que se recurre/apela al Poder Judicial para dirimir aquellos problemas que no han podido ser atendidos, procesados y resueltos en otras instancias existentes: por la acción de las personas, familias, grupos o instituciones de la sociedad u otros organismos del Estado. La intervención del Poder Judicial se expresa en sentencias que van reconstruyendo la ley por la vía de la jurisprudencia. Si bien en Argentina, a diferencia de otros países, la jurisprudencia no constituye ley si instituye y cristaliza formas habilitadas de interpretación y aplicación de las normas.

La controvertida escisión entre poderes se encuentra fuertemente anudada en virtud de -su condición de elite asalariada del Estado; - la ausencia de canales de ingreso que habilitaran el concurso público por lo que los empleados judiciales se consideran una gran familia: el ingreso a esta institución ha sido siempre por contactos más o menos formales donde la familiaridad y las relaciones sociales han tenido un peso significativo en la formación de un capital simbólico diferenciado²³. Por otra parte, la designación de magistrados estuvo históricamente signada por el mecanismo de propuestas que se realizaban por la vía de la cámara de senadores en donde la representación partidaria canalizaba los lazos político partidarios para la designación de los jueces, tal como fue expuesto públicamente en ocasión de la anécdota de la famosa servilleta²⁴. Esta independencia entonces descubría las implicancias que el poder judicial y los magistrados exhibían con el aparato legislativo y ejecutivo en un contexto histórico-institucional. A su turno la reforma relativa a la designación de los jueces²⁵ muestra notables mejoras en los mecanismos de selección aunque no renuncia al vínculo existente entre poderes del Estado. Se trata de un espacio que ocuparon hegemonícamente los abogados, como actores que hegemonizan el campo,

²³ El ingreso por examen, que elimine las prácticas nepotistas que llevaron a la construcción de la llamada familia judicial, fue la propuesta más realizable a corto plazo de la Agrupación Justicia Legítima. La cual, a la fecha ha sido desarrollada excepcionalmente por la titular del Ministerio Público de la Defensa que ya impulsó convocatorias con estas condiciones.

²⁴ Se alude a la denuncia realizada en 1996 por D. Cavallo contra el ex ministro del Interior, C. Corach, quien habría escrito los nombres de los jueces federales que respondían al gobierno de C. Menem.

²⁵ Está pendiente que esa reforma en el ingreso alcance a todos los empleados judiciales.

expertos en la ley, integrantes de una gran familia, liderada por egresados universitarios de una profesión tradicional²⁶.

En el caso de los Juzgados Nacionales de Menores en el fuero penal. La justicia incorporó casi desde su origen la necesidad de integrar profesionales de las ciencias sociales, preferentemente trabajadores sociales²⁷ considerados “los ojos del juez”, que pudieran aportar elementos que posibilitaran a los magistrados conocer a estos sujetos especiales, acusados de protagonizar peligro, incumplir las normas, para fundamentar intervenciones relativas al conflicto que presenta/representa esta población, los niños, adolescentes, jóvenes. Es en esta articulación, con esta particularidad, estos agentes fueron incorporados en el campo. Originalmente se los invocaba para observar, informar y luego hacer cumplir las directivas del juez y la secretaria tutelar respecto de las orientaciones que el magistrado ordenara, a partir de la imposición de su tutela sobre esa población, situación que fue trasformada con la derogación de la Ley 10.903, cuestión que retomamos en el siguiente capítulo.

La distinción entre agentes, abogados y no abogados, da cuenta no solo de la distinta formación, también expone un contraste en los mandatos a su intervención: a los agentes judiciales se les solicita la intervención “ciega”, pretendidamente uniforme respecto del desarrollo de figuras tipificadas como delitos y procedimientos legales previstos. En tanto a los profesionales de las ciencias sociales se les solicita un conocimiento relativo a la singularidad de las personas implicadas. Producir información, no de los hechos que rodean la causa judicial concreta por la que el joven se encuentra en este campo sino, relativa a su historia y condiciones de vida, su grupo conviviente, su formación, zona de residencia, etc. Una producción de conocimientos respecto a sus trayectorias de vida que permita contextualizar y conocer a los sujetos. Ello significa a veces una complementariedad y otras un contrapunto entre las intervenciones y prácticas que despliegan los distintos agentes en este campo –el fuero penal de menores- donde existen mecanismos que tienden a “uniformar” lo irrepetible a través de una serie de procedimientos con contenidos y sentidos distintos. Ello provoca tensiones que no tienen

²⁶ En algunos países, como Holanda, los magistrados en este campo, no son únicamente abogados.

²⁷ Como también en la justicia civil y de familia, donde se gestionan asuntos y problemas que requieren del conocimiento de ramas de otras ciencias sociales, para elaborar *respuestas*, específicas, acordes con la ley.

soluciones unívocas por parte de los agentes y que demarcan distintas posiciones en el campo (Bourdieu, 1997) que se expresan en discursos y prácticas en los procesos de la gestión judicial.

Así, por un lado: el concepto de tipicidad (Garfunkel, 2006) es constitutivo, como fundamento que se encuentra en las fórmulas que se establecen en “la ley” para encuadrar los distintos hechos que configuran un delito, ello permite desplegar un proceso que “traduce” las distintas situaciones que a diario se presentan en estas instancias. Las procesa a fin de que, aunque las situaciones sean distintas, puedan amoldarse a los contenidos que caracterizan a los distintos tipos de delitos. Es uno de los primeros pasos en la gestión y tratamiento de los problemas que se suscitan a partir de una denuncia²⁸, los modos de tratamiento y procesamiento se encuentran establecidos en el código procesal. Donde se pautan determinadas formas –estandarizadas, el contenido de los procesos de reproducción social nunca son mecánicos- en una serie de prácticas diarias se enhebran: la comunicación de una denuncia, se realizan citaciones: a quienes se cita, a quienes se indaga; se convocan distintos actores: defensor, fiscal, etc. Se tipifica ya en la denuncia: se trata de un robo, un hurto, si hubo violencia, si hay detenidos, etc.

Zaffaroni (2000) define al delito como una conducta humana prevista en el Código Penal, donde se identifican las conductas prohibidas a las que se asocia con una pena. Se llaman “tipos” a esos elementos de la ley penal que individualizan la conducta que se prohíbe con una consecuencia penal (Bustos, 2015).

Schutz (2001) señala que el mundo de la vida, es una materia compleja por lo que este autor formula algunos axiomas fundamentales de la que denomina actitud natural social en relación a que: “el mundo social y cultural estructurado ya está dado para mí y para mis semejantes” y simultáneamente el mundo a mi alcance no es idéntico –para todos- por, las zonas de operación, por la situación biográfica, Pese a ello, persiste en la actitud natural, una idealización de la intercambiabilidad de los puntos de vistas y de la congruencia de los

²⁸ La denuncia de un hecho tipificado como *delito* es la que da inicio a la intervención de un Juzgado del fuero penal. Corresponde, en este caso, otras dos distinciones: nacional y de menores. Ello se debe a otras dos circunstancias: la edad del denunciado / acusado y la ocurrencia de ese hecho dentro de los límites geográficos de la Ciudad de Buenos Aires. Se encuentra en debate el traspaso de la justicia nacional a la justicia porteña, desde hace algunos años.

sistemas de significatividades. Lo que denomina la tesis general de la reciprocidad de perspectivas.

Este mismo autor, señala que “el tipo” se constituye como una “unidad” de determinaciones en una situación originaria de adquisición, cuyo sentido se establece por medio de las significatividades interpretativas predominantes, que en el ámbito del conocimiento habitual, puede establecerse como automática. Ello contribuye a sustentar una serie de prácticas que operan a modo de confirmaciones, esquemas significativos de la experiencia predominantes en una sociedad, o la cosmovisión natural-relativa que tienden a ser “imitados”. De tal modo ciertas afirmaciones pueden operar como certezas en el trabajo cotidiano de los operadores que simplifican la tarea de todos los días, facilitan una rutina y simultáneamente implican pre-juicios, estigmatizaciones, límites, etc.

Por otra parte, en este campo, los trabajadores sociales son agentes a quienes se demanda que confronten la noción de tipicidad dado que estos sujetos: niños, adolescentes, jóvenes presentan una diversidad de trayectorias y grupos convivientes. La complejidad de cada sujeto y situación requiere ciertas condiciones y destrezas que permitan acceder al conocimiento de estos jóvenes²⁹, pero también sucede que estos agentes puedan simplificar, estandarizar su intervención por la vía de automatizar las respuestas, evitar el desgaste y cumplir la mecánica de trabajo prevista.

Los “mismos” sucesos, que se “imponen” a la atención de uno u otro agente proyectan perspectivas de aprehensión que no son idénticas, la dinámica de trabajo prevista es diferente según los agentes y entre éstos y los jóvenes. Si se presupone una comunidad de estructuras de significación, ello implicaría un serio riesgo a que el lenguaje, la comunicación, fracase. En este sentido, un aspecto problemático central lo constituyen las condiciones de producción y circulación de la información y el conocimiento que las confusiones que se producen frecuentemente ligadas a “malentendidos”. Los sentidos con que se cargan las palabras de uso habitual en el campo de la justicia suele ser un obstáculo evidente en la comunicación entre agentes, abogados y la población con la que se trabaja.

²⁹ Que exponen su malestar en el tránsito por este campo especialmente en la oportunidad del primer contacto en este campo.

Lo expuesto significa un contrapunto entre las intervenciones y prácticas que despliegan los distintos agentes en el marco de este espacio institucional, donde existen mecanismos que tienden a “uniformar” lo irrepetible a través de una serie de procedimientos preestablecidos. “Ese hacer las cosas de alguna manera representa la esencia problemática del asunto” (Garfinkel, 2006: 19). Es evidencia de “un estado de las relaciones de fuerza entre los agentes comprometidos en el juego”, al decir de Gutiérrez (1997:32). La intervención de los profesionales de las ciencias sociales consiste en desarrollar una actividad de la que se desprenden informes en los que se emite una opinión que NO obliga al Juez, pero sus escritos se incorporan al expediente y su potencia radica en que pueden ser leídos por Defensores y Defensorías, pueden afectar la decisión de la autoridad, el Juez y ser utilizados por aquellos defensores. En este sentido es frecuente que los Delegados expongan la queja relativa a que los Secretarios del Juez pide que cambien parcialmente el contenido de un informe³⁰. No se trata simplíficamente de desconocer la tarea ni las pautas en sus informes sino de deliberados intentos por imponer una visión u otra. Ello constituye un riesgo de afectar sensiblemente la autonomía (Iamamoto 2001) de estos profesionales, quienes –obviamente- no hegemonizan el campo. Es una de las manifestaciones en que se expresa la tensión.

Estas reflexiones se desprenden de la posibilidad de pensar las prácticas dentro de una lógica de construcción de los agentes que da cuenta de sistemas de preferencias que promueven distintas intervenciones, no solo del “menú” de opciones preexistente asociadas con el encuadre legal vigente y las condiciones en la cuales se efectúan esas opciones. No pretendemos reducir a los agentes al papel de soportes una socialidad de la inercia, ni suponer que existe una construcción permanente de estrategias y decisiones libres, tampoco eludir la reflexión sobre la responsabilidad de los agentes.

Nos interrogamos respecto de la las prácticas, naturalizadas, especialmente en un contexto en que la legislación posibilitó transformaciones, una “ventana de oportunidad”, frente a un habitus que expresa las prácticas inculcadas perdurablemente. Por lo que el habitus no implicaría una virtud, sino hipótesis –prácticas- fundadas en experiencias anteriores que aseguran esquemas, que operan como reglas formales, que se resisten, en la inercia reside

³⁰ Este tema es retomado en el segundo capítulo.

su poder, que se consolida en sentido común del hacer. La ausencia de reflexividad implica un confinamiento del agente y su capacidad de transformación.

La distinción entre agentes no presupone una disputa unívoca por la hegemonía. Es evidente que la alteridad en el desarrollo de la labor cotidiana que se manifiesta en demandas y prácticas representan aspectos de diferenciación e integración en este campo y de la interdependencia que consideramos siguiendo a Gutiérrez adquieren consecuencias prácticas, en términos de internalización, de la capacidad y el poder que cada uno de ellos detenta en la construcción de las intervenciones sociales que se despliegan y se manifiestan en *habitus*, prácticas y estrategias³¹.

“Aquellos que, dentro de un estado determinado de relación de fuerzas monopolizan... el capital específico, que es el fundamento del poder o de la autoridad específica característica de un campo, se inclinan hacia las estrategias de conservación...., mientras que los que disponen de menos capital... se inclinan a utilizar estrategias de subversión: las de la herejía³²” (En Gutiérrez 1997:32 cita a Bourdieu 1990:137 “Sociología y Cultura”-Grijalbo, México).

En esta línea, consideramos que las relaciones al interior del campo son básicamente relaciones de poder, que se expresan con matices, según el grado de posesión mayor o menor de capital específico y el grado de legitimidad asociado a esas posesiones. En ese sentido los profesionales no disputan el capital específico: no pueden alcanzar posiciones de poder: ser jueces por ejemplo, no son abogados, sus informes tramitan en el expediente tutelar, distinto del expediente de la causa, el expediente actuario. Sin embargo, su trabajo consiste en desarrollar intervenciones e información que puede afectar la decisión que toman los magistrados. Tienen un lugar reconocido aunque no disputan el capital

³¹ Sus informes tramitan por expediente. En las instancias de juicio oral, paulatinamente, la presencia de los Delegados fue excluida. Se privilegió la lectura de dichos informes y las opiniones que puedan surgir de ellos, que fue asumida por los Defensorías de Menores e Incapaces, abogadas, una manera de conjurar la disonancia. La disonancia como conjunto de sonidos que el oído percibe con tensión, y por tal razón, tiende a rechazarlos.

³² La herejía es definida como una opinión divergente que si no es tolerada por las autoridades (religiosas) o por la corriente de opinión mayoritaria, puede llegar a producir una situación de conflicto y ruptura. La herejía es vista también como una desviación sobre el contenido (de la fe o división en el seno de la comunidad –religiosa-, o a una condena de carácter disciplinario por la insumisión a la autoridad considerada legítima.

específico, la interpretación de la ley, sino que son parte de aquello previsto en los procedimientos que permiten el desarrollo de esa letra. Incorporan su discurso desde los bordes.

En un campo hay productores, consumidores, intermediarios. En este sentido, estos agentes incurren en “discursos disonantes” en una especie de concierto, una suerte de “ajuste dialéctico” (Gutiérrez 1997: 54, 55), una correspondencia entre lógicas relativamente interdependientes. Esta relación se encuentra fuertemente signada por el tipo de organización institucional donde, como mencionamos antes, prevalece la verticalidad, con jerarquías de poder muy marcadas entre las distintas instancias y en cada juzgado/tribunal entre el juez y los “subordinados”.

En una línea similar a la que plantea Bourdieu (1997) y Gutiérrez (1997), Elías (2006) plantea que la complejidad de los entramados institucionales, como conexiones sociales, resultan escasamente transparentes a su conocimiento. La interdependencia que se observa en el entramado constante de sus acciones y experiencias, acuñan una especie de orden, dotado de una autonomía relativa, según Elías. Un entramado normado en el que las posiciones individuales de esta serie de relaciones no se pueden separar una de otras. Esta perspectiva también incorpora la idea de que en este entramado se implican diferenciales de poder.

El recurso teórico que presenta el concepto de entramado resulta de alto potencial en tanto refiere a las acciones de un grupo de individuos / agentes / profesionales, instituciones, interdependientes, cada uno con fuerza-poder y cierta autonomía relativa entre sí, “Lo que se entiende por figuración es el modelo cambiante que constituyen los jugadores como totalidad “...”con todo su hacer y todas sus omisiones en sus relaciones mutuas”... “Esta figuración constituye un tejido de tensiones” (Elías 2006: 157) su interdependencia como aliados y como adversarios en el que puede existir una jerarquía de varias relaciones. Con equilibrios fluctuantes, en tensión, en relación con el poder que integra este proceso de figuración. En este sentido ya no es posible pensar a cada uno aisladamente, sino alcanzar “conciencia de la opacidad” (Elías 2006: 82) relativa a los procesos institucionales que en forma de prácticas se expresan en este espacio, tema del capítulo siguiente.

Los entramados institucionales son expresión de unidades más grandes, de otras confrontaciones, que alcanzan proyecciones de intensidad. Ello es aprehensible, en sus expresiones particulares³³.

Bourdieu supera la oposición que se establece entre las estructuras y las representaciones y la tensión entre dos perspectivas que parecieran dicotómicas: el objetivismo y el subjetivismo. Considera que las condiciones sociales existen en las cosas y en los cuerpos; en los campos y en los habitus, tanto de manera objetiva como simbólica: “Sin duda, los agentes tienen una captación activa del mundo. Sin duda construyen su visión del mundo. Pero esta construcción se opera bajo coacciones estructurales. (...) las disposiciones de los agentes, sus habitus, es decir las estructurales mentales a través de las cuales aprehenden el mundo social, son en lo esencial el producto de la interiorización de las estructuras del mundo social.” (Bourdieu, 1988: 133-134).

Estructuras sociales internalizadas: habitus y prácticas. Bourdieu define el habitus como disposiciones durables que tensionan a la perpetuación y reproducción de las condiciones objetivas, bisagra entre lo individual y lo social, historia inscrita en los cuerpos y las cosas. Producto de un efecto de inculcación que solo es posible atravesar a partir de un trabajo de autosocioanálisis. Es solo a partir de la noción de prácticas, en términos de estrategia, cuando se rescata la dimensión activa de los agentes.

El habitus refiere a un sistema de disposiciones durables y transferibles, prácticas regladas y regulares, orquestadas, sin ser producto de la acción organizadora de un director de orquesta, sino que interiorizadas. El habitus es historia hecha cuerpo. Estructura estructurada. Interiorización de la exterioridad. El habitus tiende a engendrar conductas razonables. Es a la vez, posibilidad de invención y necesidad, recurso y limitación. Se constituye en un esquema generador y organizador. No se deducen directamente de las condiciones objetivas presentes, sino de la puesta en relación de las condiciones sociales en las cuales se ha engendrado y se ha puesto en marcha.

³³ La justicia penal de “menores” es parte del debate relativo a la baja de la edad de la imputabilidad, en las últimas décadas, asociada a una discusión más amplia sobre seguridad e inseguridad, que adquirió una connotación que puede ser considerada como reaccionaria y retrograda en términos de los consensos alcanzados para entonces.

Un concepto que se opone tanto a la necesidad mecánica como a la libertad reflexiva. Se trata de una unidad originariamente sintética, que funciona de manera sistemática y que se transfiere a los distintos dominios de la práctica.

Las prácticas y las representaciones generadas por el habitus, pueden estar objetivamente adaptadas a su fin, sin suponer la búsqueda consciente de los fines y pueden ser objetivamente regladas y regulares sin ser el producto de la obediencia a reglas. Producto de un sentido práctico ligada al juego, los agentes no cometen locuras.

La noción de estrategia es el instrumento de ruptura, ligadas a la posición que se ocupa en el campo. Durables pero no inmutables, habilita cierto control reflexivo del agente sobre su propia acción “asistido” bajo ciertas condiciones.

Los habitus son principios generadores de prácticas distintivas, esquemas clasificatorios. Lo esencial consiste en que estas diferencias, en los bienes poseídos, en las opiniones expresadas, socialmente pertinentes que permiten discernir, específicamente sobre parte del campo, dar cuenta de diferente capital. Paradójicamente los campos son sede de una revolución permanente. Esta afirmación conduce a una pregunta sobre ¿Cuál es el interés que los agentes pueden tener en hacer lo que hacen? Los agentes sociales, señala Bourdieu (1997) no actúan sin razón, consideran que lo que ocurre importa. La noción de interés se opone a la de desinterés e indiferencia. Pueden anticiparse, tienen estrategias que, a veces, se contraponen a la ley de la sumisión de lo universal, sobre la burocracia supuestamente neutra y por encima de los conflictos. Lo que se espera de los agentes sociales no es que sigan las reglas al cien por cien, sino que se pongan en regla, que den muestras visibles de conocerlas.

Asimismo estas referencias se articulan con nuestra mirada disciplinar, desde el Trabajo Social, que entendemos siguiendo a Rozas Pagaza (2008), como una disciplina que se inserta en un contexto de tensiones, que constituye un campo en cuestión. La implicancia del Trabajo Social en cada contexto no es de externalidad, por el contrario es una relación significativa que abarca por lo menos dos condiciones: una, referida a su condición como

trabajadores³⁴ y, otra ligada con las condiciones no solo materiales si no también humanas de los sujetos con los cuales se vincula en su intervención profesional”

Definimos con esta autora a **la intervención profesional del Trabajo Social** entendida la construcción de un campo problemático que se despliega en un escenario de conflictos que es su punto de partida. De allí la importancia de recuperar el carácter político de toda intervención en tanto reflexión sobre las condiciones de vida, conflictos, sujetos, demandas que involucra la capacidad potencial de transformación.

Este concepto nos permite enfrentar este dilema en tanto la propia intervención se constituye por el ejercicio de reflexión constante fundada en un proceso de comprensión crítica e histórica de la cuestión social contemporánea que debe ser problematizada y mediada en cada contexto inmediato. Una puesta en acto, una construcción histórico social que se funda en el reconocimiento de las desigualdades sociales existentes a partir de las cuales se construyen los problemas sociales, orientan decisiones, reglas de juego y prioridades que enfrentar, que implica un esfuerzo tendiente al fortalecimiento del sujeto como constructor de relaciones sociales. Ello también asocia el concepto y la praxis de la intervención y la comprensión de la cuestión social con nuestra inserción en la instancia pública del Estado en su relación con la Sociedad.

Un nudo problemático está constituido por la pertinencia de los conceptos desarrollados para nuestro ulterior análisis³⁵. De tal manera que la intervención profesional estaría aludiendo a un nivel de comprensión y análisis, que implica una apropiación teórica de la realidad que nos compromete en un nivel de definición ético político. En tanto el concepto de prácticas, asociado con el de habitus, alude a “los intercambios más mecánicos y más ritualizados en apariencia... encadenamientos...para hacer funcionar ese engranaje” Bourdieu (2010:130). La práctica está ligada estratégicamente con el tiempo. “La lógica práctica supone el sacrificio del rigor en beneficio de la simplicidad... también prácticas en el sentido de cómodas, es decir cómodamente dominadas y manejables” (Bourdieu, 2010:

³⁴ Que en estas décadas y a la par de otros procesos de precarización, las condiciones de trabajo y las formas de contratación de los trabajadores sociales, también se fueron *degradando*. En el caso de la justicia, presenta sus propias particularidades.

³⁵ Bourdieu (2010) nos advierte del error teórico que consistiría en asumir una visión teórica de la práctica

138). Presentan la limitación de un saber acotado, universos de sentido que corresponden a universos de práctica. La noción de estrategia nos permite, en este caso, distinguir la existencia o no de la capacidad de ruptura del agente entre, una ritualización mecánica y la potencia de los agentes para establecer una orientación en sus prácticas, a su intervención en un sentido amplio. A distinguir, o no, la existencia condiciones apreahendidas a través de esquemas socialmente construidos que organizan su percepción. Si bien el concepto de intervención profesional en el Trabajo Social se encuentra asociado con las prácticas que la disciplina desarrolla, no es posible identificar ambos conceptos³⁶. Visibilizar esta tensión es parte de nuestro objeto de estudio.

Las intervenciones judiciales, para el Trabajo Social, particularmente aquellas inherentes al fuero penal, se encuentran atravesadas por **la noción del control social**. Como plantea Stanley Cohen (1988) existe una unidad en lo que denomina estrategias de disciplinamiento o control social “entre un mínimo y un máximo de coerción” que se expresa en las estrategias de control social “hard” o “duras” y las estrategias “soft o blandas”. En una línea similar, Donzelot (2008) llama la atención acerca del encadenamiento de intervenciones en este campo judicial y establece una línea de continuidad entre las diferentes instancias de intervención correctiva sobre los comportamientos. Ambos autores advierten sobre los riesgos de desatender la conexión entre control social y Estado y enfatizar estudios en una línea menos estructural y más psicológico-social. Cuando ambas son vías que nos permiten acceder al conocimiento de que está sucediendo en términos de control social.

El término control social para Stanley Cohen³⁷ (1988: 17, 18) aparece, por un lado, en un acepción amplia, un término más o menos neutro, apto para abarcar todos los procesos sociales destinados a inducir conformidad respecto de las intervenciones sociales y que puede estar oculto en toda política social estatal. Por otro lado, un término negativo asociado con el aparato coercitivo del Estado y la represión. En general, existe consenso en restringir su uso a las respuestas planificadas y programadas, históricamente

³⁶ Como tampoco lo hacen las disciplinas que cuentan con un desarrollo investigativo y producción de conocimientos científicos sistemáticos a la par de un desarrollo profesional en distintos campos, como la medicina y el derecho, de las cuales, no casualmente el Trabajo Social fue subsidiario.

³⁷ Este autor es particularmente interesante para nuestro trabajo porque inicia sus estudios como asistente social y paulatinamente se “convierte” en un sociólogo, según sus palabras (1988:343).

organizadas, al crimen, la delincuencia y formas aliadas de desviación y/o comportamiento que son concebidos como problemáticos socialmente. El citado autor identifica dentro de este sistema un ejército de pescadores y pescadoras que con distintos alcance e intensidad desarrollan su intervención en un sistema que crece aunque sus fronteras ya no son tan obvias y visibles. Este mismo autor también alerta sobre “nuevas” formas de intervención, distintas directrices de control que permiten observar tendencias de cambio y estabilidad a partir de observar las formas y el contenido de la administración de la ley penal.

“La intervención en lo social.... se liga de manera estrecha y compleja con el disciplinamiento” (Carballeda, 2008: 37), por lo que este autor sugiere que, interrogar el origen de la intervención en lo social, del Trabajo Social, implica preguntarse especialmente por el qué se hace, qué tipos de relaciones sociales se construyen, cómo dichas intervenciones se entrometen en la sociabilidad.

Al respecto Karsz (2007) define al Trabajo social como un proceso de producción que no se reduce a las representaciones de sus agentes, a las demandas de sus destinatarios, a los proyectos de sus tutores administrativos y políticos. Este autor identifica que las situaciones por las que el Trabajo Social es convocado son forzosamente complejas, necesariamente complicadas. Los trabajadores sociales son convocados justamente porque las situaciones no son simples. Karsz considera que el aspecto secundario de la intervención del trabajo social se corresponde con el registro material mientras que el aspecto principal se corresponde al registro ideológico, fundamentos y orientaciones que desarrolla en su intervención y donde el considera reside su potencia, su poder, su eficacia específica.

El Trabajo Social operaria, según este autor, sobre las construcciones ideológicas movilizadas por los sujetos y los grupos para explicar y explicarse su suerte, aguantar, resignarse, rebelarse. Considera a las ideologías como fuerzas materiales y dinámicas, por lo que considera la intervención como una tarea delicada. Dado que piensa que intervenir es tomar partido, subraya la imposible neutralidad de estas intervenciones sociales.

En este campo, las leyes vigentes en el fuero penal juvenil, representan la posibilidad de intervención de los agentes en términos de medidas socioeducativas que reemplazaron la

construcción previa de la tutela y el patronato de la infancia. Al respecto, Donzelot (2008) señala que, el objetivo de la prevención es “sustituir el brazo secular de la ley por la mano amiga del educador”. Y observa que tal sustitución constituye una penetración y extensión de lo judicial en el espacio educativo. En esta línea Foucault (2000) alude a que la doble calificación socio-judicial, responde a la pregunta por el castigo y simultáneamente a conjurar la peligrosidad, donde el juez y el perito “intercambian papeles” sobre las formas de control, evaluación, de efecto de poder ligado a la caracterización de un individuo. Foucault (1977) alude a una tendencia a la que designó como “redefinición de lo justiciable”, un proceso de reglamentación jurídica de todos los comportamientos en tanto modalidad de gobierno poblacional y propuso su comprensión como una evolución de las técnicas de poder en la sociedad contemporánea.

La norma, según este autor, tradicionalmente concibe un principio de calificación y corrección “Su función central no es excluir, rechazar. Al contrario, siempre está ligada a una técnica positiva de intervención y transformación, a una especie de proyecto normativo” (Foucault 2000:57) que se materializa en las instituciones del poder judicial. Este autor señala que la idea de poder no debe analizarse en el horizonte hegeliano, como una especie de totalidad, considera un error metodológico e histórico considerar que el poder es esencialmente un mecanismo negativo de represión sino que identifica que su función esencial es proteger, conservar o reproducir relaciones de producción y por ende no se concentra en un nivel superestructural. El poder desempeña un papel efectivamente positivo, el sistema disciplina con efecto de normalización (Foucault 2000:59), no es centralmente represivo sino productivo, posee en sí mismo principios de transformación e innovación, solo puede funcionar gracias a la formación de (un) saber, que es tanto un efecto como condición de su ejercicio.

Al respecto, Stanley Cohen señala que estos profesionales “de bajo nivel” son efectivamente parte de estos sistemas, pero que no deberían ser considerados como “instrumentos del Estado”, tienen una relación “moralmente ambigua” con el Estado, dado que tienen cierta autonomía funcional (1988, 242). Frecuentemente su compromiso con

objetivos profesionales, son finalmente y paradójicamente, independientes de las necesidades funcionales del capitalismo (1988, 244)³⁸.

¿Qué lugar se asigna en el campo, desde la norma, desde la institución, a estos trabajadores sociales? Las transformaciones legales, ¿posibilitaron una transformación de la demanda a su intervención, una resignificación del universo de las prácticas? Retomamos estas reflexiones teóricas a lo largo de los siguientes capítulos.

f- Estrategia Metodológica

En los últimos años, es posible encontrar numerosos estudios referidos al tema de la seguridad / inseguridad, los jóvenes y el sistema penal aunque muy pocos se apoyan en investigaciones sobre el tratamiento³⁹ y la dinámica de la gestión judicial, y especialmente sobre los procesos de intervención que involucran a trabajadores sociales. La bibliografía y las fuentes de información consultadas nos advierten sobre la ausencia de indagaciones similares, lo que intentamos subsanar con el producto de esta investigación.

En este estudio privilegiamos el desarrollo de una metodología cualitativa. Como anticipamos, nos propusimos acceder al conocimiento de lo qué se hace y se dice en relación a lo que se hace. Ello fue posible a partir de la observación orientada a indagar acerca de las condiciones en que se despliegan las intervenciones y prácticas en este campo, el desarrollo de consultas y entrevistas con dichos profesionales y otros informantes claves. Relevamos distintas opiniones que suscitan la intervención de estos profesionales, para los jueces, secretarios y los distintos defensores que integran el Ministerio Público con quienes estos profesionales interactúan en la gestión judicial cotidiana, por lo que desarrollamos diferentes estrategias, el criterio de trabajo fue abierto y flexible.

Dedicamos especial atención hacia los conceptos que se utilizan, inclusive para la elaboración y formulación de diagnósticos - informes sociales- en lo que se visibilizan los

³⁸ En este caso, el autor, cita a Willis P. (1977).

³⁹ Tratamiento en este caso, adquiere el sentido de atender y procesar una situación problemática que se presenta en este campo.

procesos de intervención profesional, las prácticas, que se despliegan en la atención de la población y sus grupos familiares y/o convivientes. No se incluyeron consultas a niños y jóvenes acusados con quienes estos agentes se vinculan, dado que se concentró el estudio sobre la mirada de los agentes sobre el mismo campo.

Dada la variedad de puntos de observación y la complejidad del campo de nuestra investigación apelamos a integrar distintas estrategias orientadas a ampliar las posibilidades de observación, análisis y comprensión de los fenómenos que nos propusimos indagar. Por ello apelamos a la combinación de estrategias en el estudio del mismo fenómeno. La metáfora de la triangulación⁴⁰ es tomada de la navegación y la estrategia militar que utilizan múltiples puntos de referencia” (Jick, 1979) para mejorar el conocimiento de un objeto. Se considera que la multiplicidad de puntos de vista hace posible una mayor precisión, a partir de considerar diferentes tipos de datos, técnicas y también de fuentes referidas al mismo fenómeno, como parte del esfuerzo por potenciar ventajas y compensar desventajas de las distintas estrategias utilizadas. El propósito de conjugar distintos acercamientos estuvo orientado a optimizar ventajas y neutralizar las debilidades que pudieran presentar cada uno de estos acercamientos. “El real objetivo de estos esfuerzos de control de calidad, es el investigador” (Fielding y Fielding, 1986), incrementar su confianza en sus propios hallazgos, a partir de distintas alternativas de triangulación intramétodo: de tiempo, espacial, de personas, etc., que en su conjunto permiten diferentes relatos sobre la misma situación con la intención de profundizar el análisis y posibilitar un control recíproco. Esta “aproximación convergente” (Jick, 1979) nos permitió un trabajo que integró cuestionarios auto suministrados, entrevistas, observación, la incursión en archivos en la búsqueda de fuentes documentales, bases de datos de la Corte Suprema, lectura de expedientes, de informes sociales elaborados por los entrevistados, entre otros recursos e insumos, conducentes a la elaboración de una descripción densa en cuyo marco desarrollamos nuestro análisis.

⁴⁰ No aludimos a una combinación exhaustiva con estudios de carácter cuantitativo que, en esta tesis, ha sido apenas un recurso para presentar o describir, parcialmente, los fenómenos que nos interesan

La legislación que crea, organiza y regula el campo de la justicia penal de menores constituyó una fuente de estudio privilegiada inicialmente⁴¹, desarrollada en el capítulo 2. Consultamos también otras fuentes documentales de carácter normativo como resoluciones, acordadas y reglamentos que emanadas por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que concentra la autoridad⁴² administrativa en el fuero penal en esta jurisdicción, a la fecha de la presentación de esta tesis. El estudio de dichos materiales y distintos documentos que se encuentran en el archivo de la mencionada Cámara, han sido incorporados para el desarrollo de los aspectos normativos y también nos permite visibilizar la trama institucional en que se despliega este estudio. También realizamos consultas en la biblioteca y hemeroteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con sede en el Palacio de Tribunales, que nos permitió acceder al registro ordenado de una serie de publicaciones que incluyen comentarios sobre sentencias, jurisprudencia, etc.

El universo de este estudio estuvo constituido por los trabajadores sociales que integran el Cuerpo de Delegados Inspectores de Menores dependiente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (ciento dieciocho en total), los cuales se distribuyen en igual número entre los siete Juzgados Nacionales de Menores con sede en esta ciudad y la Prosecretaría de Asistencia Social (este último grupo de profesionales fue excluido en el proceso de investigación dado que sus intervenciones se dirigen a población mayor de edad) .

Dichos profesionales se distribuyen en grupos y desempeñan su trabajo en carácter de adscriptos en cada uno de los siete Juzgados y desde la creación de los tres Tribunales Orales de Menores también fueron conminados a colaborar⁴³ con dichas dependencias.

⁴¹ No desconocemos la existencia de los proyectos de reforma que se encuentran en debate al interior del Congreso de la Nación. Sin embargo no incluimos esa línea de indagación.

⁴² La reciente puesta en funcionamiento de la Cámara de Casación Penal, aún no ha desarrollado injerencia sobre las cuestiones planteadas en esta tesis.

⁴³ Ello sucede desde la puesta en marcha de la ley 24050. Estos profesionales fueron, por resolución de la Cámara, exhortados a *colaborar* con todas las instancias y, aunque en ese texto se aludía a un trabajo de carácter transitorio, esta situación se perpetuó, como abordamos oportunamente.

No todos estos profesionales son Trabajadores Sociales, en los últimos años las designaciones realizadas por la Cámara fueron abriendo la convocatoria a otras profesiones, aspecto que será abordado oportunamente.

Realizamos, en primer lugar, entrevistas a profesionales que cuentan con la mayor antigüedad en el desempeño de estas funciones, aún activos, a fin de recuperar parte de la historia del espacio socio-ocupacional, material que se conjugó con otras fuentes secundarias que accedimos en nuestra búsqueda: archivos documentales, reglamentos, acordadas, etc.; la entrevista a la Prosecretaria de Cámara y otros Delegados más antiguos y jubilados, que pudimos contactar.

Simultáneamente, se elaboró un cuestionario distribuido entre todos los trabajadores sociales del fuero, auto suministrado, cuya guía se incorpora en los Anexos, a fin de caracterizar al universo de estudio. Una muestra no probabilística ni intencional. Este primer acercamiento nos permitió por un lado realizar una descripción de este universo, que se presenta en los siguientes capítulos, caracterizar las condiciones de trabajo, los mandatos institucionales y también construir criterios que permitan seleccionar con quienes desarrollar luego las entrevistas en profundidad y elaborar la guía de pautas de dichas entrevistas.

Entre los aspectos considerados significativos en ese acercamiento se destaca las distintas nominaciones utilizadas para designar el espacio de inserción, como la posibilidad de reconstruir distinguir condiciones y condicionamientos que observan en los procesos de intervención profesional. Se exploraron dimensiones formales de la relación laboral, condiciones de trabajo, como otros aspectos significativos en el proceso de intervención prescripto a estos profesionales.

El criterio utilizado para la selección de entrevistados fue el “muestreo teórico” (Glaser y Strauss, 1967) a través del cual seleccionamos, codificamos y analizamos la información que consideramos relevante. Dichas decisiones obedecieron a nuestras inquietudes relativas al problema, que es parte de los que dichos autores definen como “sensibilidad teórica” y que implica tanto nuestras motivaciones personales como el desarrollo de la capacidad de análisis teórico en el marco de esta investigación. La adopción de un criterio

“no probabilístico” (Gallart en Forni, 1992) supuso la selección de los entrevistados que se apoyó en los siguientes criterios: trabajadores sociales que se desempeñen en Juzgado de Menores con distinto cargo, de manera de capturar cuestiones relativas a la antigüedad en su desempeño y su inserción en distintos Juzgados a fin captar si la impronta del espacio de inserción particular resulta relevante en la configuración de condiciones y prácticas.

La elaboración de la guía de pautas para la realización de entrevistas semi-estructuradas es producto del trabajo colectivo, en el marco del proyecto de investigación “Las condiciones actuales de la intervención profesional en el Trabajo Social: la relación salarial y sus representaciones. Estudio de tres campos de intervención: jurídico, discapacidad y salud” y se adjunta en los Anexos.

Se realizaron entrevistas en profundidad, con dicha guía de pautas a profesionales y también observación participante en los espacios de trabajo. Se entrevistaron a catorce profesionales, dos por cada uno de los siete Juzgados Nacionales de Menores que integran este fuero. La cantidad de entrevistas realizadas se correspondió con el criterio de “saturación”⁴⁴ de la muestra (Saltalamacchia, 1992; Glaser y Strauss, 1967)). En ningún caso se pretende la representatividad de la misma.

Asimismo, se realizaron entrevistas a otros agentes considerados claves, a partir de una variante de la misma guía de preguntas, incluida en los Anexos, con el propósito de identificar aspectos considerados relevantes y con el fin de acceder a la mirada de estos agentes relativa a la dinámica de las intervenciones que se despliegan en este campo. Funcionarios de los que dependen los Delegadxs, a saber, Jueza de Cámara, Titular de la Prosecretaría de Asistencia Social, Juez de Tribunal Oral de Menores⁴⁵, Juez de Juzgado Nacional de Menores⁴⁶, Secretario de JNM; Defensora Pública de Menores e Incapaces ante los JNM y TOM, Defensor Público Oficial ante los JNM y Defensor Público Oficial ante los TOM. Funcionarios con los que los Delegadxs interactúan en forma permanente por el desarrollo de su trabajo.

⁴⁴ Siendo imposible suponer la absoluta representatividad de un solo entrevistado, la cantidad de entrevistas a realizar en una muestra cualitativa será aquella en la que se logra la “saturación” ...es decir, cuando el agregar nuevos entrevistados sólo agregaría informaciones de interés secundario en relación al objeto de la investigación (Saltalamacchia, 1997: 42).

⁴⁵ En adelante, los Tribunal Oral de Menores, TOM

⁴⁶ En adelante, los Juzgados Nacionales de Menores, JNM

También se trabajó bajo la modalidad de “focus group”, con un grupo de Delegadxs adscriptos a uno de los JNM, no todos trabajadores sociales, lo que potenció el diálogo y la reflexión; el registro de la discusión grupal favoreció el acceso a significaciones de estos profesionales respecto de la tarea que desarrollan. Esta técnica brindó insumos que contribuyeron a especialmente al tratamiento relativo a la producción de los informes sociales. Estos encuentros no fueron grabados, sí se registraron los debates.

"Es importante tener en cuenta que el relato de aquellos implicados da los elementos informativos, pero que sólo el análisis del investigador permite distinguir el proceso de la versión de sus protagonistas. Ese ir y venir entre información y análisis, y requerimiento de nueva información, va completando el espiral del trabajo de campo cualitativo". (Gallart, op.cit.:120). Se privilegió el registro del lenguaje de los protagonistas, tanto en la observación como en la transcripción del relato de las entrevistas realizadas.

El proceso de recuperación, sistematización y análisis de las entrevistas nos permitió recuperar diferentes puntos de vista o visiones a través de los cuales comprender los fenómenos bajo estudio.

Otra fuente la constituyen los informes elaborados por los mismos profesionales entrevistados quienes nos suministraron cada uno de ellos informes que presentan tanto a los Juzgados como a los TOM. Su estudio nos permitió distinguir influencias teóricas y metodológicas que se utilizan en la redacción de dichos informes; identificar supuestos conceptuales a los que se recurre para el análisis de las situaciones sociales y reflexionar sobre las posibles repercusiones que se desprenden de dichos escritos incorporados en el expediente judicial; también reconocer tensiones que se expresan a través de: - la adherencia a ciertos lineamientos propuestos por la propia institución en “la descripción y el análisis de la conducta y trayectoria de los niños”⁴⁷; - la evidencia de que dichos informes condensan el registro de intervenciones de acompañamiento a niños por parte de los profesionales que exploran alternativas diferentes para el tratamiento de las situaciones sociales complejas que enfrentan y; - la coexistencia entre la derogada y la vigente

⁴⁷ Tal como se explicita en el formato estandarizado de informes al que aludimos en capítulo 5.

normativa especialmente evidente en el lenguaje de uso frecuente. En su conjunto, el análisis fue orientado a visibilizar tensiones que se expresan en este campo

Recurrimos a datos y estadísticas disponibles en la web, extraídos de las páginas de la oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación y de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (en adelante, BGD), que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, se mantuvo entrevista con la responsable de la BGD a fin de poder conocer con más detalle la procedencia y el tratamiento de la información que procesan. La información publicada no es actualizada, fue posible acceder a datos 2012. Algunos de los datos proporcionados para esta investigación, fueron suministrados gracias a la mediación de la titular de la Prosecretaría de Patronatos, Dra. Martínez Sipriz.

En su conjunto nos propusimos el desarrollo de un acercamiento que posibilitara contemplar distintas vías de acceso, una mirada integral, que como anticipamos, incluyó múltiples fuentes de información para el estudio de los problemas que concentran nuestra atención.

Una mención relativa al estatuto del observador / de la observación participante. Al respecto encontramos distintas posiciones que discuten la relación del observador con lo observado que en este caso, dado que simultáneamente desarrollo la autoría de esta tesis y me desempeño como Trabajadora Social/Delegada.

Guber (2005) señala que la paradoja entre observación y participación expresa el modo en que el positivismo y el interpretativismo conciben la observación y participación como una contraposición. En el primer caso, “según los lineamientos del positivismo, el ideal cognitivo de la observación neutra, externa, desimplicada, lo cual garantizaría la objetividad científica en la aprehensión del objeto de conocimiento...deber ser recogido por el investigador tal cual es.... La observación directa es similar a la que aplica el biólogo” (Guber, 2005: 173- 174). Así entendida la participación obstaculiza la objetividad. En tanto desde el interpretativismo, “el juego se aprende jugando... de ahí que la participación sea condición sine qua non,.... El investigador debe proceder a la inmersión subjetiva para dar cuenta de esa cultura no es explicarla, sino comprenderla”

(Guber, 2005: 175). Por eso esta autora invierte la denominación de esta técnica como “participación con observación o participación observante”.

Sin embargo, ello requiere explicitar ciertas dificultades relativas a la distancia y exterioridad que esta opción implica. Elías (1990) plantea esta relación como una tensión entre compromiso y distanciamiento, mientras Guber (2005) la denomina como involucramiento versus separación. En ambos casos se plantea como un ejercicio sistemático, una elaboración reflexiva teórico –empírica que desarrolla el investigador. Interrogarnos acerca de la propia acción, desarrollar una continua reflexividad. Si bien “La familiaridad con el universo social constituye un obstáculo epistemológico por excelencia” (Bourdieu, 1975) también amplía el conocimiento de la dinámica institucional y el acceso a la información, aspectos que colaboran en el proceso de investigación. Por ello, hemos apelado en forma sistemática a interrogarnos y atender a todo vestigio de automaticidad en el proceso de obtención de información, construcción de datos y reflexiones, un ejercicio permanente de “vigilancia epistemológica”⁴⁸ (Bourdieu, 1975).

Hemos privilegiado, desde el punto de vista metodológico, la estrategia inductiva ascendente por sobre la deductiva descendente en lo que hace a nuestro acercamiento y estudio de las relaciones en este entramado institucional, dada la oportunidad de recuperar la experiencia directa de los profesionales.

El período bajo estudio, es 2009-2014. La cercanía temporal nos permitió profundizar el estudio de los aspectos que concentran nuestro interés por la vía de entrevistas con los agentes.

Asimismo, se trabajó con datos de fuentes propias extraídos de la tarea que actualmente desempeño para presentar una caracterización de la población, sujeto de atención.

⁴⁸ El concepto de “vigilancia” en dos acepciones (....) Una como *práctica de develamiento* de la propia subjetividad en el proceso de investigación y la otra como proceso de control “panóptico” de las operaciones y prácticas (...). Es decir, una propone una auto-reflexión sobre las propias condiciones de producción de conocimiento, lo que conlleva la descarnada exposición de la singularidad de los *puntos de vista*. La otra, por su parte, pretende la regulación y normalización de las prácticas con total indiferencia de las condiciones y condicionamientos de los que es producto el autor de todo discurso (Escolar, 2003).

Escasamente se alude a información de medios: diarios, revistas referidos a la temática. Se incluyeron tangencialmente datos estadísticos y fuentes documentales de las oficinas judiciales involucradas para ejemplificar algunos aspectos pero sin intenciones de profundizar ese análisis.

Todas estrategias fueron direccionadas a alcanzar los objetivos propuestos y conducentes a responder los interrogantes planteados.

CAPITULO 2: La justicia penal de *menores*

- a- El plano normativo: Las Normas y procedimientos que crean, organizan y regulan el campo.**
El Complejo Tutelar y la Protección Integral.
Tensiones persistentes
- b- El plano institucional: Los Juzgados Nacionales de Menores y los Tribunales Orales de Menores.**
- c- El tratamiento tutelar**

En distintos momentos, cada sociedad se plantea determinados problemas que incitan al teórico, al político, al profesional, a contribuir en el proceso por el cual cierta gama de asuntos se constituyen como temas de debate. El ejercicio de contextualización nos permite incorporar la dimensión histórica que ilumina las conexiones entre teoría y práctica, para pensar el análisis de las ideas como fundamento de las prácticas y comportamientos que le acompañan (Skinner, 1985: 11), las cuales se inscriben en las instituciones donde despliegan su materialidad. Asimismo, la noción de movimiento, devenir permanente, incluye tensiones que expresan los conflictos que dinamizan las instituciones, en este caso de administración de justicia, parte integrante de los llamados procesos de institucionalización donde confluyen instituido, instituyente e institucionalización, en un proceso de articulación histórica. Es importante recuperar el aspecto conflictual y contradictorio de dichas instituciones que (...) son las formas que adquiere la reproducción de las relaciones sociales en un momento histórico – político y también lugares de lucha (...) atravesadas por.... contradicciones sociales (Lapassade y Lourau en Escolar 2000: 44).

La lectura de Gramsci nos invita a pensar en las transformaciones en términos de luchas, disputas, donde es posible identificar elementos de fuerza “pero también los elementos de debilidad... El análisis de los diferentes grados de relación de las fuerzas solo puede culminar en la esfera de la hegemonía y de las relaciones ético-políticas”. (Gramsci 2003:45) Nos interesa incorporar una línea de análisis dialéctico que este autor desarrolla para pensar las transformaciones, una lectura en clave “revolución-restauración”, que nos permite identificar elementos que prevalecen, aun cuando nos advierte respecto a que en el

movimiento histórico jamás se vuelve atrás, ni existen restauraciones in toto. Así también, los conceptos de revolución pasiva y guerra de posición de este mismo autor, nos permiten reflexionar acerca de tácticas y estrategias que, en cada contexto, en nuestro caso en el andamiaje judicial, se despliegan en contradictorios y complejos procesos de transformación y restauración.

En este sentido, Montesquieu (2007:03) alude a las reglas, en referencias a las leyes, como una relación constantemente establecida entre cuerpos móviles. Al respecto afirma que todos los movimientos serán recibidos, aumentados, disminuidos, eliminados. Cada diversidad es uniformidad, cada cambio es constancia. El “problema” de la ley, para este autor, es que la virtud reside en la obediencia, en su conocimiento y respectivo sometimiento, en la subordinación a la autoridad. La igualdad no solo es difícil de establecer sino que puede resultar “inconveniente”. Engels (2007)⁴⁹ señalaba, a la familia como la fuente “original” de la desigualdad, núcleo de la preocupación por la vigilancia directa a los miembros subalternos. La familia –claramente- sometió a la mujer, paulatinamente liberada, pero este tipo de relación –de vigilancia- es aceptada para sus otros miembros. Engels explica que, paulatinamente los sistemas legislativos modernos van reconociendo mayores niveles de igualdad en el ámbito doméstico en el marco del surgimiento del Estado y la república democrática que se desarrollan históricamente a través de procesos de disputa que incluye tensiones y conflictos.

Entendemos que en el trabajo en estas instancias estatales, la noción de conflicto es materia permanente en tanto gestión de los problemas sociales en un campo que incluye una gestión de carácter técnico pero consideramos que el despliegue de sus funciones comporta una dimensión política⁵⁰. En estas instancias se dirimen problemas sociales a partir de la interpretación de normas que se fundan en concepciones profundamente arraigadas en concepciones y tradiciones especializadas, condicionadas inevitablemente en teorías

⁴⁹ En El espíritu de la leyes (2007) se refiere a la mujer, es nuestro interés deslizar la mirada hacia los niños, menores.

⁵⁰ La concepción de la administración de justicia como una instancia política ha sido tematizada por distintas disciplinas que consideran a la justicia como una institución política y profesional. Santos (1998) señala que esta concepción tuvo dos consecuencias importantes: a. puso a los jueces en el centro del campo analítico, sus decisiones pasaron a ser variable dependiente de su origen de clase, formación y sobre todo ideología política y social y b. desmintió la idea convencional de la administración de justicia como función neutra y equidistante de los intereses de partes.

sociales más amplias y generales que están presentes y suelen expresarse tácitamente. (Taylor, et al, 2007). Este procesamiento permanente que nunca deja satisfechas a las partes y muchas veces ni a la sociedad misma, se trata “de ir tirando, gestionar”, acercarse a la sanción o al acuerdo, “eludir la pura conflictividad, evitar la tragedia”⁵¹. La justicia es política en tanto interviene oportunamente para que el conflicto no devenga irreductible, para promover la convivencia a partir de la existencia del Estado.

¿Cómo garantizar la obediencia, la sumisión, el sometimiento al Estado y las normas? El objetivo es el disciplinamiento, en el proceso de intervención por la vía de los distintos dispositivos que se despliegan. La función de regulación se funda en la idea según la cual la norma no debe ser impuesta desde el exterior al hombre sino actuar por una impregnación persuasiva, una adhesión espontánea a un orden (Supliot, 2007: 236/37), “vínculos de adhesión”⁵² que permite dictar comportamientos sin dar órdenes, el control no desaparece sino que se desplaza, por mecanismos de interiorización. La singularidad del derecho se configura con los recursos de interpretación que contiene y que cumple una función de prohibición. De esta manera, el derecho positivo puede ser considerado como una pantalla donde se proyectan creencias y representaciones que se formalizan y especializan. Por ello resulta falso reducirlo a una pura técnica, lo esencial es la capacidad para someter por la vía de la potencia técnica, un cúmulo de expertos, las formas diversas de ejercicio del poder político, según este autor.

La historia del derecho revela, en esta perspectiva, otras maneras de plantear la cuestión del poder, reglas de funcionamiento de la sociedad. La norma jurídica extrae su fuerza de una fe compartida en un deber ser que pretende poner en práctica. La puesta en práctica de las reglas del “bien común” que también implica la posibilidad de su revisión. Tales “evoluciones” en su historia pueden ser consideradas evidencia de las transformaciones de la relación de la sociedad y del poder.

⁵¹ Parafraseando a Rinesi

⁵² Supliot (2007) señala que para ser libre el sujeto primero debe estar ligado con los demás hombres. El hombre no nace racional, se vuelve racional al acceder a un sentido compartido con los otros hombres. Los órdenes jurídicos occidentales se instituyen a partir cierta representación común de la justicia en un país y una época.

a- El plano normativo. Las normas y procedimientos que crean, organizan y regulan el campo.

En este apartado exponemos el resultado del relevamiento y análisis de las normas y resoluciones que integran el campo, que se conjugan con algunos de los debates que consideramos relevantes para reflexionar sobre cómo estos distintos posicionamientos modelan los procesos de institucionalización al interior de los JNM y TOM, sus procedimientos y habitus, definido en el capítulo precedente.

El Complejo Tutelar

En Argentina la preocupación por la infancia y su tratamiento ha sido relevante desde la constitución misma del Estado (1810-1880), ello es evidente a través de las formas de entender y por tanto intervenir sobre esta cuestión sobre la que se fueron modelando distintos dispositivos en el aparato institucional del Estado (Gramsci, 2005). En el caso de la construcción legislativa sucintamente enumeramos las principales normas: La sanción del Código Civil en 1871; La ley de educación N° 1.420 de 1884; La ley de residencia N° 4.144 en 1902; La ley 10.903 de Patronato de Menores de 1919 y La ley 22278, del Régimen penal de menores de 1980 y su modificatoria Ley 22.803/83.

Este andamiaje ideológico demarcó la construcción normativa, institucional y también la formación académica de los agentes, impregnó el campo bajo estudio. García Méndez (2004) ha señalado en una línea similar a como ya lo planteaba Donzelot (2008), la idea de que la intervención del Estado en materia de infancia se orienta en la idea de que existirían distintos tipos de infancias. Una, bajo el cuidado de sus familias y otra que requería de la tutela del Estado para su socialización, a través de la intervención, de procesos de judicialización de los *menores*, designación que consideró a esta población como “aquellos que se identificarían y clasificarían como «desviados», «delincuentes», «abandonados», «desamparados», «maltratados», es decir, aquellos sujetos que sea por una “ vida desgraciada” o por una “ maldad natural”, al decir de Luis Agote en el año 1917, eran “ los

peligrosos” que representaban una amenaza hacia el resto de la sociedad⁵³” (Daroqui y Guemureman, 1999:3).

En esta tesis entendemos que “la infancia como la condición juvenil son construcciones sociales, periodizaciones, aspecto que en ocasiones queda oculto bajo el manto de la naturalidad del fenómeno. Estas construcciones se despliegan en discursos altamente ideologizados (...): *se es* (niño y) *joven de tal manera*” (Chaves, 2005:14). Aquellos que transitan espacios judiciales pueden rápidamente ser teñidos por la impronta que los aleja de una imagen idealizada, tradicional y los confina al estigma.

El llamado Patronato del Estado sobre la Infancia fue parte de las producciones emanadas en un período de hegemonía positivista. En la Argentina existía una cruzada moral desplegada por las damas de beneficencia (Tenti Fanfani, Alayón), que paulatinamente fueron relegadas a partir de la reconfiguración de la cuestión social argentina que reelaboraron los filántropos higienistas, para atender la compleja realidad que emergía de la creciente urbanización en las grandes ciudades vinculada con la llegada masiva de inmigrantes, la industrialización y la pobreza.

El marco jurídico era relativamente simple (Vitale, 2008). El poder judicial tenía un papel protagónico. Se otorgaba al juez poder –discrecional-, para que actúe en reemplazo de una buena familia. De esta manera, la infancia que por razones de conducta o de condición social entraba en contacto con la compleja red de mecanismos de selección caridad-beneficencia-represión, se convertía automáticamente en “menor” y como tal objeto de procesos de judicialización. Empapado de las expectativas pedagógicas de la época (Caimari, 2004) la privación de la libertad constituyó una operación de intimidación y castigo. La “falta de adaptación” por parte de los inmigrantes suscitada en el enfrentamiento con las nuevas costumbres, justificaron, entre otros, una serie de dispositivos de intervención sobre estos menores.

Simultáneamente, el sistema educativo argentino estaba en pleno proceso de organización, orientado hacia la homogeneización cultural de la población. Paulatinamente se arbitraron

⁵³ Estas autores llaman la atención sobre la persistencia de esta designación en las instancias institucionales pese al tiempo y los debates transcurridos en este campo.

mecanismos especiales para el cuidado, educación, tratamiento y vigilancia, de aquellos niños y jóvenes en peligro moral y material, los *menores* delincuentes. En este marco, la educación comienza a tener un valor particular como institución moderna en tanto transmisora de cultura que se fue amalgamando en el marco del paradigma del progreso y la modernización.

Fueron los reformistas quienes idearon en Argentina los dispositivos orientados a disuadir, vigilar y modelar y castigar la infancia descarriada. Las instituciones de minoridad se abocaron a los “menores” que no accedían a la escuela, afectados por la pobreza familiar, el abandono, el delito. Se diseñaron espacios diferenciados (Donzelot, 2008), escuelas/institutos, niños/ menores, instrucción/re educación. “La gran influencia positivista encauzó la idea de una niñez, normal y alfabetizable, y por otro lado una idea de menor, en condición de pupilo protegido por el Estado, capturado por instituciones que confirmarían su identidad deficitaria” (Duschatzky, 2000). Como señala Beloff (1999 y 2004), de esta concepción se derivó un sistema de justicia de menores que justificó reacciones estatales coactivas bajo el imperio de los mandatos de la tutela benevolente y la corrección, y con el principio rector de la defensa social, se diferenciaron los derechos según segmentos de población, privando de libertad y aplicando medidas correccionales, de diferente índole e inclusive indeterminadas en su duración, a una parte de ellos. Consideramos que la particularidad trascendental de esa norma fue acuñar el concepto de “peligro moral y material”, llave que habilitó prácticas de diversa índole.

Algunos autores distinguen que a mediados del Siglo XX, en el marco de un Estado de corte nacional popular, se introducen nuevas reglas de juego, lo que Mazzola (2014:33) denomina como “el paradigma de la “normalización” centrado en la infantilización y pedagogización de la infancia que parte de considerar al niño como menor a formar... La familia y la escuela cumplirán las funciones de control y socialización” de la infancia de la familia obrera, a entender de la citada autora.

Desde 1919 y hasta el año 2005 dos leyes configuraron el denominado “complejo tutelar” acuñadas a la luz de criterios propios del positivismo del siglo XIX – XX. La derogada ley 10.903 y la vigente Ley 22.278 que responde al modelo de la situación irregular, facultaron

al Juez a disponer de la persona menor de edad⁵⁴, cuando el propio Juez consideraba que se encontraban en riesgo, peligro moral o material, categoría que habilitó el ejercicio de la discrecionalidad. (Terragni, 2008). Como sostienen Daroqui y Guemureman, (2001) los dispositivos legales e institucionales de control social, tuvieron una función pro-activa en la construcción de sujetos disciplinados y obedientes e integrables. Mediada por la visión de que estas cuestiones, manifiestan como problemas sociales, fueron procesadas como problemas o patologías de carácter individual y/o familiar.

La relevancia de la denominada como la Ley Agote, se debe a que estableció los conceptos que dejaron profunda huella en la delimitación de este campo e impregnando la formación institucional y de los profesionales en este espacio. En esa ley se estableció la definición de los motivos de suspensión y pérdida de la patria potestad⁵⁵; los motivos de la intervención judicial, la figura del Patronato del Estado y rol del juez y otros funcionarios judiciales; la definición de los contenidos de la disposición judicial de menores; la idea de vigilancia, el establecimiento de los criterios de imputabilidad y punibilidad y, especialmente se explicitó el concepto de abandono material, moral o peligro moral. Este último configuró la justificación para la intervención en los casos que desde entonces se consideraron como “situación irregular”, tal como fue posteriormente identificada esta doctrina por sus críticos.

La ley 22.278 explicita el Régimen Penal de la Minoridad, su origen es en el marco de la dictadura militar argentina y, sin embargo, mantiene vigencia⁵⁶. En ella se establece la edad de punibilidad, los términos de la disposición, alude al desarrollo de las penas privativas de libertad y las condiciones para la imposición de una pena supeditada al resultado del tratamiento tutelar como alternativa a la sanción. En este marco, la noción de la sanción penal prevalece como recurso central para la intervención. El contenido del Artículo 4 es central y alude a: “La imposición de pena respecto del menor (a que se refiere el artículo 2) estará supeditada a los siguientes requisitos: 1) Que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y la civil si correspondiere, conforme a las normas

⁵⁴ Desde 2009, la ley de mayoría de edad paso a establecer este límite de 21 a 18 años.

⁵⁵ En este marco legal, los padres fueron “demonizados” (Marcon, 2013a), considerados responsables por el abandono moral y material de sus hijos, sin mediaciones relativas a la estructura social.

⁵⁶ Como ya mencionamos se han elaborado numerosos proyectos de reforma desde la incorporación de la CDN al marco legal argentino.

procesales; 2) Que haya cumplido dieciocho años de edad, 3) Que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad.

Una vez cumplidos estos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa. Contrariamente, si fuese innecesario aplicarle sanción, lo absolverá,...

Por último, cabe señalar la existencia del Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en el cual se establecen las normas complementarias que afectan las formas de organización y el establecimiento de pautas que orientan buena parte de las prácticas y procedimientos preestablecidos en este fuero, establecidas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal⁵⁷, especialmente en su capítulo VI, titulado “De las aplicaciones del Régimen Penal de la Minoridad”, sobre el que nos detendremos específicamente.

La Protección Integral.

Los fundamentos de la intervención estatal en temas de infancia fue objeto de importantes transformaciones en las últimas dos décadas. Si bien el debate se re-inaugura a partir de la reapertura democrática en 1983, las primeras modificaciones se dirigieron a cuestiones atinentes a los fueros civil y de familia y posteriormente a la legislación penal. Ello, sin duda, estuvo vinculado con un mayor grado de consenso y reclamo por atender cuestiones de alcance general, tal el caso de la patria potestad compartida, para poner un claro ejemplo del retraso que el marco legal argentino acumulaba en 1985, cuando se sancionó esa ley. Desde entonces se realizaron reformas significativas, la más importante en 1990, la ya mencionada ratificación de la CDN que tomó forma de ley nacional N° 23849 de Aprobación de la Convención sobre los derechos del niño y dieciséis años más tarde, en

⁵⁷ En adelante, simplemente nos referiremos a esta instancia como la Cámara.

2005, la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En este marco incluimos las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing, 1985), las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad, 1990) y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio, 1990) que, en el plano internacional, establecieron estándares para pensar la configuración del plano normativo e institucional referido a la cuestión penal juvenil. En este sentido y en el marco del denominado “enfoque de derechos”, Abramovich (2006) considera al derecho internacional sobre derechos humanos principalmente como un marco conceptual que es aceptado por la comunidad internacional y que puede ofrecer un sistema coherente de principios y reglas, capaz de orientar el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas en el campo del desarrollo.

La incorporación de la CDN al cuerpo de normas en Argentina, a través de la Ley Nacional 23.849, se realizaba simultáneamente a la vigencia del llamado Consenso de Washington, ello implica que los estándares más altos en el plano normativo se alcanzaron en el mismo período en que se desarrollaba un proceso de diferenciación y desigualdad inédito en el país, un período en que a entender de algunos autores. “La política (estuvo) contra la sociedad” (Merklen, 2005).

En el mismo sentido, la incorporación de la CDN, exponía que tuvo que haber una norma para afirmar que los niños⁵⁸ son sujetos porque, hasta entonces, no se los había considerado de esa manera. La clave de la transformación fue afectar los diferenciales de poder, principalmente por la desaparición de la figura del patronato estatal ejercido por el juez, con contrapeso en otras figuras como defensores y fiscales que respaldan la idea central: la incorporación de los niños como sujetos de derechos.

Nos interesa destacar tres artículos de la CDN presentes en la Ley 23849, dada la centralidad que adquieren en este campo. El Artículo 3, que define “el interés superior del

⁵⁸ Simplificamos la mención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por su uso indistinto.

niño”, en el que se presume que los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes; el Artículo 37, en el que se establece que las medidas de privación de la libertad de niños se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda; y el Artículo 40, en que se reconoce el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde ... (alude a los derechos humanos y fundamentales de las personas) y ... que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. Los Estados Partes garantizarán, en particular: ... Que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa; iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, ...; iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interroguen a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad; v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley; vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita ...; vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento. 3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular: a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales; b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, ... 4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada,

la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.

En la primera década de esta reforma, en Argentina, convivieron posturas muy disímiles. Sectores motivados por el creciente interés de instaurar la perspectiva de derechos, de la protección integral, que pugnaban por materializar estas conquistas en el contexto de la llamada hegemonía neoliberal, que lideraba un gobierno que reformuló el aparato estatal por una vía que habilitó restricciones que abonaron un sostenido deterioro al sistema de protección social existente. La política social de dicho periodo, signada por la focalización, privatización y descentralización de servicios y recursos, propició una “protección restringida” (Mazzola, 2014) de la infancia, fuertemente asociada con los procesos de individualización y el enfoque de riesgo, fácilmente asociado con aspectos del marco normativo derogado. Señalamiento que permite observar el sinuoso camino de estas aspiraciones relativas a la igualdad y el reconocimiento de derechos en una época en que se despliegan disputas entre tendencias contradictorias. Un proceso cuyas consecuencias – entre otras- fueron la escisión entre las normas y la capacidad de garantizar la materialidad de esos derechos. Lo que Ferrajoli (1995) denomina como “garantismo teórico y garantismo real”. Un momento en el que es posible observar cómo se reeditan y expresan tensiones entre cuestión social, control social y política social.

En los primeros años de esa misma década (1990-1999), se realizó otra reforma en la que se promovió la oralidad en los procedimientos de la justicia nacional y que afectó también a este fuero, contemporánea con la incorporación de procesos de selección abierta para la designación de jueces en todos los fueros de la justicia nacional y la incorporación del Ministerio Público que, desde entonces, asume el proceso de defensa y garantías para la población juvenil. Estas leyes, en 1992, La ley 24.050 de Organización y Competencia de la Justicia Penal Nacional, y la ley 24.121 de Implementación y Organización de la Justicia Penal⁵⁹, que con el Reglamento para la jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, establecieron el reordenamiento del Poder Judicial.

⁵⁹ En ella se incorpora el Ministerio Público, institución definida y reglada por la Constitución Nacional. Se trata de un órgano constituido por el Ministerio Público Fiscal y por el Ministerio

En esta primera década, la organización y el funcionamiento de la justicia de menores reconfiguró su institucionalidad. Los Juzgados existentes, Juzgados de Sentencia R y M (pasaron a denominarse como Juzgados Nacional de Menores N° 1 y N° 2 respectivamente), Juzgados de Instrucción (los actuales: N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6) y Correccional O (al actual N° 7) que, en su conjunto, pasaron a completar los siete Juzgados Nacionales de Menores con sede en el llamado Palacio de Tribunales a lo que luego se integraron los tres Tribunales Orales de Menores con sede en Comodoro Py, en el Barrio de Retiro.

Este mosaico normativo institucional se completaba, como ya mencionamos, con la Organización e integración del Ministerio Público, Ley 24.946 en 1998, donde se precisaron las funciones específicas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa que, en este campo, conjuga a Defensores de Menores e Incapaces tanto para la Primera como la Segunda Instancia y Defensores Públicos Oficiales Adjuntos de la Defensoría General de la Nación, en ambas instancias.

En su conjunto, estas innovaciones son indicadores de cambios operados en la matriz jurídica que vertebra la organización institucional que orientan las respectivas modalidades de intervención y prácticas desarrolladas por los agentes en los Juzgados de Menores y los TOMs como en las Defensorías y Fiscalías del fuero penal. En las últimas dos décadas, se exhibe la convivencia de esta textura de leyes y distintas experiencias orientadas a dotar de contenido las leyes vigentes.

La dificultad para completar las reformas de las normas legales referidas al fuero penal no puede deslindarse de la fuerza y profundidad que los principios ideológicos asociados con el conservadurismo, que recuperaron plena vigencia bajo la dictadura militar entre 1976-83, tuvieron y mantienen respecto a cuestiones hoy referidas como a “menores en conflicto con la ley⁶⁰”. De nuevo reaparecen tensiones en clave transformación - restauración.

Público de la Defensa. El primero regula la actividad de los Fiscales, y el segundo, la de los Defensores Oficiales.

⁶⁰ Es una designación que pretende superar la clásica de “menores” ya que incorpora la noción de conflicto como rasgo superador. Unicef refiere que la expresión “niños y niñas en conflicto con la

La puesta en vigencia de la Ley N° 26.061 de Protección Integral, aunque no aludió de manera directa el régimen penal juvenil, transformó las formas de atender y decidir sobre los niños y jóvenes de especial importancia como aquellas medidas relativas a la privación de la libertad. En el entramado institucional cobra relevancia la creación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) que, a nivel nacional, asumió estas competencias que venía desarrollando hasta entonces el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (CONNAF) en la ejecución de estas medidas que involucran a niños y jóvenes, presuntos infractores o infractores del sistema penal e institucionaliza el consenso relativo a establecer no sólo las obligaciones negativas del Estado, sino también un cúmulo de obligaciones positivas (Abramovich, 2006).

Por ese entonces el CONNAF tenía bajo su órbita siete centros de privación de libertad de adolescentes –los “institutos de Menores” denominados: Centro de Admisión (CAD), San Martín, Rocca, Belgrano, Agote, Casa Joven e Inchausti –siete Residencias de Convivencia e Integración Comunitaria (Centros de restricción de la libertad pero de puertas abiertas) y el Programa de libertad Asistida⁶¹ que reformulados total o parcialmente tuvieron continuidad en la actual organización institucional.

Asimismo a partir de la promulgación de la ley 26061, entre el año 2005 y 2006, se firma el Acta Acuerdo entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires. En el cual el Consejo de Derechos de Niños Niñas y Adolescentes (CDNNyA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasa a ser la autoridad de aplicación de dicha norma, en representación del Gobierno de la misma ciudad, debía asumir, en adelante, las competencias jurisdiccionales y establecer las atribuciones con el conjunto de otros actores e instituciones con quienes comparte temática y preocupaciones, especialmente la Dirección de Niñez. Dirección de la que dependen los servicios que se encuentran agrupados bajo la designación de “Atención a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad social”: Centros de día y noche: La Balsa (Once) y La Ribera (Boca-Barracas); Hogares: Hogar “Nuestra Señora del

ley” alude cualquier menor de 18 años que entre en contacto con el sistema judicial por ser sospechoso o estar acusado de cometer algún delito.

⁶¹ http://www.infoleg.gov.ar/basehome/actos_gobierno/actosdegobierno1-12-2008-4.htm

Valle” y Hogar “Vallecito”; Paradores, Sin Fronteras (varones) y Nueva Vida (mujeres); CAINA; Equipo Móvil y el Área de Asistencia Social en Adicciones.

En el CDNNyA se destacan una serie de servicios y programas que forman parte del entramado institucional que interactúa con la justicia penal juvenil: la Guardia Jurídica Permanente que interviene en situaciones consideradas de urgencia (especialmente detenciones en el CAD); el Departamento de Fortalecimiento, Promoción y Protección Integral de Jóvenes en Conflicto con la Ley, encargados de realizar acciones específicas tendientes a organizar estrategias tendientes al egreso de NNyA de los institutos penales; Las Defensorías Zonales que son unidades descentralizadas que se ocupan de brindar asistencia técnica a través de los diversos programas y servicios, relacionados con políticas de infancia y adolescencia implementadas desde las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad.

Asimismo, la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se han desplegado otras intervenciones, es el caso del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, que cuentan con una dotación de profesionales que trabajan en zonas de terminales de vías férreas, Retiro, Constitución, Plaza Italia y Once- Abasto, orientado al trabajo con niños en situación de calle.

Todas dependencias públicas estatales que integran, muchas veces en forma inconexa, el entramado institucional que configura el campo.

La organización normativa institucional estableció distintas funciones para los agentes en cada instancia de la justicia penal de menores: Juzgados y Tribunales Orales por un lado y, el Ministerio Público: Fiscales, Defensores de Menores y Defensores Oficiales. Cabe una pequeña aclaración para los lectores. Existen dos tipos de defensores públicos, –Los Defensores Oficiales se ocupan de “proveer lo necesario para la defensa de la persona y los derechos justiciables toda vez que sea requerida en las causas penales.....(especialmente) cuando aquellos fueran pobres⁶²...Art 60; –Los Defensores de Menores e Incapaces son designados para asegurar el interés de estas personas, promover e intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la personas, de

⁶² En referencia a que de otro modo designarían letrados particulares.

conformidad con a las leyes; requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas “tendientes a mejorar la situación de los menores, para la protección integral, entre otros deberes y atribuciones, según el (Art. 54.) Son los encargados de poder pedir medidas extrajudiciales⁶³. Son encargados de dictaminar “sobre todos aquellos aspectos que conllevan... a la tutela (Terragni, 2000:48), los llamados aspectos tuitivos. Actividades que en el fuero de civil y familia han desarrollado las llamadas Asesorías.

Al respecto observamos otra tensión que refiere al nuevo diseño institucional (el Ministerio Público) que posibilitó que en cada JNM y TOM se desplegara una construcción donde los agentes abogados, con distintas funciones, hegemonizaron todos los espacios que se crearon y el abanico de las intervenciones en el nuevo proceso judicial⁶⁴. Un campo en el que se alentaba una transformación orientada a fomentar prácticas que no reeditaran los procesos de judicialización que le antecedieron. Sin embargo, en el entramado institucional actual se recrea un proceso de “monopolización de este capital”⁶⁵ al decir de Bourdieu (1997: 123), por parte de los agentes abogados, que se despliegan en múltiples instancias. Inclusive, también se incluyeron recientemente abogados en los equipos de Delegadxs. La dinámica de trabajo y la yuxtaposición de agentes pueden ser explicadas a partir de la lectura de las citadas normas pero resulta de muy difícil aprehensión para los niños sujetos de su atención, en la interacción cotidiana, como trataremos de exponer a continuación.

Al respecto, Atilio Alvarez⁶⁶ (en Dell’Aglío, 2004: 8 y 9) señalaba la relevancia de la incorporación de trabajadores sociales “para acompañar los procesos judiciales desde la realidad de la gente. La década en curso verá el debate... entre las tendencias de quienes estamos dispuestos a profundizar el camino de la interdisciplina, esbozado imperfectamente en el siglo XX, y aquellos que –con ropaje de pseudoprogresismo– propugnan en regreso al reduccionismo jurídico del siglo XIX. El riesgo de un “salto atrás”....”

⁶³ Una de las Defensoras lo definía de la siguiente manera: “pedir las medidas extrajudiciales, a través del artículo 120 de la Constitución, con un oficio y decirle a la directora de la escuela “anótelo”, al director del hospital... al director del centro de salud “atiéndalo”.

⁶⁴ En el caso de la justicia minoril difícilmente convoca la participación de abogados privados contratados por los propios sujetos.

⁶⁵ Las experiencias en algunos países tienden a reducir la participación exclusiva de abogados en el fuero juvenil, una justicia más accesible, orientada a trabajar con la población juvenil, menos concentrada en los procesos de sanción penal.

⁶⁶ Reconocido Defensor Público de Menores, ejerció también la titularidad de la CONNAF.

Es importante advertir que las normas que configuran y organizan este campo se encuentran, desde hace unos años, ante la inminencia de una reforma anunciada, la complejidad de los problemas a resolver y los desacuerdos existentes no han facilitado su tratamiento. La imposibilidad de avanzar en las modificaciones pendientes permite la convivencia del Régimen Penal de la Minoridad, con las normas emanadas de la CDN. Ley 22278, que en el contexto de la dictadura militar reordenó el régimen penal de Menores, en el fuero nacional, en concordancia con los fundamentos de la derogada ley Agote. Ello constituye un punto de apoyo para ciertas ambigüedades, la vigencia de esta ley asociada con la derogada Ley 10903 sigue siendo una bisagra entre otras normas que pugnan por su reemplazo. El debate mantiene centralidad asociado con temas relativos a la seguridad-inseguridad que fueron vinculados con la propuesta referida a la baja de la edad de la imputabilidad. Ello operó como un obstáculo para avanzar en la construcción de leyes que traduzcan al fuero penal, derechos y democratización institucional en la organización de la justicia minoril, que ha quedado relegada momentáneamente.

El concepto llave que ha permitido repensar y re articular las prácticas en este campo, es el de medidas socioeducativas, definidas como “una medida jurídica sustitutiva de la privación de la libertad que se aplica a los adolescentes que cometieron algún delito. Tiene por objetivo evitar aquellos castigos y sanciones que afectan negativamente la socialización del adolescente autor de una infracción y constituye al mismo tiempo una sanción y una oportunidad de resocialización. Contiene una dimensión coercitiva, pues el adolescente está obligado a cumplirla, y es también educativa, porque su objetivo no se reduce a penar al adolescente, sino promover su integración social. Algunas de las medidas socio – educativas son: la libertad asistida, la prestación de servicios a la comunidad, la obligación de reparar el daño y la mediación” (UNICEF, 2007). El trabajo de los Delegadxs ha sido reconfigurado en el marco de estas ideas que superan la figura del “informante, ojos del juez”... asociada con una “idea estática del informe...como fotografía fija de una realidad que es de suyo dinámica y mutable...a una visión interdisciplinaria que atiende más a lo operativo y transformador que a lo meramente descriptivo” (Álvarez en Dell’Aglío, 2004:7).

Los profesionales que trabajan en el campo estatal se enfrentan con problemas que tienen prevista una lógica de “tratamiento” burocrático. Sin embargo, la singularidad de la intervención profesional (Cazzaniga, 2001) insta a redireccionar la lógica institucional del trabajo que se desarrolla en términos de no intentar respuestas repetitivas y predeterminadas. El Trabajo Social tiene una particularidad que deviene de su posición en la vida estatal (Rozas y otros, 2014), su condición de agente estatal. Su intervención es posible a condición de la existencia de un lazo que permita elucidar las diversas situaciones que laten en torno de la complejidad que implica la presencia de niños y jóvenes acusados como infractores de leyes penales.

Como señala Stanley Cohen (1988) sostener el compromiso uno a uno, no es una tarea fácil y menos aún en la práctica estatal, dado que la política estatal presupone y reconoce la organización de respuestas genéricas. En este sentido, la intervención profesional en este campo, está asociada con la demanda de acompañar, en términos de enlazar jóvenes-proceso judicial- Estado. La intervención vincula “un discurso que no es solo jurídico y tampoco... de neta protección... regida por la premisa de despatologizar estas situaciones” (Rousseaux, 2014). Estos agentes personifican un tipo de intervención, se trata de un acompañamiento, que es construido ante la evidencia de intervenciones estatales previas con marcas de ausencia. Los profesionales en estos contextos institucionales asumen la responsabilidad de impulsar respuestas específicas, innovadoras, a poblaciones que fueron relegadas. Emerge una dimensión novedosa, reciente en la legislación juvenil, la posibilidad de ser escuchado por el Estado, de que en una instancia estatal se pueda advertir y reclamar respecto de derechos.

Tensiones persistentes

Como corolario de este apartado nos interesa identificar particularidades que sintetizan los aspectos que consideramos como tensiones y que expresan divergencias, conflictos, desacuerdos o simplemente cuestiones que convocan nuestra atención, a saber:

A- Algunos aspectos de la ley vigente suscitan interpretaciones disímiles, que en ocasiones son asociadas al derogado paradigma. A nuestro criterio merecen destacarse: -La

noción de “El interés superior del Niño”⁶⁷ que se invoca cuando se toman decisiones que incluyen la privación de libertad de menores de edad considerada como una medida de último recurso y durante el período más breve que proceda⁶⁸ - las múltiples interpretaciones respecto del binomio capacidad – incapacidad de los menores de edad asociada con la noción de protección y de autonomía⁶⁹ de los adolescentes y jóvenes que se conjuga con la noción de sujeto surgida de la CDN. La ley establece aspectos que no siempre son precisos y que requieren de definiciones más concretas a partir de la construcción institucional, de prácticas, que se visibilizan en escenas de la vida cotidiana.

B- También podemos advertir, que en el ámbito de la justicia nacional en este fuero especialmente en la última década, se observa un descenso paulatino pero notable del número de niños alcanzados por las llamadas medidas de protección excepcional, léase privados de su libertad, retenidos en Institutos ahora denominados como Hogares, que pese a las mejoras institucionales desarrolladas por la SENNAF para su organización, implican una clara restricción a la libertad, prácticamente incompatible con las normas vigentes tanto en el nivel nacional como internacional y que se encuentran en deficitarias condiciones para su alojamiento⁷⁰.

Sin embargo, la idea de que los jueces pueden retener a estos sujetos privados de su libertad, sin que medie una sanción, se apoyó en el laberinto de las interpretaciones que todavía se suscitan en los procesos de intervención en este campo. Asimismo, el notable déficit de instituciones llamadas asistenciales, demora el egreso de los jóvenes de estos institutos/hogares en los tiempos que se solicitan. La rémora de los gobiernos locales a otorgar vacantes, se argumenta por una evidente escasez de instituciones dependientes del poder ejecutivo de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, que puedan atender las demandas planteadas, lo que favorece la permanencia de estos niños en instituciones de

⁶⁷ Definida en el Art. 3 de la Ley 23.849.

⁶⁸ Art. 37 de la citada Ley 23.849.

⁶⁹ la CDN que establece (más o menos así) que los Estados... acompañan o respeta(rá)n las responsabilidades, los derechos y los deberes de los miembros de la familia o de la comunidad, según la costumbre local, de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas *para que el niño ejerza los derechos reconocidos* en la misma CDN.

⁷⁰ Se puede consultar el informe de monitoreo del centro de Régimen Cerrado “Dr. Manuel Rocca” de marzo 2015, realizado por Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias y el PROCUVIN, Ministerio de Justicia de la Nación. Disponible en: <http://www.cij.gov.ar/nota-15336-El-Sistema-de-Control-de-C-rceles-realiz--observaciones-a-un-instituto-de-menores.html>

libertad restringida. Desde el campo de la justicia juvenil estas demandas no han sido colocadas como prioritarias en la agenda de las instituciones del poder ejecutivo encargadas de garantizar la atención de esta población. Por un lado se critica la judicialización de la infancia pero no se habilitan recursos suficientes para la atención de un sector de la población que la justicia del fuero penal juvenil capta y reenvía a los órganos administrativos que demoran una respuesta organizada, de políticas y programas de asistencia específica.

C- En esta línea, interesa puntualizar que los problemas que hoy advertimos, a nuestro criterio, son de distinto orden: por un lado una evidente dificultad para completar el proceso de reforma legislativo, por otro lado una preocupación relativa a las implicancias que tiene hoy la vieja figura del patronato –no solo por la vigencia de la Ley 22.278-, en las prácticas que se desarrollan en este campo. Ciertamente “amesetamiento” que opera como “un supuesto según el cual formuladas las leyes solo resta esperar que ellas actúen, con la eficacia de la ley de gravedad.”(Marcon, 2013a: 8). Ello, en su conjunto se expresa en tensiones inherentes al funcionamiento de las instituciones, los profesionales y otros agentes como en las prácticas que ellos encarnan. Al respecto Llovet, (2013, 212) señala que “los procesos de interpretación institucional en los que se concretan prácticas ... de la niñez constituyen aspectos definitorios del campo de intervención.... la multiplicidad de discursos institucionalizados en un contexto específico no puede ser considerada a priori como dotada de coherencia a partir de la supuesta eficacia totalizante y transformadora del discurso de derechos. Todo lo contrario, es necesario considerar cómo, en distintos escenarios específicos y alrededor de problemas concretos, tales discursos permiten a los actores sociales significar, y de qué maneras, lo que constituirá problemas sociales meritorios de intervención. De modo que tales procesos se asumen como conflictivos y provisionales, y a su vez, se dan de manera local. En tal sentido, las redes de actores y organizaciones que lo protagonizan constituyen un campo.... en el que las disputas por la constitución de espectros de acción movilizan discursos y producen interpretaciones específicas”. Finalmente el acceso a derechos requiere de una estructura administrativa de asistencia que aún se encuentra inacabada. A ello se suma que se observa un proceso de

desprofesionalización de los equipos profesionales encargados de la atención de esta población⁷¹.

La legislación vigente incorporó una serie de instancias que posibilitan una serie de garantías a cada sujeto niño. Ello inaugura nuevas presencias, dispositivos de atención y gestión en este fuero, muy significativas durante todo el proceso de intervención judicial. Encontramos que la noción de “enfoque” de la protección integral capta la amplitud de ideas, normas, estrategias, discursos y prácticas que se inscriben, aunque no de manera idéntica y al mismo tiempo. La llamada perspectiva de derechos constituye una apuesta a construir garantías y acceso a derechos “un andamiaje conceptual, a la vez teórico operativo, que identifica diversos mecanismos de seguimiento y compromiso que involucran actores” (Pautassi, 2010:15) en un campo signado por otra tendencia anterior en la que se moldearon prácticas de los agentes especialmente de aquellos con mayor antigüedad en esta institución.

D- El “tratamiento tutelar”, también llamado de “observación tutelar” subsiste, la ley 22.278 lo habilita y los proyectos que se debaten contemplan el desarrollo de medidas de carácter socio educativas a cargo de las agencias judiciales. ¿Es posible observar que se reconfigura la intervención judicial, antes disposición tutelar, en términos de mediadas socio-educativas? ¿Con qué contenidos, cómo opera, quién lo supervisa?

b. El plano institucional:

Los Juzgados Nacionales de Menores (JNM)

Nos proponemos ahora presentar el entramado que, a partir de las normas, fue modelando la arquitectura institucional de la justicia penal de menores con asiento en la Ciudad de Buenos Aires⁷². Jorolinsky (2008: 20) puntualiza “cuando se habla de administración de

⁷¹ En los dispositivos asociados con la atención de jóvenes con intervenciones judiciales en el fuero penal juvenil, tanto en las instituciones dependientes del Gobierno de la CABA en la Dirección Gral. de Niñez y Adolescencia como en la SENNAF, se observa un notorio incremento de la contratación de operadores y no profesionales para la atención de esta población.

⁷² La Ciudad de Buenos Aires en 1996 se constituyó como jurisdicción autónoma. Posteriormente, en el marco de la Ley 24.588/95 (llamada Ley Cafiero) se inició un proceso de traspaso de la

justicia penal para personas menores de edad, se hace referencia a un tipo de proceso penal particular, que se encuentra reglamentado por determinadas normativas y en el cual intervienen actores específicos”.

La Justicia, como hemos señalado, se caracteriza por una pretensión de objetividad. En auxilio de este argumento se apela a códigos de procedimientos que indican, por escrito, el desarrollo de las acciones a seguir en cada caso, a fin de establecer procedimientos considerados neutros.

Como afirma Bourdieu (2000) “Aunque la existencia de reglas escritas tiende, indudablemente, a reducir la variabilidad de los comportamientos, las conductas de los agentes jurídicos pueden referirse y plegarse más estrictamente a las exigencias de la ley y queda siempre una parte de arbitrariedad en las decisiones judiciales, imputables a variables organizativas como la composición del grupo decisorio o las cualidades de los justiciables” (Bourdieu, 2000:184).

Actualmente, la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con siete Juzgados Nacionales de Menores, que, tienen competencia según establece el art. 29 del Código Procesal Penal Argentino⁷³, en: - La investigación de los delitos ... cometidos por menores que no hayan cumplido dieciocho (18) años al tiempo de la comisión del hecho; el juzgamiento en única instancia en los delitos y contravenciones cometidos por menores que no hayan cumplido dieciocho (18) años al tiempo de la comisión del hecho y que estén reprimidos con pena no privativa de la libertad o pena privativa de la libertad que no exceda de tres (3) años; y en los casos de simple inconducta, abandono material o peligro moral de menores que no hayan cumplido dieciocho (18) años al tiempo de encontrarse en esa situación, según lo establecen las leyes especiales”.

En los JNM tramitan las causas en las que son denunciados personas menores de 18 años de edad⁷⁴, acusados de la presunta comisión de un delito; allí se realiza la etapa más conocida como de instrucción del hecho y se realizan los juicios a los jóvenes (mayores de

justicia nacional a esa órbita. El fuero penal de menores permanece como competencia de la justicia nacional, a la fecha.

⁷³La reciente reforma de este código no incluyó a este fuero aunque las leyes de implementación que actualmente se discuten, lo incluiría de hecho.

⁷⁴También por prevención simple a requerimiento fiscal.

16⁷⁵ y menores de 18 años al momento de la imputación de un delito) implicados en delitos que tienen una pena prevista superior a dos años e inferior a tres años de privación de la libertad. Las causas de jóvenes imputados por delitos con pena mayor a tres años –en el caso de que los imputados resulten procesados en dichos Juzgados–, son elevadas a juicio a los TOM, por medio de un sorteo en el que se decide en cuál de ellos prosigue el proceso correspondiente.

En todos los casos, cada vez que se inicia un trámite cuya denuncia incluye a menores de 18 años, la participación del Ministerio Público en articulación con los JNM desarrolla una primer valoración de los motivos de esa denuncia que se expresan en la carátula⁷⁶ y el inicio del trámite. La apertura de un expediente, denominado “actuario” en el que se incorporan todas las diligencias que las instancias realizan en pos de investigar la presunta comisión, la posible participación y/o responsabilidad del joven en el hecho por el que se lo denuncia.

Podemos definir al expediente judicial como un soporte material que condensa una secuencia de actuaciones principalmente escritas que reflejan las diversas etapas de un proceso judicial registradas en un orden cronológico. Es el registro del proceso judicial y tiene una finalidad probatoria del mismo.

Cuando se trata de menores de edad, casi simultáneamente se produce otra intervención, la primera entrevista con profesionales del Cuerpo de Delegados Inspectores de Menores que se incorpora al llamado expediente “tutelar”⁷⁷. Esta intervención profesional⁷⁸ es constitutiva del proceso previsto en la ley. Esa primera entrevista se orienta a un conocimiento del joven y su grupo conviviente, que permite vehicular información al Juez relativa a la situación social de esas personas, tarea que realizan profesionales a los que se designa a partir de una especial formación, los cuales a partir de ese primer contacto pueden sugerir al Juez respecto la necesidad o no de realizar diligencias y/o intervenciones

⁷⁵ El límite de la edad de imputabilidad a los 16 años fue repuesto en el año 1983, Ley 22.803. Este límite es uno de los temas controvertidos de los proyectos de reforma de la ley penal juvenil.

⁷⁶ Carátula que permite la identificación del expediente y de las partes en el proceso.

⁷⁷ Allí se consigna lo atinente a los aspectos tuitivos, especialmente informes realizados por los Delegadxs respecto del niño y su grupo conviviente.

⁷⁸ Como ya mencionamos, privilegiamos en este estudio el caso de los trabajadores sociales, aunque este cargo es desempeñado por distintos profesionales de las ciencias sociales.

relativas a la situación del niño respecto de situaciones de vulneración de sus derechos en una acepción amplia, por la vía de la intervención de los órganos administrativos. Además expiden una opinión que puede contribuir a que se dicte o no la disposición tutelar del joven.

En la dinámica de trabajo cotidiana, a partir del relevamiento realizado, observamos que los niños acusados son convocados al JNM, en algunos casos acompañados por sus padres, referentes, a veces solos, o con personal de la SENNAF o del CDNNyA. Allí son recibidos por empleados de distinto rango supervisados por los Prosecretarios y Secretarios quienes fiscalizan los procesos de atención y aseguran la notificación a los distintos Defensores y Fiscales que son parte del proceso.

En los JNM, a diferencias de los TOM, la presencia de los Defensores Públicos Oficiales es cotidiana especialmente en el momento en que son recibidas las declaraciones, pruebas, reconocimientos, etc., oportunidad en que los niños tienen contacto con estos agentes. A diferencia de lo que ocurre con los Defensores Públicos de Menores, que muchas veces no conocen a los jóvenes, su intervención se concentra en el control de los expedientes, los JNM les remiten oficios, comunican a dichas Defensorías las medidas que toman respecto de los niños, que ellas pueden observar o suscribir. Es poco frecuente que los niños reconozcan a esos agentes mientras dure la gestión judicial en los JNM, a excepción de que estén privados de su libertad, ocasión en que dichas dependencias suelen enviar agentes de estas dependencias a conocer la situación de estos jóvenes. Los menores de 16 años (llamados inimputables) reciben un trato personalizado a cargo del responsable de la Unidad Funcional⁷⁹ que desde su creación consideró que, dado que no se los considera punibles no deberían ser dispuestos tutelarmente y la privación de libertad no debería estar contemplada en el abanico de medidas.

Entre todos estos agentes, se despliegan los procesos (declaraciones, comparendo de testigos, indagatorias, concurrencia a médicos, presentación de pruebas, etc.) que se reflejan en la construcción de cada expediente y que, según los resultados de este trabajo,

⁷⁹ Creada en octubre de 2008 por Res. DGN 1954 para actuar en representación de las personas menores de 16 años, en los legajos tutelares que tramitan en los JNM.

pueden conducir al cese de la causa, su tratamiento en el JNM, o su elevación al TOM si hubo procesamiento.

Las intervenciones son lideradas por agentes abogados, que hegemonizan el campo, en los últimos años el ingreso de agentes judiciales se profesionalizó y es una excepción que los empleados de todas estas instancias no sean estudiantes o graduados de Abogacía y Derecho. Sin embargo se observa una escasa formación en materia de infancia, no así en cuestiones de materia penal, por parte de estos agentes tanto en los JNM como en los TOM.

Luego de una primera instancia de instrucción, en los casos en que se ha establecido semiplena prueba, se dicta el procesamiento y el recorrido de aquellas causas⁸⁰ prosigue, como ya mencionamos antes, con la elevación a la instancia de juicio en los Tribunales Orales de Menores.

Para el desarrollo de estas tareas, en cada uno de esos JNM, se organiza una estructura que depende de un Juez/a y cuentan con tres secretarías a través de las cuales se despliega la administración cotidiana de justicia en el fuero. Tradicionalmente estos JNM se organizaron internamente con dos Secretarías llamadas actuarias que llevaban adelante el proceso legal propiamente dicho “la causa” y una Secretaria Tutelar que asumía la tarea de llevar adelante los “tutelares”, los respectivos expedientes tutelares y la relación con los profesionales del Cuerpo de Delegados. Hasta la derogación de la Ley 10.903, el/la titular de la Secretaria Tutelar mantenía estrecho contacto con el Juez que era el responsable de, a partir de la información de los miembros de esta Secretaria y la opinión de los Delegados, pautar las características del llamado tratamiento tutelar cuyo seguimiento realizaban los Delegados.

A partir de la derogación de la mencionada ley, paulatinamente los Juzgados Nacionales de Menores se fueron reorganizando. A julio 2014, en cuatro de los siete Juzgados, las tres secretarías unificaron el trabajo –actuaria y tutelar- en tanto se mantienen ambos expedientes. Generalmente, la disposición y el “tratamiento tutelar” ya no es centralizado por el Juez, quien conserva la autoridad y es responsable último sobre todo aquello que se

⁸⁰ de niños entre 16 y 18 años, de edad al momento de ser imputados.

establece con cada joven y sus referentes. Suelen ser los Secretarios, con los agentes en cada Secretaria y especialmente los respectivos Delegadxs –en este caso, trabajadores sociales-, quienes a partir del contacto con el niño/joven y su grupo conviviente, opinan y sugieren sobre las medidas y estrategias que se consideran oportunas y pertinentes. Con las particularidades de cada Juzgado, algunos a partir del dialogo entre los agentes, otros con características de directivas, se pautan medidas o proyectos de trabajo a corto o mediano plazo con estos jóvenes. Trabajo que es denominado como seguimiento. Los trabajadores sociales reconocen que cuentan con cierto margen para la construcción de estrategias específicas de intervención tal como desarrollaremos seguidamente.

Si bien es el Juez quien centraliza las decisiones, podemos observar que en los casos en que se mantiene la organización por Secretarías Tutelares (en tres de los siete Juzgados ocurre de esta manera) los criterios de trabajo tienden a ser más homogéneos. En tanto en la modalidad de Secretarias que realizan ambas tareas simultáneas, se observan que definen modalidades de trabajo no idénticas en situaciones similares. Conviene además señalar que cada empleado, en las respectivas Secretarias, lleva cierto número de “expedientes” y también ello implica una impronta en la relación y el trabajo que se desarrolla con los jóvenes, como también señalaron Daroqui, Guemureman y Spatari (2005). Esta situación se complejiza en los TOM como veremos en el punto siguiente.

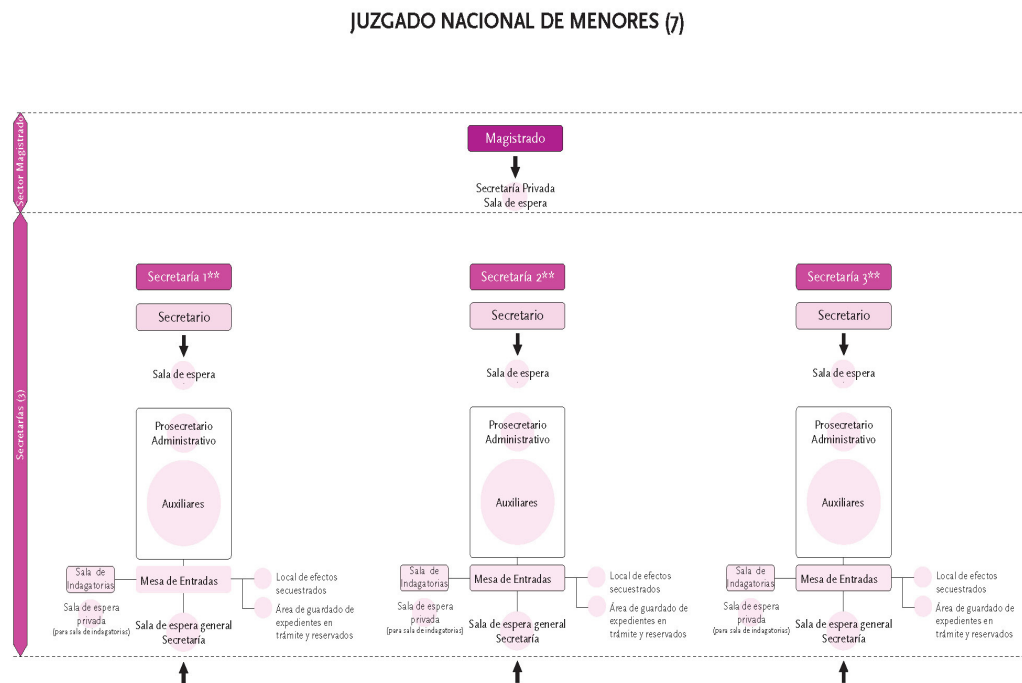
Al respecto, Guemureman identifica, que distintas corrientes asociadas con el fin de la intervención judicial y la pena, entre las cuales los jueces inscriben la racionalidad de las acciones. Una finalidad retributiva, de prevención general (disuasión), de prevención especial (evitar la reincidencia) o bien serviría a los efectos de reforzar el valor de la norma y afianzar la cohesión social. En su conjunto, argumentos asociados con lo que “comúnmente se conoce como “ideología de la defensa social” (Guemureman, 2011: 266).

Consideramos que esta configuración del campo complejiza la tarea de los Delegadxs, la multiplicidad de interlocutores que expresan una multiplicidad de criterios, procedimientos y concepciones e las distintas instancias y al interior de cada una de ellas.

Los Delegadxs responden a diversas instancias institucionales, particularidad que favorece la escasa familiaridad con los sus interlocutores en los JNM, los TOM y la Cámara. A

partir de las preguntas realizadas, podemos identificar dos modalidades de sobrellevar esta relación, por un lado Delegadxs que tienden a cuestionar la dinámica de trabajo, y otra forma de relacionarse que tiende a disciplinarse a todo tipo de requerimientos, eludir confrontaciones con los agentes judiciales. Pese a ello observamos un cuestionamiento cruzado que expresa diferencias y tensiones que no son elaboradas en el plano institucional.

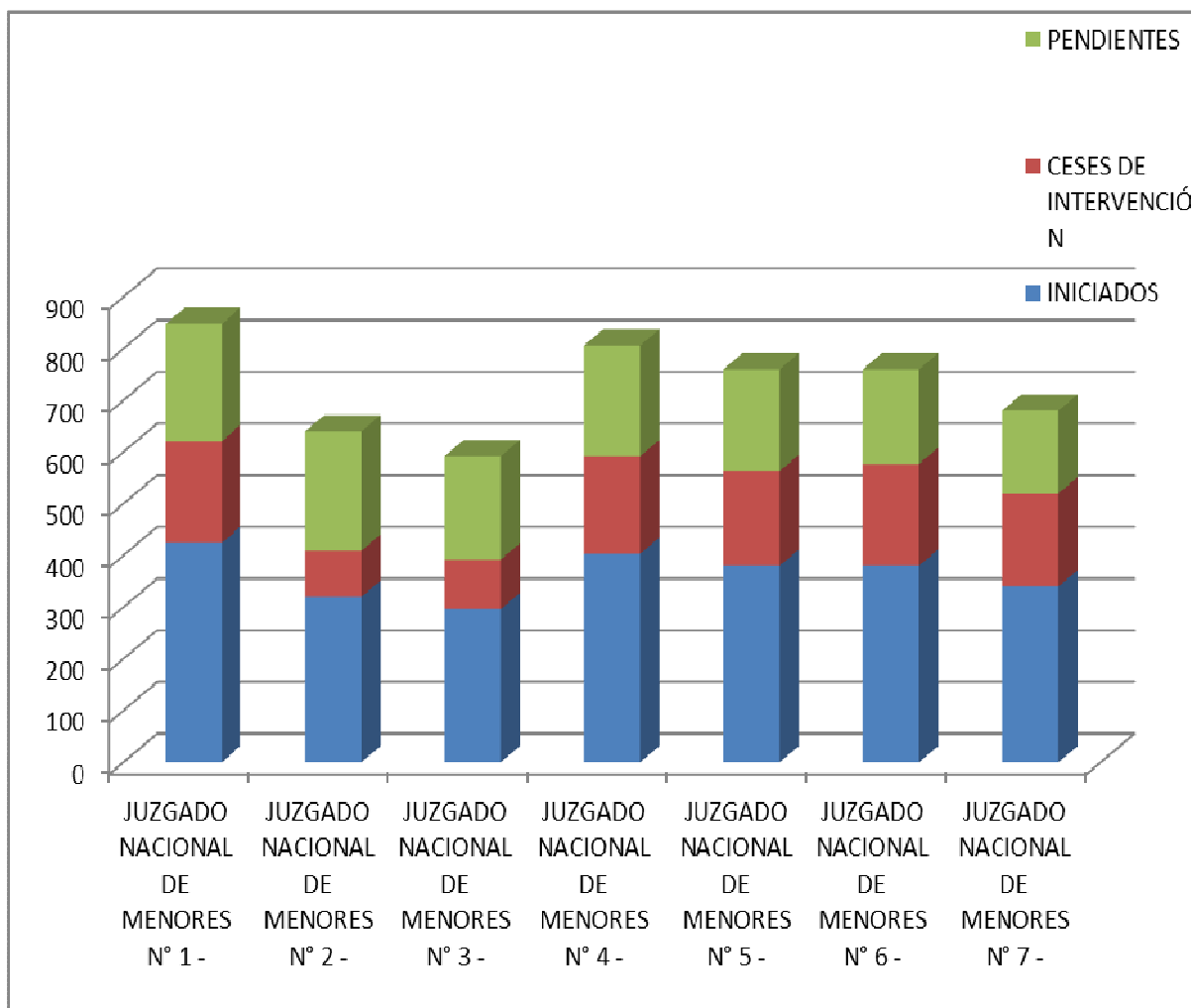
Gráfico N° 1. Organigrama funcional, Juzgados Nacionales de Menores.



Fuente: <http://www.socearq.org/cms/wp-content/uploads/2010/07/organigramas-funcionales.pdf>

Incorporamos información estadística que corresponde con el periodo 2012, que es el dato más actualizado, producido la BGD, que se encuentra disponible. Ello resulta útil para ilustrar cuantitativamente el trabajo de los JNM en su conjunto. Dicha información se encontraba desagregada por Secretarías, en algunos casos, lo que fue simplificado para esta presentación por la autora.

Gráfico N° 2 Materia Penal, Intervenciones por Juzgado, Año 2012.



Fuente Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes. Fuente de datos: Juzgados de Menores del fuero Criminal y Correccional de Capital Federal-BGD

Cuadro N° 1 Materia Penal, Intervenciones por Juzgado, Año 2012, en cifras.

JUZGADOS	INICIADOS	CESES DE INTERVENCIÓN	PENDIENTES
JUZGADO NAC. DE MENORES N° 1 -	424	197	227
JUZGADO NAC. DE MENORES N° 2 -	320	89	231
JUZGADO NAC. DE MENORES N° 3 -	296	96	200
JUZGADO NAC. DE MENORES N° 4 -	403	189	214
JUZGADO NAC. DE MENORES N° 5 -	380	183	197
JUZGADO NAC. DE MENORES N° 6 -	380	197	183
JUZGADO NAC. DE MENORES N° 7 -	340	180	160
TOTAL GENERAL:	2543	1131	1412

**Fuente Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes. Fuente de datos:
Juzgados de Menores del fuero Criminal y Correccional de Capital Federal-BGD**

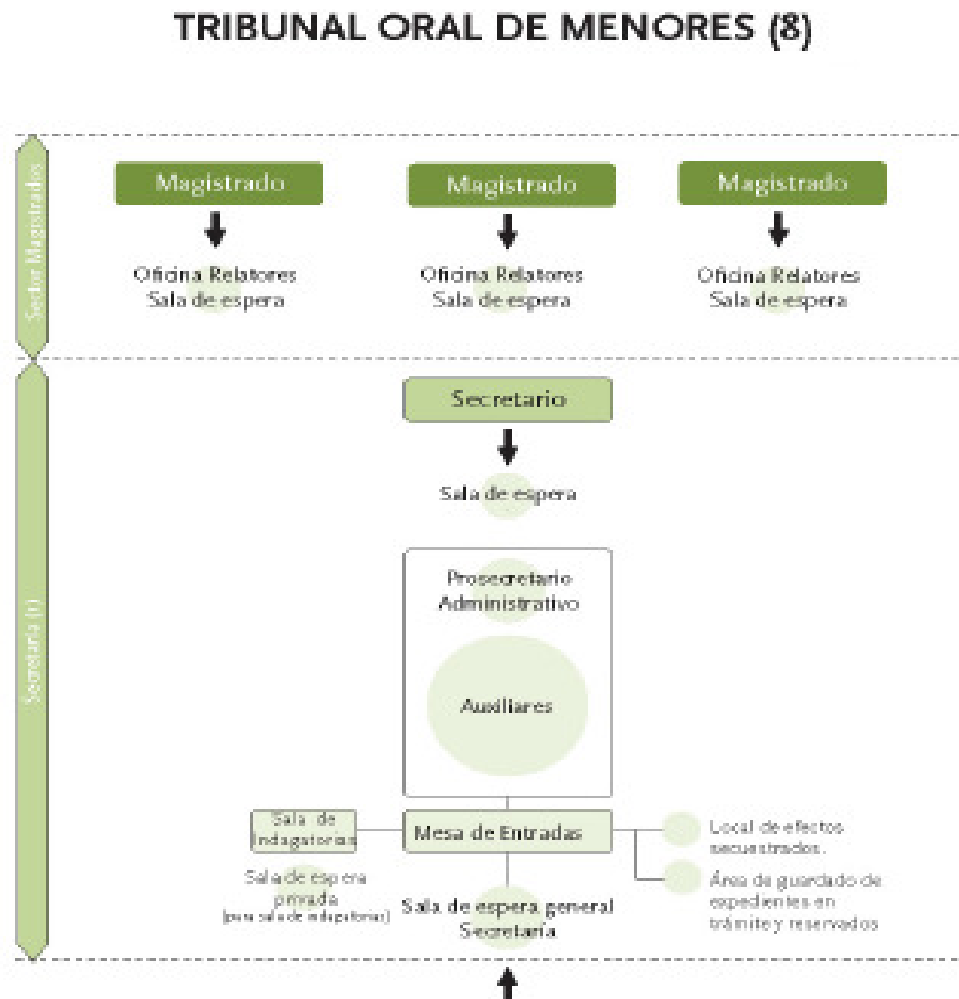
Los Tribunales Orales de Menores (TOM)

En la actualidad, la Justicia Nacional cuenta con tres TOM, encargados de juzgar, según el Art. 28 del Código Procesal Penal Argentino, los delitos cometidos por menores que no hayan cumplido dieciocho (18) años al tiempo de la comisión del hecho, aunque hubiese excedido dicha edad al tiempo del juzgamiento, y que estén reprimidos con pena privativa de la libertad mayor de tres (3) años. Cabe señalar que el fuero de menores es “un fuero de atracción”, eso significa que toda causa que involucre a un menor de edad, independientemente de la cantidad de personas mayores de edad involucradas se tramita en estos Juzgado y Tribunales.

Según la Ley 24.050, a través de la cual se crearon dichos Tribunales, para el desarrollo de esta tarea serían asistidos por un equipo interdisciplinario especializados en cuestiones de la minoridad, pero como ya mencionamos, esta tarea fue asignada de modo transitorio y en carácter de colaboración por los Delegados Inspectores de Menores, lo que evidencia un menor interés por desarrollar aspectos considerados centrales en la ley y que fue una instancia suprimida en la organización de los nuevos TOM .

En el organigrama que seguidamente presentamos, se exhibe aquello previsto por la ley, debe agregarse una segunda secretaria, que se incorporó casi desde la creación de estos Tribunales, la “Secretaria Tutelar” que, a posteriori paso a cumplir iguales funciones que su par, como exponemos más adelante.

Gráfico N° 3. Organigrama funcional, Tribunales Orales de Menores.



Fuente: <http://www.socearq.org/cms/wp-content/uploads/2010/07/organigramas-funcionales.pdf>

Estos jóvenes (de 16 a 18 años) son considerados “punibles⁸¹” y por ello se prevé una modalidad específica en el tratamiento de estas causas, cuya característica central consiste en el desdoblamiento de la sentencia. En la primera, se valoran “hecho y prueba”; a partir de la reconsideración del expediente actuario elevado oportunamente por el Juzgado de Menores. En esta instancia, se valora si estuvo implicado en el hecho que se le atribuye, y en ese acto, se declara la responsabilidad penal o se lo absuelve.

La segunda sentencia⁸² ocurre en los casos en que en la primera sentencia fue declarada la responsabilidad penal del/los jóvenes, sobre quien/es, al término de como mínimo un año de tratamiento tutelar, corresponde determinar la sanción a aplicar. Es decir, si en la primera sentencia el TOM declara la responsabilidad penal del menor, transcurrido como mínimo un año se dicta esta sentencia definitiva. En esta oportunidad, el Tribunal evalúa el “tratamiento tutelar” desarrollado en ese lapso, los informes que se exponen en ese expediente, la trayectoria del joven durante ese período -además del hecho y los antecedentes del joven⁸³-, como insumos para decidir la imposición o no de una sanción. En ese momento, el Tribunal puede absolver, reducir la sanción (en la forma prevista por el Código Penal) o condenarlo sin reducción. Esta sentencia se pronuncia, generalmente, cuando el joven ya cumplió la mayoría de edad, los 18 años. Este procedimiento, en algunos casos, en algunos TOM, por falta de tiempo, se reconfiguró como un procedimiento escrito y no oral tal como coincide en señalar Guemureman, (2011), otra tensión con la norma vigente.

La opción de la segunda sentencia, es la clave que dota de sentido el trabajo de los Delegadxs. En estos casos, la justicia de menores, cuenta con la opción de “absolver” al joven por el hecho del que se lo acusó y encontró penalmente responsable⁸⁴, por haber tenido menos de 18 años de edad cuando lo cometió y haber tenido un “exitoso tratamiento tutelar”. Denominación que alude al proceso de intervención desarrollado por los

⁸¹ Por la vigencia de la ley 22.278 y desde la sanción de la ley 26.579/09 se acota la intervención judicial tutelar hasta los 18 años, el trámite actuario prosigue.

⁸² También llamada sentencia del 4º, en referencia al Art. 4º de la Ley 22.278/80

⁸³ También pueden incorporar su propia impresión pero es poco frecuente que los jueces hayan tenido contacto sostenido con los acusados.

⁸⁴ Jorolinsky (2008) a partir del trabajo de investigación que desarrolló en estos TOM señala que algunos de los agentes consultados expresan que no se trata de una opción de “absolver sino perdonar”. Es interesante señalar, tal como ella plantea, que existe entre fiscales, defensores y jueces, distintos criterios. Unos lo consideran un “beneficio”, otros “perdón”, otros un “derecho”.

profesionales de las ciencias sociales., desde que se establece la disposición tutelar hasta la fecha en que culmina el proceso o el joven alcanza la mayoría de edad.

Por otra parte, en los últimos años, ha cobrado importancia la figura de “juicio abreviado” y “la suspensión del juicio a prueba” o “probation” en menores de edad, que suscita diversas posiciones por parte de los agentes. Estas opciones implican que los jóvenes acusados pueden reconocer su responsabilidad, lo que abrevia y acelera la gestión judicial y por otro lado, también hacer una oferta, en lo posible, de reparación del daño. Guemureman (2011) distingue dos “modos de resolución judicial de estas causas” penales, -en tanto procedimiento previstos en la ley como los recién mencionados y -en tanto desenlace, en este último caso corresponde cuando las causas prescriben, o se declara la responsabilidad penal, se impone pena, o se absuelve.

Como expusimos los siete JNM convergen en tres TOM, ello ha producido desde su creación, una acumulación de causas en la segunda instancia, que excede las posibilidades materiales de tratamiento. Ello se conjugó con la baja de la edad de la mayoría de edad en 2009, que comprimió los plazos de trabajo, “cambiaron las reglas de juego”. La preminencia mediática que en los últimos años cobro el fuero penal juvenil, no se evidencia una relevancia similar en el tratamiento estatal, en el Poder Judicial, en términos de un incremento de recursos destinados a este fuero⁸⁵.

Esta situación fue elaborada de distintas manera en el curso del tiempo. Defensores Oficiales coinciden en que en el TOM actualmente se realizan audiencias de debates – juicios, en los que se dirime y concluye sobre la declaración de responsabilidad penal o la falta de mérito- solo en determinadas situaciones, cuando existen personas en situación de privación de libertad, cuando por la concurrencia de mayores de edad resulta estrictamente necesario y, en muy aisladas situaciones, cuando los menores de edad deciden preservar su derecho de defensa en juicio.

⁸⁵ No solo destinado a crear nuevos TOM sino a aumentar la dotación de agentes, que resulta incluso evidente en el caso de dificultad para cubrir la vacante de los jueces.

El juicio abreviado requiere que, en cada causa, todos los acusados implicados reconozcan responsabilidad⁸⁶ en el hecho. No es posible esta opción para situaciones individuales si los implicados son un grupo de personas, a diferencia de la figura de la “probation” que acepta decisiones individuales. El juicio abreviado también supone que el o los acusados aceptan la calificación del requerimiento realizado por el fiscal con el correspondiente pedido de pena. En esa presentación, el fiscal deja expresa constancia de que no se opone al acuerdo, que deja supeditada la pena a la aplicación del Art. 4, que permite su absolución o en el caso de la condena, la reducción de la pena prevista para la tentativa, siempre menor. Esta reducción es considerada regla a partir del fallo “Maldonado”, de la Corte Suprema de Justicia, aunque los Defensores coinciden en señalar que no siempre se verifica su cumplimiento. Lo que se designa informalmente como “el combo, abreviado con absolución por el 4to.” Dada la reducción de plazos ocurrida a partir de que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, la se han resumido los plazos entre la primera y segunda sentencia, que pueden ocurrir casi simultáneamente.

La explicación en la que se apoya el uso reiterado del recurso del juicio abreviado es que para los menores de edad no implica imposición de pena, pero la aceptación de este acuerdo –que reemplaza o elimina la ocurrencia del juicio- es conflictiva en términos del debate relativo al reconocimiento de la responsabilidad del joven en cuestión. Este aspecto tensiona los propósitos asociados con la ley vigente y la promoción en el ámbito penal de medidas socio-educativas, y roza los derechos asociados con la defensa en juicio. Los Delegadxs entrevistados aluden a que están impedidos de cuestionar la actuación de los Defensores pero es frecuente que estas oficinas se quejen de que los Delegadxs suelen dar información que predispone negativamente a los jóvenes sobre la conveniencia de aceptar esta alternativa.

Terragni (2000: 296) señala que las principales críticas “se refieren al uso indebido del instituto alimentado por la ausencia de publicidad de la negociación, aceptación frente a casos sin pruebas de cargo, y ausencia de información por parte de los imputados que

⁸⁶ No es aplicable cuando existen intereses contrapuestos o ausencia (denominada como rebeldía) de alguno de los involucrados. Entre los que se destaca el Art. 41 QUÁTER, previsto en el código penal que establece un agravante genérica para los mayores de edad cuando los delitos sean cometido con la intervención de menores de dieciocho años de edad, la escala penal correspondiente se incrementa.

podría generar vicios en el consentimiento y vulneración de la garantía...de “declarar contra uno mismo” El mismo autor reconoce que es utilizado en forma mayoritaria por los agentes jurídicos.

Respecto de la “probation”, suele aplicarse en los casos en que se trata de jóvenes que cumplieron la mayoría de edad, “tutelares que llegan cesados al TOM”. La “probation” no está prevista en la ley para este fuero. Surgió como una alternativa en el TOM N° 3 y algunos otros se acoplaron con el argumento del exceso de trabajo, especialmente cuando en la misma causa conviven mayores y menores de edad. En algunos casos, ello permite una intervención puntual que habilita resolver la situación del menor de edad y pasar la causa a un fuero de adultos⁸⁷. La aplicación de esta alternativa no es aprobada por la mayoría de los agentes, que consideran que la existencia del Art. 4 es mucho más beneficiosa, “Acudir a la probation es quemar EL cartucho” que como adultos pueden necesitar⁸⁸.

Ionna de Escobio⁸⁹ y Santamaría (2011) advierten que el debate en torno a la “probation” tuvo dos argumentos, uno relativo a la racionalización de los recursos judiciales y otro evitar penas privativas de la libertad, evitar la estigmatización y la aplicación de una eventual pena, todo ello con fines resocializadores. Sin embargo las autoras, se interrogan acerca del sentido de apelar a esta figura que compromete al joven a no cometer otro delito, realizar un trabajo comunitario durante un año⁹⁰ y a resarcir dentro de sus posibilidades, un supuesto daño a la víctima, cuando con menores exigencias (aluden al Art. 4.) puede ser absuelto.

Al respecto las mismas autoras señalan que los adeptos a la aplicación de la “probation” argumentan que de esa manera se suspende la prosecución del proceso que puede derivar en la imposición de una pena que deja en suspenso la declaración de responsabilidad. Las

⁸⁷ El fuero de menores, es un fuero de atracción, como ya explicitamos, cuando los adultos involucrados presentan otras causas en trámite, este recursos habilita agilizar su tratamiento para que las otras intervenciones puedan seguir su curso.

⁸⁸ La “probation” es una figura que si es utilizada en el juicio del fuero minoril, luego no podrá ser nuevamente solicitada como mayor. Por lo que muchos de los agentes consideran que es perjudicial apelar a esta figura cuando se puede recurrir al Art.4

⁸⁹ Esta autora es titular de una Defensoría Pública Oficial. Su artículo estaría dando publicidad al debate en los TOM respecto de la aplicación o no esa medida.

⁹⁰ Que en muchas ocasiones es conmutado por el “tratamiento tutelar” que se desarrolla.

autoras no lo consideran como un beneficio para el joven, lo que reforzaría la idea de que el beneficio podría estar asociado con el debate relativo a la economía de recursos judiciales en el marco de un sistema judicial colapsado.

En la posición contraria, otros autores, como Vegh Weiss (2012) reconocen este último aspecto, aunque consideran que es una alternativa en la línea del reconocimiento de los niños como sujetos de derechos que supone, asimismo, reconocerlos progresivamente responsables de sus actos lícitos e ilícitos. Una alternativa a la pena, “a los efectos de una pluralidad de actores”... “prevista tanto a favor de la víctima como en beneficio del imputado, en la línea de fortalecer la integración comunitaria y que la autora inscribe en el modelo de derecho penal mínimo presente en las Directrices de Riad. En la misma línea, Báez (2010) abona estos argumentos a los que suma la relevancia de la participación directa de las partes que a su criterio supone la reducción del poder estatal.

Estos debates se desarrollan en la instancia de los TOM con la participación de las fiscalías, defensores y defensorías. Los Delegadxs no son convocados cuando se dirime la aplicación de una u otra medida. La participación de los jóvenes es a veces como actores otras como meros espectadores, dado su escaso conocimiento del abanico de alternativas, cuyo resultado es, generalmente, el consentimiento de la propuesta que los defensores oficiales y públicos les proponen.

c-El tratamiento tutelar

El desarrollo del proceso de intervención, llamado “tratamiento tutelar” por la vigencia de la ley 22.278, posibilita que los titulares de los Tribunales, puedan considerar innecesaria la imposición de pena. A partir de la vigencia de la 26.061, se considera que se ha desarrollado un proceso con una persona que se encuentra en un período de formación. Ello constituye el fundamento de la organización de una justicia especializada y permitió vislumbrar interés por mantener la designación de profesionales para el trabajo con esta población.

Cabe señalar que el desarrollo del proceso penal juvenil no supone la imposición de medidas de carácter excepcional (privación de su libertad).

Guemureman (2011) considera que el denominado tratamiento tutelar se trata de una gestión moral más que de una gestión legal. En tanto Beloff (2001) describe y explica las características de los nuevos sistemas en los cuales, según esta autora, la atribución de responsabilidad en función de la particular condición de sujeto que está creciendo se expresa en consecuencias jurídicas diferentes, llamadas en las diferentes legislaciones medidas, medidas socioeducativas o, más recientemente y sin eufemismos, sanciones penales juveniles. Diferencias que atribuye a que son los mismos agentes quienes fueron encargados de desarrollar las intervenciones judiciales en ambos momentos y subsiste no solo el lenguaje sino también los soportes en que estas prácticas se desarrollan, un proceso de larga transición.

Consideramos que el concepto de medidas socioeducativas, como ya señalamos, como una llave que facilitó re articular las prácticas en este campo, en el marco de la protección integral y la figura de la disposición tutelar que persiste. Es un recurso que, en esta transición, consideramos como un puente. Definidas como una medida jurídica que se aplica a los adolescentes que cometieron algún delito. Tiene por objetivo evitar castigos y constituiría al mismo tiempo una sanción y una oportunidad de resocialización. Contiene una dimensión coercitiva, el adolescente estaría obligado a cumplirla pero su objetivo no se reduce a penar al adolescente, sino promover su integración social, tal como ya expusimos en este mismo capítulo. El trabajo de los Delegadxs se ha reconfigurado en este marco que se combina con la inclusión de un perfil interdisciplinario.

Las nuevas normas (se refiere a tratados como las Reglas de Beijing) apuntan como señala Beloff (2001) a evitar en la medida de lo posible el confinamiento en establecimientos penitenciarios, para lo cual la autoridad competente podrá adoptar una amplia diversidad de decisiones. Entre ellas a) órdenes en materia de atención, orientación y supervisión; b) libertad vigilada; c) órdenes de prestación de servicios a la comunidad; d) sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones; e) órdenes de tratamiento intermedio y otras formas de tratamiento; f) órdenes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo y en actividades análogas; g) órdenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida u

otros establecimientos educativos; entre otras. Las diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares⁹¹, programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, orientadas a asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada y que se guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.

Por lo tanto, en estos sistemas de justicia juvenil, se establecen como consecuencias jurídicas de la comisión de un delito por parte de un joven o adolescente, alternativas a las sanciones previstas para un adulto, dictadas por el juez teniendo en consideración el hecho cometido y, como correctivo al reproche por el acto, teniendo en consideración los informes realizados por *los miembros de los equipos multidisciplinarios*⁹² que se han previsto como parte de los juzgados penales juveniles. La respuesta a los jóvenes delincuentes no solo deberá basarse en el examen de la gravedad del delito, sino también en circunstancias personales (su condición social, su situación familiar, el daño causado por el delito u otros factores en que intervengan circunstancias personales) para dirimir sobre la proporcionalidad de la reacción

En cuanto a las Directrices de Riad, la misma autora (Beloff, 2001) señala que aunque éstas están mayormente orientadas a la prevención y no a cómo reaccionar cuando el adolescente ya ha cometido un delito, toda política de reacción –una vez fracasada la prevención– necesariamente contiene un aspecto preventivo, ya que el objetivo de reaccionar será, con el límite máximo de la intervención impuesto por la gravedad del delito cometido, lograr que el adolescente en el futuro no vuelva a cometer delitos.

Coincidimos con Guemureman y Beloff respecto de que subsiste la tensión relativa a si las consecuencias jurídicas de la comisión de un delito en estos sistemas son medidas, medidas socioeducativas, penas o sanciones. Se corre el riesgo, de ese modo, de identificar la medida socioeducativa como algo beneficioso y se oculta la dimensión de reproche o sanción que toda intervención judicial trae aparejada. Coincidimos con estas autoras en

⁹¹ Ningún menor podrá ser sustraído, total o parcialmente, a la supervisión de sus padres, a no ser que las circunstancias de su caso lo hagan necesario.

⁹² El subrayado es nuestro.

respecto de que los problemas que esta confusión genera a la hora de la ejecución de la medida/sanción, constituyen “un punto en común entre el modelo tutelar y el modelo de la protección integral de derechos” Beloff (2001).

En la dinámica diaria, como surge del relevamiento desarrollado, los JNM y a posterior en los TOM, en el curso del primer semestre 2014, se desactivaron la división entre las dos Secretarías Actuarial y Tutelar y comenzaron a trabajar en ambas instancias simultáneamente. En cada causa, donde puede tramitarse la situación de uno o más jóvenes, la supervisión del “tratamiento tutelar” es llevada adelante por uno de los tres jueces que integran cada TOM, lo que se denomina como Vocalía. De tal manera se replica la existencia de modalidades que delinea cada juez, que se implica con las formas de trabajo de cada Secretaría y con la impronta de cada agente responsable del seguimiento de cada “joven/expediente”.

A cada uno de los tres TOM se asigna una Fiscalía, en el caso de las tres Defensorías Públicas rotan cada dos años la asignación a cada TOM, las Defensorías Oficiales son cuatro y son asignadas en el inicio de cada causa y continúan durante todo el proceso de la misma manera que los Delegados.

En los TOM, el “tratamiento tutelar” como mencionamos está pautado a partir del art. 3 de la Ley 22.278, que establece la autoridad del Juez en el establecimiento de la disposición tutelar y en el Art. 4to de la misma ley, no exenta de diversas interpretaciones y alternativas. Fundado en nociones relativas al derecho penal de mínima y las alternativas asociados con el reconocimiento de que no corresponde un reproche penal de la envergadura que a un adulto en iguales circunstancias, las alternativas a proponerle son tendientes a su “re socialización” como fin exclusivo de este tratamiento. Ello, asimismo, se sustenta en cierto consenso respecto de que la población que es captada por la justicia minoril está constituida por un grupo que se encuentra, generalmente, sometidos a una doble posición de vulnerabilidad: menores y pobres (Vegh Weiss, 2012).

El citado Art. 4to de la ley 22.278 constituye el núcleo del “tratamiento tutelar” a cargo de los Delegados Inspectores de Menores. ¿Qué dimensiones se incorporan a dicho tratamiento? Los entrevistados coincidieron en priorizar: no involucrarse en otras

situaciones de conflicto con la ley penal además de ponderar el resultado del trabajo desarrollado con ellos expresado en informes por un periodo nunca menor a un año, que incluye el desarrollo de las llamadas medidas socioeducativas, definidas en el capítulo anterior. Al respecto Guemureman (2011) expone en su estudio de sentencias, que los jueces evalúan según parámetros que le permitieron a esta autora construir indicadores de tipo vitales, conductuales, actitudinales, legales y afectivos. En el capítulo 5, referido a intervenciones y prácticas retomaremos estas cuestiones.

Existen numerosas objeciones y críticas (Beloff, Douglas, Guemureman) a estas normas que privilegiadamente se concentran en que todas las medidas se toman sin la ocurrencia del juicio penal previo, lo que implicaría la violación del principio de inocencia ya que los niños son dispuestos a la tutela judicial por otras condiciones que no están asociadas con la responsabilidad por un acto, sino con la denuncia de un presunto hecho que permite al sistema judicial captar en sus redes a niños cuyo perfil está asociado con su pertenencia a sectores más afectados por procesos de desigualdad, que abordamos en el capítulo siguiente.

En la dinámica cotidiana, las causas son elevadas a los TOM cuando se dicta el procesamiento de los jóvenes. El tránsito ocurre a través de un sorteo. Nuevamente en cada TOM se distribuye la tarea entre los integrantes de cada Secretaria. Se designa a un empleado para dar seguimiento a dichas actuaciones bajo la supervisión de Prosecretarios, Secretarios y Juez. En este caso, dada la composición colegiada de cada Tribunal, los expedientes se dividen entre las Vocalías, y cada causa es supervisada por un miembro del TOM.

El joven será nuevamente citado para que pueda conocer dónde está radicada su causa y se le notifica⁹³ quienes serán, en adelante, los agentes intervinientes. Fiscales, Defensores Públicos Oficiales y Defensorías de Menores e Incapaces. Todas instancias designadas para la gestión e intervención en el proceso penal de la justicia minoril, que el joven debería poder reconocer como interlocutores. “es un momento de barullo para los chicos, todo cambia excepto los Delegadxs y las Defensorías, pero los chicos no identifican con

⁹³ Decreto 350, primera audiencia.

claridad la función de estos últimos, generalmente” resume un miembro de la oficina de un Defensor Público del TOM entrevistado.

A diferencia de lo que ya mencionamos sucede en los JNM, en los TOM, los jóvenes reconocen escasamente a los Defensores Públicos Oficiales, situación que es reconocida por los agentes entrevistados, generalmente esta presencia cobra notoriedad en el momento en que surge la propuesta de juicio abreviado, cuando cumplen la mayoría de edad o en ocasión del juicio. Por su parte, las Defensorías Públicas, en los TOM, asumen las tareas que suelen asociarse con aquello que denominan como “tutelar”, realizar oficios para instituciones a pedido de los Delegadxs para acceder a turnos, recursos, vacantes, etc. En los casos en que los niños han sido privados de su libertad (medidas denominadas como excepcionales) son quienes articulan los informes de los Delegados y refuerzan los pedidos de externación.

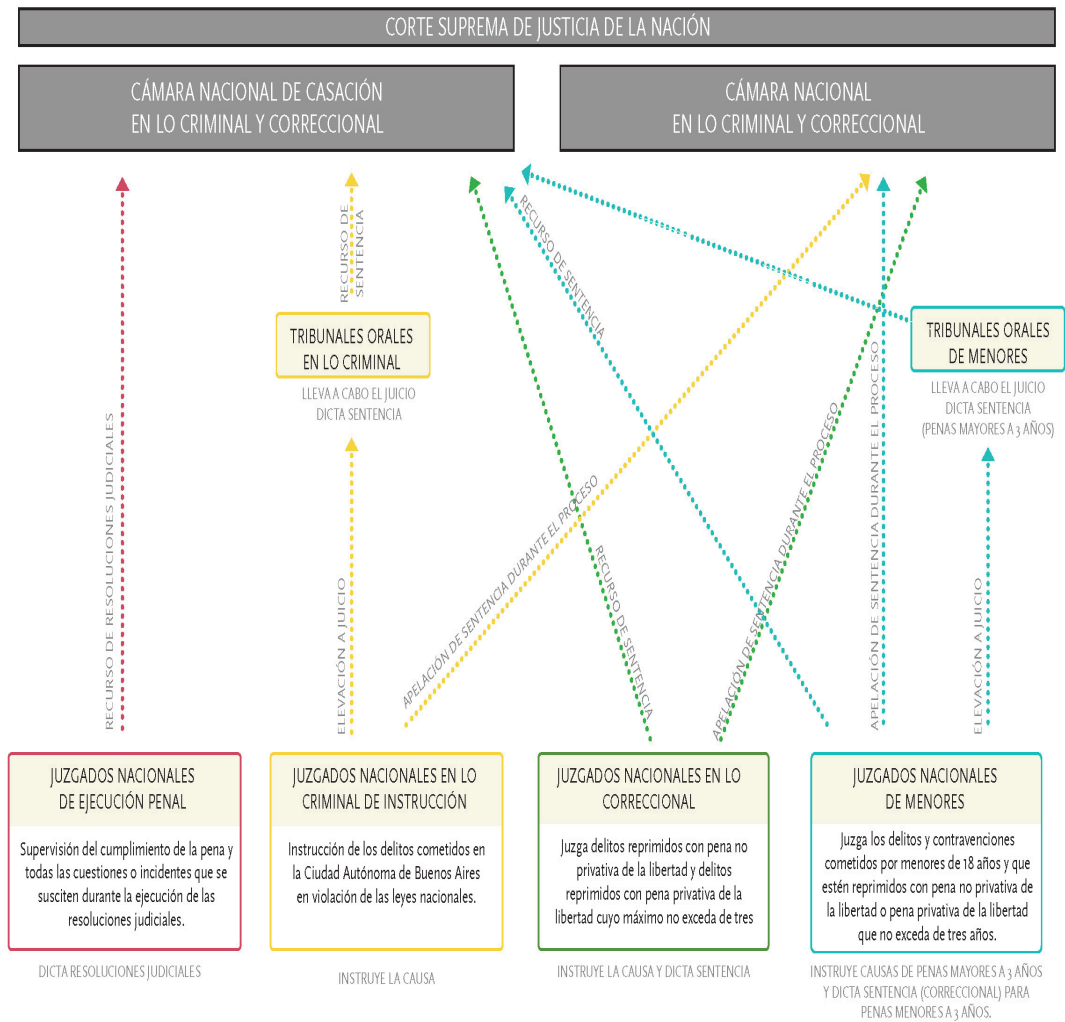
Es frecuente que del expediente tutelar surja que el joven ha cumplido las pautas acordadas con el equipo profesional interviniente, según aseguran los agentes entrevistados. Aunque no se encuentran disponible datos que nos permitan ponderar esta afirmación. Hasta hace unos años los Delegados eran parte de la instancia oral del juicio, las audiencias de debate. Paulatinamente fueron desplazados por estas Defensorías, quienes actualmente son citados, en los casos excepcionales en que se desarrolla esta instancia, ocasión en que exponen el trabajo desarrollado y la información proporcionada por los Delegadxs, situación que será retomada más adelante.

La intervención que acompaña a los jóvenes desde el inicio de las actuaciones y tiene continuidad en el proceso penal con estos sujetos es la de los Delegadxs Inspectores, como se desprende del análisis realizado de normas y del relevamiento a los distintos agentes. Es frecuente que los jóvenes establezcan un vínculo con ellos y desconozcan o confundan entre sí a estos otros agentes que intervienen en esta trayectoria, tal como reconocen todos los entrevistados de la instancia “oral”, lo cual trataremos de explicar seguidamente. En los TOM como pudimos constatar, bajo el argumento del cúmulo de causas y por la reducción de la edad, entre otros argumentos, se ha privilegiado un repliegue a instancias y procedimientos escritos que fueron objeto de una reforma de larga data bajo la necesidad de potenciar la participación y el trato con los jóvenes afectados.

Finalmente nos interesa agregar que los debates que recuperamos para exponer en este capítulo, son considerados evidencia de la multiplicidad de opciones que se dirimen en este campo entre los agentes (incluimos la opinión de agentes que no son parte del entramado institucional) que debaten las alternativas que las instancias judiciales han adoptado en la gestión judicial en los últimos años. No ha sido el centro de nuestra atención los resultados de estos debates, sí presentar la variedad de criterios que conviven y que de ninguna forma dan cuenta de una posición homogénea ni de una clausura, sino como señalábamos al inicio de este capítulo, de un procesamiento permanente.

Integramos un organigrama funcional que permite tener una mirada general de la organización institucional. Los Delegadxs Inspectores no están incluidos aunque su adscripción y anclaje de trabajo está situado en estas dependencias.

Gráfico N° 4. Organigrama funcional, ubicación y dependencia de los Juzgados Nacionales de Menores y Tribunales Orales de Menores en la justicia penal nacional.



Fuente: <http://www.socearq.org/cms/wp-content/uploads/2010/07/organigramas-funcionales.pdf>

CAPITULO 3. El Trabajo Social en el campo de la justicia penal de *menores*

- a- Origen y vigencia del espacio de inserción socio-ocupacional.**
- b- La dimensión histórica en clave documental**
- c- La dimensión histórica según sus protagonistas**
- d- El Cuerpo de Delegados. Características generales**
- e- Condiciones de trabajo.**
- f- Organización y competencia: la delimitación de tareas**

a- Origen y vigencia del espacio de inserción socio-ocupacional.

En este capítulo presentamos los resultados del trabajo de investigación que incluyó, el relevamiento documental de archivo, la consulta al responsable de la Base General de Datos dependiente de la Corte Suprema, relevamiento vía cuestionario auto suministrado a una muestra aleatoria de Delegados, entrevistas a Delegados de mayor antigüedad y jubilados y entrevista y consulta a funcionarios de la Cámara del fuero (jueza y Titular de la Prosecretaría de Asistencia Social) de la que los Delegadxs dependen. Estas distintas estrategias nos permitieron conjugar y complementar información tendiente al desarrollo del análisis de los registros a los que apelamos.

El acceso al archivo de la Cámara del fuero, nos aportó el conocimiento a una serie de disposiciones que nos permitieron constatar que en los Juzgados Nacionales de Menores se encuentran trabajando desde hace muchos años profesionales que fueron tradicionalmente encargados del desarrollo del “tratamiento tutelar” con población de niños y jóvenes, menores de edad, profesionales designados como Delegadxs Inspectores de Menores. ¿Cómo se conformó este espacio socio ocupacional, bajo qué orientaciones institucionales, que improntas persisten?

El binomio de las leyes 10903 y luego la ley 22278 del Régimen Penal de la Minoridad, que si bien datan de periodos históricos diferenciados, como ya expusimos dan cuenta de una posición que claramente diferenciada de los postulados de la CDN, y que fundamentaron la arquitectura de este espacio socio-ocupacional. Estas y otras normas

habilitaron en el entramado institucional, a un grupo de agentes, que paulatinamente se profesionalizó para el desarrollo este puesto de trabajo. Ello se reconoce en el Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (RJCCC) y sus Anexos. En dicho Reglamento se instituyen las pautas que rigen los procedimientos y funciones de este fuero y en su capítulo VI: “Las aplicaciones del Régimen Penal de la Minoridad”, se pautan las obligaciones generales y específicas y los procedimientos que competen a la tarea de este Cuerpo de profesionales, que se completa en los respectivos Anexos III y X. Aunque la ley Agote fue derogada, esta designación como Delegados persiste en la conformación institucional, en el régimen penal vigente y es una figura que se incluye, con otra designación, en los proyectos de reforma que se han discutido en los últimos años.

Encargados de desplegar una intervención asociada “con el control de los menores dispuestos”, según el Art. 133 del citado Reglamento. Su trabajo se traduce en la presentación sistemática de informes que dan cuenta del conjunto de intervenciones que configuran el llamado “tratamiento tutelar”, que fue redefinido en estos últimos años para el desarrollo de medidas socioeducativas, anudado al establecimiento de la disposición tutelar acto a través del cual estos profesionales son designados para desplegar intervenciones con cada joven. En cuyo caso, su intervención finaliza en el momento en que se decide la imposición o no del castigo penal, que ocurre en la instancia de los TOM, o cuando el joven cumple la mayoría de edad. “El expediente tutelar no resulta accesorio del principal sino que ambos se tramitan de forma independiente” (Terragni⁹⁴ 2000: 375) pero simultáneamente.

El citado Reglamento⁹⁵ reúne una serie de disposiciones, el Art. 30 señala como funciones de denominado Cuerpo de Delegados: a) Llevar el registro de los menores dispuestos, debiendo mantener la información actualizada hasta que cese la disposición. b) Organizar periódicamente, con la comisión respectiva, visitas de inspección a los establecimientos públicos y privados de internación de menores para verificar el cumplimiento de la legislación vigente. c) Organizar las reuniones periódicas de los jueces encargados de la aplicación de las leyes de menores, cuando las convoque la comisión respectiva. d)

⁹⁴ Quien cita a la Sala I, causa N 8281, 1998/04/03

⁹⁵ RJCCC, en los Art. 29, 30, 125, 127, 133, 134 y 136.

Confeccionar un informe que se pondrá en conocimiento de la autoridad pertinente, sobre las deficiencias que se adviertan en los institutos para que sean corregidos debidamente.

Este grupo de profesionales forma parte del organigrama de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, como parte de la Prosecretaría de Asistencia Social, ex Prosecretaría de Patronatos. Esta dependencia es la encargada de organizar las designaciones que adscriben a dichos profesionales a cada uno de los siete JNM que componen este fuero. El resto de los Delegadxs permanece cumpliendo tareas en la mencionada Prosecretaría, con población mayor de edad que tramita causas en el mismo fuero penal, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento para la Jurisdicción, art. 99⁹⁶. Situación que no consta en el organigrama funcional, como se aprecia en el **Gráfico N° 5**, en la siguiente página.

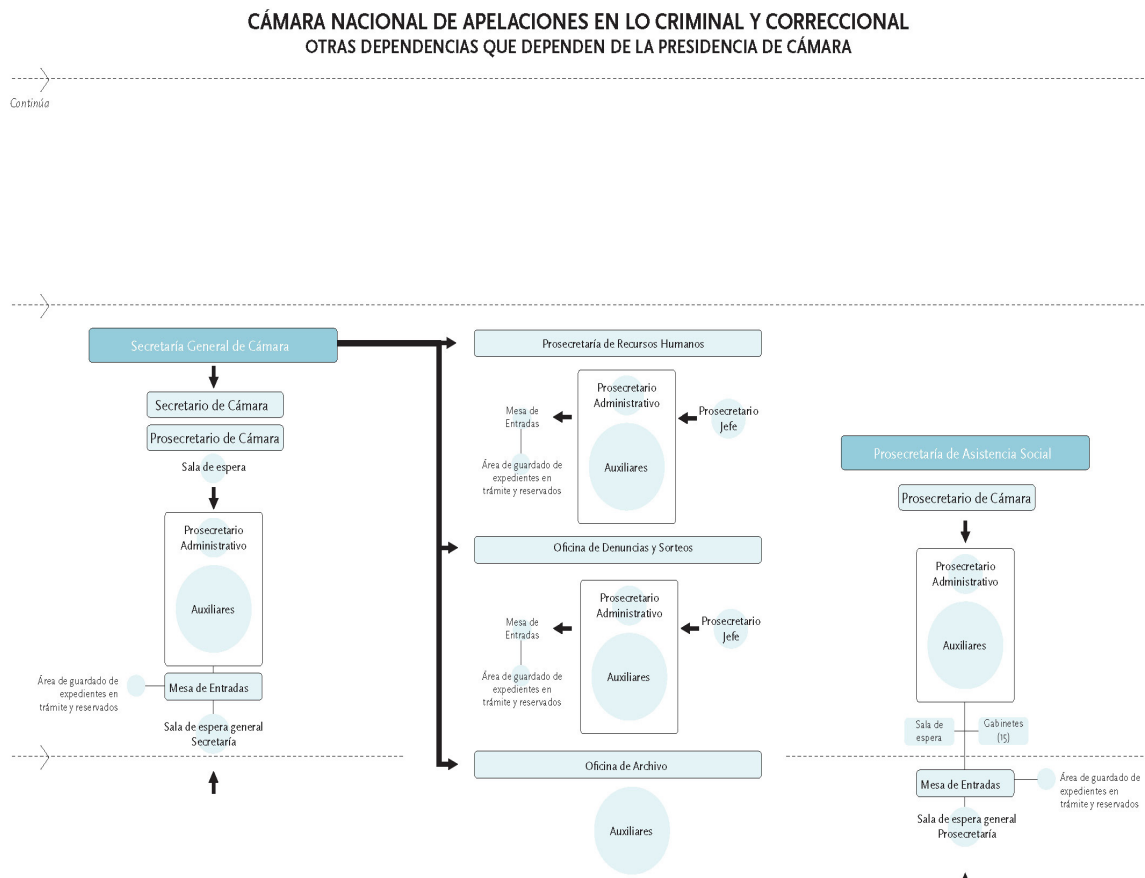
A partir de las entrevistas realizadas con la responsable de la Prosecretaría de Patronatos pudimos constatar que este Cuerpo de Delegados Inspectores se compone por alrededor de ciento dieciocho (118) profesionales de los cuales ciento cinco 105 se encontraban distribuidos en grupos de 15⁹⁷ en cada uno de los siete Juzgados y el grupo restante en la Prosecretaría en la Cámara para desarrollar el trabajo con mayores imputados⁹⁸.

⁹⁶ Una amplia información socio ambiental y familiar, de vida, ocupación, ingresos y educación. Informe que será producido por el Patronato de Liberados o por los Delegados Inspectores de la Cámara.

⁹⁷ En febrero 2014 La Cámara dispuso que en cada Juzgado permanecieran 13 profesionales como máximo y los otros fueron reubicados en la Prosecretaría de Cámara, para asumir parte de la tarea que desarrollaba hasta entonces el Patronato de Liberados.

⁹⁸ La convocatoria de profesionales se ha realizado solicitando especialidad en la temática de infancia y juventud, sin embargo “los recién llegados” permanecen en la Cámara hasta que se producen vacantes en los Juzgados. Algunos profesionales prefirieron mantenerse en dicho espacio. Cuando a la inversa, son transferidos desde los Juzgados a la Cámara es considerado un indicador de malestar en su desempeño.

Gráfico N° 5. Organigrama funcional, de la Presidencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Ubicación y dependencia de la Prosecretaría de Asistencia Social.



Fuente: <http://www.socearq.org/cms/wp-content/uploads/2010/07/organigramas-funcionales.pdf>

Los objetivos de su intervención, definidos en el contexto de la Ley 10.903 aún se explicitan en el Reglamento de la Jurisdicción, Art 133, textualmente: “A fin de cumplir con el control de los menores dispuestos, el juez contará con la colaboración de los

delegados inspectores o podrá utilizar cualquier otro medio que considere útil⁹⁹.” El denominado tratamiento tutelar, podía implicar para el joven una serie de pautas que, como ya mencionamos dependían del criterio del juez y del Secretario Tutelar: concurrir a la escuela, a tratamientos psicológicos, actividades de capacitación y, eventualmente, incorporarse a la esfera laboral. La competencia de los Delegadxs fue realizar la supervisión y seguimiento de su cumplimiento, a través de informes periódicos donde dichos profesionales exponían la trayectoria del joven durante el período en que se mantuviera su designación, que generalmente sobrepasaba el año previsto por la Ley 22.278, (especialmente mientras la mayoría estuvo fijada en los 21 años, este límite fue establecido en los 18 años, desde diciembre del año 2009). Coincidimos en que los propósitos de dichas intervenciones estuvieron asociados con un “ideal rehabilitativo” (Jorolinsky, 2008) históricamente presente en la justicia de menores -persuadir, reinsertar, rehabilitar a niños y jóvenes imputados de haber cometido un delito-. Aspecto que atraviesa el discurso de los agentes de manera persistente y que se redefine en la actualidad en el marco de las llamadas medidas socioeducativas. Si bien éstas en la actualidad se acuerdan con los jóvenes, consideramos que son evidencia de que persiste un prejuicio negativo frente a los jóvenes que son acusados de transgredir la ley penal.

Los Delegados consulados coinciden en señalar que la supervisión y seguimiento demandada, han incluido un trabajo extramuros en las zonas de residencia de estos niños, lo que justificó una reducción horaria de su presencia en los Juzgados. Los entrevistados refieren que su tarea ha estado enfocada sobre aspectos relativos a los procesos de reproducción social, en la vida cotidiana, con los jóvenes y sus familias, con quienes desarrollan sus intervenciones. Heller (1970) define la vida cotidiana como el “conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social”. Desde esta perspectiva, esta autora elude una noción de secundariedad y revaloriza un plano estratégico que nos permite comprender por qué la cotidianidad no es un ámbito descuidado, librado a la espontaneidad de los sujetos, sino reglado, controlado. Heller enfatiza que la vida cotidiana constituye una constante preocupación de la política y las instituciones. En esta línea Grassi destaca “el

⁹⁹ Entre las cuales el juez podía establecer medidas de privación de libertad en instituto de menores dependientes de instancias del ejecutivo (hoy SENNAF).

valor estratégico que cobran las disciplinas que actúan a este nivel (Grassi, 1989, 21), tal el caso del Trabajo Social convocado por distintas instituciones por esta particularidad.

El desarrollo de estas intervenciones, refieren los entrevistados, requiere asimismo del conocimiento de los territorios y recursos donde esta población reside y desenvuelve su vida cotidiana, para desplegar la coordinación interinstitucional en la búsqueda de recursos y la construcción de accesibilidad para el cumplimiento de aquellas pautas que se establecen, que frecuentemente demandan de un acompañamiento sostenido y personalizado con el niño/adolescente/joven y su grupo familiar.

Es interesante señalar que, a partir del análisis realizado en el marco de esta tesis, podemos interrogarnos acerca de si los objetivos de la intervención de estos profesionales fueron reformulados por la Cámara en los últimos años a la luz de la legislación vigente. Pautados como simples procedimientos, en el mencionado Reglamento¹⁰⁰ se establecen en el Art. 136 como obligaciones específicas de los Delegados Inspectores: a) Concurrir a la secretaría respectiva para oír notificaciones y recibir instrucciones, los días y horas que señale el juez; b) Informar al juzgado sobre la situación general de cada menor asignado, dentro de los diez días subsiguientes a la audiencia que refiere el artículo 135 de este Reglamento; c) Comunicar al juzgado todo cambio vinculado con la situación del menor o de sus padres, tutores, o guardadores; d) Requerir mediante informe fundado, cuando lo considere pertinente el cese de la detención del menor; e) Elevar anualmente al juzgado, antes del 20 de diciembre, una planilla de altas y bajas, con especificación del nombre de los menores que le fueran asignados; f) Cualquier otra misión que le encomendara el juez respectivo. Esta enumeración que elude explicitar el contenido de las intervenciones sino las formas que debe asumir, por lo que observamos que ello ha permitido a los titulares de los Juzgados y las Secretarías (especialmente en el caso de las denominadas Tutelares) establecer una impronta y orientación particular, como ya mencionamos.

Este espacio fue ocupado históricamente por asistentes y/o trabajadores sociales aunque la Cámara demostró interés por incorporar otros profesionales de manera sistemática para

¹⁰⁰ No registramos cambios significativos en este Reglamento a partir de las transformaciones operadas en el llamado plexo normativo de infancia.

conformar equipos interdisciplinarios¹⁰¹, a partir de los debates suscitados a la luz de la normativa nacional e internacional. La ampliación del espectro de profesionales que desarrolla esta tarea, en los últimos años, potenció el despliegue de un abanico más heterogéneo de estrategias de trabajo, tema que retomaremos.

Los profesionales entrevistados señalan que, una vez que se establece la llamada disposición, tratamiento / observación tutelar, ocurre la designación de dichos profesionales que inicia el ciclo de entrevista que son el soporte del proceso de construcción de una trayectoria de intervención con el joven. Los profesionales se ocupan del desarrollo de un vínculo que permite el despliegue del proceso de intervención que se establece por un periodo estipulado por el Juez con un tope hasta la mayoría de edad. La relevancia de esta trayectoria de la intervención y la elaboración de los correspondientes informes periódicos, son materia que el Juez y el Tribunal ponderan al momento del juicio para dictaminar respecto de la aplicación o no de una sanción, pudiendo reducirla en función de ese proceso de intervención social, actualmente a cargo de equipos, aspecto que desarrollaremos en el capítulo 5.

Actualmente existe cierto consenso, según el relevamiento realizado a los profesionales insertos en los distintos JNM y TOM, relativo a en qué casos o bajo qué criterios se establece la disposición tutelar. Las intervenciones profesionales se orientan a que los jóvenes puedan garantizar el acceso a los servicios públicos, ampliar sus posibilidades de elección y favorecer la construcción de un proyecto (autónomo) de vida a corto y mediano plazo.

Estos profesionales entrevistan a los niños por primera vez, a partir de un cuestionario semiestructurado. El cual fue pautado históricamente¹⁰² por los miembros de la Cámara de la que dependen, quienes establecieron una serie de aspectos que se deben considerar a fin de brindar elementos que permitan al Juez conocer la situación de estos niños a fin de

¹⁰¹ Se trata de un proyecto denominado como piloto que se extendió a todos los JNM desde 2013 y que aún no cuenta con un registro ni evaluación sistemática.

¹⁰² El primer antecedente de estas características es de 1937 y el último es un Acuerdo General de la Cámara de 2010.

contribuir en el proceso de la decisión relativa a la disposición tutelar de aquellos que tienen una causa penal en trámite¹⁰³.

Los Delegados Inspectores que asumen la atención de niño/as, adolescentes y jóvenes en cada Juzgado/TOM, enumeran que su trabajo compromete el desarrollo de los siguientes objetivos, que realizan de acuerdo con procedimientos estandarizados:

- Conocer a los niños, adolescentes y jóvenes, sus referentes significativos y/o grupos convivientes a fin de visibilizar su trayectoria y la situación del contexto en que se desarrolla su vida cotidiana con el propósito de facilitar al Juez, sus secretarios y otros colaboradores, contar con elementos que les permitan tomar decisiones y acciones de protección especial en caso de situaciones de amenaza, vulneración y y/o violación de derechos.
- Establecer un vínculo que posibilite la intervención profesional a partir del cual promover el acceso a la educación, la salud y a los bienes sociales y culturales socialmente disponibles, con el propósito de consolidar las trayectorias escolares y afianzar su vinculación con la comunidad de la que son parte, con vistas a la ampliación de sus posibilidades de elección y a la construcción de un proyecto autónomo de vida.
- Desplegar una intervención tendiente a fortalecer el lazo social (redes sociales comunitarias) y los procesos de inclusión conducentes a su reconocimiento como sujetos activos y ciudadanos. A través de la articulación de espacios institucionales y comunitarios, territorialmente significativos para los jóvenes y sus grupos convivientes.
- Desarrollar el acompañamiento específico en casos de medidas excepcionales, tratamientos específicos, que requieren de un trabajo y acompañamiento sostenido y personalizado con el niño/adolescente/joven y su grupo familiar.
- Propiciar procesos de interpretación crítica de su situación personal y social.
- Elaborar y presentar informes periódicos que dan cuenta de sus intervenciones y participar en las instancias en que se solicite su opinión profesional ante el requerimiento de los titulares en cada Juzgado, TOM y de la Excma. Cámara.

¹⁰³ Muchas veces la disposición “es decidida” a partir de la consideración de la gravedad del hecho del que se acusa al niño, casi de manera independiente la situación por la que transita.

Como mencionamos, la población que gestiona causas mayoritariamente es parte de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, suelen presentar un cúmulo de desventajas, algunas de las cuales no fueron advertidos, atendidos o resueltos por las instancias de asistencia inmediatas o de proximidad con que los chicos y las familias han estado en relación como desarrollamos en el siguiente capítulo. En este sentido la intervención de los Delegadxs se orienta en el marco del despliegue de medidas socioeducativas y asociadas con el propósito de velar por el interés superior del niño, en el ámbito penal.

Esta tarea se complementa con la intervención de otros operadores y profesionales de la SENNAF y/o del CDNNyA y de los servicios asistenciales de proximidad a la residencia del niño en cada jurisdicción: CABA o Provincia de Buenos Aires. Asimismo, los Delegadxs informan los jóvenes de la obligación de presentarse a requerimiento en sede judicial a fin de cumplimentar exigencias del proceso. Pautas que se establecen a los niños en libertad. En los casos en que se encuentran privados de su libertad, las entrevistas se concentran en elaborar proyectos y formular condiciones para su egreso en conjunto con los equipos de cada dispositivo de la SENNAF.

El trabajo que desarrollan implica, desde el año 1992¹⁰⁴, una duplicidad de funciones. Adscriptos a Juzgados Nacionales de Menores pero también, a partir de la decisión de la Corte, con los Tribunales Orales de Menores donde cumplen idénticas funciones. De tal manera que si bien su sede formal se encuentra en los Juzgados también desarrollan su trabajo y responsabilidad ante los mencionados Tribunales¹⁰⁵.

Los profesionales consultados describen de la siguiente manera, las actividades inherentes a su rutina de trabajo, organizadas de acuerdo con las demandas institucionales:

- Guardia en sede del Juzgado semanal. En esas guardias los Delegadxs se vinculan con las Secretarías del Juzgado que llevan las causas, reciben información específica, realizan consultas y tienen oportunidad de intercambiar opiniones con otros agentes involucrados con los adolescentes y jóvenes. En esas guardias suelen tener lugar las entrevistas en profundidad, de primera vez, y encuentros con niños y adolescentes que

¹⁰⁴ Acordada 81 del 27/11/92 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

¹⁰⁵ Recientemente se sumó *transitoriamente* el cumplimiento de actividades ajenas a su adscripción en el fuero de Menores a causa de la situación que provocó la desarticulación del Patronato de Liberados, en esta jurisdicción, en el primer semestre de 2014.

residen en zonas consideradas peligrosas por la Cámara, etc. Los Delegadxs también realizan entrevistas y los correspondientes informes a mayores, a solicitud de las Secretarías¹⁰⁶.

- En semanas en que el JNM está de turno y pos turno, extensión horaria, derivada de la demanda no programada simultánea de las tres Secretarías a un equipo de profesionales. Algunos Juzgados solicitan la asistencia los fines de semana y feriados en este período.
- Concurrencia a los TOM, algunos de los cuales establecieron una asistencia semanal a los Delegadxs para realizar notificaciones. Los TOM N°2 y N°3 cuentan con dos secretarías situadas en distintos pisos, en ambos casos se requiere contacto con los agentes responsables de los respectivos expedientes, presentación periódica de informes, concurrencia cuando los jóvenes son citados, contacto con las distintas Defensorías, etc.
- Entrevistas fuera de sede, en general, dos días a la semana: entrevistas en Institutos, domicilios o zonas cercanas a éstos, que se realizan en horario extendido según la disponibilidad de los chicos y sus familias, inclusive fines de semana y aún feriados. La realización de estas actividades requiere de un trabajo anticipado, relativo a la construcción de acuerdos previos, traslados, etc. No es posible realizar numerosas entrevistas en el mismo día por razones relacionadas con los desplazamientos, aún para aquellos que cuentan con vehículo propio. Se estiman no más de cuatro entrevistas por Jornada de trabajo. El trabajo denominado “de campo” no se realiza generalmente en la “comodidad” del juzgado, sino en domicilios muchas veces alejados o bares cercanos, también en hospitales, dispositivos de la SENNAF, comunidades terapéuticas, etc.
- Trabajo interinstitucional: en este eje se incorporan todas las gestiones tendientes a conocer, actualizar y contactar servicios, recursos, programas y agentes encargados de la atención de los jóvenes y familias en el territorio. Contactos personales, llamados telefónicos, trabajo en PC, búsquedas vía internet, etc. Confección de informes, notas que esas instituciones u organizaciones de la sociedad civil, peticionan. El conocimiento personalizado de los recursos viabiliza la atención e inclusión de los chicos en estos dispositivos asistenciales. Los profesionales entrevistados señalan que

¹⁰⁶ Los psicólogos Delegados pueden ser requeridos para realizar las entrevistas e informes previstos en el art. 250 bis y ter

dada la falta de equipamiento y espacios de trabajo en la mayoría de los Juzgados, gestiones especialmente vinculadas con internet y TE se realizan en casi todos los casos en los domicilios de los profesionales.

- Elaboración de informes. Actividad que se realiza mayormente en los domicilios de los profesionales, supone contar con el equipamiento, haber completado el trabajo de contactos y vínculos con las familias y otros agentes/profesionales.
- Organización y concurrencia a reuniones mensuales en la sede judicial con los equipos de los que son parte y del conjunto de profesionales en cada Juzgado.
- Formación para el trabajo. La tarea de los Delegadxs requiere por su especificidad una formación continua. Ello fue además claramente explicitado por la Cámara desde la puesta en marcha de la experiencia de formación de los equipos interdisciplinarios y también cuando se realizaron ascensos a cargos de Prosecretarios se incluyó una evaluación de antecedentes. Por ello, algunos entrevistados lo incluyen como parte de las demandas institucionales, el desarrollo periódico de horas de actualización, en ocasiones han sido promovidas por el CEDIM, la Comisión de Menores de la Asociación de Magistrados, la misma Prosecretaría de Asistencia Social, y otros espacios que los propios Delegadxs seleccionan de acuerdo a su formación e interés.
- La conformación de equipos profesionales multiplicó el número de niños, jóvenes asignados¹⁰⁷, según refieren. Algunas de esas situaciones son de enorme complejidad. Por lo que requieren de intervenciones continuas y disponibilidad por fuera de los horarios considerados para los otros agentes de la misma institución.

Sin embargo, los Delegadxs entrevistados reclaman que existe un persistente reclamo, ambivalente, relacionado con que no asisten a la sede judicial en forma diaria, lo que colisiona con las demandas explícitas. Un instituido interpelado.

En el siguiente cuadro se expone un registro del número de niños asignados como nuevas intervenciones en 2013. No incluye las intervenciones que continúan del periodo anterior, tampoco otras tareas puntuales tales como informes socio-ambientales, entrevistas a

¹⁰⁷ Las referencias realizadas por expertos del Reino Unido, en oportunidad del Seminario realizado en FLACSO 2014, señalan que el seguimiento personalizados de estos niños requeriría asignar nos mas de 10-12 niños por profesional.

mayores de edad, a niños menores de 16 años, inimputables por edad, etc.; que no son consignadas en el registro de la BGD, quien proveyó esta información.

Cuadro N° 2 Cantidad de Intervenciones 2013 por equipos por dependencia

EQUIPOs	JNM	TOM 1, 2, 3	Total
JMN1 Eq 1	41	11	52
JMN1 Eq 2	26	10	36
JMN1 Eq 3	44	6	50
JMN1 Eq 4	40	8	48
JMN1 Eq 5	46	20	66
JMN2 Eq 1	14	6	20
JMN2 Eq 2	45	21	66
JMN2 Eq 3	45	23	68
JMN2 Eq 4	37	13	50
JMN2 Eq 5	30	12	42
JMN3 Eq 1	53	12	65
JMN3 Eq 2	29	8	37
JMN3 Eq 3	28	8	36
JMN3 Eq 4	64	8	76
JMN3 Eq 5	52	10	62
JMN4 Eq 1	30	16	46
JMN4 Eq 2	26	10	36
JMN4 Eq 3	40	11	51
JMN4 Eq 4	20	17	37
JMN4 Eq 5	22	13	35
JMN5 Eq 1	15	11	26
JMN5 Eq 2	22	12	34
JMN5 Eq 3	32	13	45
JMN5 Eq 4	29	13	41
JMN5 Eq 5	23	18	41
JMN6 Eq 1	13	19	32
JMN6 Eq 2	27	5	32
JMN6 Eq 3	28	15	43
JMN6 Eq 4	29	14	43
JMN6 Eq 5	23	10	33
JMN7 Eq 1	36	18	54
JMN7 Eq 2	41	16	57
JMN7 Eq 3	55	14	69
JMN7 Eq 4	54	16	70

JMN7 Eq 4 ¹⁰⁸	23	14	37
JMN7 Eq 5	27	11	38
	1209	462	1674
Promedio	33,58	12,83	46,5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por la BGD en noviembre 2014.

b- La dimensión histórica en clave documental.

El relevamiento realizado nos permite afirmar que en 1937, se registra el primer antecedente del que dispone la oficina de archivo de la Secretaría de la Superintendencia dependiente de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal¹⁰⁹. Se trata de un registro manuscrito de un Acuerdo Extraordinario celebrado por los vocales de esta Excma. Cámara de Apelaciones con el propósito de unificar el procedimiento para el ejercicio de la libertad vigilada que correspondía a los Juzgados de Menores que coordinan a los entonces llamados “Inspectores de Vigilancia” en el marco de la Ley 10903.

De tal manera accedemos al documento que registra la designación y atribución de tareas para el seguimiento de aquellos menores de edad acusados de delitos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, la Capital Federal, designación que entonces se utilizaba para esta jurisdicción. A través de este documento pudimos saber que en ese año se crearon e incorporaron diecisiete cargos, designados a desplegar la “Inspección y asistencia de menores en libertad vigilada” en la categoría del escalafón (como auxiliares 8° inciso 76), a partir de lo cual se nombraron en carácter de efectivos a los mismos Inspectores que ya prestaban servicios hasta entonces únicamente retribuidos con un viatico mensual. En el mismo texto, se señalaba la conveniencia de centralizar la acción de ese Cuerpo de Inspectores, que no se encontraba previsto en la ley (se alude a la Ley de Presupuesto), y la necesidad de reglamentar sus funciones en forma coordinada por los entonces tres Juzgados de menores encargados de aplicar la ley 10903.

¹⁰⁸ Este Juzgado cuenta con dos equipos los días jueves.

¹⁰⁹ Agradecemos al Sr. Armando Mattioni cuyo trabajo cotidiano es preservar esta memoria y que, a pedido de la Prosecretaría de Asistencia Social, nos facilitó generosamente buena parte de la documentación citada.

En ese documento, se explicita la necesidad de reorganizar el Cuerpo de Delegados honorarios, ya que se hace referencia a la existencia de 573 inscriptos, de los cuales 52 ya prestaban servicios vigilando dos o tres menores cada uno, según consta. Presumimos que se trata de personas con vínculos en el Poder Judicial que realizan esta actividad de forma voluntaria y como parte de iniciativa de desplegar un trabajo de carácter social y vocacional para el que no se requerían acreditaciones académicas. Observamos que la ausencia de formación de dichos agentes, en ese período, se vincula con la incipiente apertura de centros de formación y las incipientes modalidades de intervención social que se desplegaron en el Buenos Aires de la época (Tenti Fanfani, 1989 Alayon, 1992, Moreno, 2009, Donzelot, 2008, etc.) especialmente en las áreas de control social asociadas con la filantropía y los denominados como polo médico y jurídico.

En ese mismo Acuerdo se propone organizar y determinar un número fijo de Delegados honorarios a los cuales se designara, en adelante, con el título de “delegados honorarios para la vigilancia de menores” con el fin de confirmar en esos cargos a quienes ya desempeñaban servicios gratuitos y designarlos en carácter de efectivos, cuando se produjeran vacantes de Inspectores oficiales.

Hechas estas consideraciones, bajo el título de Reorganización del Cuerpo de Inspectores Honorarios se establecieron, en ese momento, una serie de artículos que con evidente detalle dan cuenta de los procesos que perviven por lo que consideramos tiene un carácter fundacional. Se establecía el cese de la labor de los Delegados Inspectores honorarios y se fijaba en sesenta el número máximo de dichos Inspectores para la vigilancia de Menores y los adscribían al servicio de los tres Juzgados encargados de aplicar la Ley 10903.

Se designaron en esos cargos a los 60 Delegados¹¹⁰ (una lista que incluye una mayoría de mujeres, veinte de ellas nombradas con sus apellidos de casadas y solo catorce varones), que fueron comunicadas a la Policía de la Capital Federal para que les preste colaboración y también se prescribe sobre la necesidad de proveer de credenciales a los designados que serían devueltas cuando dejaran de prestar servicios, práctica que persiste.

¹¹⁰ En el artículo 6to. se establece que las designaciones de Inspectores oficiales se realizaran a partir del listado de honorarios, teniendo en cuenta antigüedad y resultados de los informes anuales.

También se estableció entonces la apertura de fichero individual, a modo de legajos, donde dejar constancia de nombramiento, competencia para el cargo, servicios prestados, donde un informe sobre cada Inspector que confeccionarían los respectivos Jueces anualmente, evaluación que dejó de practicarse recién en la última década.

En dicho documento se realizó la distribución en trece zonas de vigilancia en la ciudad de Buenos Aires, agrupadas por comisarias en las que los Delegados Inspectores comenzaron a prestar servicios / funciones. Se subdividió en cuatro zonas de vigilancia en el caso de menores mujeres. En ambos casos se asignó a Inspectores oficiales y honorarios.

A partir del relevamiento realizado, observamos que la noción de seguimiento en territorio se expresa en la organización de las zonas de trabajo de los Delegadxs que persiste. Actualmente, en esta ciudad, subdivide las actuales cincuenta y dos seccionales policiales. La Prosecretaria de Asistencia Social actualiza un mapeo de zonas consideradas peligrosas que resume la identificación de barrios adonde los Delegados están exentos de concurrir, generalmente se trata de villas (sin trazado de calles) y otros adonde se denunciaron situaciones de inseguridad de las que fueron víctimas los propios Delegadxs. La Prosecretaria también establece los límites de la jurisdicción que corresponden en cada Partido de la provincia de Buenos Aires.

En este texto se establece con especial claridad todos los procedimientos administrativos y concernientes a las funciones y contenidos del ejercicio del cargo. Por lo que consideramos es un claro antecedente de las normas que se incluyeron paulatinamente en el Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (2007/2008)¹¹¹. Este documento adquiere relevancia dado que nos permite constatar que casi todas las disposiciones mantienen vigencia, especialmente de carácter administrativo: designaciones, aceptación del cargo y notificaciones. Procedimientos prescriptos con notable detalle. No se habilitaron nuevas modalidades de organización del trabajo lo que consideramos un indicador de la rigidez que caracteriza a la estructura burocrática de este entramado institucional.

¹¹¹ También se puntualizaba que para estos agentes rigen todas las disposiciones del Reglamento para la Jurisdicción Criminal y Correccional en relación a uso de ferias y licencias.

A modo de ejemplo, transcribimos conservando el lenguaje utilizado, y como ocurre hoy, la designación de los Delegadxs Inspectores se realiza de acuerdo al Circuito correspondiente al domicilio del menor; que se fija a partir de la designación una primer audiencia a la que “deberán comparecer además el menor, sus padres o guardadores a quienes se hará saber que quedan obligados a suministrar información que el Inspector les requiera respecto de la conducta, estudios, trabajo, cambios de domicilio, fugas, etc. relativos al menor”. También se pautó a los Jueces para coordinar la acción de aquellos Inspectores, la conveniencia de fijar un día de la semana para que concurran a las Secretarías de los Juzgados, en distintos horarios para oír notificaciones y aceptar cargos¹¹².

Bajo el título, Informes de los Inspectores, se explicitó una primera reglamentación de la Ley 10903, los plazos en que el Inspector debería informar al respectivo Juzgado sobre el menor confiado a su vigilancia de acuerdo a un primer formulario en que se precisan los siguientes lineamientos y contenidos: Fecha en que se presentaran informes regulares, datos personales que se requerían completar; Número de visitas realizadas al domicilio en el cuatrimestre, fecha de la última; Si (el menor) concurre a la escuela, nombre, ubicación, grado, aplicación y conducta; Trabajo que desempeña, nombre del patrón, ubicación, salario, disposición al trabajo; Tendencias e inclinaciones del menor; Conducta en la casa; Especificación de lugares que frecuenta; Si ha cumplido con la ley de enrolamiento; Condiciones morales de los guardadores, trato que recibe de ellos y todas las observaciones que fueran útiles para ilustrar al Juzgado sobre la situación moral y material del menor. Por último, dentro de las 24 hs hábiles en caso de tener conocimiento de fuga, ausencia temporaria prolongada o cambio de domicilio, el Inspector debía comunicar indicando nuevo domicilio o paradero si lo conociera. También se detallaba la modalidad a desarrollar en los casos en que ocurrieran cambios de domicilio y cuando los domicilios estuvieran ubicados en pueblos suburbanos. Lo que Stanley Cohen (1988) denomina como “pragmatismo ritual” las pautas que se establecen de manera mecánica, independientemente de las causas que provocaron la intervención de la justicia, los aspectos sobre los que se requiere acumular conocimiento y establecer control a todos

¹¹² Las referidas a la distinción entre la vigilancia de menores varones y menores mujeres o niños no mayores de 12 años perdieron vigencia.

iguales. Foucault alude la proliferación de las tecnologías de lo “biopolítico” que van a bordar, el cuerpo, la salud, las maneras de alojarse, alimentarse, etc.

Asimismo, se apelaba a dichos agentes a suministrar cualquier otra información que les requieran los jueces observar para la mayor eficacia de la misión que se les confiaba. Donzelot (2008) describe este requerimiento como un relevo, el juez traspasa a otros agentes de “estratos inferiores” que son enviados por la autoridad judicial a realizar misiones de cuidado, prevención, etc. “De forma similar Abel señala que los jueces apoyaron este “informalismo” visto como un depósito de “tonterías” (Stanley Cohen 1988: 256¹¹³)

En el documento consultado se detallaban los contenidos a incluir en los informes anuales, una especie de estadística-registro donde los Delegadxs consignaban la cantidad de trabajo, que se eleva a la Cámara a fines del mes de diciembre, práctica que también persiste, a la que se agregó posteriormente otro informe semestral en el mes de junio.

El siguiente documento que pudimos recuperar en este archivo data del 30 de noviembre de 1945 donde se registra un incremento del número de cargos de Inspectores de Menores, los cuales a partir de agosto de 1946¹¹⁴ fueron considerados como cargos docentes¹¹⁵.

Ese mismo año, con fecha 2 de julio de 1946 y por la vía de un acuerdo extraordinario se declara que solo se inscribirá en el registro de aspirantes a estos cargos a quienes posean título de asistente social otorgado por universidades nacionales. Dando tiempo hasta julio de 1951 a los agentes ya designados para presentar el título habilitante caso contrario cesarían en sus funciones. Es probable por la fecha en que se registra este acuerdo que el mismo se vincule con otra reivindicación gremial ya que hasta el año 2011 el 2 de julio fue la fecha en que se conmemoraba el día del Asistente Social en Argentina, dato que no pudo ser corroborado.

¹¹³ Cita a Abel. R. “The contradictions of informal justice” en Abel R (CD) The Policys of Informal Justice, New York, Academic Press, 1982.

¹¹⁴ Año en que se consigna otro expediente que no se encuentra accesible en archivo.

¹¹⁵ Se infiere que se trata de una conquista gremial, les permite a los Delegadxs la compatibilidad con otros puestos de trabajo. A diferencia de lo establecido para magistrados, funcionarios y empleados que se encuentran expresamente inhibidos por el art.2 del Reglamento Interno del Poder Judicial.

Ello ocurría en un contexto de creciente profesionalización de Trabajo Social argentino, en 1941 se había creado la Escuela de Asistentes de Menores y Asistentes Penales, dependiente del Patronato de Recluidas y Liberadas, que en 1946 se constituyó en la Escuela de Asistentes Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA (Alayón, Grassi, 1983:106)

Esta norma fue flexibilizada a posteriori, seguramente a partir de reclamos que posibilitaron que personas sin títulos universitarios habilitantes permanecieran ejerciendo el cargo hasta periodos muy recientes. Asimismo, en mayo de 1961, de nuevo en acordada manuscrita, se actualizan algunas normas para la integración del Cuerpo de Delegados honorarios, bajo la ley 10903. Oportunidad en que se reintroduce en el art. 3ero que para ser Delegado Honorario se podrá contar con título de asistente social o en su defecto indudable “vocación para la función”¹¹⁶.

La paulatina profesionalización convivió con la permanencia de agentes que se desempeñaron en el cargo sin formación específica que, a partir de la construcción de una trayectoria de trabajo, les permitió mantener su actividad e inclusive obtener ascensos en virtud de su antigüedad en el cargo. Consideramos a partir de las entrevistas y consultas realizadas que esa convivencia contribuyó en el descrédito del Cuerpo de Delegados en su conjunto, dado la permanencia de la impronta voluntarista que caracterizaba sus prácticas y se traducía en los informes que se agregaban en las causas.

En junio de 1982 y en el 2004 se registra sendos Acuerdos generales respecto de los requisitos para ser Delegado Inspector y la reglamentación para ingresos y ascensos. En la última actualización del Reglamento para la Jurisdicción, del 2007, los requerimientos académicos se encuentran formulados en el Anexo III de la siguiente forma: “Para ser designado delegado inspector *se preferirá*¹¹⁷, poseer título de asistente social o título universitario en Licenciatura en Trabajo Social u *excepcionalmente*¹¹⁸, otro título con

¹¹⁶ En 2013 se jubiló la anteúltima Delegada que ejercía su trabajo aunque carecía título universitario. A la fecha, diciembre 2014, aún se desempeña un último agente con formación terciaria-docente.

¹¹⁷ El subrayado es nuestro.

¹¹⁸ Estas preferencias y oportunidades de designar otras profesiones aluden a la incorporación a veces aleatoria y que no siempre responde a criterios o requerimientos realizados por los Juzgados

incumbencias propias de las ciencias sociales y relacionado con la conducta humana. Ello habilitó la designación de otros profesionales, psicólogos, sociólogos, abogados, psicopedagogos, médicos, etc.

El 15 de junio de 1971 se los exceptúa (formalmente) de las reglamentaciones sobre horarios de tareas, una asignación de baja carga horaria en las dependencias de los Juzgados ya que, remarca, “sus funciones principales son trabajo en las zonas de residencia y/o alojamiento de los menores de edad designados a su cargo”. Stanley Cohen (1998) y Donzelot, cuyos estudios aluden a las prácticas en este campo y aluden a los trabajadores sociales específicamente, enfatizan cómo las prácticas de estos profesionales fueron orientadas desde sus inicios a realizar prácticas “en contexto” como expresión de la alianza entre cuidado y control, acogida y segregación. En la búsqueda por “esa armonía entre el orden de las familias y el orden estatal (que) es más el producto de una conveniencia táctica que el de una alianza estratégica” (Donzelot, 2008: 33). Esta definición relativa al cumplimiento de trabajo “de campo” instituye una marca de origen y constituye una permanente tensión que se formula a modo de reclamo en las distintas instancias institucionales con las que se interrelacionan. Tanto en los JNM como en los TOM se verifica un requerimiento por mayor presencia de estos profesionales en las oficinas, se solicita concurran más de una vez a la semana y los TOM han exigido guardias rotativas.

En febrero de 1978 se incorporaron en los haberes el rubro de Gastos de Movilidad al Cuerpo de Delegados Inspectores, considerando que para realizar su trabajo deben realizar erogaciones específicas vinculadas con el traslado a los domicilios, institutos, etc., según las tareas que se les asignan. Esta situación especialmente reconsiderada en 2006, cuando el monto de los viáticos fue cuadruplicado.

Con fecha 03 de abril de 1975 se verifica creación de otros veinticinco cargos de delegados inspectores Res 204/75 de la Corte y el mismo año se adicionan otros cargos por Res. 287 del 29/04/75. En octubre de 1976 entre otras modificaciones del Reglamento, finalmente se suprimen los nombramientos en carácter de honorarios. Aunque según se registra en las

sino a decisiones que se toman en la Prosecretaría de Asistencia Social, los propios Camaristas, responsables por la selección y designación de estos profesionales.

entrevistas realizadas y en la documentación a la que tuvimos acceso, ello recién se materializa a partir de la reapertura democrática entre los años 1982/83.

Desde abril de 1992 se verifican registros que nos advierten sobre distintos pedidos de autorización realizados por Delegadxs para desempeñar “otras tareas”¹¹⁹ que no impliquen desatención de sus funciones ni contraposición horaria. Procedimiento que fuera solicitado por la Prosecretaria de Asistencia Social a todos los profesionales de este Cuerpo que contaban con otros desempeños y que en ese momento era autorizado sin inconvenientes. Ello cambio sustancialmente desde que, en 2007, se reorganiza la estructura de este Cuerpo y se incorporan cargos de Prosecretarios Administrativos cuyo desempeño solo es compatible con actividades docentes. Desde entonces la Cámara ha desarrollado una línea tendiente a inhibir el pluriempleo de estos profesionales.

Entre agosto y septiembre de 1979 se identifica una reorganización de cargos, dependientes de la Cámara. La estructura del Cuerpo de Delegadxs fue modificada sustancialmente en 2007¹²⁰ cuando la Corte Suprema estableció la estructura en cuatro estamentos: Prosecretarios Administrativos se crearon veintiocho cargos (que se sumaron a los cuatro ya existentes) totalizando treinta y dos cargos, Jefes de despacho veintinueve cargos, Oficial Mayor treinta cargos y Oficial veintisiete cargos.

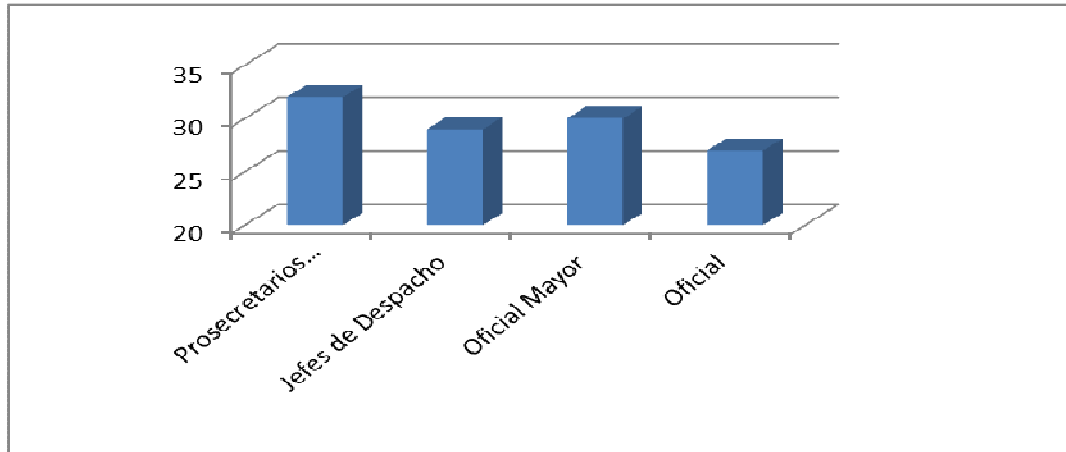
¿De quién/nes dependen? En junio de 1977 los Delegadxs pasaron a desempeñarse en los Juzgados a designación del Juez de Cámara encargado de la aplicación de la Ley 10903¹²¹, procedimiento se mantiene a la fecha pero que asume administrativamente la Prosecretaria de Asistencia Social. Dependen administrativamente de la Cámara y funcionalmente de distintos magistrados.

¹¹⁹ Se refiere a situaciones de pluriempleo.

¹²⁰ Esta gestión fue desarrollada, por la vía administrativa por el CEDIM. Aunque la respuesta de la Cámara no fue alentadora, obtuvo respuesta en la Corte. El Dr. Zaffaroni fue quien promovió la creación de cargos que puede ser considerada como una primera estructura de este Cuerpo.

¹²¹ Como también de la ley 14394 del Régimen de los Menores y de la Familia, del matrimonio de menores de edad, domicilio, herencia, curadores, “bien de familia”, etc., que posteriormente fue derivado al fuero civil.

Gráfico N° 6. Estructura de cargos del Cuerpo de Delegados Inspectores, Justicia Nacional Penal



Fuente: Elaboración propia sobre la base de los listados de la Prosecretaría de Cámara, marzo, 2014

Por último, en junio de 1992 se encuentra el registro de una presentación para que este Cuerpo de profesionales empiece a ser incluido en el proyecto de organización del juicio oral, tema al que aludiremos en el capítulo 5.

c- La dimensión histórica según sus protagonistas.

Como anticipamos, conjugamos el relevamiento documental con entrevistas realizadas a la Prosecretaría de Asistencia Social, la Presidenta del CEDIM¹²², y otros Delegadxs que acumulan la mayor antigüedad en el fuero, algunos retirados y otros que permanecen en el cargo a 2014. Ello coadyuvó a captar una dinámica entre normas, documentos, testimonios y registros personales, que presentamos seguidamente.

¹²² El Centro de Delegados Inspectores de Menores es una Sociedad Civil sin fines de lucro, integrada por profesionales de distintas disciplinas, nucleados a partir de su identidad laboral en el trabajo con niños/as y adolescentes en el fuero penal, cuyo objetivo es establecer una red de asesoramiento, información, capacitación y reflexión relativa a las problemáticas que los ocupan.

Los entrevistados señalaron que ingresaron al Poder Judicial como meritorios/honorarios, ya que eran muy pocos cargos rentados¹²³. Status que mantuvieron en algunos casos por períodos prolongados de hasta diez años. Cuando fueron nombrados comenzaron a percibir viáticos y, a posteriori, cuando quedaban efectivos les reconocían la antigüedad como meritorios.

Algunos ingresaron recién recibidos, otros ya contaban con experiencia como empleados o meritorios en el fuero de menores o como parte del equipo “forense”. Coinciden en que el cargo de Delegadxs era ocupado por “allegados” al Poder Judicial, esposas de abogados, familiares, conocidos entre sí. Una entrevistada ilustra que al momento de su ingreso: “Las designaciones eran por una lista que llevaba el médico que dirigía la morgue, el Dr. Pena¹²⁴. “Ni sabíamos dónde quedaba la Cámara”, frase que resume que los contactos eran más evidentes que la propia organización institucional. Eran adscriptos a los Juzgados de Sentencia R y M (actual 1 y 2); Instrucción (los actuales: 3, 4, 5, 6) y Correccional O (actual 7).

Los entrevistados ilustran que en la década del '60, la Cámara estaba todavía ubicada en el Palacio (de Tribunales), inicialmente los Delegadxs se ubicaban en la oficina de Cámara y los jueces enviaban su solicitud a esa oficina. Cada Juzgado de Instrucción tenía unos 100 chicos. En esa época había una sola categoría de Delegadxs en el escalafón¹²⁵. El vínculo de trabajo siempre fue con las Secretarías Tutelares en cada Juzgado; las cuales fueron asumiendo centralidad en la dirección del trabajo de los Delegadxs por lo cual el lugar de trabajo se desplazó desde la Cámara hacia estos Juzgados, la Cámara retuvo el poder, las designaciones y los ascensos, entre otras cuestiones.

La particularidad de este trabajo, coinciden, es que se está y estaba fundamentalmente “en la calle”, y se visibiliza y consolida en los informes. Uno de los entrevistados señala:

¹²³ Ha sido un mecanismo de ingreso generalizado en el conjunto del Poder Judicial de la Nación.

¹²⁴ Se desconoce la autoridad de esta persona para desplegar esta actividad.

¹²⁵ Fue un Delegado, Cicciaro, quien promovió la organización del escalafón que inicialmente contaba con solo 4 cargos de prosecretarios, cúspide de esta estructura (recién en 2007 la Corte la reorganiza), y también quien lideró la organización del centro que nuclea los Delegadxs, entre 1970-72. Sin embargo el estatuto del CEDIM, según refiere su presidenta, es del año 1989 y se define como “una organización ni político, ni religioso ni gremial es un espacio que se convoca por interés de los Delegadxs en la función y otros vinculados con la minoridad”.

“Podíamos escribir novelas pero el juez no leía más de diez renglones..... (que consideraban aspectos centrales) por ello lo importante se retomaban en las conclusiones”. Otra Delegada, que ingresa a mediados de la década del 70, relata que concurría al Juzgado una vez a la semana a “levantar” la que se consideraba la tarea, llevaba los datos para hacer el trabajo de calle. En ese tiempo no había guardias, “ibas cualquier día, no había turnos para nosotros...”. Paulatinamente se fue forjando el espacio de trabajo en los Juzgados que consolidaron una forma de hacer y organizar el trabajo, en ese período entrabas directo a ver al juez sin mediaciones”. “El trabajo (desde entonces) fue “siempre” el mismo, Entendemos que “Siempre” implica que, aunque los fundamentos cambiaron, los procedimientos son los mismos, trabajo extramuros con niños acusados, con quienes se establece un vínculo que las interpela, intervenciones relativas a las condiciones de exclusión que tradicionalmente esta población exhibe, etc.

Los entrevistados consideraron en términos de transformaciones o “avances” alude a cómo su intervención puede afectar el margen de sanción que la justicia impondrá a no a esta población. Stanley Cohen (1988) señala que el vínculo que estos profesionales establecen con dicha población los “contamina”, “su compromiso con objetivos profesionales (o con los mismos acusados y sus familias) son (en ocasiones)... paradójicamente, independientes de las necesidades funcionales” (Stanley Cohen, 1988: 244) pautadas en el campo. Son grupos profesionales, a entender de este autor que viven y trabajan con toda suerte de contradicciones. Asimismo, los Delegadxs desarrollan una baja carga horaria, establecida formalmente, por lo que no son partícipes de la dinámica institucional cotidiana, se sitúan en la periferia de “esa” sociedad común.

Estos agentes desde el año 1992, también comenzaron a desarrollar las actividades inherentes a su función en los recién creados Tribunales Orales de Menores. Si bien en la ley de creación de los TOM se instituyó la conformación de equipos profesionales interdisciplinarios, éstos nunca fueron constituidos y fueron los mismos Delegadxs a quienes la Corte, con consentimiento de la Cámara, designó para esa tarea. Desde entonces, y con distintas modalidades de organización, los Delegadxs trabajaron –por épocas- para todos o algunos de los TOM de acuerdo a sus requerimientos y demandas, con escasa mediación de la Cámara y/o la Prosecretaría de Asistencia Social. En los TOM, -hasta hace muy poco tiempo, como señalamos- se reeditó la organización de secretarías

actuarias y tutelares, pero en muy escasas ocasiones manifestaron interés por desplegar un trabajo mancomunado con estos profesionales.

Las directrices de los Juzgados y más recientemente la propia Cámara¹²⁶ se concentran en fijar un formato estándar de los informes, establecen sobre qué aspectos concentrar la atención, que designaciones privilegiar, la forma ordenar la información en que se asienta u orienta la formulación de estrategias de intervención y/o conclusiones. Luego, el trabajo de los Delegadxs se organiza, también a partir de otros anclajes, donde la tradición y la transmisión oral entre pares es valorada por los profesionales consultados, pese a la individualidad que ha caracterizado históricamente este trabajo, desde la creación de este Cuerpo y hasta el año 2013, en que se consideró la obligatoriedad de trabajar en equipos. La constitución de los equipos fue alentada como una manera de cualificar las intervenciones, tema que convoca, de manera espasmódica, la preocupación de quienes asumen el ejercicio del control institucional sobre estos profesionales. La difusa normativa permite que cada una de las instancias con las que los Delegadxs se vinculan desarrolle distintas exigencias, algunas de las cuales que pueden ser consideradas como arbitrarias. Los Delegadxs manifiestan que predomina el énfasis sobre el control de los procedimientos, como es evidente en las obligaciones instituidas en el Reglamento de la Jurisdicción que reúne precedentes desde 1937. Refieren que la supervisión no ha alentado el desarrollo y contenido de su trabajo sino que su atención ha estado orientada al cumplimiento de las formas, plazos, etc. En este sentido la existencia de las Secretarías Tutelares dejó vacante un espacio que implicaba, a criterios de varios de los entrevistados, cierto acompañamiento y orientación de los propósitos del trabajo.

La dependencia de los Delegadxs de la “tutelar” tradicionalmente facilitó la transmisión de expectativas hacia su trabajo, acordar, disentir o cumplir las pautas que estableció el juez o el secretario en cada caso, de acuerdo a las posibilidades personales, académicas y los márgenes frente a la autoridad - verticalidad en cada caso. La ausencia de esta supervisión

¹²⁶ Incluye el modelo de informe que la Cámara con el propósito de estandarizar la producción escrita que realizan los profesionales.

sumada a que algunos Juzgados se encuentran vacantes de titularidad por períodos prolongados¹²⁷ es reconocida como un problema, por estos profesionales.

La conformación reciente en equipos profesionales y de la supresión de la Secretaria Tutelar puso en contacto a los Delegadxs entre sí de manera sistemática y con todas las Secretarías, promovió la mayor circulación de información y la consolidación de acuerdos relativos a formas de hacer el trabajo. Si bien los Delegadxs tradicionalmente cumplieron guardias semanales en grupos de tres profesionales no existía el requerimiento de la firma de informes compartida que obligó a discutir criterios de trabajo. Este nuevo esquema promueve una discusión al interior de los equipos que, se diferencia de aquella forjada bajo la organización de las Secretarías Tutelares, que los profesionales entrevistados consideraron clave a la hora de modelar los requerimientos específicos en cada Juzgado. Multiplica el trabajo dado el mayor número de interlocutores pero permite encontrar y destacar distintas posiciones que pueden contribuir a cualificar las intervenciones.

Aunque se conformaron equipos de trabajo, la efectiva soledad del trabajo extramuros, en domicilio o instituciones por donde estos niños y jóvenes transitan se corresponde con frecuentes desacuerdos al momento de presentar informes. Por otra parte, todos los Delegadxs consultados acreditan experiencia en haber recibido objeciones relativas a contenidos de sus informes, en el marco de las distintas Secretarías, tendientes a normatizar la redacción y por tanto aspectos relativos a la intervención de los profesionales. Un “ajuste técnico” (Stanley Cohen, 1988) que alude a un conjunto de conocimientos que se auto adjudican unos profesionales (en este caso quienes hegemonizan el campo) que nadie más que ellos es capaz de dominar que pretenden imponer su propia posición y lectura (este autor hace referencia a elaboración ideológica y sistemas de clasificación).

Consideramos que esta dificultad se encuentra asociada a que esas intervenciones tienen una clave de disonancia, tensionan la mirada de los operadores judiciales hacia otros aspectos de la vida de estos chicos, incluyen pedidos de oficios judiciales sobre situaciones

¹²⁷ Los Juzgados Nacionales N° 1 y 5, ocupados alternativamente por jueces subrogantes. En el caso de los TOM, el N° 1 es el único completo, el N° 2 tiene un cargo vacante y el N° 3 dos cargos vacantes (una de las cuales está ocupada por un juez subrogante).

distintas a la causa que se les imputa, aparentes desvíos. Esta disonancia ha sido una característica persistente. También cierta laxitud que permite una convivencia, en tensión, en el conjunto de los operadores entre viejos y nuevos fundamentos normativos.

En contrapartida es reciente y poco sistemático el diseño de espacios de debate y formación colectiva, a propuesta de la Cámara, a través de la comisión de Menores de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y el CEDIM.

Los Delegadxs, históricamente como ya señalamos, desarrollaron su trabajo de manera individual, no tuvieron previstos espacios de reunión sistemáticos, que permitieran aunar propuestas, organizar demandas o elevar reclamos por condiciones de trabajo. La concurrencia semanal reforzó un vínculo de cumplimiento de las demandas laborales que escasamente promovió el debate e intercambio de ideas y experiencias. La reciente experiencia de conformación de equipos tuvo como resultado presentaciones ante la Prosecretaría de Asistencia Social y la Cámara de la cual dependen. En ningún caso tuvieron respuesta formal a sus notas y presentaciones, aunque se contemplaron parcialmente los pedidos que contenían. Al respecto, Faleiros (1986) señala que el saber profesional y el poder institucional son formas históricas de relación entre clases y formas sociales de relación entre el Estado y la sociedad. Agrega que en esa lucha se elaboran visiones de mundo que movilizan conocimientos administrativos, políticos y técnicos que exige información, datos, análisis, propuestas, etc.

La relación entre la Cámara y los Delegadxs ha pasado por distintos momentos. No se ha instituyeron espacios de diálogo que facilitaran la comunicación o una relación sistemática. Prevalece una relación puntual ante determinados requerimientos, basada en la dependencia institucional y respectiva autoridad administrativa, acorde con la verticalidad de la organización judicial. La dirección de la Prosecretaría de Asistencia Social, a cuyo cargo se encuentra el Cuerpo de Delegadxs ha sido ocupada por abogados y persiste cierto desprestigio por la labor de los Delegados, en general, tema que retomamos en el capítulo siguiente. Esta percepción subsiste pese a que Camaristas y titular de la Prosecretaría son los responsables por las designaciones al Cuerpo, las adscripciones a los Juzgados, los ascensos y el control de las estadísticas e informes semestrales y anuales.

Los Delegadxs escasamente se encuentran afiliados al gremio judicial. Cuentan con una organización el CEDIM, (que carece de representación gremial) que agrupa a estos profesionales y canaliza información e inquietudes. Desde hace varios años promueve espacios de encuentro, capacitación y debate que conjugan preocupaciones de carácter coyuntural con el diseño de propuestas que contribuyan al desempeño profesional de estos agentes. Ello es considerado un indicador en términos de baja capacidad en el desarrollo de estrategias de tipo corporativas.

Este Centro a través de distintas y renovadas gestiones, fue el que movilizó la organización de una estructura de cargos en 2007, en cuatro cargos¹²⁸, según el escalafón del poder judicial: (de menor a mayor jerarquía) oficiales: veintisiete, oficiales mayores: treinta, jefes de despacho: veintinueve y prosecretarios¹²⁹: treinta y dos, datos a 2011. El sistema de ascensos ha privilegiado el criterio de antigüedad, todos los Delegadxs realizan idénticas tareas, por lo que persiste un fuerte reclamo porque todos estos profesionales puedan ser equiparados “por igual función, igual cargo”.

d- El Cuerpo de Delegadxs Inspectores de Menores. Características generales

En este apartado incluimos el tratamiento de datos que elaboramos a partir de distintas fuentes de información, como en todo este capítulo, especialmente aquellos que son resultado de la consulta realizada a un grupo de Delegadxs, entre los meses de junio-agosto 2012.

Este Cuerpo se integra en su mayoría por mujeres¹³⁰. Solo el 17.7% de sus integrantes son varones. Se observa una mayor proporción masculina en el último nivel del escalafón (25,92), lo que daría cuenta de un creciente interés de profesionales varones por ingresar a este espacio ocupacional. La feminización de este Cuerpo está asociada con el ejercicio mayoritario de trabajadores sociales, pero cuando se trata de otras profesiones se verifica

¹²⁸ Documentado en nota de la Prosecretaría de Asistencia Social en el año 2011.

¹²⁹ El mayor cargo al que puede aspirar un empleado judicial no abogado. Para el desempeño en los otros cargos no se requiere como requisito el título universitario, que sí es condición -en cualquier cargo- para la designación en el Cuerpo de Delegados, actualmente.

¹³⁰ Los datos fueron tomados del listado vigente a marzo 2014, entregado por el Presidente la de Cámara a una comisión de Delegadxs que se entrevistaron con él.

una situación similar. Presumimos que ello se vincula con el desempeño de tareas relativas al control de la vida cotidiana de la infancia. Desconocemos si el listado de postulantes ha presentado una composición distinta.

Respecto de las edades se observa que los profesionales que ocupan la mayor categoría se componen por un grupo que excede la edad de jubilación prevista en las instituciones estatales. Eso se relaciona con que, como ya mencionamos en 2007 la Corte aumentó el número de cargos de prosecretarios administrativos, que habilitó una composición de la estructura de este cuerpo de profesionales en cuatro categorías. La permanencia en el cargo de prosecretario administrativo por cinco años es condición de acceso al beneficio jubilatorio conocido como 82% móvil. Los primeros veintiocho profesionales designados en 2007, cumplieron dicha permanencia en agosto 2012 y el trámite de algunas de esas jubilaciones se encuentra demorado en el ANSES. Alrededor de veinte de esos cargos están pendientes de la resolución de esa gestión¹³¹. Esta situación dilató exageradamente la permanencia de agentes de avanzada edad trabajando con niños y jóvenes.

La distribución por edad se expone en el siguiente gráfico. Las mismas oscilan entre 33 y 85 años, en tanto el grupo más importante, que constituye actualmente el 66,66% del total del Cuerpo tiene entre 60 y 82 años. Situación que tiende a verificar un cambio sustantivo a corto plazo.

El siguiente cuadro nos permite observar que la incorporación de agentes ha privilegiado un ingreso de profesionales con formación y experiencia. La edad de ingreso promedio es mayor a treinta años. Llama la atención constatar el ingreso de profesionales de entre cuarenta y ocho y cincuenta y siete años de edad, ocurrido en el periodo 2007¹³² - 2009, dada la preocupación que manifestaron en los últimos años los miembros de la Cámara que es responsable por dichos nombramientos, en relación al envejecimiento del cuerpo de profesionales. Los datos a marzo 2014 son los siguientes:

¹³¹ Desde abril 2015 a la fecha se produjeron al menos nueve jubilaciones y sus respectivos reemplazos.

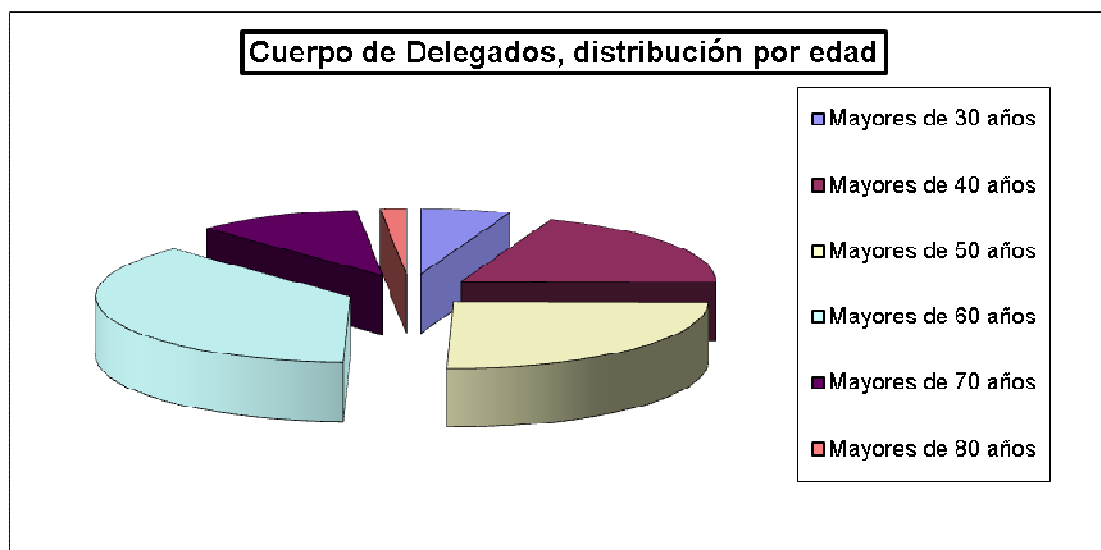
¹³² Coincide con el período en que se crearon cargos de Prosecretarios Administrativos, lo que despertó la atención de profesionales de otras áreas –como la SENNAF- que se interesaron por incorporarse en este espacio de trabajo.

Cuadro N° 3. Distribución por edad de los agentes del Cuerpo de Delegados Inspectores

Cargo	Prosecretarios administrativos	Jefe de Despacho	Oficial Mayor	Oficial	Total por edad
Totales	(32)	(29)	(30)	(27)	(118)
Mayores de 30 años	-	-	2	5	7
Mayores de 40 años	-	2	10	12	24
Mayores de 50 años	2	9	11	9	31
Mayores de 60 años	20	15	5	1	46
Mayores de 70 años	8	3	2	-	13
Mayores de 80 años	2	-	-	-	2

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los listados suministrados por la Prosecretaría de Asistencia Social de la Cámara, marzo, 2014

Gráfico N° 7. Distribución por edad de los agentes del Cuerpo de Delegados Inspectores



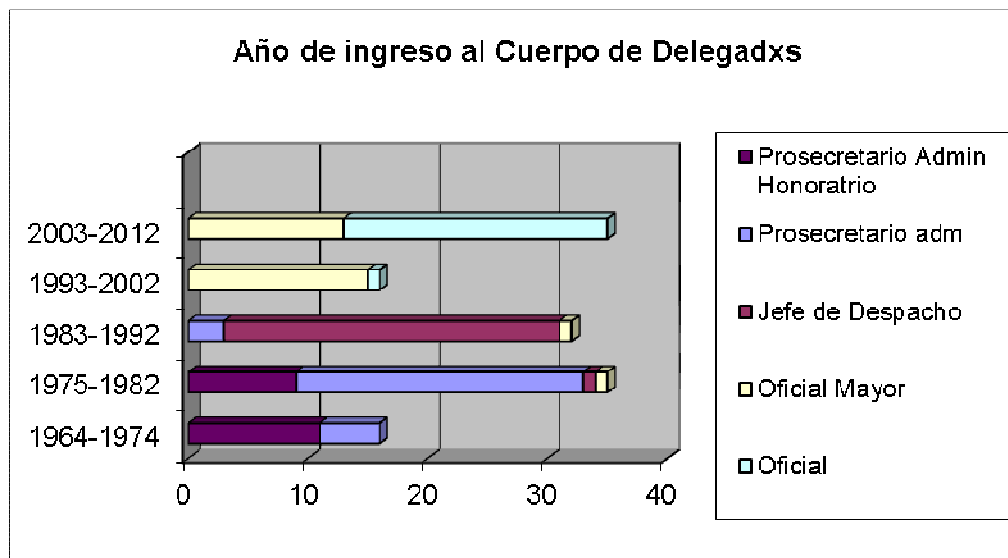
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los listados suministrados por la Prosecretaría de Asistencia Social de la Cámara, marzo, 2014

La antigüedad evidencia que casi la totalidad de los profesionales se formaron en el periodo previo a las transformaciones legales ocurridas en las décadas más cercanas y al mismo tiempo una promesa cercana de renovación de dicho cargos.

Respecto de la modalidad de ingreso al poder judicial para integrar el Cuerpo de Delegados es ineludible señalar que hasta hace muy pocos años, la información de la existencia de vacantes circulaba únicamente en la misma institución, por lo que era condición necesaria contar con algún vínculo o contacto que facilitara el acceso a la misma. De esta forma las relaciones sociales o el contacto directo y/o familiar posibilitaron el acceso a las entrevistas que en la Cámara se desplegaron a fin de, en cada oportunidad, seleccionar a los postulantes a ocupar los cargos vacantes. Por ello a la consulta realizada a estos profesionales, la mayoría respondió sobre la existencia de contactos, relaciones familiares, etc. que mediaron como paso para ser convocadas a la entrevista que posibilitaba el ingreso. Esta situación evidencia que durante un largo periodo los postulantes accedían al conocimiento de estas convocatorias a partir de cierta “familiaridad”. De la misma manera y dado que el interés de conformar equipos interdisciplinarios es muy reciente, es posible señalar que la variedad de profesiones que observamos en las designaciones anteriores no se correspondería con las necesidades identificadas por el fuero penal juvenil sino con oportunidades que se habilitaron a profesionales allegados a la Cámara, en ese período. Al respecto Bourdieu (1997: 131) señala que esta noción de familiaridad- familia como “una auténtica labor de institución, a la vez ritual y técnica, orientada a instituir duraderamente en cada uno de los miembros...unos sentimientos adecuados para garantizar la integración que es la condición de existencia y persistencia”

A partir del 2005 se procede a realizar una convocatoria cuya difusión es amplia y posteriormente se realiza una selección de antecedentes (aunque la misma no exhibe criterios de selección previos de acceso público) y entrevistas, aunque los resultados de dicho proceso de selección carecen de mecanismos que permitan su apelación. De tal manera y dado que la mayoría de consultados tiene mayor antigüedad, las respuestas se concentraron en alusiones de cierto nivel de contacto o cercanía a la institución como paso previo a su incorporación.

Gráfico N° 8. Distribución según año de ingreso y cargo de los agentes del Cuerpo de Delegados Inspectores



Fuente: Elaboración propia sobre la base de los listados suministrados por la Prosecretaría de Asistencia Social de la Cámara, marzo, 2014

También se observa, en menor medida un grupo que ingresó al Poder Judicial como empleadas administrativas y luego solicitaron ingresar a este Cuerpo. Más de la mitad de quienes hoy detentan el cargo de Prosecretarias Administrativas ingresaron como meritorias y posteriormente fueron rentadas como parte del Cuerpo de Delegadxs.

Del conjunto de las entrevistas en profundidad que realizamos a trabajadores sociales para el desarrollo de esta investigación, realizamos las siguientes apreciaciones: un primer grupo (50%) que reúne a Trabajadoras Sociales que ingresaron entre 1982¹³³ y 1990 mientras que en el segundo grupo (50%) los entrevistados ingresaron entre 2005¹³⁴ y 2013. Las siete primeras manifiestan que ingresaron a través del contacto personal o mediado con algunos de los Jueces de la Cámara en tanto que las otras siete refieren haber ingresado a partir del mecanismo de convocatoria abierta.

¹³³ La más antigua de las entrevistadas se jubiló en septiembre 2014.

¹³⁴ Desde 2005 la inscripción es abierta y se han realizado nuevas designaciones en forma periódica: 2005 (seis), 2006 (una), 2007 (cinco), 2008 (cinco), 2009 (cuatro), 2010 (una) 2011 (cinco), 2013 (cuatro), lo que permitiría visualizar el clima de recambio del cuerpo de Delegados.

Las primeras convocatorias realizadas por la Cámara privilegiaron el ingreso de profesionales que se desplazaban de la SENNAF que comenzaba a delegar funciones a otras instancias del entramado institucional, como ya fuera mencionado. Es el caso de cuatro profesionales que integran el segundo grupo, por lo que todas cuentan con extensa experiencia y contacto previo con el campo por su experiencia en el entramado institucional y solo una, la última, no acredita ningún vínculo previo, aunque si incipiente formación en el campo.

Lógicamente, quienes integran el primer grupo ocupan los cargos de Prosecretarías administrativas, jefes de despacho y solo una oficial mayor, en tanto que en el segundo grupo de concentran las categorías de Oficial Mayor y Oficial.

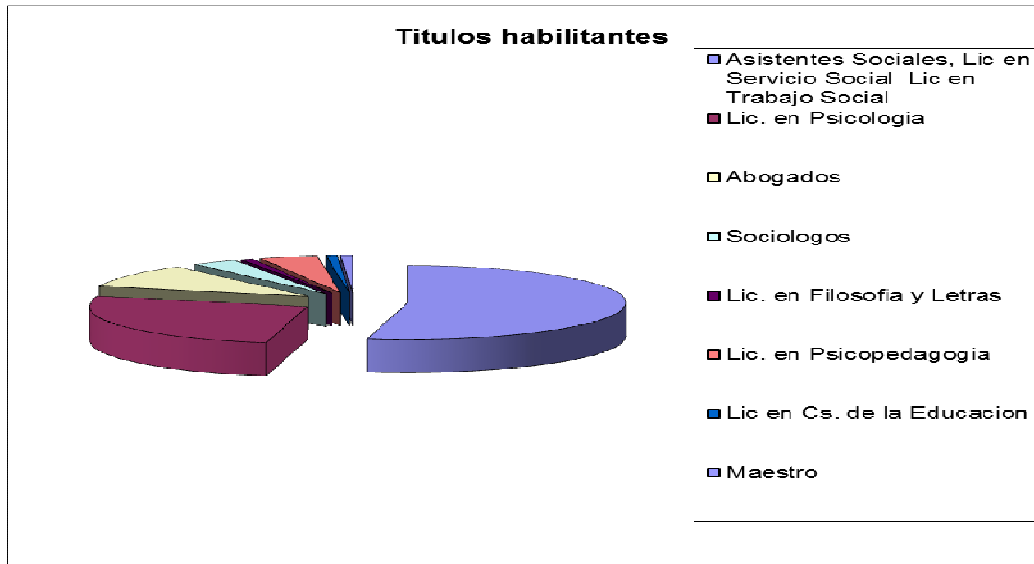
Cuando observamos la composición de edad de todo el grupo, no encontramos evidencia de un proceso de renovación generacional. En el primer grupo, dos integrantes tienen más de setenta años (una de ellas se jubiló en 2014) y las otras cinco sus edades rondan los cincuenta años. Los nombramientos realizados a partir del 2005 reúnen un grupo de mayoritario (seis) profesionales de entre cincuenta y sesenta años. Solo la última designación corresponde a una profesional joven de treinta y tres años. Lo que evidencia que en las convocatorias se tensiona por una mayor experiencia y no se privilegia la formación en el contexto de las normas vigentes, que supone una menor trayectoria profesional.

A partir de este “hallazgo” recurrimos a revisar todas las designaciones realizadas de Oficiales Mayores (treinta en total) y encontramos que solo cinco de ellos son menores de treinta y cinco años, mientras que las Delegadxs designados como Oficiales (ocurridas desde noviembre 2001, en total veintisiete) solo diez son menores de treinta y cinco años. Dado la edad de ingreso los Delegados permanecen en su cargo hasta edades que superan los 65 años, aspecto que consideramos la propia Cámara debería revisar al momento de definir las incorporaciones.

Respecto del nivel de educación alcanzada, a marzo 2015 excepto uno, todos son universitarios, los últimos Delegados sin estudios universitarios se fueron jubilando, los dos últimos, con títulos terciarios docentes.

Respecto de la composición de los títulos, se relevan los siguientes datos: Asistente Social, Lic. en Servicio Social y Lic. en Trabajo Social, el 52.54%; Ello es evidencia de que el Trabajo Social fue perdiendo hegemonía en el desempeño de estas tareas lo que se expone en el gráfico y cuadro siguiente, a favor de la designación de Lic. en Psicología acreditación que fue priorizada en las ultimas designaciones. Ello encuentra argumento en la posibilidad de organizar equipos interdisciplinarios pero también deriva en un desaliento respecto al trabajo en territorio, según señalan los trabajadores sociales consultados. Situación que se combina con el establecimiento de zonas de peligrosidad ocurridas a pedido de los propios profesionales. Como ya explicamos, se trata de un mapa que, a partir de problemas ocurridos a estas profesionales (robos especialmente) en el desarrollo de su labor, exime a los profesionales de desarrollar trabajo en el territorio y privilegiar el trabajo en sede, afín con la formación de psicólogos y abogados, que se incorporaron como Delegadxs. De esta forma, especulamos que el descenso del trabajo en territorio se conjugó con el nombramiento de profesionales que tradicionalmente desarrollan su actividad en gabinete. Consideramos que la confluencia de psicólogos y trabajadores sociales, combinó el interés persistente por analizar las conductas de los jóvenes con los tradicionales postulados de trabajo en zona que recuperaron vigencia a partir del interés gubernamental por promover la inclusión social en territorio asociado con las medidas de carácter socio-educativas. Al respecto Donzelot (2008) señala una doble tendencia centrífuga y centrípeta, que resume en la metáfora de Freud y Keynes, “que hace surgir un espacio intermedio entre el “en familia” y el “fuera-de-la-familia” que mantiene intacta la preocupación por administrar aquello que se designa como inestabilidad.

Gráfico N° 9. Distribución según títulos habilitantes de los agentes del Cuerpo de Delegados Inspectores



Fuente: Elaboración propia sobre la base de los listados de la Prosecretaría de Cámara, marzo, 2014

Esta misma información, la exponemos en el cuadro que sigue, ordenada de acuerdo al periodo de designación. Ello nos permite observar que los trabajadores sociales hegemonizaron las designaciones hasta principios de 1990 por lo que son mayoría en los cargos de Prosecretarios Administrativos y Jefes de Despacho. Posteriormente se observa un descenso sostenido a favor de la designación de Lic. en Psicología en los últimos años.

Cuadro N° 4. Distribución según títulos habilitantes, Cuerpo de Delegados Inspectores, en cifras

Cargo	Prosecretarios administrativos (32)	Jefe de Despacho (29)	Oficial Mayor (30)	Oficial (27)	Total (118)
Totales					
Asistentes Sociales, Lic. en Servicio Social, Lic. en Trabajo Social	20	18	13	11	62
Lic. en Psicología	2	7	9	13	31
Abogados	6	-	5	1	12

Sociólogos	1	2		1	4
Lic. en Filosofía y Letras	1	-----	-----	-----	1
Lic. en Psicopedagogía	----	2	2	1	5
Lic. en Cs. De la Educación	-----	-----	1	-----	1
Maestro	1	-----	-----	-----	1
Contador	1	-----	-----	-----	1

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los listados de la Prosecretaría de Cámara, marzo, 2014

Todos ingresaron con posterioridad a 1960 fecha en que ya era requisito de ingreso tener título universitario expedido por universidad nacional. La formación de la mayoría de los profesionales se realizó previa a la reforma judicial. La formación de acuerdo con los principios de la CDN necesariamente fue o no parte de otras trayectorias en su desempeño profesional – académico posterior.

Interesa señalar que como parte de los resultados de la encuesta auto-suministrada a un grupo aleatorio de profesionales, se relevó que la Universidad donde se graduaron –sobre catorce casos-, exactamente la mitad correspondía a universidades públicas de las cuales la mayoría proviene de la UBA y solo una de la Univ. Nacional de Lujan y la otro mitad a universidades privadas. Este dato resulta novedoso, aunque no es representativo, dado que en Argentina la oferta de formación de grado universitario ha sido eminentemente estatal por lo que resulta sorprendente la paridad entre instituciones públicas y privadas¹³⁵ y daría cuenta de la extracción de clase de los agentes.

Respecto de la formación y actualización profesional se observa se concentra en temas que preocupan a los profesionales tales como violencia familiar, psicología forense, áreas penales, adicciones, etc. Solo en el grupo de las más jóvenes –hasta 50 años- se incluyen el curso de posgrado referidos a la especialidad del fuero.

La mayoría acredita el desarrollo de actividades de capacitación, cursos de actualización, congresos, jornadas, etc. Asistencia a: cursos, encuentros, jornadas y congresos, afines con

¹³⁵ Los otros profesionales se formaron en universidades privadas, -una en el exterior, se trata de centros de formación universitaria reconocidos: Univ. Kennedy, Museo Social Argentino, Univ. del Salvador, Univ. de Belgrano, Univ. Católica. Univ. Diocesana de Morón Adscripta a la Univ. Católica y la Univ. Central de Barcelona.

el campo laboral y vinculados con la disciplina en que se titularon. Se consignan referencias a temáticas cuyas menciones más reiteradas son: adicciones, violencia familiar, menores y fuero penal, mediaciones, terapia familiar sistémica, proceso penal y jóvenes, mediación familiar, criminología, violencia familiar, peritajes, intervención en problemáticas sociales en el ámbito comunitario y problemáticas infanto juveniles. La variedad y amplitud de temas de actualización se vincula con las temáticas que a lo largo de la historia asumieron estos juzgados cuya competencia se fue reconfigurando en los últimos años. En el pasado reciente atendieron cuestiones relativas a impedimento de contacto, menores víctimas, entre otras.

Este interés por su formación continua puede estar motivado por sus propias inquietudes y también, como ya mencionamos, porque la Cámara solicita actualización de los curriculum al momento de proceder a formalizar los ascensos a los cargos de Prosecretarios Administrativos y en ocasión reciente alteró el orden de antigüedad para dichos ascensos. Por ello la formación es considerada parte de las demandas institucionales aunque muy escasamente se diseñan ofertas institucionales en el propio Poder Judicial¹³⁶.

Respecto de los espacios que son posibles de recorrer en el desempeño como Delegadxs, según la antigüedad, refieren su inclusión en distintos Juzgados del fuero según sus denominaciones históricas: de Instrucción, Correccional y Sentencia. La mayoría de los Delegadxs ingreso a través de la Prosecretaria de Patronatos (actual de Asistencia Social) adonde permaneció un periodo de tiempo, desarrollando entrevistas con adultos y posteriormente solicitó la adscripción a un Juzgado de Menores. La existencia de alguna vacante permitió el tránsito hacia un JNM, adonde pueden haber continuado toda su trayectoria laboral. La permanencia o los cambios en el lugar de trabajo se vinculan con las formas instituidas por la Prosecretaria de la Cámara. También se observan traslados, a pedido de la Cámara, del Juez, o de los Delegadxs, que se relacionan con situaciones de malestar en el espacio de trabajo.

¹³⁶ Excepcionalmente en 2012 se desarrolló el “Taller de trabajo para una justicia con perspectiva de género” organizado por Programa de la oficina de la mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Sistema de Naciones Unidas en Argentina, considerado de carácter obligatorio.

Se observa que existe una ausencia de alternativas institucionales y escasa movilidad entre puestos de trabajo. La tarea que desarrollan es idéntica en todos los Juzgados más allá de las particularidades que asume la organización en cada uno de ellos. La permanencia en un mismo Juzgado es considerada como un indicador de la conformidad con la labor y el vínculo de los agentes en cada Juzgado.

e- Condiciones de trabajo

Los espacios físicos donde desarrollan su tarea los Delegados en cada JNM y en TOM son deficitarios. La Prosecretaría de Cámara no se ocupa por asegurar condiciones homogéneas o estándares mínimos, por lo que en cada Juzgado las situaciones son distintas. Se realizaron consultas a profesionales en todos los Juzgados, pero dado que en algunos casos las respuestas no fueron coincidentes se adicionó la observación directa.

Priorizamos como dimensiones a relevar: -acceso, dimensiones y equipamiento, -si se trata de espacios de uso exclusivo, capacidad de realizar entrevistas simultáneas y privacidad para el desarrollo de entrevistas, los profesionales incluyeron otras dimensiones como ventilación, iluminación, etc.

En ningún caso, en el espacio físico, contempla la posibilidad de realizar entrevistas por parte de equipos profesionales, la disposición general de los puestos de trabajo es de tres sillas. Un profesional y el joven con un adulto referente. No se privilegia la privacidad en las entrevistas.

Estas condiciones de trabajo son un aspecto naturalizado por las autoridades de las distintas instancias, aunque provoca persistente malestar en los Delegadxs. El debate acerca del uso compartido de los espacios es tributario del reclamo de menor presencia institucional, “vienen una vez a la semana, no se quejen” El argumento de la necesidad de desarrollar entrevistas en condiciones de privacidad, no ha sido considerado por las autoridades; ello se asocia a que en estas instancias, todo el proceso de declaraciones se realiza en oficinas amplias “actuarias” donde conviven numerosa cantidad de empleados que entrevistan, toman comparendos, testimonios, etc. de manera simultánea..

La pobreza del mobiliario, generalmente es provisto por el material que suelen descartar las otras oficinas, y la obsolescencia como la falta de equipamiento suelen ser asociados reiteradamente con la idea de que cada las Delegadas cumplen horario solo una vez por semana por lo que pueden elaborar los informes fuera de sede y “acomodarse” como coinciden en señalar en los JNM, TOM y la Cámara.

Estas condiciones, en algunos casos con mejoras, son persistentes desde la incorporación de estos agentes que trabajan y atienden personas y niños que presentan situaciones complejas que son planteadas en este marco. Al respecto la evidente desatención no solo repercute en estos trabajadores sino en los niños y familias a quienes dirigen su atención.

Las Delegadxs advierten que, en los últimos dos años, ha habido cambios que posibilitan contar con algún equipamiento, especialmente aluden a PC e impresoras provistas por la Prosecretaría de Asistencia Social que, aunque escasos, permiten realizar los informes más urgentes en sede. El resto se encuentra obligado a realizar estos informes, fuera del lugar de trabajo o de manera manuscrita.

En las ocasiones en que los profesionales concurren un día adicional no tienen donde ubicarse, más allá de la solidaridad y disposición que se observa entre los miembros del Cuerpo de Delegadxs en cada Juzgado.

A la descripción que surge de la consulta a Delegadxs, incorporamos el resultado del relevamiento realizado, que en su conjunto, que nos permite completar un relevamiento de situaciones vinculadas con el medio ambiente de trabajo. Se observan coincidencia entre los profesionales relativas a problemas por ruidos externos, problemas con la calefacción y refrigeración, ausencia de ventilación y déficit de luz adecuada. De tal forma que cuando se solicita que identifiquen una característica del lugar donde desarrolla su trabajo las respuestas se concentraron en señalamientos de carácter negativo: deplorable, inadecuado, falta de privacidad durante las entrevistas, poca ventilación, agobiante. A ello se suma que se observa que las condiciones de mantenimiento y limpieza no son óptimas. Escasamente se mostraron conformes con el “lugar asignado”, suele preponderar cierta resignación respecto de los evidentes déficits y las mejoras se atribuyen a demandas reiteradas. Se

observa que estos profesionales asumen que la concurrencia semanal es un factor que inhibe su capacidad de reclamo por las condiciones y medio ambiente de trabajo, pero suelen replicar los argumentos institucionales, aunque esas oficinas están ocupadas a diario por otros colegas situación que no se ha podido consolidar en reclamos compartidos.

En los TOM, la sede se Comodoro Py, se dispuso de un pequeño espacio, distante de las oficinas de los TOMs y con acceso por escalera, para uso exclusivo del Cuerpo de Delegadxs aunque sin PC. Dada la dificultad de acceso y la distancia de las mencionadas oficinas, es frecuente que los Delegadxs realicen las entrevistas en los pasillos o en el bar del 9no Piso.

Consultados acerca de cómo repercute su trabajo en la organización de su vida doméstica y vida familiar, la mayoría refiere que la flexibilidad horaria facilita organizar la tarea con los jóvenes asignados y de la vida cotidiana de estas mayoritariamente mujeres Delegadas e, inclusive pueden sumar otro empleo de escasa carga horaria. Sin embargo, destacan se trata de un trabajo que los afecta emocionalmente por el tenor de las situaciones que se ventilan. A partir del uso masivo del celular muchas de las Delegadxs reciben consultas en horario completo, inclusive los fines de semana. A partir de ello se consultó respecto de si utilizaron o requirieron servicios sociales/asistenciales por su condición de trabajador, solo dos respondieron haber recurrido a la ART con dispar opinión de los servicios que brindados. Pocos identifican procesos de enfermedad asociadas con el trabajo. Las numerosas respuestas afirmativas se relacionan con diagnósticos de deshidrosis, contracturas musculares, ansiedad. Son escasas las referencias relativas a accidentes de trabajo. También observamos frecuentes alusiones asociadas a situaciones de temor, estrés, y también robos dadas las zonas a las que concurren por el desarrollo de su trabajo. Estas situaciones se comentan como “anécdotas”, no son encuadradas como accidentes de trabajo, se presumen como parte del abanico de alternativas posibles. Aunque, a partir de este indicador, la Cámara fue confeccionando un mapeo de zonas peligrosas, tratamiento institucional que se ha dado a este tipo de situaciones.

En relación a los beneficios vinculados con el trabajo, se consultó acerca del uso de la Obra social del Poder Judicial de La Nación. La casi absoluta mayoría respondió que es su cobertura principal. Existe cobertura adicional (privada o sindical) relacionadas con el

mencionado pluriempleo o por el vínculo con cónyuges y/o parejas. Asimismo se observa que la mayoría ha incorporado a su familia en esta cobertura de la cual son titulares (Esposa, Pareja, hijos e inclusive nietos) lo que es entendido como una valoración positiva al respecto.

La vivienda que ocupan es propia en casi la totalidad de las profesionales, consideramos que ello se vincula con la estabilidad en el empleo, desde el ingreso, el acceso a facilidades de crédito en líneas específicos para empleados del Poder Judicial y el rango de los ingresos¹³⁷.

f- Organización y competencia: la delimitación de tareas

¿Cómo aprendió a hacer el trabajo de Delegado Inspector? Se observa un consenso generalizado respecto de la influencia de los pares en el desarrollo de la tarea, aun cuando el desempeño ha sido tradicionalmente eminentemente individual. También referencia al apoyo y asesoramiento con los diversos actores que intervienen (empleados, funcionarios) al interior del campo como de la trama institucional más amplia, SENNAF, CDNNyA. Y simultáneamente, a capacitaciones a través de organizaciones como el CEDIM y otras ajenas al Poder Judicial, la formación universitaria y distintas instancias de formación y actualización. También aluden al aprendizaje que se suscita en la experiencia y, especialmente, de los propios errores.

Como ya mencionamos, las tareas que integran el trabajo como Delegadxs la realización de entrevistas con niños y jóvenes en sede, en domicilio, en institutos, hogares, etc., constituye el núcleo central, seguido por entrevistas con miembros de los grupos familiares/convivientes en sede en domicilio y otros lugares e instituciones, inclusive en bares cercanos a la zona de residencia, cuando el barrio es considerado peligroso. Le siguen la mención de entrevistas con profesionales, operadores u otros agentes implicados en la atención de los sujetos. El creciente número de entrevistas es considerado por los

¹³⁷ Los empleados del Poder Judicial de la Nación, no están afectados por el descuento del impuesto a las ganancias que opera por recibo de sueldo en el conjunto de los empleados estatales, aunque su nivel de ingreso supera en la mayoría de los casos, el monto establecido como mínimo no imponible.

profesionales un indicador del aumento de trabajo, asociado con la conformación de los equipos que requieren de acuerdos, además de la coordinación con otros operadores y profesionales en instancias cara a cara, en pos de una articulación con programas de atención, escuelas, etc., el intercambio de opiniones orientados a la elaboración de estrategias compartidas. También la búsqueda y acceso a los recursos. Posteriormente se hace mención al trabajo de elaboración de informes. Incluyen otros aspectos que insumen tiempo, el conocimiento in situ del territorio asignado, las zonas donde se puede transitar o ingresar, la distancia que separa los domicilios de los lugares de encuentro, especialmente en zonas suburbanas y la implicancia personal, la responsabilidad individual y directa con las familias, se alude a la “soledad” en que se desarrolla la intervención, más allá de la organización de equipos.

Los Delegadxs, trabajadores sociales, consideran que la especificidad de su intervención está asociada con el abordaje directo, cara a cara con los chicos, la familia en contexto, que es la principal tarea delegada. Consideramos que, por un lado, ello se asocia con el lugar asignado a esta profesión en el imaginario social, en tanto construcción histórico social de esta profesión, a partir del cual operan las prácticas profesionales que otorgan significación a esta construcción, refuerzan o transforman esa percepción (Cazzaniga, 2001). Ello puede ser considerado un *habitus* en los términos aludidos o una estrategia que permite un proceso de reflexión sistemática que permite dotar de sentido y problematizar la demanda institucional en cada momento y reconocer al sujeto y sus particularidades. Porque entendemos que “la institucionalización del Servicio Social... depende de una progresiva acción del Estado en la regulación de la vida social... no solo a través del uso de la coerción sino también buscando el consenso en la sociedad, son creadas las bases históricas de nuestra demanda profesional” (Iamamoto, 2003: 36). En este marco es posible o no desplegar una orientación, una estrategia. Los instrumentos: la articulación de recursos, coordinaciones interinstitucionales y el trabajo en red, el acceso a la vida cotidiana, el reconocimiento de referentes significativos y con otros agentes involucrados con ellos, en contexto, son parte del papel que tradicionalmente esta profesión ha desempeñado en el proceso de producción y reproducción de la vida social, que no solo presenta una dimensión material sino que compromete las relaciones sociales que involucran la desigualdad, y el conflicto de los cuales los sujetos con los que trabajamos son un emergente. En este sentido, “La dificultad para establecer la competencia

especifica... conlleva un primer proceso de delimitación-exclusión... dificultades (que) no obedecen a dificultades de tipo personales sino que hablan de elementos estructurales en la profesión (y en los mandatos institucionales) que no están suficientemente explicitados... plantea incertidumbres” (Genolet et al 2005: 100).

La perspectiva de la protección integral en el marco de las leyes vigentes no clausura las tensiones persistentes cuando se trata de definir sus competencias y la orientación de sus intervenciones. Por el contrario, algunas de las entrevistadas consideran que se elude ese debate. Los “nuevos” conceptos no han sido suficientemente problematizados. Advierten que “Cuando se habla de “medidas socioeducativas”,...son sanciones, son una respuesta de la sociedad (policía-justicia-administración) a un acto de un adolescente considerado delito por la ley penal.... implica la restricción de derechos en la medida que involucra la asistencia a entrevistas, hablar de temas que a priori no está dispuesto o en algunos casos no le interesa y un esfuerzo por reflexionar y problematizar su realidad, entre otros aspectos” (Silva Balerio, Rosich, 2002: 2) .

Del relevamiento surge que, en la tarea que se les asigna la dimensión instrumental se impone. Las Delegadas suelen priorizar entre sus competencias el desarrollo de aspectos vinculares, de una mínima empatía, que consideran fundamental para poder abordar e incidir en la problemática que se presenta en este tipo de intervenciones caracterizadas por la selectividad del control social, desde una perspectiva que implica disminuir los niveles de vulnerabilidad de los sujetos a la violencia del sistema penal. Algunos Delegadxs de la misma manera que distintos autores prefieren hablar de promoción social, es decir que estas intervenciones tiendan a garantizar los derechos de las personas, que aunque consagrados legalmente no se efectivizan en sus vidas cotidianas”.

Así las actividades “de campo” concentran la atención/dedicación. De acuerdo a la cantidad de casos asignados y a la complejidad de cada uno de ellos se va pautando la intensidad y organización del trabajo, que depende de las necesidades y particularidades de los chicos asignados, “que no falte a la escuela”, “el horario de trabajo de los adultos referentes”.

¿Cómo conviven los componentes del control social y las intervenciones en términos medidas socioeducativas? Se observa que existen muchas posibilidades de caer en la trampa de un discurso educativo con prácticas de mero control. Los entrevistados consideran que la noción de sanción no es parte de la competencia de las tareas asignadas. Se trataría de una intervención considerada de “carácter educativo-socialque implica una propuesta ... tendiente a propiciar la inserción social del individuo y su circulación por los diferentes ámbitos barriales y sociales amplios” (Silva Balerio, Rosich, 2002: 5) Los Delegadxs consultados lo asocian con actividades relativas con elaborar una estrategia que persigue afectar la situación de partida, la articulación con organismos e instituciones involucrados en la atención del joven y una reiterada preocupación por los informes y el formato estandarizado, la presentación de informes debe dar cuenta / informar al juez sobre lo actuado en términos de “evolución” con una periodicidad mensual.

Consultados acerca de quien/es son responsables por dar indicaciones respecto a las tareas a realizar. Las respuestas son variadas pero coinciden en señalar que es frecuente recibir indicaciones por parte del secretario interviniente o del juez pero también de empleados judiciales que “llevan” la causa. Advierten que muchas veces las indicaciones se orientan a supervisar el contenido y la redacción de los informes. Algunos pocos dicen no haber percibido nunca este tipo de indicaciones. Es frecuente que en los informes se soliciten notas a órganos administrativos, lo que se asocia como un trabajo adicional para los empleados en las Secretarías Actuarias. Ello en ocasiones es resistido por dichos agentes que pretenden evitar la confección de los respectivos oficios judiciales y solicitan a los Delegadxs realicen esas peticiones de manera informal o directa ante las instituciones correspondientes. La mayoría considera que su trabajo es supervisado a partir del control de aspectos formales, si utiliza el formulario estándar, si cumple con los plazos de presentación.

Señalan que esa supervisión no resulta adecuada, la reflexión sobre la tarea se desarrolla en el espacio de intercambio con pares, los días de guardia o a partir de los encuentros que se generan en cada Juzgado o la formación que cada profesional desarrolla, o en el espacio del CEDIM. Estos espacios colectivos, de cooperación, para el desarrollo del trabajo son considerados necesarios para la reflexión y consulta sobre situaciones específicas o inclusive con recursos, se promueven por parte de los mismos profesionales. No todos los

Delegadxs comparten estas preocupaciones. La Cámara no ha desarrollado experiencias de formación, tampoco los JNM y los TOM. La instancia de reflexión es considerada como un contrapeso que permita solventar la complejidad y soledad del trabajo, compartir opiniones, analizando opciones y experiencias.

Varios Delegadxs refieren que en el desempeño de este trabajo han surgido problemas, con empleados o funcionarios de los Juzgados, niños/jóvenes y sus familias, otros agentes involucrados, autoridades de la Cámara. Señalan que han estado asociadas con la ambigüedad con que se ha planteado el mandato a la intervención. Algunos empleados y funcionarios desconocen u objetan el desempeño, inclusive relacionados con concepciones de la intervención a realizar. También surgen diferencias en la relación con órganos administrativos debido a dificultades de articulación o diferencias en las propuestas para el abordaje de problemáticas planteadas. También existen reclamos por el lugar de la concreción de las entrevistas¹³⁸.

La evaluación de desempeño en los Juzgados es considerada inexistente. Hasta hace algunos años existía una evaluación con ítems establecidos, numérica, que completaba el juez que ya no se cumple y que era considerada muy discrecional. Los propios Delegadxs consideran que su desempeño es bueno/muy bueno pero poco reconocido.

¿Cuál es el mandato que orienta la intervención profesional de los Delegadxs? Inicialmente, a partir del análisis de las primeras entrevistas y el procesamiento de los resultados del cuestionario auto suministrado a un conjunto de los Delegadxs, organizamos tres grupos con las respuestas de Delegadxs, de acuerdo a como definen: el contenido de su intervención, las relaciones que sostienen con otros agentes en la trama institucional en que se insertan:

- Un primer grupo, que reúne a quienes definen su trabajo con los jóvenes de acuerdo a los requerimientos operativos pautados y no cuestionan las demandas institucionales. Cumplen puntualmente con aquello que la institución les reclama, ello no incluye ningún proceso de

¹³⁸ En zonas alejadas o que no aseguren condiciones de trabajo consideradas seguras, algunos Delegadxs se entrevistan en bares o escuelas cercanas al domicilio familiar. Ello fue observado inicialmente y luego incorporado como una modalidad de trabajo, que es compartida por agentes de la SENNAF.

reflexión adicional, una respuesta considerada lineal, de allí la designación elegida para nombrarlos.

- Aquellos que aluden, de manera genérica, a las normas que pautan su trabajo y señalan aspectos que consideran conflictivos en el marco de las reformas legislativas. Advierten tensiones y desacuerdos, pero su expresión y malestar no sobrepasa la queja entre colegas.
- Por último, quienes aluden a la los propósitos que guían su intervención privilegiando la relación que se establece con los sujetos con quienes se implican, se observa interés por incidir en la trama institucional, con escasa incidencia.

El primer grupo, pragmáticos y reglamentaristas El mandato está concentrado en los procedimientos, la tarea de seguimiento tutelar mensual de jóvenes acusados dispuestos por el Juzgado de Menores o el TOM estén en libertad o en institutos. La tarea central es contar con el conocimiento que permite informar, la elaboración de informes se realiza conforme modelo definido por la Cámara. No hay objeciones a los pedidos y señalamientos que realiza la “superioridad”. Se concentran en atender los casos asignados por zona sea por pedido del JNM o de los TOM.

En el segundo grupo, asimilados al paisaje La vigencia de la ley 22278, que implica el desarrollo de actividades de acompañamiento a los jóvenes e información a la instancia judicial correspondiente es central para orientar su trabajo. Se alude a que existiría un rol asignado, en el Reglamento de la Jurisdicción, que presentaría significativas lagunas referidas al paradigma de la Protección Integral de la Infancia. Entre las respuesta se incluye que se trata de un trabajo de bisagra entre dos discursos y sus respectivos requerimientos, ello implica aspectos relativos a los alcances de la intervención, entre “control y protección”. Conviven ideas referidas a la prevención de la delincuencia juvenil y la reincidencia, a través de la orientación y control del joven y su familia por un lado y nociones relativas a promover la protección del menor a través de activar los mecanismos clásicos de inclusión: la escuela, las actividades de capacitación para el trabajo, etc. Se alude de manera persistente al propósito general de “reinsertar a los jóvenes que presentan una situación de exclusión social” e informar.

El tercer grupo, comprometidos y preocupados El mandato a la intervención hace referencia al desarrollo de un abordaje integral del joven y su grupo conviviente y/o de

pertenencia a partir de una situación emergente –conflicto transgresión a la ley-, una intervención de carácter socioeducativa. También aluden a articular institucionalmente una trama que acompañe este proceso y a conocer la situación que vivencia el sujeto, relevar problemáticas, conflictos, y la capacidad de elaborar estrategias a co-construir con el sujeto. Incluye la noción de mediación y búsqueda de herramientas/recursos para que los sujetos puedan proyectar-se. Alude a que el conocimiento de la situación familiar, social, educativa del joven es útil como punto de partida del proceso de intervención a fin de promover la protección del joven, el cumplimiento de sus derechos y en caso de que el grupo familiar lo requiera, brindar también a ellos recursos de asistencia y protección necesarios. En este grupo se expresa el interés por el trabajo con niños, el compromiso con el otro y con la sociedad de la que se forma parte. Consideran que esta intervención de carácter socioeducativa es productiva en el sentido amplio en el marco de la justicia penal juvenil actual.

Compleja y contradictoria, así podemos caracterizar inicialmente la intervención de estos profesionales, anclada en una institución de control social que promueve una intervención de carácter socioeducativa, en el marco de la perspectiva de la Protección Integral. Requiere conocimiento, creatividad y habilidad para responder sobre cuestiones institucionales y específicas con los niños y su familia, una intervención situada también en esta doble “jurisdicción”. Observamos que los trabajadores sociales incluyen generalmente en sus discursos una preocupación por promover procesos de transformación como parte de su intervención.

Los profesionales distinguen como prácticas que motivan satisfacción en su trabajo: el contacto y relación con los jóvenes y sus grupos familiares, el desarrollo de estrategias planteadas en conjunto, el trabajo con otros equipos técnicos, en red. La posibilidad de generar propuestas innovadoras. El diálogo, el logro de objetivos, el reconocimiento de las familias. La potencia del trabajo con el otro, pensar, descubrir posibilidades, superar obstáculos. Son imágenes que permiten recuperar aspectos de la intervención y vocacionales de los profesionales consultados y sobrepasan la intervención que está pautada como mandato institucional.

También connotan negativamente otras dimensiones, consideradas burocráticas, la confección de planillas estadísticas, la elaboración informes reiterativos, la obligación de concurrir a los TOM. Aquello que expresa la rigidez institucional. La escasez de espacios para reflexionar sobre aspectos inherentes a la tarea, el riesgo de automatizar las respuestas de los agentes frente a las condiciones sociales adversas de los jóvenes, que presentan una acumulación de desventajas. Se reitera la ausencia de un encuadre digno para las entrevistas, las indicaciones de personas sin formación en ciencias sociales, el sentido que se otorga al deber ser, las prenociones de algunos agentes.

Un reclamo relacionado con la noción de respeto (Sennett, 2003) alude al reconocimiento de su propio espacio de inserción institucional y también se relaciona con las personas que son sujetos de su atención.

Los Delegadxs consideran que su trabajo es escasamente reconocido por los agentes y funcionarios con quienes trabajan. Existe mayor reconocimiento por parte de funcionarios en los Juzgados que en los TOM, con cierta ambivalencia. Sí encuentran respaldo entre colegas y pares de trabajo. Se observa que identifican el mayor reconocimiento por fuera de la institución, con los jóvenes con los que trabaja, y con las familias de los jóvenes y sus grupos convivientes y otros profesionales.

También señalaron la impotencia frente a la reincidencia de algunos chicos, la impotencia frente a pronósticos desfavorables. La dificultad frente a los organismos administrativos que no garantizan el cumplimiento de lo que debieran para con el joven, la falta de recursos. No tener devolución del resultado o del proceso de trabajo que se realiza con ellos a nivel de los JNM y TOM. Las malas experiencias o las intervenciones consideradas fallidas.

Este sintético recorrido nos permite recuperar aspectos relativos a la organización del espacio socio-ocupacional que se conjugan en la dinámica de la intervención profesional de los Delegados Inspectores de Menores, un conocimiento de los modos, recurrencias, prácticas, discursos y opacidades en el ejercicio cotidiano en este campo.

Retomamos en el último capítulo el análisis de cuestiones aquí planteadas.

CAPITULO 4. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Como ya señalamos que este estudio se concentra en un entramado institucional que se estructura y delimita en la distinción de un sujeto específico: personas consideradas: niña/os, adolescentes y jóvenes. “Grupo” que hasta el 2009 se configuraba hasta los 21 años de edad y que desde este año se integra con personas hasta 18 años habida cuenta de la modificación en la legislación nacional referida a la mayoría de edad.

En este capítulo dedicamos especial atención a definir quiénes son los sujetos a quienes se orienta la intervención en este campo. Entendemos que esta breve presentación resulta útil y necesaria para enhebrar prácticas e intervenciones con los sujetos a quienes afectan, aunque no es nuestro propósito el análisis pormenorizado de esta población. El contenido de este capítulo reúne el resultado de un trabajo de reelaboración teórica y el relevamiento directo de la población, el tratamiento de información cualitativa y estadística, a partir de información de fuentes primarias y secundarias, las primeras recuperadas en mi propia inserción en el campo.

Encontramos una diversidad de concepciones sobre la categoría de sujeto, su definición es polisémica. Más que una definición absoluta, entendemos que el concepto de sujeto se configura como categoría de análisis que se construye en el espacio público y que permite dar cuenta del cómo se está configurando la sociedad desde las tensiones generadas por las relaciones de poder. (Torres Victoria, Castro Gómez, 2009) Estas autoras citan a Heller y Butler quienes afirman que ese sujeto, en permanente proceso de resignificación, se convierte en un espacio de disputa política permanente, por lo que no se podría hablar de un sujeto universal, sino situado.

En este campo, es posible relevar la construcción de un sujeto al que se define de distintas maneras. Ese ‘otro’ puede contingentemente adoptar las características dadas por quien lo mira y lo busca nombrar. Un otro, subordinado o jerarquizado, al que se le puede atribuir virtudes o vicios, difícilmente se le otorgará un estatuto considerado neutro. Consideramos que la mirada sobre el otro, en este caso, se construye a partir de una confluencia de imaginarios socioculturales.

Los menores de edad, acusados de delitos ocurridos dentro de las fronteras de la ciudad de Buenos Aires, otrora territorio nacional, son los sujetos que concentran nuestra atención. Pero, ¿por qué sujetos? Como decíamos esta designación se contrapone de manera directa a su predecesora en tanto impone que los niños adolescentes y jóvenes son –en el marco legal vigente- personas a las que más allá de su edad, se les reconocen las mismas garantías y derechos jurídicos al resto de la población. No quedan ya librados al arbitrio de la tutela judicial, son (sujetos) titulares de garantías y derechos, se trata por esa vía de reconocimiento de su persona que se materializa a través de la ley y una serie de dispositivos institucionales que pretender asegurar instancias que le reconocen y restituyen capacidad y no los confina a un tratamiento que implicaba su cosificación.

Cuando decimos que se contrapone, hacemos referencia a los procedimientos a los que aluden autores como Foucault y Derrida (en Healy, 2004), quienes señalan que a través de estos recursos discursivos se evidencia una estructura dualista y jerárquica –mayor / menor- a través de la cual se privilegia un término sobre otro y que ello, asimismo, refiere a como se opacan las diversidades existentes en el seno de las mismas. Su deconstrucción pretende poner al descubierto las oposiciones binarias por las cuales se tiende a simplificar la comprensión de la realidad social.

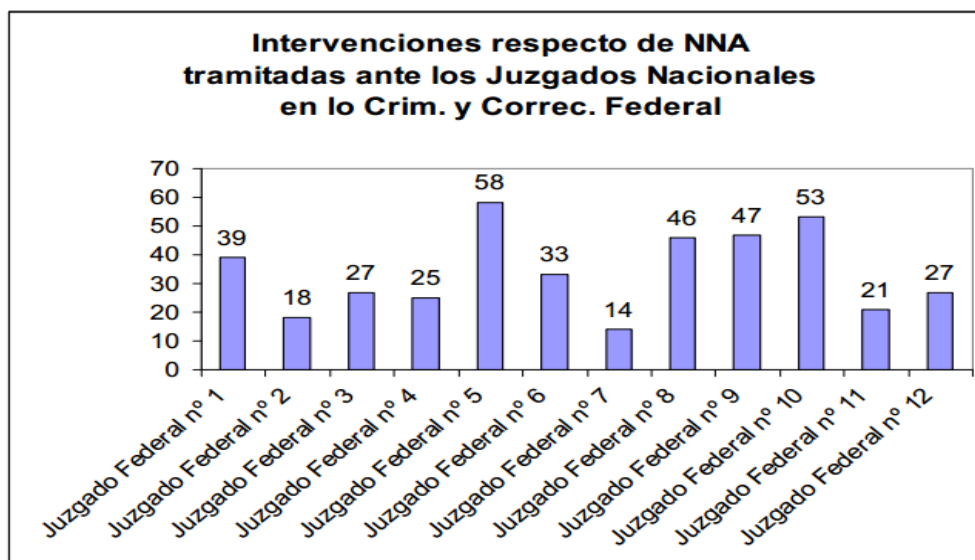
En el campo jurídico, la noción de menores/ sujetos ha sido parte integrante de las configuraciones que sustentan la organización de fueros de la llamada justicia especializada, en este caso en relación a que los menores de edad requerirían de especiales competencias-conocimiento-formación para su atención. Ello fue reafirmado en la ratificada CDN y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha considerado que “... Si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de los niños el ejercicio de aquellos supone, por las condiciones especiales en las que se encuentra los menores, la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías” (en Terragni, 2009).

La competencia y la especialidad es otra tensión que presenta distintas expresiones. La justicia federal consolidó un argumento para sostener su competencia respecto del

juzgamiento de menores imputados, mayoritariamente de conductas previstas en la ley 23.737 (de estupefaciente), por lo cual también dicha Cámara Federal organizó un cuerpo de profesionales designados como Delegadxs Judiciales que desarrollan intervenciones con estos menores de edad. Los Juzgados Federales para la gestión judicial de causas seguidas a menores de edad, incorporaron también profesionales “de las ciencias sociales”. Al respecto, Terragni señalaba que la Cámara de Casación Penal, que ha reconocido y desarrollado desde sus orígenes la jurisdicción especializada con relación a personas menores de edad, paulatinamente desarrolló una interpretación que fue restringiendo los alcances de la justicia minoril a favor de la justicia federal y más recientemente de la justicia nacional en lo penal económico.

Gráfico N° 10 Síntesis: Estadísticas de Intervenciones de los Juzgados Federales - Año 2012.

Cuadros de Estadísticas de Juzgados Federales – Año 2012.



Las cifras corresponden al período 2012, para el total de los NNA que tuvieron legajo judicial en los Juzgados Federales de la Capital Federal.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos elaborados por la BGD a mayo 2013, con el título Síntesis: Estadísticas de Intervenciones de los Juzgados de Menores y Federales - Año 2012.

A su turno la Corte Suprema de Justicia, según este mismo autor, había resuelto que ante dos magistrados entre lo que se planteara conflicto de competencia, la elección debía hacerse ponderando cuál de ellos se encontraba en condiciones de alcanzar la protección integral de sus derechos. Sin embargo existe jurisprudencia acerca de que la aplicación de los principios en materia de menores no puede confundirse con la competencia. Estas decisiones podrían constituir una incursión orientada al debilitamiento del principio de especialidad – en este caso fundada en las características especiales de los sujetos- que si se correlacionara con los debates relativos a la baja de la edad de imputabilidad podría tener consecuencias muy relevantes.

Consideramos que el reconocimiento de los jóvenes como sujetos y la especialización del justicia a partir de ello constituye es una llave con capacidad de re direccionar los debates en este campo. Un proceso que expresa concepciones con capacidad para incidir en la reconfiguración del campo.

a- La juventud como condición social (Chaves 2006)

Los niña/os, jóvenes y adolescentes constituyen un enclave peculiar, nuestro universo. Con esta afirmación aludimos a una primer y esquemática periodización que opera como supuesto que representa a los niños/as como aquellos que se encuentran en edad de cursar estudios primarios; a adolescentes a quienes transitan estudios secundarios y jóvenes a quienes ya cuentan con una edad superior a los 17/18 años y que continúan estudiando o trabajan, según la delimitación de la trayectoria típica establecida a partir del ideario escolar. Esta periodización simultáneamente no puede ser escindida de la idea de que las trayectorias se encuentran fuertemente condicionadas por la posición que los distintos estratos ocupan en la estructura social que tiñe opciones y proyecciones: los itinerarios de los sujetos y sus grupos convivientes.

Esta periodización se corresponde escasamente con la referencia que los medios y la sociedad utiliza con frecuencia para designar a los chicos que atraviesan situaciones sociales que son objeto de tratamiento judicial en el fuero penal. En esos casos, la referencia es que se trata de menores a veces jóvenes simplícadamente. Difícilmente los

acusados de delitos sean nominados como niños, designación que se reserva a aquellos que cumplen con el imaginario instituido de la infancia. Ello es asociado frecuentemente y con énfasis en los últimos años, con el reclamo de mayor seguridad ciudadana y el tratamiento mediático que el problema de la infancia “delincuente” (Oyhandy: 2006) adquirió en los medios masivos de comunicación, que usualmente tratan, en general, como jóvenes o menores a esos chicos, independientemente de su “edad”.

Por ello es que resulta necesario reflexionar acerca de cómo definir este “grupo”, qué ideas y con qué contenidos pensamos el concepto de juventud. “Para que exista la juventud, deben existir, por una parte una serie de condiciones sociales (normas, comportamientos e instituciones que distingan a los jóvenes de otros grupos de edad) y, por otra parte, una serie de imágenes culturales (es decir, valores, atributos y ritos asociados específicamente a los jóvenes). Tanto unas como otras dependen de la estructura social en su conjunto, es decir, de las formas de subsistencia, las instituciones políticas y las cosmovisiones ideológicas que predominan en cada tipo de sociedad.” (Feixa, 1998: 18) Distintos autores locales entre los que se destacan Braslavsky 1986; Margulis, 1996 y Chaves, 2006, señalan que: la emergencia la juventud como objeto y tema en los estudios de las ciencias sociales es frecuentemente asociado con los cambios sociales en Argentina de los últimos treinta años, a diferencia de lo ocurrido en Europa y USA, sin por ello negar la existencia y el peso que este tema alcanzó en periodos inmediatamente anteriores.

Entenderemos a niñez, adolescencia y juventud en cada caso como un conjunto de actitudes y patrones de comportamiento aceptados para sujetos de determinada edad, en relación a la peculiar posición que ocupan en la estructura social (Mekler 1992 en Chaves 2006:11) La distinción en la edad, más que un límite fijo, constituye un nudo de tensión en relación a como es vivida, esta condición social en un marco de evidente diversidad y desigualdad. No nos detendremos en su definición como grupo generacional, en esta tesis.

La naturalización del sentido que los sujetos le otorgan a las edades, las expectativas sobre las mismas, las prácticas que se suponen corresponden y los estereotipos que se generan sobre dicha edad son, (.....) parte de lo que se nombra como el procesamiento sociocultural de las edades (Chaves 2006: 12): La cronologización de la vida y los procesos de institucionalización asociados.

La juventud, “no surgió de la nada: es posible rastrear su origen en el largo proceso de transición del feudalismo al capitalismo, así como en diversas transformaciones producidas en el seno de las instituciones” (Feixa, 1998:37) entre los que este autor destaca, por su relevancia, a la familia, la escuela, el ejército y el trabajo.

Es en este sentido que entenderemos a la adolescencia y juventud, como un concepto relacional, históricamente construido, cambiante, que se reproduce en lo cotidiano, que implican relaciones de poder con otras generaciones, al interior de las familias, de las instituciones, etc. Asimismo este singular procesamiento en etapas da cuenta de una fuerte connotación relativa a su transitoriedad.

Algunos autores también consideran a la juventud como una etapa de moratoria social en términos de que en ese especial momento los jóvenes pueden “suspender” sus responsabilidades para formarse o desplegar actividades que le permitan generar un período de capitalización, en términos de educación, y en tanto paulatinamente alcanzan el status de adulto. Esta idea se asocia estrechamente a un mandato social del cómo es/debe ser el joven por fuera: su imagen, salidas, gustos, ropa, etc., tanto en relación a los procesos de crecimiento y formación. “Se parte de una comparación en perspectiva adulto céntrica (...). Esta perspectiva conduce a perder de vista la condición juvenil como construcción social, quedando oculto bajo el manto de la naturalidad del fenómeno que estas construcciones son discursos altamente ideologizados (...): *se es joven de tal manera* (Chávez, 2005:14)

b- ¿Quiénes son esos chicos? Condiciones de existencia y algo más

Pretendemos describir, distinguir al entender de Bourdieu, la composición de este grupo. Presentamos una caracterización de esta población a partir del análisis de población de niña/os, adolescentes y jóvenes con quienes desarrolle intervenciones profesionales en un Juzgado Nacional de Menores en el fuero Penal y simultáneamente a los TOM en el mismo fuero y jurisdicción; durante los años 2010-2013, por lo que se dispone de información suficiente a propósito de este estudio.

Nuestro propósito fue analizar información extraída de entrevistas, no en términos de datos y características que se atribuyen a estos niño/as, adolescentes y jóvenes sino como particularidades que se corresponden a las situaciones, entornos, en que ellos se encuentran (Allerbeck-Rosenmayr, 1979). Una construcción situada que se inscribe en el marco de las continuidades y transformaciones aludidas, visiones que asocian a estos jóvenes como parte de una población en situación de vulnerabilidad social o como jóvenes en riesgo, peligrosos, en conflicto con la ley, herederos de un pensamiento que atravesó los debates en los últimos 100 años, no solo en el fuero penal juvenil, sino como una construcción social y cultural persistente.

Donde viven, la inscripción territorial. El desempeño laboral de los Delegadxs presenta una clara demarcación territorial. Las asignaciones de chicos acusados de delitos¹³⁹ cometidos en la ciudad de Buenos Aires se realiza según su domicilio que se consigna en la caratula de cada expediente. En este caso se trata de niños y jóvenes con residencia en el radio correspondiente a las comisarías 10, 11, 12, 13 y 38 de la ciudad de Buenos Aires, que corresponden con las comunas 5, 6 y 7 de la CABA y/o a una zona de la Municipalidad de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, delimitada por: Camino de Cintura hacia el Oeste -sentido inverso a la ciudad de Buenos Aires-, y excluye el barrio de Ciudad Evita y los barrios que emplazados enfrente (sobre la Av. Crovara). Incluye las localidades de Isidro Casanova, Laferrere, Rafael Castillo, González Catán hasta Puente Ezcurra y tiene “proyección” sobre las localidades contiguas –siempre hacia el sur oeste, Virrey del Pino, etc.- que se asientan a ambos lados de la Ruta 3, aunque el límite formal de esta jurisdicción se encuentra en el Km. 32 de esa misma Ruta.

Cabe señalar que el conocimiento y trabajo en estas zonas, en ciudad de Buenos Aires y en el Municipio de La Matanza -Pcia. De Buenos Aires-, data desde 1992. Este plazo de trabajo en los mismos barrios facilita observar situaciones que pueden ser consideradas de mayor permanencia y otras que han variado, tanto en los aspectos de infraestructura, más claramente georeferenciados, como en lo que respecta a distintas situaciones que presentan los chicos y los grupos convivientes.

¹³⁹ No es posible en este artículo profundizar sobre aspectos relativos al tipo de delitos de los que se acusa a estos jóvenes.

En primer término resulta relevante señalar algunas diferencias y similitudes entre las zona de ciudad de Buenos Aires y Provincia. En ambos casos, se trata de zonas que han desarrollado importantes cambios en los últimos años. Procesos de fuerte urbanización una mayor concentración de población en el mismo territorio y un deterioro del lazo social (Auyero, Berti, 2013) y un sentimiento de “pérdida del barrio” (Wacquant, 2007). En algunos casos asociada con la movilidad y circulación de las familias y también a un retraimiento – aislamiento del espacio público al privado asociado a procesos de seguridad / inseguridad. (Daroqui, 2003).

En ambas jurisdicciones, CABA y provincia de Bs. As. Existen pocas referencias a instituciones que concentren la participación del barrio. En general, las actividades agrupan a la población que incluyen: la escuela, la iglesia, el club. No se identifican liderazgos / instituciones / actividades con una convocatoria más amplia asociada con el interés de fortalecer el lazo social, la identidad barrial, en el espacio público, en las zonas bajo estudio¹⁴⁰.

En la CABA se integra con los barrios de Almagro, Boedo, Caballito, Parque Chacabuco, Flores y Bajo Flores que incluye el Barrio Rivadavia I y II y una pequeña parte de la Villa 1-11-14. En estas zonas existe una serie de instituciones estatales como escuelas, centros de salud y hospitales y también una serie de servicios culturales, deportivos, relacionados con el tiempo libre dirigidos a esta población etaria que pretenden dotar a estas zonas y población de infraestructura y servicios específicos. Ello implica por una parte conocer la existencia de dichos servicios sociales y ofertas y por otra establecer el acceso que en ocasiones es diferenciado.

En La Matanza, podría referirnos a esta zona en términos de territorio de relegación (Wacquant, 2007). En esta zona existen crecientes pero exiguos recursos escolares básicos, tanto sea el número limitado de vacantes como en la calidad de los servicios que se ofertan. Los servicios sociales y de salud son también escasos y limitados y los recursos culturales y deportivos institucionales son casi inexistentes. Si bien se advierte un creciente número de organizaciones e instituciones privadas que con apoyo estatal despliegan actividades,

¹⁴⁰ El fenómeno de las murgas en la CABA puede ser considerado una excepción.

son pocos los casos en se observa permanencia en el tiempo y en el territorio, las excepciones están frecuentemente asociadas a instituciones religiosas, el caso paradigmático es la Obra Padre Mario Pantaleo en la localidad de González Catán.

En esta zona se observa claramente los límites de la cobertura de servicios considerados de carácter universal, son más evidentes los procesos de selección en un territorio donde las necesidades son evidentes y la presencia del Estado no alcanza a cubrir las demandas de la población respecto de servicios considerados básicos.

Se han desarrollado sucesivamente en el tiempo y dependientes de las distintas jurisdicciones: nación, provincia y municipio una variedad de recursos y programas de carácter focalizado dirigidos a esta población. Si bien se observa una inversión creciente ello no se traduce de la misma manera en la percepción relativa al fortalecimiento de instituciones de política social de corte universalista y las prestaciones y servicios de salud y educación en muchos casos son considerados como deficitarios.

Ello ha dado lugar a “formas de adaptación”, estrategias de sobrevivencia de corte individual y comunitaria, una diversidad de estrategias, sujetos “cazadores” Merklen (2000 y 2005) ilustra así la lógica de acción individual y colectiva que orienta la vida cotidiana e implica el riesgo y la incertidumbre como constantes. Tanto los grupos familiares como los agentes profesionales nos convertimos en una suerte de cazadores a la búsqueda / captura de bienes y servicios escasos y remisos en el territorio, en la pretensión de aumentar el grado de desfamiliarización del bienestar¹⁴¹.

La inscripción territorial también da cuenta de aspectos vinculados a la cercanía centro periferia, la existencia de condiciones materiales, asfalto, luz, agua, cloacas, los servicios salud, educación y también otra inscripción de tipo política jurisdiccional: los recursos de la CABA son muy superiores a los recursos de la Pcia./ Municipalidad.

¹⁴¹ Martínez Franzoni (2005) señala como característica en los sistemas de bienestar en Latinoamérica que las estructuras de reproducción social y la satisfacción de necesidades se han situado mayoritariamente en la constitución de las familias y el trabajo doméstico.

La provisión de agua y cloacas es casi inexistente. En esta zona se observa un sostenido esfuerzo en relación al asfalto de calles que facilita la conectividad con el centro de cada localidad. El avance en la telefónica se vio limitado por la frecuencia en que el cableado “desaparece” y ampliamente rebasado por la telefonía digital, que resulta de acceso imprescindible y casi masivo.

La zona tiene una comunicación radial que converge desde el Km. 29 de la Ruta 3 hacia la CABA por la misma Ruta por San Justo o por Ruta 21 hacia la Autopista Ricchieri. Asimismo existe en único ramal ferroviario, el Belgrano Sur que conecta la Estación Buenos Aires, Pompeya, con González Catán por una parte y un pequeño ramal a Rafael Castillo, de escasa frecuencia, que no es de uso habitual por la población de la zona por problemas de seguridad que el ferrocarril presenta desde hace casi treinta años. El transporte preeminente es al automotor que es muy oneroso en tiempo y costos, asimismo se ha desplegado una enorme red de combis truchas con rumbo a la estación de Once en la CABA y de remises llamados comunitarios que imitan los recorridos de algunos colectivos con pésima y demorada frecuencia. Un viaje de Catan a Tribunales puede demorar un mínimo de dos horas y media y un costo promedio de \$ 40 pesos ida y vuelta (2014). Este dato es relevante en tanto esta zona ya no constituye un enclave industrial, su población suele trasladarse masivamente, a diario.

Dentro de La Matanza es posible, asimismo distinguir la zona lindante con la CABA, el primer cordón metropolitano que corresponde a las localidades de Ramos Mejía, Villa Luzuriaga, San Justo, Villa Celina, Tapiales, Tablada por un lado, donde se localizan y concentran la administración pública, las áreas de gobierno y los servicios centrales. Y la “segunda zona”, donde se concentra nuestra atención, el último bastión, diferenciado por la menor dotación de recursos de salud -aun cuenta con un solo Hospital para una población de más de un millón de personas¹⁴²-, donde desde hace pocos años se crearon subdelegaciones municipales en LaFerrere y Catan, también se instalaron algunas dependencias Judiciales y se aumentó la dotación de servicios en salud destinados especialmente a atención primaria, Centros de Preventivos Asistenciales. También

¹⁴² En total la población de La Matanza oscila en alrededor de 3.000.000 de habitantes. Recientemente se inauguró otro hospital pero no cuenta aún con recursos ni infraestructura para dar respuesta a las demandas de salud de la numerosa población.

dependencias de Acción Social con distintas sedes del Programa Envión, Casa Joven y otros establecimientos de educación primaria y secundaria.

Esta descripción aunque sucinta pretende avanzar sobre las condiciones materiales que constituyen el punto de partida, horizonte y paisaje de la vida para este grupo de personas, los jóvenes. En el esquema que propone L. Mayer (2009) quien en su estudio respecto de cómo viven y piensan los jóvenes hace foco en la dimensión de la integración o no al sistema, entendiendo por ésta, la educación y luego el trabajo, en términos de interrogarse por el lazo social y los déficit de la política a la hora de ensamblar.

Provincia o Capital. En los últimos años se observan dos tendencia – la baja de la mayoría de edad significó un descenso de jóvenes acusados con residencia en la provincia de Buenos Aires. Podríamos inferir que a mayor edad, mayor desplazamiento. U otra hipótesis relativa a que en los últimos años, los delitos protagonizados los jóvenes, ocurren en zonas cercanas a su propio domicilio, es una práctica que se enlaza en la cadena de experiencias (Kessler, 2004) como el consumo de drogas (Duschjatzky, Corea (2013). De tal manera que a diferencia de años anteriores la mayor cantidad de niños acusados reside en la CABA y no en la zona de Provincia de Bs. As que me ha sido asignada. Ello implica desestimar el imaginario relativo a que los delitos denunciados en la CABA tienen por protagonista mayoritarios a jóvenes residentes en otra jurisdicción, “del conurbano”. En este caso los datos estarían indicando que ese desplazamiento es poco relevante, por lo menos en lo que refiere a la información que fue utilizada como base de este estudio¹⁴³.

Nacional o extranjero. Se registran escasos jóvenes con nacionalidad extranjera. La mayoría han nacido y vivido en la zona del AMBA. Datos que contradicen un prejuicio frecuente.

¹⁴³ Existe información referida a en que otras zonas se observa mayor movilidad. Es el caso especialmente de la línea que une el llamado “Tren Blanco”, que nació en medio de la crisis del 2001 y que traslada cartoneros provenientes de la localidad de José León Suárez. Servicios similares fueron desactivados, entre 2007-2008.

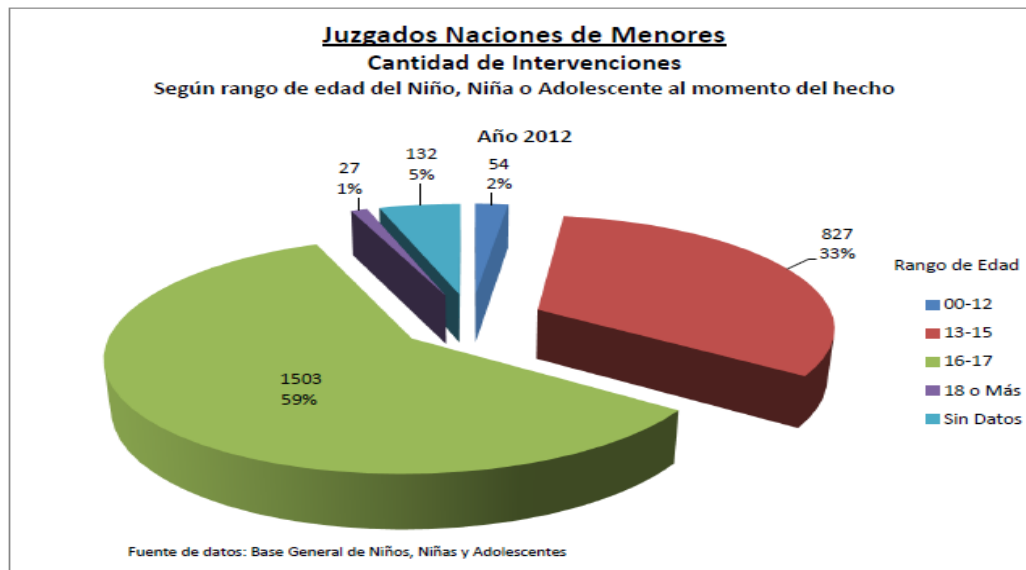
Cuadro N° 5 Intervenciones según la nacionalidad y sexo de los acusados:

• ARGENTINOS	
Sexo Masculino:	1339
<u>Sexo Femenino:</u>	<u>258</u>
Sub-Total:	1597
• EXTRANJEROS	
Sexo Masculino:	123
<u>Sexo Femenino:</u>	<u>10</u>
Sub-Total:	133
La BGD no aclara tiempo de residencia en país.	
• SIN DATOS	
Sexo Masculino:	172
<u>Sexo Femenino:</u>	<u>41</u>
Sub-Total:	213
Total General:	1943

Fuente: BGD, NNyA, en el Resumen General – Materia Penal – publicado, datos año 2012

La edad: Las edades oscilan entre 13 y 18 años de edad. Los niños menores de 15 años, son considerados no punibles, se da continuidad a la intervención judicial en situaciones excepcionales. No se trata de un numero relevante pero si sostenido, mayoritariamente niños en situación de calle. En estos casos se realizan un número acotado de entrevistas (una o dos) que permiten realizar una derivación y el pedido de intervención a los organismos administrativos correspondientes.

Gráfico N°11 Cantidad de Intervenciones de los Juzgados Nacionales de Menores, según rango de edad, al momento del hecho



Fuente BGD NNyA, año 2012.

Género. Es escasa la presencia femenina en este fuero. En estos casos resulta relevante señalar que estas causas suelen tener una característica diferente, temas relativos a peleas, generalmente en la proximidad de las escuelas; lesiones / amenazas y en ocasiones asociadas al trabajo de venta en la calle. No suelen presentar causas previas, se trata de intervenciones puntuales. La diferencia en número y carátula es significativa.

No haremos ninguna referencia acerca **de la religiosidad** ya que escasamente aparece como centro de interés o atención, en este grupo.

De grupos familiares y convivientes. Los grupos convivientes y/o familias reconocen que para solventar las necesidades y cuidados de los niños requieren de capacidad para proveer ingresos y también otro tipo de recursos. Esto es, la producción del bienestar implica distintos requerimientos y disponibilidad de tiempo y trabajo al interior de las familias. La mayoría de estos grupos familiares presentan una fuerte presión dada la existencia de más de un hijo dependiente no solo en el aspecto económico. Requieren, a partir de la intervención judicial, tiempo adicional que reclaman estas instituciones.

“Ser ciudadano más allá de sus definiciones formales, consiste en el acceso a un conjunto de garantías sociales cuyo sentido es el de ofrecer una plataforma mínima de seguridad que busca equilibrar los desniveles sociales”. (Reguillo 2003:9). De tal manera, la ciudadanía “en operación” requiere explicitar que individuos (...) “independientes” son a la vez cuidado-dependientes; es decir, interdependientes a partir de prácticas de asignación de recursos que tienen lugar en (o a través de) distintas instituciones sociales” (Martínez Franzoni, 2005:51).

La misma autora señala que las distintas esferas de operación de ciudadanía, de producción de bienestar (en tanto arreglos sociales históricamente contruidos a partir de la combinación de trabajo no remunerado/arreglos familiares, ingresos monetarios/ mercados laborales y servicios públicos/ políticas sociales), no se articulan por sí mismas, sino mediante decisiones tomadas en el marco de estructuras de oportunidades e interdependencias familiares. En este sentido, la familia endogeneiza las “fallas” del mercado y la presencia o ausencia de apoyo estatal a través de una expansión o reducción de su papel en la producción de bienestar. Los grupos familiares constituyen un locus, una instancia central, del régimen de bienestar –especialmente- en esta población.¹⁴⁴

Este trabajo no remunerado continúa mayoritariamente a cargo de mujeres, incluso en los hogares de doble proveedor. Las configuraciones familiares son diversas: a cargo de parejas de dos adultos padres biológicos, madre o padre con nueva pareja o un solo adulto referente. Es más significativa la presencia de hogares monoparentales a cargo de mujeres¹⁴⁵. Es frecuente que cuando los padres se separan la madre sea quien permanece al cuidado de los niños o la abuela¹⁴⁶. En la mayoría de estos casos la relación con el progenitor no conviviente es exigua.

Se observa mayor movilidad de los niños y aceptación social respecto de estas elecciones que las instancias judiciales también han comenzado a respetar a la luz de las normas vigentes. Un número creciente de jóvenes eligen con quienes convivir: familiares,

¹⁴⁴ La citada autora ha desarrollado sus estudios con referencia a América Latina.

¹⁴⁵ Según el Censo 2010 se verificó un incremento respecto del censo 2001 de mujeres jefas de hogar. En el total de hogares se observó un incremento de la jefatura femenina de 7 puntos porcentuales respecto del 2001. INDEC, Gacetilla de Prensa, 29/06/2012.

¹⁴⁶ Existe un amplio debate referido a si los hogares con jefaturas femeninas alcanzan mayores o menores niveles de bienestar que aquellas con jefatura masculina.

conocidos, con las familias de sus parejas, etc. De tal manera, la constitución de los grupos convivientes, o grupos familiares es heterogénea y diversa. Persiste, en general, la noción de cuidados, atención y contención hacia esta población considerada infantil, en el imaginario de los grupos convivientes y de las instituciones.

Existe una proporción poco significativa de chicos que presentan una trayectoria mediada por instituciones estatales a partir de la evidencia del deseo/necesidad de no regresar a su familia “de origen”. Todos ellos registran períodos prolongados en situación de calle¹⁴⁷ por lo que suelen presentar numerosos antecedentes de detención por parte de la policía, derivaciones a distintos paradores y programas de la ciudad, con escaso nivel de contención de esta población. Han estado expuestos a situaciones de abandono recurrente, falta de ropa, comida, sin servicios educativos y sanitarios sistemáticos y refieren haber estado más expuestos al contacto con drogas.

El embarazo adolescente es un fenómeno frecuente, los jóvenes han accedido a información genérica acerca de los cuidados relativos a enfermedades de transmisión sexual y métodos de anticoncepción a través de sus padres, en la escuela, o por parte de otros agentes. Sin embargo, pocos de ellos manifiestan acceso facilitado al uso de preservativos. Casi en ningún caso se verifica la existencia de dispenser de acceso para los jóvenes, la provisión familiar aunque ocasional es la más efectiva. Comentarios tales como: “es difícil ir a comprar, me olvido, uso cuando tengo, me da mi hermano, había en mi casa” grafican la dificultad entre saber y materializar en “ese” momento el conocimiento. Los varones suelen presuponer que es la mujer quien es más preocupada por la anticoncepción dado que ella está afectada más directamente por las consecuencias de un embarazo, según refieren.

Por su parte, no suele haber referencias a la posibilidad de interrumpir el embarazo o alternativas a criar a su hijo¹⁴⁸. El “problema” posterior al nacimiento, el cuidado del bebe, “se entiende”, será asumido por los grupos convivientes de ambas familias. La mitad de

¹⁴⁷ La atención de esta población es muy deficitaria en la CABA. El programa con mayor capacidad de atención, en la actualidad, depende del Ministerio de Justicia de la Nación. La situación es similar en La Matanza donde los recursos destinados en todo el Partido son absolutamente exiguos.

¹⁴⁸ Es poco pertinente y difícil que ello se exprese en un Juzgado

estos chicos no convive con su pareja durante el embarazo y generalmente tampoco después. Ello implica distintas experiencias en la relación con el bebe, en cada caso.

Las distintas constelaciones familiares, los adultos referentes, son el centro de apoyo en las intervenciones centradas en los jóvenes. Por las características de la adolescencia, se trata de un momento de creciente autonomía, pero cuando la intervención judicial se produce es muy relevante ponderar la capacidad de contención afectiva que sus constelaciones familiares, los adultos referentes presentan.

En contrapartida, cuando se trata de chicos en situación de calle, todo el sistema estatal prioriza acciones de revinculación y en menor medida otras alternativas familiares o institucionales, aún con esta población que huyo de esas familias. Se modificó la ley pero esas intervenciones suelen estar automatizadas. El sistema de atención de esta población resulta deficiente y paulatinamente se fue desprofesionalizado, en la CABA se privilegia el contrato de operadores con escasa formación en el periodo reciente.

De la escolaridad: Un número poco significativo no presenta estudios primarios completos generalmente es la población de niños en situación de calle que retoman este nivel de estudios en Institutos periódicamente

Respecto de la trayectoria de estudios secundarios: resulta excepcional la trayectoria ideal del ciclo establecido por el Ministerio de Educación, la mayoría manifiestan contar con situaciones de abandono y/o repitencia que se resumen como “problemas escolares”. La mayor dificultad se concentraba en 3er año hasta 2009. Esta situación actualmente fue desplazada a cursar y aprobar el 1er y 2do año; cuando el cambio de ciclo tiene claras transformaciones en la dinámica de enseñanza-aprendizaje, la organización en bimestres/trimestres, la cantidad de asignaturas y contenidos entre sexto grado y el año inmediatamente superior¹⁴⁹ repercuten negativamente en el desempeño escolar adolescente. A ello confluye que en el ciclo primario, en ocasiones, los docentes tienen un conocimiento individual de los estudiantes que puede resultar favorecedor a la hora de

¹⁴⁹ Desde hace pocos años el ciclo primario y secundario en la Pcia. de Buenos Aires es de seis años cada uno. En la CABA se mantiene la organización de siete y cinco años respectivamente.

apoyar o solventar dificultades de aprendizaje y también de calificar. Esta situación se “disuelve” en el tránsito de un ciclo al otro¹⁵⁰.

Los jóvenes suelen manifestar, conjuntamente con sus progenitores, la importancia de contar con estudios secundarios completos, sin embargo la escuela constituye una enorme barrera. Podemos inferir a partir de las entrevistas a los Delegadxs y de entrevistas con docentes y directivos escolares de ambas jurisdicciones que, el primer fracaso escolar - abandono, repitencia, etc.-, constituye una marca muy difícil de resolver para los chicos y sus familias un proceso de estigmatización que la institución escolar aún no ha podido detener. La incorporación y retorno de jóvenes en el nivel secundario asociado con la AUH¹⁵¹ ha posibilitado la inserción y permanencia escolar de sectores heterogéneos que históricamente no habían accedido a la escuela secundaria. Escenario que profundiza las tensiones y cuestionamientos al interior de las escuelas. Integrar a los que no logran alcanzar la trayectoria típica, los que se atrasaron, es un estigma que las escuelas no logran revertir –según nuestra experiencia-. Desconocemos el desempeño de la oferta de programas de reingreso, para mayores de 18 años.

Las huellas de la implementación de políticas de ajuste estructural (Hintze, 2007) se evidencian como deterioro en los servicios sociales asociados con el sistema de política social. Un registro que, en muchos casos, resulta preocupante. En el caso de la oferta educativa no solo se trata de los límites de la oferta en vacantes sino también en referencia a la calidad de las prestaciones como a la selectividad de muchas de los programas asociados tales como becas, que expresan la mayor focalización.

Los sectores sociales considerados vulnerables son las principales afectados por estos déficits “institucionales”. En este sentido, los programas de transferencia de ingresos – masivos-, promueven en retorno, la reinscripción, pero no resuelven el problema de la

¹⁵⁰ Uno solo joven presenta condiciones para continuar estudios universitarios. La causa judicial es por un accidente de tránsito, manejaba el auto de su padre. Evidencia de su pertenencia a cierto estrato social.

¹⁵¹ La Asignación Universal por Hijo, desde el 2010 lidera un conjunto de programas que han desarrollado un impacto positivo y progresivo sobre los niños/as y adolescentes (a mayor pobreza, mayor impacto), así como el incremento sostenido en la inscripción y la asistencia escolar, (se observa un efecto de disminución de la deserción pero aumenta la repitencia escolar). Situación es la que mayoritariamente exhiben los jóvenes que transitan en este campo.

retención. Los dispositivos institucionales para gestionar este notable, positivo y novedoso estímulo al reingreso de estudiantes al ciclo secundario resultan escasos.

Kessler (2004) hace referencia a que estos sectores acceden a una ciudadanía de baja intensidad, parafraseando a O'Donnell que considera la intensidad ciudadanía en términos del libre y activo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes genéricos propios de estatus de ciudadanía, que comporta deberes y derechos.

Al respecto Bourdieu (1979:153) señala que “la exclusión de la gran masa de los hijos de las clases populares y medias no se opera ya a la entrada en el bachillerato (ciclo secundario), sino progresivamente, insensiblemente, a lo largo de los primeros años del mismo, mediante unas formas negadas de eliminación como son el retraso como eliminación diferida, la relegación (...) que implica un efecto distintivo y de estigmatización, adecuado para imponer el reconocimiento anticipado de un destino escolar y social”. En la lucha integradora, al decir del mismo autor, muchos parten “necesariamente derrotados” a causa de su handicap inicial, que daría pistas sobre una trayectoria reproductora, “como testimonia la constancia de las diferencias”, que condenan a cada agente al resultado de la agregación estadística, una dialéctica de las oportunidades objetivas y las esperanzas subjetivas que se reproducen mutuamente: “todo permite suponer un brusco desenganche” Bourdieu (1979:165).

Del Trabajo: Los adultos suelen esgrimir el trabajo como una amenaza para quien deja de estudiar: Sin embargo los jóvenes difícilmente pueden encontrar un trabajo. Por el contrario la potencialidad de encontrar un buen trabajo atentaría contra la continuidad de sus estudios, en el relato de los chicos constituye la posibilidad de tener algo de plata, independencia, autonomía, etc. Sin embargo las actividades que se relevan son: cartoneo, changas, cuando alguien en la familia puede llevarlos como ayudante de albañil, carpintero, cadete para algún conocido/familiar y la venta en la calle. En general se trata de trabajo por periodos cortos, de carácter informal, con bajos ingresos: en un kiosco, en casa con su madre que corta prendas para un textil, cuidando sobrinos. Vinculados a colaborar con los ingresos, las necesidades y carencias del grupo familiar.

A diferencia de los que ocurría hasta 2009, cuando los jóvenes tutelados alcanzaban hasta 21 años de edad y entonces el desarrollo actividades a las que se referían como trabajo, era creciente. Los niños acusados rara vez encuentran oportunidades de trabajo sostenido por un periodo determinado, cumpliendo algún horario, con una actividad pautada, con un “salario”. etc. Desconocen la existencia de beneficios derivados de una relación laboral estable tales como aguinaldo, obra social, etc.

La existencia de actividades de formación / capacitación laboral bajo la modalidad de planes sociales asociados a empleo es una modalidad difundida por algunos Delegados para jóvenes mayores de 18 años o próximos a alcanzar la mayoría de edad. En los TOM los profesionales desarrollan gestiones en ese sentido, previo al cese de su intervención.

De la salud: No se distinguen problemas específicos de salud en esta población, salvo el grupo de chicos que han permanecido en instituciones y en la calle que han estado expuestos a situaciones de abandono, desnutrición como de oferta de sustancias tóxicas. La mayoría refiere en las entrevistas familiares que los chicos han tenido un consumo “social” de drogas, probaron, en general marihuana, a veces pasta base, Poxi, etc. El consumo de alcohol en días de semana o cuando regresan de bailar no es percibido, ningún caso, como problema asociado con la salud. El consumo de drogas se asocia, reiteradamente con la comisión de delitos que se presentan en los JNM. En estos casos las familias exhiben trayectorias de mucho dolor y deterioro.

También existen algunos casos que requiere tratamiento de adicciones, se trata de un problema sostenido pero no mayoritario.

Es frecuente que se evalúe la necesidad de sugerir tratamiento psicológico específicos asociados a la causa que origina la intervención judicial: violencia, situaciones familiares que exceden a la causa judicial. En algunos casos se requiere de controles médicos por problemas crónicos o pasados sin atención o control.

Aunque no es el objetivo central de este trabajo analizar el consumo de drogas, es notable que más de la mitad de los jóvenes refieran haber probado sustancias consideradas tóxicas. Algunos de ellos consumieron drogas en el momento de cometer los hechos que ocasionan

las causas judiciales. La disponibilidad y acceso es sencilla y cotidiana, en todos los barrios, en todos los grupos.

Del tiempo libre: Los jóvenes pasan buena parte de tiempo libre con pares. Este tiempo no se desarrolla en las casas, bajo la mirada de los adultos sino en el barrio, a veces en las inmediaciones de la escuela. Antes fue en el Cyber, actualmente una esquina, la puerta o la salida de un local. Suele realizarse una distinción entre espacios públicos, la calle para estratos de la población que no acceden a los espacios públicos privados: Shopping, local de comidas rápidas, sectores que se han retraído del barrio.

Los progenitores –en general- refieren a que los chicos están mucho en la calle. La imposibilidad de acceder al mercado, las viviendas deficitarias, se suman a que la escuela es un “no lugar”, los espacios coordinados por adultos no son atractivos. Muchas de las ofertas institucionales están desfasadas de los intereses de los jóvenes¹⁵² “la sociedad es vista como algo extraño a ellos, un ámbito al que no pertenecen” (Saravi, 2004:43). La propia segregación, la ausencia de oportunidades, el sentimiento de no pertenencia genera no solo sentimientos de incertidumbre y frustración sino también una profunda crisis de autoestima e identidad, a entender del mismo autor.

Los adultos reclaman que los jóvenes quieren estar entre ellos. Inclusive cuando permanecen en la casa solos, están encerrados o en algún lugar donde puedan estar sin la compañía, la mirada adulta. Esta situación constituye una marca de época. Aunque las mujeres siguen siendo “más proclives” a obedecer el mandato adulto.

Las actividades deportivas no concentran la atención mayoritaria. Si estar en grupo, caminar, sentarse a charlar en el espacio público. Las salidas de los fines de semana y el consumo de cerveza es la actividad más relevante en ambos sexos.

Del tiempo: Cabe señalar que de las entrevistas realizadas no surge material relativo a cómo ellos piensan, conciben su propio tiempo¹⁵³. Sin embargo es posible realizar algunas

¹⁵² Por falta de recursos o incapacidad de las instituciones y/o programas que convocan su participación. Los programas en CABA, para la formación de jóvenes líderes son ejemplo de ello.

¹⁵³ En diálogo con las metáforas “Del reloj de arena al reloj digital” (Feixa, 2003).

inferencias sobre observaciones relativas al desasosiego que provoca el mandato familiar, las expectativas a futuro en el momento en que estos jóvenes se enfrentan a la acusación de un delito que tiene un inmediato correlato con un imaginario de corte de trayectoria. Implica una amenaza adicional al futuro.

En referencia a la planificación del tiempo y la “ocasión”, un número significativo de chicos son acusados por primera vez. La mayoría refiere que no se trató de situaciones planificadas, “se dió”, estaban allí, no se negaron, también probaron. Coincidiendo con Miguez (2002) y Kessler (2004) y Duschatzky, Corea (2013) que señalan el carácter improvisado del delito al que se suma un aumento de carátulas de *lesiones* asociados a ocasionales “estallidos” de violencia entre pares como resulta frecuente a partir de las denuncias de instituciones escolares, salidas de boliches, padres de conocidos, vecinos, etc.

De la situación económica social: el trabajo y los ingresos de los adultos a cargo del hogar es heterogénea. La estructura social argentina suele ser estratificada a partir de su inclusión en quintiles. Desde esta perspectiva podríamos decir una obviedad, más de la mitad de los niños acusados integran familias que pertenecen a los quintiles inferiores, en los casos en que se verifica la percepción de planes sociales también los ubica entre los últimos quintiles. Casi un tercio del total corresponderían a 4to. Quintil y la menor proporción correspondería a jóvenes que se integran al quintil de clase media típica y clase media baja y/o recuperada que incluye padres profesionales y empleados en puestos de mayor jerarquía, con ingresos que garantizan la satisfacción de necesidades, con cobertura social estable y propietarios de vivienda.

A partir del 2002, la existencia y masividad de los programas en la modalidad de transferencia de ingresos¹⁵⁴ (nacionales, provinciales¹⁵⁵) y becas, se suman o complementan los ingresos familiares con el fin de promover la retención o el reingreso escolar de esta población. Dichas transferencias suponen el cumplimiento de condicionalidades que el grupo familiar debe acreditar: el cumplimiento de la asistencia educativa y control de salud en el caso del Programa AUH; o algún tipo de

¹⁵⁴ Cuyo destino privilegiado es la cobertura de necesidades absolutamente primordiales.

¹⁵⁵ La ciudad de Buenos Aires fue pionera a través del Programa Vale Ciudad, hoy Ciudadanía Porteña.

contraprestación en capacitación, en el caso del Programa Envión y becas de formación laboral.

Los enfoques que subyacen en estos programas sostienen que es necesario y posible generar una dinámica de cambios en las familias. En el enfoque basado en incentivos, las transferencias apuntan a que las familias se comporten de determinada manera. El enfoque psicosocial se basa en el supuesto que es conveniente trabajar sobre la familia para promover cambios en su comportamiento y actitudes, de modo que se vinculen con la red de efectores en salud y educación. En ambos casos, se “invita” a que las familias se conviertan en demandantes de estos servicios sociales, independientemente que éstos existan o se encuentren en situaciones deficitarias.

Existe un claro interés gubernamental por promover instancias de inclusión de la población especialmente orientada a la franja de la infancia y juventud argentina. Iniciativas orientadas a generar “oportunidades de inclusión social y laboral a.... jóvenes permitiendo finalizar su escolaridad obligatoria, realizar experiencias de formación y/o prácticas calificantes en ambientes de trabajo y finalmente insertarse en un empleo o iniciar una actividad productiva de manera independiente” Entendiendo que “Que la problemática juvenil tiene múltiples facetas que deben ser contempladas a la hora de abordar la temática, evitando caer en categorizaciones simplificadas y estigmatizantes, entre las que pueden mencionarse la necesidad de un acceso real y flexible a la oferta educativa...”¹⁵⁶. Los fundamentos de estos programas se encuentran asociados a un interés por desarrollar intervenciones de carácter socio-educativo, comparten el fundamento que organiza el sistema de Protección de Infancia y la Ley 26.061.

c- Las causas de la intervención judicial.

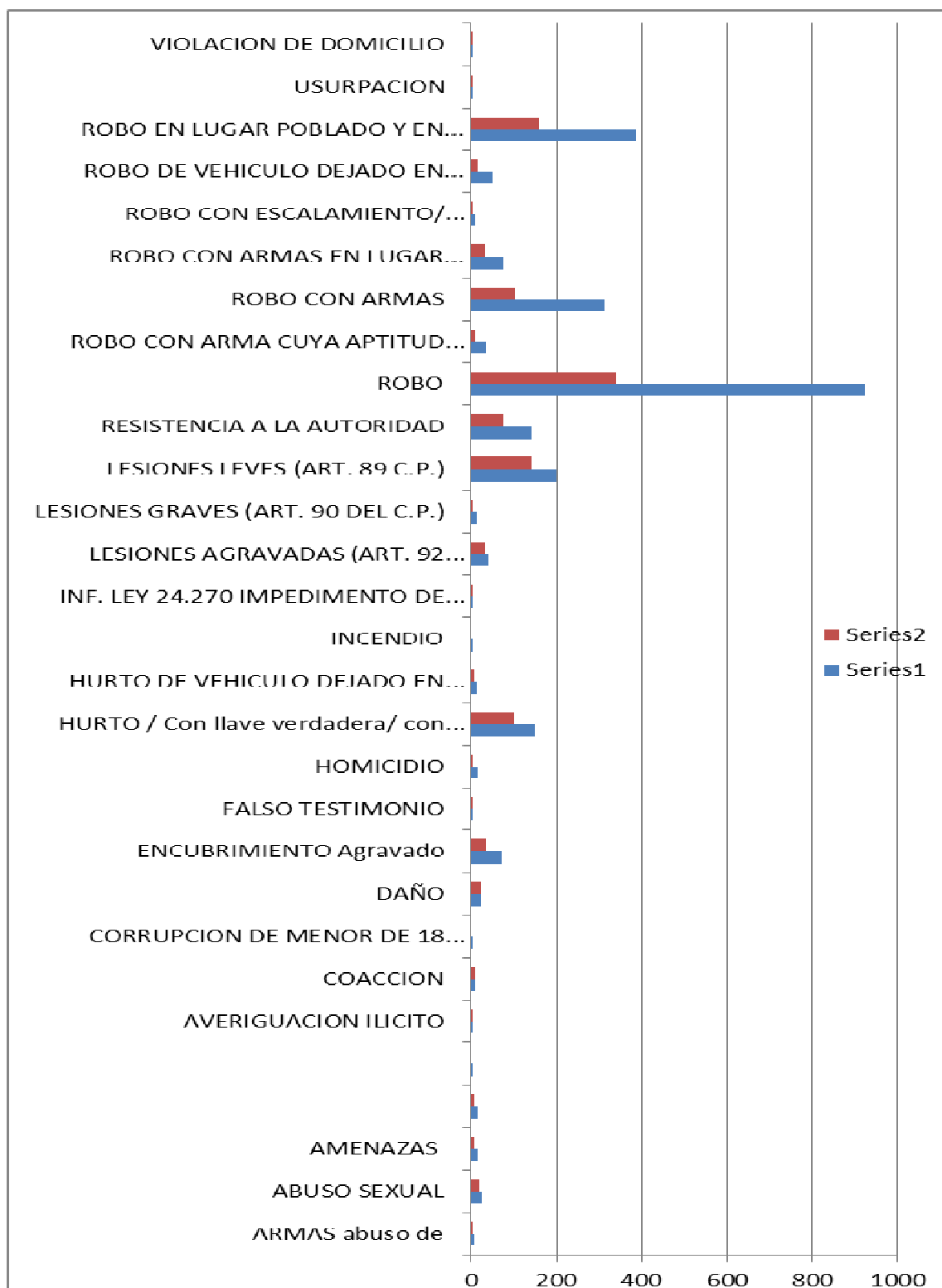
Los varones son acusados mayoritariamente por delitos contra la propiedad y en menor medida por causas relacionadas con lesiones y resistencia a la autoridad. En este grupo se verifica una sola causa por homicidio. Las denuncias, generalmente, contra la propiedad

¹⁵⁶ Decreto 84/2014 de creación del “Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos” (PROG.R.ES.AR.) que ejemplifica la tendencia gubernamental actual

privada (robo y hurto en sus múltiples formas) y situaciones con marcas de violencia que generalmente ocurren en espacios públicos. Muchas incluyen resistencia a la autoridad. Un número muy significativo ocurre “en poblado y en banda”, designación que refiere, no a que son parte de una organización criminal sino que alude a un grupo, aunque el detenido sea uno, menor de edad. Abundan causas relacionadas con problemas de sociabilidad entre pares en el contexto del vecindario y la escuela. En muchos de estos casos traducen rivalidades, formas de discriminación y la fragilidad de lazos sociales, escaso conocimiento entre los adultos que presentan la denuncia (peleas en bailes, dentro y fuera de la escuela, peleas entre grupos que se conocen entre escuela o en el barrio, amenazas derivadas de estos encuentros donde los adultos / padres también se conocen de vista y no han logrado evitar una escalada de creciente violencia, en sus distintas manifestaciones).

El uso de armas, especialmente como forma de amenaza es creciente y reciente, se asocia con adultos que facilitan esta tenencia.

Gráfico N°12 “Intervenciones por objeto de juicio” con Niños, Niñas y Adolescentes, en materia penal en el período 2012. Serie 1 Azul iniciados (total 2543), Serie 2 Rojo cese de intervención (total 1131), la diferencia significa que continúan en trámite.



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la BGD, NNyA.

En síntesis, esta presentación nos permite visibilizar ciertas particularidad de sectores que se perciben como excluidos o en los márgenes de la sociedad argentina contemporánea. En este sentido, los procesos de desafiliación son concebidos como resultado de un entramado de desventajas. Ello constituye, a nuestro criterio, la impronta mayoritaria de estos jóvenes.

La particularidad de los actores se ve asociada a la precariedad: de la oportunidad escolar, de los ingresos, del trabajo de sus padres, la inexistencia de las seguridades que los convierte en una suerte de oportunistas. Kessler (2002) señala que ello no implica la ausencia de ley ni de juicios morales. Pero predomina un escenario de “escenas cortas”, cada escena es autorreferente. Hay una falta en sus narraciones de un tiempo imaginario posterior; un futuro. La volatilidad de resultados, constituye la lógica dominante. Para esta población el binomio seguridad e inseguridad expresa “las relaciones con los tipos de protecciones que asegura –o no –una sociedad, de manera adecuada.... Efecto de un desfase entre una expectativa socialmente construida de protecciones y capacidades efectivas de una sociedad dada para ponerlas en funcionamiento” (Castel, 2008: 13).

La perspectiva de derechos que subyace en los marcos legales vigentes parte de reconocer a todas las personas como titulares de derechos (Abramovich, 2006), con capacidad de demandar determinadas prestaciones y conductas que de no ser atendidas implican vulneración. De tal manera que las acciones que se emprendan a partir de este enfoque no son consideradas sólo como el cumplimiento de mandatos morales o políticos, sino como la vía para hacer efectivas las obligaciones: jurídicas, imperativas y exigibles, establecidas por leyes y tratados. Los derechos demandan obligaciones y las obligaciones requieren mecanismos para hacerlas exigibles y darles cumplimiento.

El debate sobre los “derechos” comenzó así a reformular el diálogo entre la justicia y otras instituciones públicas: escuelas, servicios de salud, servicios conexos con las políticas sociales en general. Una transformación relativa a la consideración de ciudadanos de los actores involucrados y de la posibilidad de arbitrar mecanismos de control cruzado entre las instancias públicas implicadas. La administración judicial es muchas veces quien habilita la atención y las posibilidades de acceso reales de los sujetos y sus familias a los servicios en los territorios donde residen.

En estas instancias judiciales, los jóvenes suelen requerir de apoyo para hacer efectivos servicios tales como, becas, espacios de juego, atención en salud etc. Paradójicamente el acceso y/o reingreso a la mayoría de estos servicios considerados básicos requiere de informes y oficios judiciales, que exponga la necesidad, amerite su atención; pese a la retórica de los derechos que impregna a los servicios destinados a esta población. El acceso parece siempre limitado al cumplimiento de requisitos, simultáneamente su explicitación implica el estigma que padece el portador del oficio judicial. Un oficio que estigmatiza y empuja cierta rémora burocrática. Se opera en dos sentidos: de disciplinamiento y control social bajo la forma de auxilio en el efectivo acceso a derechos básicos. Se enfrentan las funciones estatales en el terreno de las demandas de los afectados, en el campo de las restricciones y los límites que los servicios sociales, despliegan en el día a día.

Abramovich y Pautassi (2009) señalan distintos tipos de asuntos en que los tribunales pueden incidir en materia de política social. Consideramos que uno de ellos pueden ser considerado como intervenciones típicas en el caso de los Juzgados de Menores: - aquellas que apuntan a lograr la implementación efectiva de las políticas sociales. En estos casos apunta al acceso a recursos y servicios escasos o remisos por distintos motivos. Estas intervenciones funcionan como una cadena de información entre ciudadanos y operadores cercanos y que, en ocasiones, da cuenta de déficits públicos, especialmente relativos a bloqueos o conflictos de comunicación.

El problema es que como se trata de situaciones individuales ello no establece un estándar de atención sino que el oficio judicial opera como un *escudo protector*, transitoriamente. Las intervenciones judiciales en este campo tienden a desplegar intervenciones de tipo reparatorias: lo que el sistema de políticas sociales excluyo, por desatención, déficit, conflictos, falta de información recursos, etc.

Estas intervenciones pretenden incursionar sobre el derecho a materializar aquello previsto en la ley: ser oídos, a estudiar, a contar con servicios de salud, etc. Sin embargo, la tensión entre la normatividad vigente y las denostadas tutelas se desliza a las intervenciones con las familias respecto de la educación de los hijos, las pautas culturales. Una convivencia de prácticas de carácter moralizantes que se pretende combatir. Un desafío relativo a cómo las instancias judiciales procesan problemas relativos a la inclusión.

CAPITULO 5: Intervenciones y prácticas. El Trabajo social en escena

a- El campo y la dinámica del quehacer cotidiano.

b- Prácticas e intervención profesional.

Demandas y expectativas

Qué se hace y qué se dice en relación a lo qué se hace. Lo prescripto y lo construido.

La organización del trabajo

Y de nuevo,...que dicen que dicen los jóvenes

c- Los informes sociales, el soporte escrito

a- El campo y la dinámica del quehacer cotidiano.

En los desarrollos anteriores fuimos elaborando los conceptos “ordenadores” (Escolar, 2000) que nos permitieron organizar el andamiaje teórico y el desarrollo de una descripción situada, “densa” de este campo, en el cual coexisten agentes y sujetos, con posiciones y miradas diversas. Parte, en un momento y en un espacio, de la misma experiencia.

Esta investigación no trata de “la justicia de menores” sino de producir conocimiento sobre las intervenciones de los trabajadores sociales que se despliegan **en** este campo, en determinadas condiciones, en la cotidianidad, al interior de las instituciones. Nuestra inserción en esta trama institucional, como observadores y partícipes de conjuntos de prácticas, permite un acercamiento que para otros observadores ajenos a este entramado, puede resultar dificultoso. Nos interesa exponer la dinámica de las relaciones que se establecen en este campo, conducente a reflexionar sobre la intervención profesional, problema que concentra nuestra atención. “Aprehender las formas de construcción de la realidad social teniendo en cuenta que, esta construcción está atravesada por relaciones de fuerzas y coacciones estructurales y que “las estructuras estructurantes, las estructuras cognitivas, son ellas mismas socialmente estructuradas, porque tienen una génesis social; (...) la construcción de la realidad social no es solamente una empresa individual, sino que puede también volverse una empresa colectiva” (Rozas y otros, 2014^a citan a Bourdieu, 1980: 134).

El núcleo central de este capítulo lo constituye el análisis del contenido de las entrevistas realizadas a agentes – profesionales. Sus opiniones relativas a su propia formación, su trayectoria y el ejercicio profesional en este campo, en determinadas condiciones, en este entramado institucional estatal en que desarrollan un trabajo asalariado (Iamamoto, 2001). Como resultados de la indagación realizada que conjugo, búsqueda documental, relevamiento de datos estadísticos, encuestas y entrevistas¹⁵⁷. Variadas estrategias tendientes a potenciar el conocimiento de este campo, a visibilizar aquello que tiene una circulación acotada y que consideramos constituye un aporte a la comprensión de los fenómenos sociales a los que hacemos referencia y que también habilita nuevos interrogantes.

La mayoría de los trabajadores sociales, Delegadxs, identifica la noción de campo (Bourdieu) con su lugar de trabajo. Por ello: Juzgado de Menores, Juzgado Penal de Menores, Tribunales, Poder Judicial, son las designaciones más frecuentemente utilizadas para referirse al espacio de trabajo y en menor medida: jóvenes en conflicto con la ley, derecho penal juvenil. La noción de campo fue también asociada con el campo de la infancia, adolescencia y juventud.

En el caso de los trabajadores sociales, casi su totalidad presenta especialización en el marco de su trayectoria laboral, asociada con la infancia, a partir de su inserción en distintos programas de la SENNAF, con niños en situación de calle, generalmente en espacios estatales de atención de población infantil y también, con menor frecuencia en organizaciones de la sociedad civil,.

Los funcionarios, en su mayoría presentan una trayectoria en este fuero judicial, que identifican con la noción de campo, donde han desarrollado su formación y desarrollo profesional¹⁵⁸.

¹⁵⁷ Las entrevistas fueron convenidas y realizadas de manera directa a excepción de la Juez de Cámara que accedió responder a la entrevista por escrito, aunque ello inhabilitó la reflexión y la repregunta, fue valioso contar con su registro sin mediaciones.

¹⁵⁸ Desarrollo profesional que se traduce en la adquisición de mayores competencias, en la innovación y recreación del ejercicio profesional que puede contribuir al campo en que se inserta. (Rozas et al, 2010)

En referencia a la misma noción, los abogados aluden al derecho, la ley, trabajan en la justicia¹⁵⁹ y menor énfasis en cuestiones de infancia. En este grupo, coinciden en señalar que actualmente es problemático mencionar su lugar de trabajo y cargo en la vida social, “evito entrar en detalle”¹⁶⁰, “es desprestigio que hay es muy grande” “no hace tantos años se tenía un prestigio, los jueces usaban chapa blanca” suponen que “abris la puerta a los tipos, los menores, para que le roben en su casa”. También se realizan alusiones a que el fuero de menores tuvo “un aire de trocha angosta... (pero) en los últimos años...nuestra Cámara hizo una revalorización en general”. Existe consenso en que se trata de un espacio que se profesionalizó, casi todos los agentes son estudiantes de derecho o ya abogados.

Los Funcionarios de quienes dependen y con quienes interactúan los Delegadxs, son todos abogados, los cuales advierten que su formación relativa a la infancia y el fuero penal juvenil se realizó a posteriori de su formación académica “es que no te lo da la facultad, nada”. Todos tienen una larga trayectoria judicial, en algunos casos iniciada en la década del '70. La entrevistada más joven ingreso al Poder Judicial en 1992 y se ha desempeñado en este campo la mayor parte de su trayectoria. Coinciden en señalar lo mucho que “aprendes de la experiencia y el oficio”. Solo algunos de ellos accedieron a su actual cargo por concursos, dado que ese mecanismo es reciente.

Resulta evidente que la noción de campo, tan útil para nuestras reflexiones, no es tematizada ni explorada por los agentes entrevistados en su ejercicio profesional, aunque muchos de ellos la conocen, su utilidad ha sido poco explorada. Suponemos que ello se asocia con una forma de eludir la disputa en un campo donde se observa un modo de organización piramidal y verticalista¹⁶¹, que consideramos inhibe distintos tipos de cuestionamientos de ese instituido, relaciones de poder, que exhiben una evidente asimetría. Así, la elaboración de ‘lo político’, en términos de cuestionamiento de aquello que ha sido entendido como el ‘orden natural’ de la institucionalidad y de la política clásica, no encuentran un curso habilitado. Observamos reticencias en los Delegadxs para plantear su disenso en esta trama institucional que se asocia con la posibilidad de algún tipo de sanción. Ello opera en refuerzo de una relación de subordinación a la autoridad.

¹⁵⁹ Una de las entrevistadas definió su trabajo en el marco de lo que considera un “servicio público”.

¹⁶⁰ Los entrevistados son todos funcionarios judiciales.

¹⁶¹ Zaffaroni (2012) señala al poder punitivo como un instrumento de verticalización social.

“En toda sociedad hay poder y coerción...cuya legitimidad casi no se discute, aunque pueda discutirse como se ejerce” (Zaffaroni, 2012: 30).

Resulta interesante recuperar el modo en que Zaffaroni plantea (2012) como en la historia reciente y los discursos relativos a la cuestión criminal se ha reformulado sobre la crítica al poder punitivo y las instituciones de su tiempo a partir de lo que repensaron profundamente alternativas superadoras. El llamado “cambio de paradigma” en el campo de la justicia penal juvenil va a plantear, según este autor, un cuestionamiento al ejercicio del poder en materia penal, una mirada sobre la propia organización de la justicia. Los debates en este campo hasta entonces eludían esta mirada, se habían concentrado en múltiples problemas, especialmente sobre la población a las que dirigía su atención y la formación de dispositivos para su tratamiento. Desde el inicio de los debates producidos en el marco de la denominada criminología crítica, asociada a los discursos y disputas que se fueron erigiendo en este campo a la luz de la CDN, se promovieron distintas transformaciones.

Numerosos entrevistados coinciden en señalar “se fueron introduciendo muchísimos cambios y pequeñas modificaciones... el juez tenía una amplísima potestad discrecional..., que se fue acotando”. “Ahora es necesario fundamentar una internación... un egreso....; por qué con la tía, la abuela”. “Al expediente (ahora) tienen acceso distintas figuras previstas en la ley. Fiscales, Defensores....., hubo una batalla grande con el sistema acusatorio.... los Delegados no son ajenos a esos cambios”. “Sus intervenciones se conjugaron especialmente con la de los Defensores (Públicos y Oficiales)”. “La Defensoría Pública aparece como un paraguas protector.... de forma administrativa..., presentan escritos...., se notifican de toda resolución.... Los Defensores también, a veces actúan de forma automática¹⁶²”.

Existen evidencia de cruces y tensiones que con mayor y menor intensidad se manifiestan en las entrevistas realizadas. Uno de los aspectos que despierta controversia gira en torno a quienes definen las actividades de los Delegadxs. La Juez y a la Prosecretaria, ambas de la Cámara, contradicen a los funcionarios de los JNM y TOM. Las primeras alegan que en la Cámara se designan a los Delegadxs y se organizan los ascensos pero estos agentes se

¹⁶² Evidencia de una crítica entre ellos.

desempeñan en los JNM, y “colaboran” con los TOM. La Cámara escasamente interviene en la dinámica cotidiana, deriva al fuero de menores la responsabilidad de la coordinación de los equipos. “eso depende de cada Juzgado...Secretario Tutelar...si es que no se deriva esa responsabilidad en algunos empleados”. Estas funcionarias señalan, en la misma dirección, una crítica respecto de los procesos de integración de los equipos profesionales “Se dejó librado a...los juzgados...como conformarlos”. El conjunto de respuestas alude a que en cada uno de los JNM y TOM organizaron los equipos sin prever criterios comunes para su conformación, ya que no se han organizado instancias de articulación y diálogo. Los Delegadxs manifiestan su dificultad para hacer un planteamiento (colectivo) frente a estos problemas.

La dinámica del quehacer cotidiano Establecemos como el inicio de lo que llamamos la intervención judicial, la ocurrencia de una situación de presunto delito. Una escena que consideramos es violenta¹⁶³ por múltiples y distintas razones. Mayoritariamente se inicia con una intervención de una fuerza de seguridad¹⁶⁴ o una denuncia que ocurre por la presunta infracción a la ley penal. Esos actos implicaron distintos niveles de violencia, a veces cruzada: amenazas, agresiones, lesiones, desapoderamientos, hurtos, robos, arrebatamiento, resistencia a la autoridad¹⁶⁵, etc. Al respecto cabe señalar que los jóvenes “han sido y son los destinatarios más frecuentes de la violencia policial¹⁶⁶. La tarea de diversos organismos de derechos humanos continúa documentando y denunciando algunos de estos hechos (CORREPI, Comité contra la Tortura de la provincia de Buenos Aires,

¹⁶³ Eludimos este tratamiento, ya que el centro de nuestro interés son las intervenciones judiciales posteriores a la ocurrencia del supuesto delito que debieran incluir su denuncia.

¹⁶⁴ Actualmente policía federal, metropolitana, bonaerense y/o gendarmería nacional, según las zonas donde ocurra la detención.

¹⁶⁵ Omitimos la mención de homicidio, por la escasa relevancia estadística. El estudio realizado por la Corte Suprema de Justicia sobre homicidios dolosos ocurridos en la CABA, sobre el período 2012 relevó un número de 15 acusados, menores de edad, corresponde al 5% del total para ese período. El mismo estudio, para el período 2013, expone un descenso a 10 presuntos acusados menores de edad, correspondiente al 4% del total. Disponible en: <http://www.csjn.gov.ar/investigaciones/>

¹⁶⁶ Que a entender de estas autores constituye el primer eslabón de la cadena punitiva, que inicia el tránsito de los más jóvenes por el sistema penal, y que resulta en prácticas regulares de la institucionalidad punitiva.

Zainuco, CELS, entre otros¹⁶⁷)” (Pasin y López, 2014: 158), tema que no resulta posible profundizar en esta investigación.

Entendemos que esa intervención contiene una sospecha, pretende investigar, se acusa y eventualmente sanciona ese acto. Quienes intervienen se considera están investidos de cierta autoridad y poder respecto de los que arriban a estas instancias y son encargados de la gestión judicial. Al respecto, Auyero y Berti (2013) identifican distintos tipos de violencia que comparten una “dinámica situacional” y tienen un “carácter ordinario”. Estos autores, incluyen en su reflexión una mención a Bourgois (1995) referido a la interfase entre “violencia delincuencia interpersonal” y “violencia estructural”¹⁶⁸. Autores que resaltan “los vínculos típicamente oscuros entre las formas visibles de violencia... y otras menos visibles, estructurales, simbólicas y/o normalizadas” (Auyero y Berti, 2013: 79).

Observamos que las situaciones enunciadas suelen y pueden ser naturalizadas por algunos de los agentes y protagonistas¹⁶⁹. No siempre la violencia es percibida como tal, “sino como un modo de trato habitual y cotidiano” (Duschatzky y Correa, 2013) no siempre hay un registro del límite que se atraviesa, de las consecuencias que se producen¹⁷⁰, etc. La violencia es constitutiva en el inicio de estas intervenciones aunque con distintas expresiones, a veces se refiere solo a un momento, otras como parte del repertorio de la vida cotidiana y de la gestión judicial.

Estas manifestaciones se inscriben, a nuestro criterio, en un marco institucional donde persiste una tensión asociada con la convivencia de marcos normativos contrapuestos, que se expresa según Beloff (2011: 33) en un déficit institucional a la hora de “distinguir las consecuencias jurídicas de la comisión de un delito por parte de un adolescente y las medidas de protección porque aún en leyes nuevas, que distinguen entre el sistema de protección y el sistema penal juvenil, se admite cierta superposición entre ambas”. Es

¹⁶⁷ Pueden chequearse los informes de dichos organismos en sus respectivos sitios web: <http://www.correpi.lahaine.org/>; [http://www.comisionporlamemoria.org/comite](http://www.comisionporlamemoria.org/comite;); <http://zainuco.wordpress.com/>; <http://www.cels.org.ar/home/index.php>

¹⁶⁸ Violencia estructural entendida por ese autor como la privación y el sufrimiento creados por el funcionamiento de estructuras o instituciones sociales.

¹⁶⁹ Los artículos de Guemureman y Martínez, en Gayol y Kessler (2002), resultan relevantes.

¹⁷⁰ En mucho casos se trata de un “delito amateur” (Kessler, 2004) en cuyo marco las personas implicadas exhiben desconocimiento de las normas y las implicancias que pueden traer aparejadas determinadas situaciones.

relevante promover una lectura alerta que incentive intervenciones orientadas a remover los obstáculos concretos.

Es en los procesos de intervención donde identificamos prácticas cristalizadas (Bourdieu, 2000). La naturalización no permitiría elaborar estrategias críticas y superadoras. Condensan “los conflictos entre lo antiguo y lo nuevo, la resistencia de lo adquirido (...), los recubrimientos con que lo enmascara, (...) pero también los indicios auxiliares que (...) facilitan (...) los lentos procesos de reemplazo o las bruscas sacudidas que trastornan (...) la integración de lo nuevo en el campo ya estructurado de lo adquirido.”¹⁷¹ (Foucault, 1999)

En esta dinámica cotidiana, observamos que el **encuentro** con los jóvenes y los agentes judiciales se encuentra pautado de manera uniforme. Existen una serie de procedimientos y fórmulas que ordenan y al mismo tiempo simplifican la “intensidad de la experiencia del mundo social” (Schutz, 2001), para quienes llegan a los JNM, concentrada en las circunstancias que provocaron que este joven se encuentre “sentado” en este espacio institucional. Entre agentes y jóvenes se mantiene cierta distancia, la empatía sería considerada un obstáculo para los agentes judiciales. La uniformidad se expresa, para el observador, en “una continua repetición de una conducta apropiada a un sentido”¹⁷², a procesos típicos, que Schutz (2001) nomina como repetibilidad anónima.

La dinámica de ese primer encuentro está pautada en las llamadas Secretarías Actuarias, se asigna a un empleado en una Secretaría. Este consulta con un superior (Prosecretario que generalmente tiene su escritorio en la misma sala o Secretario que tiene su escritorio en otra sala) que va supervisando su desempeño. “la distancia podría ser una señal de respeto, aunque de un respecto particular... (También) podría considerarse como condescendencia. Atrapados entre el compromiso y el temor a ofender” (Sennett, 2003: 33, 34). Este autor señala de manera crítica aquellos encuentros, que en el campo de las instituciones sociales, donde los agentes reducen a espectadores a sus interlocutores (lo que el autor ejemplifica

¹⁷¹ El autor señala que ello implica dos problemas (metodológicos) *difíciles*: el de la semejanza y la precesión. Incorpora, en este punto, la importancia del análisis de regularidades en dos direcciones: homogeneidades y heterogeneidades, continuidades y cambios, identidades y diferencias, por una parte y la jerarquía al interior de cada una de éstas -disyuntivas / articulaciones- que abre un dominio de interrogaciones posibles.

¹⁷² En Schutz A., citando a M. Weber (2001, 84).

en la relación médico – paciente donde el primero a veces no explica claramente qué sucede) lo que denomina como “dependencia pasiva voluntaria”. Se realizan escritos, oficios, designaciones correspondientes a Defensor, Defensoría, se realizan notificaciones, se pide la concurrencia a “médico”¹⁷³, se procede a la entrevista con los Delegadxs de guardia, entre otras diligencias.

Consideramos que no se trata de un encuentro simétrico aunque se caracteriza por una inmediatez espacial y temporal (Schutz, 2001), compartida. Los jóvenes “comparecen”, fueron convocados por el JNM y suelen presentarse acompañados por un adulto referente¹⁷⁴, o son trasladados por personal de la SENNAF, a partir de la denuncia de un hecho considerado delito. En este último caso, ello ocurre cuando se trata de jóvenes que fueron retenidos en el momento de su detención, porque no hubo adultos que acudieran a buscarlos¹⁷⁵, o porque por el informe de los profesionales y/u operadores del CAD no sugirieron el egreso, o porque el Juez decidió esperar a su indagatoria por el contenido de la denuncia, o por la existencia de intervenciones judiciales previas, entre los motivos más frecuentes. Martínez (2005) en su análisis de las “burocracias judiciales penales” señala las relaciones de jerarquía que estructuran el mundo de los funcionarios y el peso determinante que las mismas adquieren en los encuentros con esta población.

En esta asimetría, observamos una posición “desventajosa” de quienes se presentan como acusados, que en muchos casos no cuentan con experiencias directas semejantes anteriores, y se enfrentan con una carga tácita de los agentes asociada con la expectativa de que es probable esa denuncia, una tendencia a la sospecha. Los agentes realizan correspondientes “esfuerzos” por encuadrar los hechos ocurridos de acuerdo con las figuras previstas por la ley, práctica que promueve la distancia con esas personas concretas y que concierne más bien a la elaboración de tipos, siguiendo al mismo autor (Schutz, 2001).

A partir del relevamiento realizado podemos decir que el **registro** de esta situación está co-determinado por la autoridad de la fuente, así en las actuaciones legales como en los

¹⁷³ Para constatar situación de salud.

¹⁷⁴ Una variedad de situaciones: padres, familias completas, un hermano mayor, un referente del barrio, algún familiar, etc.

¹⁷⁵ El Centro de Admisión CAD, dependiente de la SENNAF, realiza una primera evaluación y a partir de su informe y de la comunicación al Juzgado, se puede autorizar el egreso del joven.

informes de los trabajadores sociales el discurso de los jóvenes se reelabora, una versión “filtrada”, parcial, que integra el “expediente” con distinto orden y relevancia. “Un expediente es un mapa muy particular, donde se registran todos los acontecimientos del trámite con una envidiable capacidad de detalle y un particular poder de síntesis” (Martínez, 2004). Los distintos agentes tienden a encuadrar los hechos en las formas previstas para su tratamiento. Si bien los procedimientos de la justicia penal se oralizaron en la década del ‘90. La posibilidad de hablar en primera persona se reserva a la oportunidad que ocurre en el juicio, último acto de todo el proceso que, en las condiciones actuales, ocurre generalmente mucho tiempo después, cuyo contenido, lectura y análisis difícilmente contradice el proceso escrito. Al respecto Graziano y Jorolinsky (2010) reconocen el dominio de la escritura por sobre la oralidad. Estas autoras enfatizan que los dichos son enfrentados con lo manifestado y escrito en la etapa anterior.

Pensamos que el diferencial de información y conocimiento que se expresa en un lenguaje específico suele ser un elemento sustancial que obtura la comunicación: ¿Qué significa comparendo, procesar, indagar, quién es el fiscal, el defensor, qué lugar y función ocupa y cumple cada uno?, etc. Asimismo, el uniforme vestir de trajes y trajecitos de los/as agentes judiciales suele dificultar la distinción entre cualquier integrante en cada oficina y un funcionario judicial. Particularidad que se acrecienta por la numerosa cantidad de personas que intervienen en este encuentro y la rapidez con que se suceden los mismos.

Asimismo, las diferencias referidas al conocimiento del código común, las referencias históricas y materiales y su impacto en los procesos de interpretación inhiben significativamente el desarrollo de un sentido fijo (Schutz, 2001). La naturalidad en que ellas son enunciadas suelen reducir la oportunidad y capacidad de los interlocutores de consultar sus dudas. Aún en un sistema en el que se presume que los acusados son inocentes y menores de edad.

Los entrevistados identifican que los jóvenes suelen confundir y hasta desconocer con quiénes hablan en estos primeros encuentros, a qué oficina pertenecen los sucesivos interlocutores, cuál es el sentido de este contacto. Es “un barullo” señala una abogada de una de las Defensorías de un TOM. En este esquema, la pregunta es frecuentemente monopolizada por los agentes judiciales y, aunque los jóvenes y sus referentes adultos

pueden presentar sus inquietudes, especialmente en este primer encuentro, es poco frecuente que ello suceda. Se dirigen a todos como “doctores”, una evidencia de respeto y desconocimiento. “Un intento por trasponer las fronteras de la desigualdad con respeto mutuo” (Sennett, 2003:34). Lo antedicho tiene por objeto desnaturalizar la dinámica diaria e incorporar la mirada de quienes deben lidiar con estas escenas en situaciones que pueden ser consideradas como abrumadoras.

Los agentes, abogados y trabajadores sociales entrevistados, coinciden en señalar que el fuero penal de menores se parece mucho al fuero de familia, por la población que transita estas dependencias: niños y jóvenes con sus familias, operadores de organismos administrativos, y por el trato abierto y dispuesto que suele caracterizar a los miembros de estas instancias¹⁷⁶. Pese a esta percepción que exponen los agentes, observamos que las familias presentan inicialmente un impacto negativo y temor al estigma cuando advierten que sus hijos son judicializados en el fuero penal. Ello provoca, en general, dos respuestas, -una actitud permeable, que a veces implica aceptar en forma acrítica las propuestas, directivas o sugerencias que los distintos agentes puedan formular; - una resistencia más o menos activa, que puede llegar a “una sordera”, otras un rechazo ante este torrente de información, preguntas y requerimientos. Al respecto Honneth (2009) advierte que en las comunicaciones cotidianas en que los sujetos perciben que se vulneran las condiciones relativas al merecido reconocimiento, el afectado reaccionara en general con sentimientos que acompañan la experiencia considerada de desprecio: pena, rabia o indignación.

Los trabajadores sociales advierten que “el lenguaje de los derechos” facilitó el diálogo entre los agentes judiciales y los Delegadxs. Ese saber que resultaba transformador es un hoy discurso instalado desde el cual se establecieron otros límites para repensar los desafíos actuales. Sin embargo es necesario aclarar que “este paquete discursivo incluía la noción de efectivización de derechos. Categoría que pone en evidencia que la sola existencia del derecho no hace cumplirlo, y trae a la discusión aquello de la diferencia entre ciudadanía abstracta y la ciudadanía concreta” (Chaves, 2014). Ello constituye uno de las dimensiones que permanentemente advertimos tensiona el campo de las intervenciones y prácticas en el fuero penal juvenil. La distancia entre aquello previsto por la ley y las

¹⁷⁶ Se entrevistaron únicamente abogados y trabajadores sociales que presentan una autopercepción considerada “amigable” del fuero.

dificultades que se evidencian en su materialidad. Situación que también resulta evidente en el diálogo entre los agentes de instancias judiciales y los organismos administrativos de infancia que son parte del entramado de atención a esta población.

Esta observación resulta relevante a nuestro criterio dado que coincidimos con Iamamoto (2003: 135) en que estos profesionales “con su trabajo también pueden producir subordinación, tutela, sumisión(pero) también visibilizar el acceso y la defensa de los derechos...; favorecer la participación..., ampliar el acervo de informaciones necesarias ... el aprendizaje de procesos democráticos en las situaciones y relaciones cotidianas”, ya que esta autora remarca que los procesos de trabajo donde los trabajadores sociales participan se sitúan en el campo de la reproducción social.

Como anticipamos, las intervenciones se encuentran separadas, el expediente actuario es el soporte donde se exponen las diligencias y actuaciones atinentes al hecho denunciado. En el expediente tutelar, se consignan todas aquellas intervenciones de carácter tuitivo relativas a la disposición tutelar y orientadas a reunir la información relativa al desarrollo de las medidas socioeducativas en coordinación con los organismos administrativos, núcleo central de la intervención de los Delegadxs “es muy difícil explicar (a un chico que... está ahí) que cometió un delito, pero que ese delito le tiene que servir para otra cosa... el sistema en realidad es absolutamente expulsivo...” Extracto de una entrevista a una funcionaria judicial.

b- Prácticas e intervención profesional.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de práctica y de qué hablamos cuando aludimos a intervención profesional en el caso del Trabajo Social?

Hemos señalado en capítulos precedentes cómo el Trabajo Social, como profesión, es convocada y se inserta en los procesos de trabajo, en este campo. Iamamoto (2003) identifica en esta disciplina una tradición ligada con su origen pragmático que fue estructurando un saber sobre el quehacer profesional asociado con la noción de práctica, que se apoya en dos acepciones: una que la asocia con el conjunto de actividades que los

profesionales desarrollan y refiere tanto a competencias, áreas temáticas en que se inserta, como a sus interlocutores, usuarios, empleadores, etc.; Otra acepción que desde la década de 1960, se considera superadora de la primera, la vincula con la idea de praxis social, en la que identifica e incorpora la existencia de condiciones y relaciones sociales en que se despliegan estas prácticas, como la necesidad de desarrollar procesos de formación que las provean de fundamentos teóricos.

En esta tesis incorporamos a la definición de prácticas, el conjunto de actividades que estos profesionales despliegan que, consideradas como operaciones de carácter técnico, muchas veces, cristalizan formas habilitadas (Bourdieu, 2000) de interpretación y ejecución de mandatos institucionales que no cuestionan sino que evidencian un acción considerada mecánica¹⁷⁷. Constituyen una forma de conocimiento que permite pensar y actuar sobre los acontecimientos de la vida diaria, aquello que Jodelet (1984) designa como conocimiento cotidiano o conocimiento ingenuo. Ello, puede verse facilitado, aunque no lo justifica, porque es el empleador el que generalmente organiza y articula la totalidad del proceso en el cual este profesional se inserta.

Cuando nos referimos a la intervención profesional de este agente asalariado, inserto en procesos de trabajo particulares y situados en un contexto socio histórico, aludimos a que además de reconocer las condiciones y relaciones sociales en que se inserta y es parte, dicho profesional es competente para desarrollar una relativa autonomía de acuerdo con su formación, posición político ideológica, sus valores y principios éticos. Dicha autonomía le permite construir y orientar el proceso de intervención sobre el que es responsable, un dominio que no esconde el reconocimiento de la relación asimétrica en que se inserta, que simultáneamente habilita a estos profesionales a desarrollar una posición que reproduce, invisibiliza o visibiliza cómo se ejerce ese poder en ese contexto, muchas veces en la forma de una violencia sutil.

Ello ocurre, a nuestro entender, porque como hemos remarcado, estos agentes se sitúan en un espacio contradictorio, por la especificidad que comportan las relaciones que establece en este campo, en el que se procesan intereses sociales de distinta índole. Contratado para

¹⁷⁷ Iamamoto (2003:21) identifica la dimensión política como una posibilidad de “neutralizar la alienación de la actividad”.

desarrollar un mandato institucional que establece simultáneamente el cumplimiento de un control social y el desarrollo de intervenciones de carácter socioeducativas o de protección con los mismos sujetos de atención. Mandato a la intervención que los sujeta en una relación jerárquica donde dichos profesionales pueden subordinarse, reproducir o ejercer una estrategia en el campo de las disputas que se expresan y desarrollan en este trama.

La intervención entendida como campo problemático, se encuentra inmersa en este entramado donde el poder se expresa en el juego de relaciones no simétricas. Un campo donde se estructuran límites y oportunidades de negociación y acción, por lo que resulta relevante aprehender como dichas regulaciones institucionales pueden moldear su intervención, a punto de que estos agentes reproduzcan el poder delegado, orientado a desarrollar una “normalización” (Foucault), entendida como el desarrollo de formas que explicitan estándares frente a los cuales los sujetos de su atención son evaluados para conformarlos a esa norma, “contribuir a la gobernabilidad” (Foucault, 1992), o potenciador de las capacidades y discursos del sujeto de su atención.

Entendemos que en cada campo (Bourdieu, 2000) se reconfiguran permanentemente las formas de reproducción y control social. Procesos sociales que identificamos como expresión de la cuestión social (Castel, 1999), concepto que consideramos opera como base del surgimiento y de la orientación del Trabajo Social (Rozas Pagaza, 2001) en tanto disciplina cuya intervención es la propia trama de relaciones sociales concretas. De tal manera, entendemos que las prácticas e intervenciones en el Trabajo Social no pueden pensarse escindidas de normas y valores en un contexto social, relacional, institucional en que se despliegan y por fuera del cual es difícil comprender su sentido.

Una profesión cuyo surgimiento históricamente ligado a la religiosidad y la ayuda, vinculada con los imperativos de la racionalidad institucional (Rozas Pagaza, 2000: 17). “Una práctica de carácter conservador porque el imperativo categórico de la intervención estaba basado en función de opciones y compromisos desde la ayuda bondadosa...con compromiso moral”. Esta autora plantea la necesidad de realizar esfuerzos de ruptura ante concepciones que han neutralizado, paralizado y rutinizado las prácticas profesionales. En este sentido, la lectura de Bourdieu nos permite pensar las prácticas intentando aprender esa intencionalidad sin intención, un dominio que los agentes adquieren por el hecho

mismo de su prolongada permanencia en un campo, son una forma de expresión de la experiencia acumulada. Asimismo, a ese posicionamiento moral pretendidamente “universal”, antepone un posicionamiento ético como motor de interpelación que desde una perspectiva asociada con los derechos humanos, habilita otro un sentido de carácter político emancipatorio, en cada contexto.

Observamos que el debate sobre la ética y la moral asociado con prácticas e intervenciones no es suficientemente tematizado al interior del campo de la misma manera en que atraviesa al Trabajo Social¹⁷⁸ en las últimas décadas, preocupación compartida por otras disciplinas que observan y cuestionan este campo, en general, y la actuación de los agentes en este contexto.

En el primer caso, las prácticas, estarían asociadas con la moral en tanto tiende a ser reproductoras de costumbres consideradas “universales” modulan el sometimiento a las normas y preceptos sociales que suelen ser aceptados como válidos. (referidos a los tiempos de la trayectoria escolar, configuraciones familiares, etc.) En tanto cuando hablamos intervenciones las asociamos con un posicionamiento ético, que habilita un ejercicio de reflexión acerca de por qué considerar válidos distintas formas de pensar y vivir que tienen las personas. La diferencia estaría dada por cómo prácticas e intervenciones se alinean o someten a cierto código considerado aprobado, idéntico para todos o permiten comprender el sentido que las personas otorgan o construyen en su proceso vital, a partir de ciertas condiciones.

La indagación que realizamos nos permitió pensar que muchas veces, los agentes adhieren a esta tradición moral y otras tantas, están dispuestos a descolocar y cuestionar los estándares establecidos, en cuyo caso se evidencia un esfuerzo por sobrepasar la trama de mandatos y expectativas institucionales.

Distintos autores en el Trabajo Social incurrir sobre este conflicto al que aluden como el posicionamiento ético-político, o en términos de compromiso y responsabilidad de los profesionales. “Ser capaz tanto de dar respuesta a la pregunta acerca del porqué de nuestras

¹⁷⁸ La creciente incorporación del debate sobre la ética en los Colegios Profesionales, donde se han discutido en términos de “código” y los planes de estudio son un indicador al respecto.

decisiones y acciones, como de hacernos cargo de sus consecuencias.” “(...) el recurso de la reflexión ética, en su doble movimiento – en la deliberación para la toma de decisiones responsables y en la elucidación del sentido de la profesión-, constituye una posibilidad para poner en juego la reflexividad moderna y promover el respeto y el reconocimiento de todos los involucrados.” (Heler, 2001:33) Debates que aluden a cómo los profesionales logran incidir en las formas en que las instituciones vehiculizan la reproducción, imposición o cuestionamiento sobre aspectos de la vida de las personas que, la mayoría de las veces, exceden los propósitos formales que originan la demanda a la intervención, institucional y profesional.

La inserción de los profesionales en este campo, como hemos señalado, se encuentra aparejada al despliegue de las normas, tarea central de la institución judicial. El Trabajo Social es una disciplina que¹⁷⁹ suele ser convocada por las instituciones para atender a la población que acude a ellas en pos de coadyuvar en el cumplimiento de los propósitos institucionales. Orientada a atender las cuestiones que se presentan como obstáculos y dificultades en la prosecución de dichos propósitos institucionales. En este caso, el Trabajo Social¹⁸⁰ ocupa un espacio que se asocia a la atención de jóvenes para el desarrollo de las llamadas medidas socioeducativas en la observancia de normas y procedimientos previstos en la ley. Este mandato ha estado asociado históricamente con un espacio contradictorio porque reúne una actividad de cuño educativo dentro de una institución de control social, más recientemente también asociada con la detección y atención de situaciones consideradas como de vulneración de derechos.

Foucault plantea, refiriéndose a la norma, que “su función central no es excluir, rechazar. Al contrario, siempre está ligada a una técnica positiva de intervención y transformación, a una especie de proyecto normativo” (Foucault 2000: 57) Este autor, como antes expusimos, señala que la idea de poder no debe analizarse como una especie de totalidad. Estas definiciones facilita pensar que el poder, en este campo, desempeña un papel efectivamente positivo, “el sistema disciplina con efecto de normalización” (Foucault 2000:59), no es centralmente represivo sino productivo, posee en sí mismo principios de

¹⁷⁹ a excepción de los anclajes específico en áreas de Asistencia y Desarrollo Social

¹⁸⁰ Martinelli alude a la noción de “identidad atribuida”, para pensar “el significado de la profesión... y su participación en el proceso de reproducción de las relaciones sociales” (1997: 7).

transformación e innovación. No reducir su análisis a quien/quienes detentan el poder sino a como se ejerce, ya solo puede funcionar gracias a la formación de (un) saber, que es tanto un efecto como condición de su ejercicio. Desde las formas más capilares (Efron, 2003) las relaciones de poder no son de exterioridad, de allí la relevancia que adquieren, en este estudio, los agentes.

Ese mismo autor (Foucault, 2011) señala que la convocatoria a la intervención de profesionales en la justicia estuvo tradicionalmente aparejada a la norma, que simultáneamente propone un principio de calificación y corrección, alineada por el desafío y el saber relativo a la anomalía orientado al individuo a corregir, en este caso el niño. Cuando el juez debe estudiar al acusado, la economía y la medida, en la arquitectura institucional, es donde emerge la demanda que afecta la definición de la intervención profesional¹⁸¹, cuestiones que abordamos inmediatamente.

Las leyes vigentes redefinieron hace ya veinte años, a esta intervención judicial en términos de medidas socioeducativas. Esta noción, que predomina en la legislación actual, se inscribe en la perspectiva, denominada justicia restaurativa, que se presenta como una alternativa a la administración del castigo ya que contiene una intencionalidad superadora¹⁸². Al respecto, Donzelot (2008) señala que, el objetivo persistente ha sido “sustituir el brazo secular de la ley por la mano amiga del educador”. Y observa que tal sustitución constituye una penetración y extensión de lo judicial en el espacio educativo.

En el Trabajo Social esta es una preocupación recurrente, al respecto Iamamoto (1992) señala que las fuentes de legitimación del Trabajo Social se encuentran en el proceso de institucionalización de la profesión en las grandes instituciones del Estado, no tanto asociadas con un carácter técnico-específico, sino por su función política de cuño “educativo”, “disciplinador”. Sin embargo, como señala Montaña (2000) este profesional solo puede desempeñar el papel para el cual es contratado “su legitimación funcional” si es aceptado y legitimado por la población asistida “legitimación social”, lo que considera en el marco de un “pacto social tenso” parafraseando a Coutinho. Por esta vía, las

¹⁸¹ Se requiere observar. La norma es entendida como regla, regularidad funcional, como principio de funcionamiento adaptado (Foucault 2000:155)

¹⁸² Zaffaroni (2012: 31) señala otras “tres formas de modelos no punitivos: reparador, terapéutico y conciliatorio”. A entender de este autor, lo punitivo se comporta de modo excluyente.

instituciones amplían su capacidad de alcanzar sus objetivos, de obtener la aceptación y la legitimidad necesaria en sus intervenciones con la población (en nuestro caso) considerada en conflicto con la ley, “rebelde”, a quien proteger/sancionar.

Algunos autores, discípulos de Foucault, preocupados por los procesos de transformación en las formas de poder modernas, la llamada “gubernamentalidad”, las formas de gobernar la vida de aquellas poblaciones consideradas más marginales de la sociedad y los nuevos dispositivos de la seguridad, plantean entre éstos una continuidad histórica del control revestido de ampliación de beneficios sociales como vías de integración. “El reverso de la integración, lo constituyen las acciones estatales orientadas a la sanción de conductas juveniles, que son evidencia del fracaso de la institucionalidad gubernamental de las políticas de inclusión para este sector de la población. Molina Bravo (2010: 124, 135) toma la noción de “subjetividades nulas” cuyo centro de crítica sitúa en “los procesos de valorización que contienen los procedimientos de atención y control presentes en las políticas sociales dirigidas a jóvenes y adolescentes”. Para este autor, “La capacidad de agenciamiento esta puesta sobre las interacciones que efectivizan la condición de sujetos de derechos de los adolescentes infractores de la ley...Su participación en el juego estratégico entre autoridad y promoción,... equivale a la producción de reconocimiento subjetivo con relación al imperativo del ejercicio de derechos como base de la reinserción social” (2010: 139).

En esta línea, el anclaje del Trabajo Social en estas instituciones es complejo, también Cazzaniga (2000) señala que, esa intención “disciplinadora” coexiste en el marco de una vinculación profesional ineludible con los sujetos excluidos del orden material y/o simbólico y las condiciones de vida de los mismos. Este "asujetamiento" de la profesión no debería ser asociado con una opción ideológica e individual, sino como una continuidad histórica que va constituyendo el campo problemático de la intervención y que permite resignificar su orientación y contenido a partir de los "nombres y apellidos" de acuerdo a la forma en que se reformula y dirige el conflicto social, en cada momento.

Los Delegadxs, como el conjunto de los agentes judiciales, han desarrollado buena parte de su experiencia en esta tensión subsumida como “tránsito” entre marcos normativos en los últimos veinte años, dada la convivencia de distintas orientaciones persistentes en el

entramado del campo. La tarea de estos trabajadores sociales, ha estado orientada por la disposición tutelar, bajo la cual estos agentes son encargados del despliegue de las medidas socio educativas orientadas a la “reintegración social”, “restablecer al adolescente el ejercicio de un derecho” (Beloff, 2011:33), tendientes a afectar ciertas situaciones y condiciones de existencia de los jóvenes que “atrapa”¹⁸³ la justicia de este fuero. Consideramos que esta tensión subsumida como “tránsito” expresa, muchas veces, un juego de búsqueda de consensos sobre aspectos conflictivos, en donde observamos no siempre se discute, a veces toleran prácticas con distinta raigambre.

Observamos, a partir de las entrevistas realizadas, la presencia de nociones compartidas por numerosos agentes involucrados, que denotan una asociación entre ciertas condiciones de vida y una situación de riesgo social que suele ser correlacionada con la trasgresión normativa. Ello ha sido parte de la constelación ideológica del derogado Patronato y del conjunto de ideas designadas como de “defensa social”. Estas ideas suelen también estar asociados con observaciones de corte psicologicistas que permiten reenviar a la esfera personal y responsabilizar al círculo cercano familiar, de ciertos conflictos que son presentados como manifestaciones singulares, problemas de conducta, de organización familiar. Puebla (2005) lo designó como “clínica de la vulnerabilidad” Ello en ocasiones suple otra lectura relativa problemas de carácter estructural como los déficits de atención estatal, problemas de acceso a derechos, incapacidad de atención de instituciones públicas, exiguo compromiso de agentes intervinientes, etc. Este “inversión” facilita una responsabilización sobre la población y no sobre las instituciones de proximidad que son parte o han acompañado los procesos de vulnerabilidad a la que estos jóvenes suelen estar expuestos. También se observa otro grupo significativo de profesionales cuyas intervenciones se inscriben en una lectura comprensiva de las manifestaciones que constituyen la demanda a su intervención, que denotan un pormenorizado conocimiento de las normas vigentes y una posición crítica respecto de las posiciones que reenvían a la esfera personal los procesos que afectan a los jóvenes con quienes trabajan. Ese grupo está compuesto mayoritariamente por profesionales cuya formación es reciente o ha transitado procesos de formación continua.

¹⁸³ Stanley Cohen (1988) alude a la metáfora de la red para señalar el proceso que despliegan las instituciones de control social para seleccionar a cierta población.

El análisis desarrollado nos permite conjeturar que la mayor demanda de intervención al ámbito socio – jurídico asociada con un diagnóstico de mayor conflictividad social, estaría dando cuenta de cómo en el campo judicial emergen y/o se traslada –parcialmente- la atención de problemas asociados con procesos de vulnerabilidad, donde se evidencia los resultados de la lucha por el reconocimiento de derechos, el déficit o las dificultades relativas a procesos de inclusión¹⁸⁴.

En esta encrucijada, se redita cotidianamente la oportunidad de configurar la intervención del Trabajo Social como portador de un poder - saber y su discurso de la protección social orientado a atender a aquellos que caminan por los bordes, que implica reditar esa vieja alianza o crear otras oportunidades de trabajo en este campo. Como veremos seguidamente, el mandato institucional habilita a los profesionales para definir el contenido de sus intervenciones. Consideramos que el habitus en tanto prácticas y procedimientos cristalizados, puede operar como una restricción a estos márgenes.

Al respecto Karsz (2007) alude al Trabajo Social como un proceso de producción que no se reduce a las representaciones de sus agentes, a las demandas de sus destinatarios, a los proyectos de sus tutores administrativos y políticos. Este autor presenta una preocupación respecto de cómo capturar la dinámica de esta intervención, ya que considera a las prácticas en el marco de procesos más amplios.

En tanto Cazzaniga (2000) señala: “Se trata,... de una intervención profesional (la de los trabajadores sociales) que se juega... (en) las grietas que en término de desigualdades sociales se abren en el seno mismo del cuerpo social. Este "lugar", no necesariamente cómodo, nos ha planteado desde siempre la difícil tarea de caminar por la línea a veces material, las más de las veces imaginaria, del límite (que Gruner define como simultaneidad de lo que articula y separa...)”¹⁸⁵, que en nuestra práctica cotidiana se materializa, independientemente del espacio institucional en el que nos desempeñemos, en

¹⁸⁴ Existe consenso relativo a que las situaciones de pobreza constituyen fuertes limitantes para el desarrollo de la educación, la recreación, el deporte, la diversidad y riqueza de vínculos sociales, que son algunas de las llaves de acceso a los bienes sociales y culturales para que la niños, adolescentes y jóvenes puedan desplegar su potencial creativo acorde al ideal de un sujeto libre, autónomo y responsable.

¹⁸⁵ Introducción de Gruner E., en el texto de: Jameson y Zizek (1998).

una suerte de evaluación permanente de la vida de otros¹⁸⁶ a fin de encontrar los mecanismos apropiados para lograr su inclusión. Es precisamente en ese punto y en el modo en que ponemos en acto la "evaluación" en que se juega la intervención profesional como control social o como instancia de aporte a la construcción de autonomías y responsabilidades, donde a la vez, se expresan las prácticas profesionales heterónomas o conducentes a una intervención inscrita en la particularidad disciplinar.”

Coincidimos con Karsz (2007) identifica que hay intervención social allí donde los problemas llamados materiales, o la dimensión material de los problemas, no pueden ser resueltos mediante este tipo de intervenciones. Los trabajadores sociales son convocados justamente porque las situaciones son forzosamente complejas, necesariamente complicadas, no son simples. Este autor considera que el aspecto secundario de la intervención del trabajo social se corresponde con el registro material mientras que el aspecto principal se corresponde al registro ideológico, fundamentos y orientaciones que desarrolla en su intervención y donde el considera reside su potencia, su poder, su eficacia específica.

Demandas y expectativas.

El relevamiento realizado nos permite identificar un mandato institucional formal, establecido en el Art 136, Cap. VI De las Aplicaciones del régimen Penal de la Minoridad, Reglamentos para la Jurisdicción de la siguiente manera, “Son obligaciones de los delegados inspectores: a) Concurrir a la secretaría respectiva para oír notificaciones y recibir instrucciones, los días y horas que señale el juez; b) Informar al juzgado sobre la situación general de cada menor asignado, dentro de los diez días subsiguientes a la audiencia que refiere el artículo 135 de este Reglamento; c) Comunicar al juzgado todo cambio vinculado con la situación del menor o de sus padres, tutores, o guardadores; d) Requerir mediante informe fundado, cuando lo considere pertinente el cese de la detención del menor; e) Elevar anualmente al juzgado, antes del 20 de diciembre, una planilla de altas y bajas, con especificación del nombre de los menores que le fueran asignados; f)

¹⁸⁶ En este caso, las relaciones familiares muchas veces se constituyen como punto de observación.

Cualquier otra misión que le encomendara el juez respectivo. Se define un cúmulo de tareas o actividades, como prácticas, de acuerdo con nuestras definiciones precedentes.

Encontramos que el mandato reemplaza el qué se hace por el cómo se hace. La relevancia que adquieren los procedimientos¹⁸⁷ permite que, pese a las transformaciones ocurridas en el llamado plexo normativo, las prácticas se independicen, perduren. Una especie de “fetichización de los procedimientos” (Martínez, 2005). Esta misma autora señala lo que considera una paradoja “En una institución encargada de garantizar el cumplimiento de las normas, el énfasis está puesto en la observancia estricta de los procedimientos formales: el problema no es incumplir los fines de la norma (abierto a interpretaciones) sino desobedecer los procedimientos” (Martínez, 2005: 169)

Del repertorio de demandas cotidianas de los JNM y TOM, que relevamos en este estudio, los Delegadxs consideran que se privilegia el aspecto formal: las cosas al día, los informes en un formato; los plazos, mínimo una vez por mes, si están detenidos en los Institutos cada quince días, ir a los TOM en los días que ellos establecen. “no suelen darse indicaciones”, “no me piden lo que hago”, se refieren a escuchar, establecer un vínculo. Coinciden en señalar otras dos demandas no escritas que configuran un umbral mínimo establecido como indicador de su relacionamiento con los jóvenes, por un lado “que el pibe cumpla cuando se lo cita, que no desaparezca”, por otra parte inhibir la ocurrencia de nuevas causas judiciales, “que –el joven- no vuelva por otra causa”. Situaciones que cuando ocurren pueden ser consideradas –hasta por ellos mismos- como un indicador del fracaso de su propia intervención profesional.

El relevamiento realizado nos permite visibilizar cómo los requerimientos priorizan y se encadenan con necesidades operativas a cargo de los magistrados y eluden una definición más precisa de objetivos o propósitos de dichas intervenciones con los jóvenes que son el centro de su atención, quienes se encuentran relegados de manera explícita en el mandato formal. Consideramos, como señala Matus (2003), que los sujetos con los que trabaja el Trabajo Social siempre emergen al interior de una categoría analítica determinada, y “si la

¹⁸⁷ Recientemente aprobada la reforma de los procedimientos penales de la justicia nacional, el inicio del proceso de implementación está previsto a partir de agosto 2015, en dicha ley se omitió el fuero de “menores”, aunque en los proyectos de ley de implementación este fuero se incluye Proyecto 06/04/15.

categorización social se realiza en términos estigmatizadores, (o se encuentra ausente), esos sujetos llevarán esas marcas en forma persistente... nombrar a los sujetos es, ... conferirles identidad y al mismo tiempo posicionarse desde un punto de vista que condensa los marcos teóricos referenciales y la perspectiva ético-moral que define la intervención” (Aquín, 2008: 66-67)

Consideramos la ausencia de espacios de debate afines a reorientar intervenciones y prácticas, como un indicador de la escasa capacidad de afectar aquello que se critica y simultáneamente naturaliza. Como ya advertimos inclusive en la reforma procesal penal, se omitió la mención de este fuero *menores*, que ingresó en ese debate¹⁸⁸ a partir de la elaboración de leyes de implementación.

¿Cómo se despliegan estas obligaciones, que otros contenidos integra? Encontramos un amplio abanico de respuestas a partir de las entrevistas realizadas a los profesionales en ejercicio, que se correlacionan y tensionan con las prácticas y los mandatos prescriptos de manera consuetudinaria. Los trabajadores sociales suelen aludir a su intervención profesional en términos de “prácticas” como a una enumeración genérica de actividades, un recurso que solapa exhibir fundamentos y orientaciones de la intervención profesional.

Qué se hace y qué se dice en relación a lo que se hace. Lo prescripto y lo construido.

Informar y realizar “el seguimiento”, acompañar, son las tareas que todos los entrevistados mencionan, con mayor frecuencia y que consideramos espeja el mandato institucional. Los contenidos de estas nociones adquieren acepciones que evidencian distintas posiciones teórico-ideológicas. La tarea y la especificidad disciplinar se conjugan en una forma de hacer, que se va consolidando en el campo que los congrega.

Como mencionamos, en la dinámica cotidiana se pone en juego el uso continuo de instrumentos previstos para todos los Delegadxs y que tienden a estandarizar las modalidades de trabajo, “lo típico del encuentro” (Schutz, 2001). Sin embargo, todos los profesionales consultados advierten que su intervención es personalizada, se busca romper

¹⁸⁸ Motorizado por inquietudes de carácter gremial.

con la anonimidad que imprime la institución a la relación con los otros. Son contratados para trabajar sobre la particularidad: los jóvenes y sus grupos convivientes, reconocen que la construcción de un vínculo con el otro requiere atravesar la generalidad, dotar de contenidos a este encuentro, construir una relación. Un interés que se expone desde la presentación, que les permite conocer y darse a conocer. El establecimiento de la relación incluye la reconstrucción de la biografía del joven y su grupo conviviente. Se indaga acerca de las interpretaciones valorativas del joven respecto del mundo social, sus condiciones de vida. Advertimos, sin embargo, que el cuestionario alentado por la Cámara, que se utiliza como guía en el desarrollo de estos encuentros, pauta una mecánica que desfavorece la atención sobre la singularidad de los jóvenes, fácilmente sintoniza con una posición que denominaremos como “acusatoria” en el trato con los jóvenes, donde prima la carátula que motivo el origen de las actuaciones e integra a los Delegadxs al conjunto de la dinámica de los JNM y los TOM, aunque en el discurso profesional se idealiza el compromiso continuo y atento para con esta población.

En el caso de la **primera entrevista**, se organiza de acuerdo con el formato previsto para el denominado primer informe que fue establecido por los jueces de la Cámara¹⁸⁹, en Acuerdo General en abril de 2010¹⁹⁰. En los considerandos de este Acuerdo “se destaca la importancia de que ese diagnóstico primario quede plasmado siguiendo lineamientos uniformes para facilitar la tarea de los magistrados intervinientes...Los ítems a desarrollar...serán los siguientes I. Datos Personales, II- Datos Familiares, III Historia Institucional y Antecedentes, IV Reseña Familiar: grupo familiar conviviente y no conviviente, V Educación formal y no formal estudios cursados con detalle de toda circunstancia que denote la relación entre el nivel de estudios alcanzado con la edad cronológica y motivos de abandono escolar; VI Área laboral: actividades que ha desempeñado o desempeña; VII Área salud: antecedentes de patologías y tratamientos realizados tanto por el joven como por su grupo convivencial. Diagnóstico integral: clínico neurológico, psiquiátrico y psicológico del joven. VII Situación económica: consignar si están cubiertas las necesidades del grupo familiar; IX Datos ambientales: barrio, servicios y recursos comunitarios de la zona en que el joven reside. Vivienda; X Área social:

¹⁸⁹ a partir de un proyecto elevado por las juezas que integran la Comisión de Menores, Dra. M. L. Garrigós de Rébora y M. López González

¹⁹⁰ Que históricamente han delineado los contenidos que consideran se deben incorporar.

relaciones con la comunidad. Actividades recreativas: individuales y compartidas con la familia. XI Gestiones realizadas tendientes a lograr la inclusión social y comunitaria del joven: articulación de las redes institucionales. XII Conclusiones: evaluación diagnóstica de la situación individual, familiar y comunitaria del joven; XIII Objetivos: En base a las conclusiones a que se arriben en cada caso se establecerán metas de trabajo con el joven, la familia y las redes comunitarias en las áreas de familia, educación, salud, y trabajo, tendientes a evitar futuras situaciones de vulnerabilidad social; XIV Firma del convenio de responsabilidades: Una vez establecidos y priorizados los objetivos se redactará entre las partes interesadas un convenio de compromiso y acuerdo de responsabilidades para restablecer los derechos” (el Acuerdo se incluye en los Anexos.)

En dicha oportunidad, según manifiestan los entrevistados, se elevaron contrapropuestas desde el CEDIM que manifestó su desacuerdo con algunos de los lineamientos propuestos¹⁹¹. Ello posibilitó que este formato fuera considerado una guía para el relevamiento y registro de la primera entrevista por parte de los Delegadxs, a partir de la reunión sostenida con una de las camaristas impulsora de dicha propuesta y la titular de la Prosecretaría de Asistencia Social- quienes verbalmente habilitaron a los profesionales a reformular esta guía según su criterio profesional. Consideramos que este documento es una evidencia de las demandas y expectativas que la máxima autoridad formula a estos profesionales, como lineamiento de trabajo en la actualidad.

Los Delegadxs reflexionan al respecto “Me gustaría ser más rigurosa... el informe está pensado con una concepción que atrasa”, expresan sus dudas en torno de cómo los discursos se correlacionan en las prácticas. La intervención profesional y el mandato institucional no son pensadas como una “función neutral” (Sennett, 2003, 156) sino como instancias que evidencian la tensión persistente que recorre los distintos niveles del entramado institucional.

El desarrollo uniforme de las entrevistas encuentra fundamento en ciertos elementos irrevocablemente impuestos por la Cámara, que resolvió un formato estandarizado que los Delegadxs deben completar Bourdieu refiere que los agentes en un campo desarrollan

¹⁹¹ La firma del Convenio de responsabilidades fue también objetado por miembros del Ministerio Público de la Defensa.

habitus, que les permite saber lo que hay que hacer en una situación determinada, como un arte de anticipar, alude a estos “como esquemas de acción que orientan la percepción de la situación y permiten una respuesta adaptada” (1997, 40) Empero, los jóvenes presentan situaciones biográficas disímiles y los hechos en los que se ven involucrados asumen un sentido singular en su vida cotidiana que difícilmente puedan ser trasladados en una u otra cosmovisión “natural-relativa” (Schutz, 2001). En este sentido, observamos que la familiaridad y la tipicidad en la construcción del conocimiento, constituye un serio obstáculo también para los Delegadxs. En tanto el objeto de la experiencia es reconocido como nuevo pero no novedoso. El ejercicio de aplicación del conocimiento habitualizada, constituye un serio riesgo, que implicaría “una síntesis pasiva” (Schutz, 2001) donde la captación automatizada (Schutz, 2001) tendería a ver - captar lo que ya conoce, aquellos elementos que coinciden con los previstos por la ley, el procedimiento, la propia experiencia, una economía de la pregunta, la comodidad de ver y opinar aquello que se presume, a reditar opiniones frente a situaciones similares, etc. “Los grados de determinación del conocimiento se constituyen también en una interacción de elementos impuestos... que efectúan la continuidad o interrupción de la adquisición de conocimientos”. Ello implicaría que la (nueva) situación no exija ninguna determinación que trascienda “el tipo”, una desatención a lo que Schutz (2001) denomina como el relieve del objeto. Un cercenamiento que puede inhibir la captación de la información y el reconocimiento del sujeto, por parte de los agentes involucrados. Una lógica que puede originar, sin contradicción una reproducción lineal de discursos instituidos respecto de la población con la que se trabaja.

Algunos de los trabajadores sociales entrevistados, aluden al primer contacto como: “me dieron un chico”. Esta expresión da cuenta de que el JNM o el TOM realizó la designación a partir de la disposición tutelar, que marca el inicio del proceso de intervención orientado a conocer a las personas, los sujetos de la intervención. “Respetar sus tiempos”, “hablar su lenguaje”, etc. Son expresiones a las que apelan los entrevistados para describir su acercamiento profesional, que según manifiestan tiene una implicancia personal, que se apoya y fortalece por las concurrencias al domicilio, los contactos telefónicos por fuera de los horarios de trabajo de las oficinas de Tribunales. Conocer a las personas es parte del mandato institucional encargado a estos agentes. El establecimiento de esta relación, tiene otros deslizamientos que incluyen, por ejemplo, una disposición a atender otros problemas

que las familias consultan. La mayoría de profesionales refieren que la tarea de acompañamiento es simultánea al inicio de la intervención judicial y se mantiene –si ese niño/a es procesado-, generalmente hasta la mayoría de edad, por lo cual su duración oscila entre períodos cortos hasta periodos prolongados a dos años.

De las entrevistas se desprende la preocupación y habilidad de los Delegadxs por calibrar los imperativos de conocer e informar “de modo que los sujetos no se sientan en un microscopio”. “En la entrevista, el “tercer oído” requiere que el entrevistador se encuentre al mismo tiempo (interactuando en forma comprometida y registrando) dentro y fuera de la relación” (Sennett, 2033, 50 y 51). Las profesionales advierten que, muchas veces “se sintieron” interpeladas por su papel de “investigadoras”, la primer entrevista establecida por los Camaristas, establece una relación con los sujetos, de mucha pregunta. Ello puede implicar “el retraimiento”, tal como señalan distintos autores como Sennett y Erikson. Por ello, destacan, es clave que los jóvenes entiendan que esta “oficina” no se ocupa de investigar los hechos de la denuncia y que se los va escuchar.

Como ya mencionamos, los entrevistados señalan que los jóvenes, familias y /o grupos convivientes se encuentran muy impactadas por la irrupción de la intervención judicial-penal, por lo que los profesionales coinciden en sus apreciaciones respecto a que, en la primera entrevista, sus interlocutores se encuentran en un momento de vulnerabilidad y crisis. Es frecuente que los adultos se vean tan afectados como los jóvenes¹⁹². El reconocimiento y cuidado de los profesionales facilita las primeras interacciones.

Los entrevistados en su conjunto, refieren que el requerimiento de **informar** incluye un proceso que se inicia con el conocimiento de la situación del joven, su trayectoria, el vínculo familiar, “hasta donde el pibe... está dispuesto a contar”, quienes son sus referentes, su padre, madre o quien está presente en esa entrevista y en su vida. Los trabajadores sociales coinciden en que se debe mantener un respecto a la privacidad, se pregunta y se respeta el silencio. “El centro es la vida del pibe”, actor principal de la reconstrucción que se organiza en el informe. Ello señala un avance sustantivo en relación al contenido de las prácticas precedentes. Da cuenta de cómo algunos profesionales

¹⁹² En ocasiones los adultos se emocionan en el curso de la entrevista donde se recorre parte de la historia de ese grupo familiar y se exponen situaciones de conflicto, dificultades, etc.

cuentan con capacidad para dotar de contenido los procedimientos y orientar o reorientar sus intervenciones

Los Delegadxs también exponen que consultan con los chicos sobre su preferencia antes de realizar la primera entrevista, si prefieren estar a solas, o incluir a la persona que lo acompaña. Siempre se suma al adulto referente en este primer encuentro pero la entrevista puede ser conjunta o posterior. Más allá de las modalidades de trabajo, los resultados se registran en el llamado primer informe.

El reconocimiento es un tema que ha sido abordado por distintos autores Rousseau, Rawls, Habermas, Bourdieu y más recientemente Fraser. Honneth (2007: 31) señala que “todos los miembros de las sociedades capitalistas se ha socializado de la misma manera en el sistema de conducta reificante, de modo que el tratamiento instrumental del otro representa, en primer lugar, un hecho social y no un agravio moral”, que este autor señala como una atrofia o distorsión de una praxis de implicación respecto de sí mismo y de su entorno.

Nos interesa señalar algunos aspectos básicos relativos a cómo se ve un individuo a sí mismo a través de los ojos de los otros. El reconocimiento, que también se encuentra asociado con el respeto mutuo, se encuentra, a nuestro criterio, estrechamente ligado a la puesta en práctica de la perspectiva de los derechos humanos, como una perspectiva que opera (o no) el desarrollo de las prácticas cotidianas de estos profesionales como “respeto mutuo inclusivo” (Sennett, 2003, 69). Una de las entrevistadas lo explica de la siguiente manera: “un lenguaje más compartido.... Yo creo que eso hay sido un poco el rescate, como dirían los chicos. Que no estamos rescatando todos los que trabajamos con los niños, con adultos, etc. Que ha sido el gran invento de este siglo para el diálogo...”. Una “implicación” (Honneth, 2007: 49) que designa un acto de toma de perspectiva, que añade un elemento de relacionabilidad afectiva, una perspectiva de compromiso interesado, según este mismo autor.

Los Delegadxs entrevistados coinciden en señalar que “Más allá (del resultado de proceso judicial) de que sean responsables o no”, la primera entrevista es el primer contacto que permite construir un vínculo para empezar a pensar si es necesario, o no, organizar una estrategia de trabajo. En esta entrevista, asimismo, los adultos que acompañan a los chicos

en ocasiones expresan una clara demanda hacia los profesionales y la institución, relativa a distintos problemas: en el ejercicio de su autoridad, referida a la dinámica familiar, horarios de regreso a la casa, dificultades en el desarrollo de estudios, consumos, etc. No siempre asociado con los motivos que originaron la intervención judicial. Se trata de situaciones que asociamos con la “productividad” y los efectos “positivos de esta relación”, en los términos de Foucault. Una apelación que entenderemos como correlato de ausencia o déficits de espacios de consulta en otras instancias de atención. Desde ese momento, Los Delegadxs, inician la relación con el joven, la familia o los referentes que los acompañan, orientada a empezar a pensar –entre todos- qué pasó, implicarse en un proceso de reflexión. “Cuando la gente toca bien...”los instrumentos sociales”, conecta con los extraños, se involucra.... Se compromete” (Sennett, 2003: 62, 63). Para muchos de los profesionales consultados supone “Tomar en serio las necesidades de los otros”.

Es el momento del llamado “encuadre”, para los Delegadxs, la primera entrevista es fundacional según coinciden en señalar. Resaltan que se trata de una situación en que los jóvenes transitan por los pasillos, ven a los profesionales en su lugar de trabajo, los ubican (a los Delegadxs) como parte de esa institución, de ese proceso judicial. Es el momento en que el joven y la familia pueden conectar lo que sucedió con las consecuencias legales, empezar a conocer y averiguar en qué consiste la intervención judicial. La relación con los Delegadxs, desde entonces, suele desarrollarse extramuros. Para los profesionales es relevante que esta conexión sea clara, insisten en que la primer entrevista debe estar situada en la sede judicial, aunque el espacio físico en el que se desarrolla sea deficitario. De ello inferimos que si el encuadre se diluye o es lábil, los jóvenes pueden disociar el compromiso que asumieron en las instancias judiciales de la relación con estos agentes. Cuando ello sucede, se afecta la capacidad de desarrollar los requerimientos institucionales, ese encuadre les permite inscribir materialmente el desarrollo de los estos agentes consideran “su trabajo”, las medidas socioeducativas y el control de carácter formal y burocrático que constituyen un requerimiento constante a estos agentes por parte de los JNM y TOM, la exigencia de constancias de asistencia escolar, o de tratamiento, etc.

Encontramos que existen distintos tipos de demandas a los Delegadxs que se expresan con distintas nominaciones en los libros de cada JNM y TOM, solicitudes de primer informe, informe socio ambiental, de seguimiento, de niños que se encuentran detenidos /

“internados”, e informes de “cierre” por mayoría de edad también llamados retrospectivo. Los objetivos de las entrevistas son distintos. El conocimiento que se solicita en el primer caso es de cumplimiento parcial en un solo encuentro, cuando el propósito es contribuir al proceso de toma de decisiones que corresponde a los funcionarios judiciales, por un lado y por el otro, en algunos casos, comenzar a identificar y delinear estrategias que permitan promover la atención por parte de los organismos administrativos competentes sobre aspectos o situaciones que puedan ser considerados problemáticos, deficitarios, etc. Es parte del conjunto del proceso en el cual se comienza a -construir una “respuesta”-, a reconfigurar aquello que se prescribe o configura como demanda institucional, en cada caso.

Esa demanda que cada magistrado requiere contiene un pedido de evaluación que le contribuye a dirimir la necesidad de imponer o no la disposición tutelar en tanto la “causa” este vigente. Según relevamos, en algunos Juzgados¹⁹³ la disposición tutelar es la regla y solo se suspende o cesa esta medida en caso de que el joven no sea procesado. Se trata de prácticas cristalizadas, escasamente objetadas que exhiben un debate persistente. Una Secretaria Tutelar entrevistada, planteaba de la siguiente manera su expectativa hacia la intervención de los Delegadxs: “Está muy estructurado la forma en que trabajamos” (con los Delegadxs) “Tienen que ser claros en los informes...en lo que transmiten “El trabajo en equipo enriquece un montón” “el primer contacto con el chico se hace acá, para darle un marco...explicarle quien es la Defensora, la disposición tutelar...” “informes mensuales en domicilio y quincenales si están internados...ver quienes estuvieron vinculados o interviniendo con el chico...” “Necesito bastante que vayan... pero hay tantas zonas de riesgo...” “El trabajador social tiene más cercanía con el grupo familiar, a veces la forma de los informes” “No voy a poder cambiar...donde vive el chico, pero...dos cosas básicas, primero la documentación...y otro tema es la escolaridad que tiene que estar reinsertado... la educación, insistimos”

Se trata de un escenario complejo donde según (Foucault. 2000) los profesionales, juez y perito pueden “intercambiar papeles” sobre las formas de control y evaluación, sobre la capacidad / poder ligado a la caracterización de un individuo y su contexto de existencia,

¹⁹³ En los juzgados se observa notales diferencias en los criterios de trabajo que desarrollan sus funcionarios, esta diferencia es mayor si se compara entre los JNM.

más que al acto mismo que los profesionales no pueden mencionar¹⁹⁴. Ello posibilita una costura, a entender de este autor, quien alude a la doble calificación socio-judicial, una responde a la pregunta por el castigo, la otra a conjurar la peligrosidad. Observamos que la noción de riesgo es utilizada por los distintos agentes de manera ambigua, para designar a jóvenes en riesgo asociada con la vulnerabilidad de estos sectores y en otras ocasiones “no se puede desligar del concepto de factor de riesgo....de aquellas condiciones cuya presencia...aumenta(ría) las probabilidad de que ciertos individuos comentan delitos” (Dammert, 2009:125, citada por Pasin, 2015: 225)

Al respecto, los defensores oficiales advierten que, en ocasiones, los Delegadxs deslizan en sus informes cuestiones relativas a la responsabilidad¹⁹⁵: “está muy arrepentido” Para la defensa esa situación es grave. El contenido de los informes es crucial para los defensores quienes destacan que en los últimos años los Delegadxs también se profesionalizaron¹⁹⁶. Marcon, (2013b: 121-122) explica esta situación con claridad: “La propia idea de que los profesionales no dialoguen sobre aspectos vinculados al hecho, constituye una solución técnicamente adecuada y defendible desde las preocupaciones garantistas, pero simultáneamente implica situaciones subjetivas absurdas: el joven se encuentra en esa situación a raíz de ese hecho ¿cómo no hablar de él? He aquí un efecto más de la referida atomización y, entonces, un problema teórico a resolver. Con nitidez “las contradicciones de las racionalizaciones con las que (a las penas) se las quiere dotar de racionalidad se hacen mucho más notorias” (Zaffaroni, 2011:20)”.

Los entrevistados opinan que los niveles de profundidad de la información que se alcanza en las entrevistas es el material con que los profesionales asumen la tarea de elaboración de todos los informes donde emiten sus opiniones profesionales, generalmente en las conclusiones finales. A veces se enuncia un sintético resumen informativo del contenido previo, otras a modo de “diagnóstico primario”, como solicita la Cámara, que contribuye, como ya mencionamos, en el proceso de decisión judicial relativa a la disposición tutelar y que establece una impronta / direccionalidad sobre el trabajo posterior.

¹⁹⁴ Los Delegadxs están inhibidos de hacer referencias explícitas a los hechos que inician las actuaciones judiciales, sobre la participación y responsabilidad de los jóvenes en los mismos.

¹⁹⁵ En los casos de Delegadxs abogados se critica que aluden a cuestiones jurídicas que no les corresponden asumir.

¹⁹⁶ La noción de profesionalización se asocia a que se trata de agentes universitarios, la integración de equipos y un mayor conocimiento de las normas vigentes.

De acuerdo a la complejidad de las situaciones, los entrevistados refieren que es posible que en las conclusiones se incluyan o no sugerencias tendientes a dictar o no, la “disposición judicial / tutelar”. Esa decisión está reservada al juez quien considera: el hecho, los antecedentes, entre otras valoraciones entre las que el informe se integra. En los casos en que el informe de los Delegadxs sugiere no realizar la disposición tutelar y esta opinión es considerada favorablemente, el expediente tutelar se “suspende”. La fórmula que dice “Estése presente a lo que se resuelva en la causa principal” acredita que la sugerencia de no efectuar la disposición tutelar ha sido aceptada.

Sin embargo, a partir de la valoración del hecho del que se le acusa, los JNM pueden tomar una decisión independiente de la opinión de estos profesionales. “El juez necesita tu firma para resolver”, pero no necesariamente debe orientar sus decisiones en el mismo sentido. Las entrevistadas apuntan que, cuando las opiniones son contrapuestas, es posible que se solicite algún cambio en el informe, en ocasiones omitir una oración¹⁹⁷, solo describir, no emitir opinión. Estos hallazgos son evidencia de cómo en este campo se gestionan las opiniones divergentes.

La disposición / tratamiento tutelar es una figura polémica en la reforma judicial como planteamos en el capítulo 2. Define la continuidad de las intervenciones tutelares, que constituye la mayor parte del trabajo asignado a los Delegadxs. Terragni es uno de los referentes que sostiene que “A los fines de la tutela del menor, ya sea víctima o victimario, el juez penal es incompetente; siendo el caso objeto de estudio del órgano administrativo en el caso de las medidas de protección integral de derechos”¹⁹⁸. Este autor recusa las prácticas judiciales, ancladas en la vigencia de la ley 22.278 y en miras a que el joven pueda alcanzar su absolución a través del mencionado Art. 4to., ha promovido la sobrevivencia del expediente tutelar y la disposición tutelar del joven. Medida que implica que el juez tiene la capacidad de establecer y mantener la intervención de profesionales, asociados con el desarrollo de las mentadas medidas socio-educativas que transitan en paralelo a la necesidad de conocer-controlar la vida de los jóvenes, lo cual constituye un elemento significativo a la hora de ponderar su sanción-absolución.

¹⁹⁷ La oración donde no se sugiere la disposición tutelar del joven.

¹⁹⁸ Disponible en: <http://www.terragnijurista.com.ar/doctrina/articulo.htm>

Al respecto, una defensora (pública) señalaba que en “el antiguo sistema tutelar la figura del Delegadx era esencial, estamos en un momento de transición que se está eternizando... el derecho penal que debería llegar último, llega primero ... la vulneración de derechos es tal, que ..., en tanto y en cuanto sea para restablecer la vigencia de los derechos de estos niños víctimas o imputados... las reglas no están claras” “A medias de una observación tutelar ...a medias de un sistema de garantías... la razón de ser de un defensor de menores e incapaces en el ámbito penal con una ley de garantías sería más o menos lo mismo ... que la función de los Delegadx”, revela con sus palabras un laberinto de argumentos.

La disposición tutelar, es una medida que suele establecerse en el momento de la apertura del expediente tutelar, cuando se evalúa que existen situaciones que ameritan atención o existen demandas en ese sentido. Sin embargo, según observamos en numerosos expedientes, en los casos en que las cuestiones planteadas inicialmente se disipan, es difícil que esa medida se “suspenda”. Algunos Delegadx manifiestan que, como estrategia alternativa, utilizaron el recurso de solicitar autorización para espaciar el ciclo de entrevistas en los casos de las causas elevadas al TOM, hasta que el joven cumpla la mayoría de edad. Al respecto, un juez consultado señalaba: Uso colaboración porque la Cámara lo definió de esa manera. Es un trabajo, “Yo me niego...a ese famosos ¿podemos hacer los informes bimensuales o trimestrales? ...yo necesito saber qué pasa con el chico mes a mes...si de repente se produjo un problema...el responsable soy yo” y “el período de intervención se acotó...” Se soslaya la noción de protección por la de sospecha y vigilancia sostenida. Con el argumento de que si el joven tiene una nueva intervención judicial el responsable último es el juez, se desconfía de la opinión de los profesionales y simultáneamente del joven. Otra evidencia de como prevalece otra acepción del riesgo, para algunos jueces fundamentaría un privilegio de medidas de control por sobre otras alternativas de atención de los jóvenes.

Esta lógica tutelar, fundamenta y explica el encadenamiento de informes desde la primera evaluación. Algunos de los defensores consultados consideran que ello contribuye no solo a - definir la disposición tutelar, sino también - al momento de solicitar el cese de una medida excepcional y –especialmente, para poder elaborar su defensa y posteriormente solicitar su absolución. Los funcionarios advierten además que los Delegados son quienes

suelen alertar sobre la necesidad de que los organismos administrativos presten atención, recursos, garanticen derechos¹⁹⁹.

Algunos Defensores Oficiales reconocen que, los niños siguen presentando situaciones desventajosas respecto de los adultos²⁰⁰. La permanencia de niños en situación de privación de libertad, en ocasiones se explica por la ausencia de establecimientos asistenciales que puedan alojar a niños “en situación de calle”. Ello colisiona con lo establecido en el Art.33 de la ley 26.061. “...La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancia, transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización”. En los informes, suelen ser los Delegadxs quienes exponen la ausencia de alternativas que posibiliten el egreso. Ello implica que el juez puede dictar la permanencia del joven en instituciones del dispositivo penal de la SENNAF hasta que los organismos administrativos formulen una propuesta alternativa de egreso²⁰¹. Como esas decisiones se apoyan en quien expone el problema, los Delegadxs refieren que se suele asignar la responsabilidad de la extensión de esa medida a sus informes. Los jueces y defensores coinciden en señalar que en ocasiones las opiniones de los Delegadxs y de los profesionales de los Institutos no coinciden, “entonces ¿yo que hago, está en condiciones de salir, de ser derivado?”

Una Defensora Pública entrevistada completa esa respuesta “siempre la última palabra la tienen los jueces. Yo creo que lo ideal sería que los Delegadxs trabajen con los defensores.”, y agregaba “el informe te lo adjunto sí sirve, y si no sirve, no. Porque en realidad sería un plus, pero nunca puede ser en demérito”. Estas expresiones nos permiten entender cómo se opone “al mencionado supuesto interdisciplinario fundado en la horizontalidad (la opinión de los equipos)... constructos que obedecen a poderes” o según el mismo autor, el valor de “la palabra producida por los equipos interdisciplinarios en relación con la palabra del decisor final (juez). (Marcon, 2013b).

¹⁹⁹ El Consejo de Derechos de la CABA en su estadística considera estas derivaciones como problemas relativos a la vulneración de derechos.

²⁰⁰ La privación de la libertad es un ejemplo paradigmático, que para los menores de edad es considerada una medida de carácter excepcional. Los informes del Ministerio Público han comenzado a visibilizar estas cuestiones.

²⁰¹ Es frecuente de los niños en situación de calle, manifiesten su negativa a egresar con la familia de origen, y la vacante en instituciones asistenciales sea demorada por las autoridades del llamado Sistema de Protección Integral.

Fue excepcional que en el curso de las entrevistas desarrolladas con Delegadxs y funcionarios, se omitiera la metáfora de **“los ojos del Juez”**. La mayoría de los funcionarios entrevistados recuperan esta histórica imagen para aludir al trabajo de los Delegadxs, que mantiene absoluta vigencia entre todos los consultados. Por eso transcribimos fragmentos parciales que en primera persona tratan de explicar la relevancia que para ellos adquiere contar con ese conocimiento, más que valorar el trabajo que ellos desarrollan. “ningún juez puede ir a la casa, a todas las audiencias, a los institutos”, explica un magistrado. Son los Delegadxs quienes realizan ese trabajo. Estos funcionarios valoran el conocimiento personal con esta población que ellos escasamente ejercitan. Priorizan la tarea de informar como una dimensión constitutiva y central que requieren del trabajo de los Delegadxs. El imperativo es producir información, realizar un relevamiento y contar, - una cronología de la historia vital y la situación presente- especialmente en un primer informe, que se completa y concatena con el trabajo de campo y los informes de las entrevistas en el territorio, el seguimiento.

Otros funcionarios destacan: Los Delegadxs siguen siendo el nexo con la población, “yo conozco a los chicos a través de sus informes..., de sus comentarios... Deben hacer eso, informar parcial o totalmente..., sacar al chico adelante”. Sin embargo “Hay toda una movida para sacarlos (A los Delegadxs)”. “.... alguien lo tiene que hacer.... no sé si es la justicia la que debe asumir o el órgano administrativo (que no lo hace, según este entrevistado). “Acá la consigna es bien clara... que ese chico no esté en conflicto con la ley penal, todo lo que sume en esa dirección bienvenido... los Delegadxs son los ejecutores (de ese mandato) por excelencia... “Cuando tengo un asunto complicado....hablamos... qué hacer,... van surgiendo cosas,... muchas veces que yo no pensaba”, “hay gente que se anima más...hay un espíritu transformador”. “Ellos nos aportan... el contacto directo con los chicos... tienen herramientas...más ricas, de lo que yo puedo tener, desde lo que es el Derecho puramente.”, “como los ojos del juez... tienen una doble mirada, lo que se pide acá en el Juzgado y lo que observan, la familia”....”El punto en común es tratar ... que el chico pueda salir adelante y lograr que aquellos que van a tener un oral puedan hacerse (alcanzar la absolución en el juicio oral)...que no vuelva...a reincidir...nuestra intervención sea eficaz”. Otro entrevistado abunda en el mismo sentido, “Los Delegados son los que bajan a tierra con la realidad. A veces los abogados estamos en los despachos

con los papeles y elucubrando teorías jurídicas, y (ellos) son los que hacen el trabajo de campo,... los acompañan. Insisto, yo no sé si toda esta función del andamiaje social tiene que estar en el ámbito del derecho penal. Yo creería que no,... “te cuido, pero después te condeno”. Nosotros tenemos que cuidarles los derechos... a la educación, el derecho a la salud. En un derecho penal tutelar eso sumaba... En la coyuntura actual de la concepción actual de derechos, no es el juez penal, ni el Delegado, ni el Defensor de Menores e Incapaces el que se tiene que ocupar porque el chico esté vacunado.... tiene que entrar por el derecho penal, con la imputación de un delito, para que le podamos dar la vigencia de derechos....No me puedo dar el lujo de ver por dónde entra la vigencia del derecho. Y aparte considero que el conocimiento de la vulneración también nos coloca en un lugar de garantes a los Delegados, a los Defensores, a los jueces”. También distinguen diferencias en la relación que establecen los distintos agentes con los jóvenes en el campo “A veces (los jóvenes) son difícil de encontrar, hay fallas de nuestro lado (señala un funcionario): (para) explicarles que es importante. El Delegadx es sustancial (para su defensa y absolución); Señalan como dificultades que caracterizan a la atención de los jóvenes en los TOM, “la persona que acude a la mesa de entradas,...falta de información,... de tiempo y de dedicación. Se está más preocupado por el oficio (habla de agentes judiciales y los oficios judiciales que se incorporan en los expedientes)”

Los entrevistados ponen en juego que la intervención de estos agentes, que “no son del campo del derecho”, posibilita y contribuye sustancialmente al objetivo de la gestión judicial que es la absolución, por la vía del desarrollo y (para él) la observación de ciertas “medidas”, según este entrevistado.

El seguimiento, el trabajo de campo. La mayoría de los trabajadores sociales consultados señalan que a diferencia de los otros profesionales que integran los equipos, consideran inherente a su labor específica, trabajar en contexto. Les permite, según manifiestan, acceder a la dinámica cotidiana familiar, el vínculo y conocimiento de los recursos de la comunidad y pensar estrategias que permitan afectar algo de la situación que transita el joven o preguntar(se) si requiere atención.

La imagen y tarea asociada con la “visita a los pobres”, las visitadoras sociales²⁰² (Alayón, Grassi 1983, Tenti Fanfani, 1989) históricamente, fue parte del cimiento sobre el que se forjó el espacio socio-ocupacional del Trabajo Social. No nos interesa historizar sobre estas cuestiones pero si recuperar que, en el imaginario social, la concurrencia a domicilios y el trabajo en territorio constituyen una tradición arraigada tanto en las instituciones que los contratan, los mismos profesionales, como en la población que los recibe a diario en su hogar. Un espacio que consideramos poroso entre cuidados y control que no puede ser disociado del origen de esta profesión.

El trabajo de campo, en territorio fue adquiriendo muy distintos significados y contenidos en el devenir de la profesión y en cada campo. Coexisten distintas representaciones y demandas, aquello que puede ser considerado una invasión al espacio privado, y donde es posible zanjar problemas referidos a la exposición y el cuidado de la privacidad en un marco de confianza, donde los entrevistados se expresan con mayor seguridad. En general, es considerado por estos profesionales como instancias muy productivas, que tienen lugar más allá de las instituciones. Según Sennett, (2003, 125), lo que necesitan los adultos para poder confiar es “controlar las condiciones sociales de la exposición” de la vida privada. No habría nada por lo que preocuparse, “mientras la persona que los pronuncia pueda administrarlo”. En las oficinas de los JNM y TOM estas condiciones no se cumplen, con presencias desconocidas, en condiciones materiales muy deficitarias, tal como señalan los Delegadxs y expusimos en los capítulos 2 y 3 de esta tesis.

Los Delegadxs explican que, en el trabajo en contexto, se puede inclusive “bajar la temperatura”, refiere una trabajadora social entrevistada, “la angustia, especialmente de los padres, explicarles de que se trata el proceso”, en un espacio personal, donde los sujetos “son locales”, pueden preguntar todo, opinar. En el mismo sentido, una funcionaria señalaba, el Delegadx contribuye a “quitarle quizás la angustia que en muchos casos tienen, junto a la familia..., y aclararle bien cómo es ese proceso que puede terminar con una absolución,..., hay veces que (a los agentes judiciales) nos cuesta abordarlos a ellos (los jóvenes), nos ven formando parte del Poder Judicial y a ellos (los Delegadxs) no”.

²⁰² El primer antecedente de formación profesional sistemática en 1924 fue el curso de Visitadoras de Higiene Social dependiente del Instituto de Higiene de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. Denominación que se asigna a los primeros en desarrollar acción social en domicilios.

Algunos entrevistados advierten que en ciertos JNM sugieren a los profesionales realizar entrevistas “sorpresa”, los trabajadores sociales consultados, de manera unánime, señalan que acuerdan entrevistas con anticipación como una forma de que las familias “te estén esperando, preparadas, con tiempo para poder hacer una entrevista productiva”, “Hasta para encontrar a quienes tienen que estar”. Es un trabajo que se construye, coinciden en señalar.

El desarrollo de las medidas socioeducativas se decodifica a partir de las opiniones de los entrevistados como intervenciones orientadas a la atención de situaciones consideradas de vulneración de derechos: revincular al joven con la escuela, inserción en estancias de atención si existen consumos problemáticos, posibilitar la comunicación con los adultos convivientes, agenciar recursos, acompañar la gestión de documentos, etc. y también que los jóvenes se presenten a la sede judicial cuando son convocados, “que cumpla”, aluden a los requerimientos de cada instancias JNM o TOM. A estos profesionales se delega la responsabilidad de desarrollar aquello que los mecanismos de atención previstos incumplieron, en un plazo de tiempo, y bajo la advertencia de que el resultado del desarrollo de esas “medidas” es la clave de la absolución. El fracaso considerado por los JNM y los TOM como un problema que excede a “la justicia”, suele ser remitido a los jóvenes preferentemente y a la capacidad/incapacidad de estos Delegadxs para alcanzar algunas de las metas propuestas²⁰³ y también a los servicios sociales. Se observa una tendencia a responsabilizar a las personas y escasamente un cuestionamiento más amplio.

El contenido del llamado seguimiento es definido por las entrevistadas como un trabajo en el que implican: - por un lado, delinear una comprensión de la situación de partida, si existió, “cuestiones que tienen que ver con lo que pasó” aspecto que no es incorporado en los informes, sino invisibilizado dado que podría suponer un reconocimiento de responsabilidad en el hecho y simultáneamente - abordar otros aspectos problemáticos que emergen como preocupación y demanda por parte de los jóvenes, de los adultos referentes, como de otras situaciones que los Delegadxs observan²⁰⁴. Se procura la organización de

²⁰³ Si se advierte que la situación es muy compleja si logran que el joven al menos concurra a estas sedes judiciales ya es considerado favorablemente.

²⁰⁴ Situaciones de violencia familiar, doméstica, que no son presentadas como demandas pero que requieren de atención.

estrategias de trabajo, a corto plazo sobre situaciones concretas: de violencia, consumo de drogas, ausencia escolar, “bardos” (en referencia a todo aquello que los consideran negativamente y que forma parte de la cotidianidad de los jóvenes- hijos); - Por último, la habilidad para poder informar esos recorridos en términos que no necesariamente se correspondan con una evaluación, cumplió – no cumplió, sino en términos de acompañar esos trayectos, ir revisando estrategias, articulando intereses y recursos, que el joven se implique en esta construcción. El tiempo de trabajo es acotado, “se trata en la medida de lo posible de remover obstáculos, acomodar algunas cosas”, establecer un lazo con las instituciones locales-comunitarias, coinciden en señalar las Delegadxs entrevistadas.

El desarrollo de su trabajo asume la forma de una serie de encuentros que los JNM y los TOM pautaron con periodicidad mensual y que se exponen en los respectivos informes como el acontecer de pequeñas novedades que se suceden en una aparente rutina de la vida cotidiana. Una concatenación de orientaciones, resultados de gestiones, vínculos con organizaciones de proximidad, coordinación de recursos con los servicios de proximidad, accesibilidad a instituciones y servicios y ampliar opciones, asegurar lugar en la a veces escasa oferta y problematizar situaciones que fueron naturalizadas, negadas y negativizadas (Chaves, 2005). Los Delegadxs franquean una relación con agentes e instituciones de proximidad que muchas veces son reticentes a alojar a esta población, que han operado “como un guardia en un cruce de fronteras”. Sennett (2003) alude a esta metáfora para señalar como algunos agentes estatales abusan de su jerarquía para habilitar o no accesos a recursos y servicios a los cuales las personas tienen legalmente derecho. Los Delegados suelen utilizar sus “influencias” para sortear estos puestos de frontera, remover algunas barreras. Los oficios judiciales facilitan este “tráfico”. Por ello es común que los profesionales soliciten oficios a los JNM y TOM para habilitar recursos. “Es un drama”, señalan parte de los entrevistados, algunos agentes judiciales consideran la elaboración de oficios como una recarga de trabajo²⁰⁵.

El llamado seguimiento, se despliega para los JNM y los TOM de idéntica manera. Esta afirmación encubre que lo idéntico es los tiempos de presentación, las formas y procedimientos. Los Delegadxs suelen referir que en ambas instancias judiciales nadie les

²⁰⁵ En “un TOM pide que llevemos los telegramas para las citaciones hechos para evitar-se ellos esa tarea”, señala una Delegada.

plantea orientaciones sobre el contenido de su tarea, “si hay quejas son un rumor de pasillo”, “¿Me pregunto, estará bien?” son parte de las reflexiones que los propios profesionales realizan sobre su propio desempeño. “yo tengo mi lenguaje y lo voy a mantener, inclusive modifique el informe modelo” Alusiones que se sitúan en el orden de conocer la convivencia de distintos criterios de trabajo y valoraciones al respecto entre los Delegadxs y entre ellos, los JNM y los TOM.

Una funcionaria consultada se expresa de la siguiente manera “....a lo largo de la etapa del proceso penal, hoy en día los menores terminarían, muchos, sus..., sus causas con una absolución, por buena conducta.... la función del Delegado aparte de ver cómo está el chico todos los meses, de ver si está estudiando o que..., o cómo motivarlo para que siga estudiando, que termine el colegio; que se conecte con la familia; si está medio descarrilado,y es el nexo, me parece fundamental, con nosotros. Porque yo tengo muchísimos defendidos, muchos, muchos y la verdad que..., *da la casualidad*²⁰⁶ de que muchas veces se terminan las causas antes cuando a mí el Delegado viene o me lo trae al chico o le dice llamá a la Defensoría”, “El chico se marea..., no se entiende nada..., los profesionales... eso de sentirse acompañados por ellos escuchados, apoyados”

Consultados sobre el propósito de sus intervenciones, Los Delegadxs distinguen distintos planos en los mandatos y expectativas institucionales. En primer lugar, se concentran en la demanda de información donde algunos exhiben su preocupación sobre cómo emitir sus opiniones. Algunos señalan que rehúyen una demanda relativa con un modo de evaluación que consideran que pueden afectar el resultado de la intervención judicial sobre personas muy jóvenes. En segundo lugar, numerosos profesionales consideran que su tarea está orientada al desarrollo de intervenciones de carácter preventivo, de carácter general y especial²⁰⁷. En la misma línea, otros, consideran que sus intervenciones se encontrarían en una línea de “reducción de daños”, entendida como un conjunto de intervenciones que

²⁰⁶ El subrayado es nuestro.

²⁰⁷ En los términos aludidos precedentemente, de disuasión y desestimiento como un proceso gradual en el la persona comienza a acumular períodos de ausencia de delito o que pese a cometerlos, pueden observarse desaceleración y/o de disminución de gravedad que marca creciente consciencia de riesgos o deseo por abandonar ese tipo de actividad (Farrall, 2002).

tienen por finalidad minimizar o reducir los daños o consecuencias, de situaciones conflictivas²⁰⁸, intervenir o afectar las condiciones en que dichas situaciones emergieron.

En referencia al primer grupo, dichos profesionales expresan especial énfasis en el cuidado y preocupación por la elaboración de los informes, no incluir información relativa a la causa o que pueda resultar perjudicial para el joven. El imaginario de los “ojos del juez” el mandato a informar tensiona su tarea. “Vas aprendiendo de los errores”, “Qué hacer y qué informar”, porque el contenido del informe está en el expediente, “influye” en la sentencia, “lo podemos complicar” pero “no podes obviar algunas cuestiones” porque en los casos “cuando la situación del chico se complica puede parecer que no estas enterada de nada de lo que pasa con ese chico, se entiende”, “Siempre se hace más de lo que queda plasmado”. Se observa un esfuerzo por dilucidar qué aspectos incluir y cómo filtrar cierta información.

La queja que contraponen los funcionarios entrevistados es que los informes, a veces, “son muy sintéticos” denota que, cuando la situación del joven no progresa de acuerdo a los planes iniciales, los Delegadxs reformulan la estrategia de trabajo y también resumen la información que pueda resultar perjudicial. Stanley Cohen, (1988) lo describe como parte de las contradicciones inherentes al vínculo que estos profesionales establecen con dicha población que “contamina” su compromiso, entre la población y los imperativos institucionales. En esta línea, Karsz (2007) se inclina a pensar la intervención como tomar partido, subrayando la imposible neutralidad de estas intervenciones sociales.

En esta línea, un juez del TOM señala que el trabajo de los Delegadxs “contribuye,...pero a veces es una habitualidad...que ni fu ni fa..., ni quita ni agrega²⁰⁹ Chicos normales..., que tuvieron un problema,... a veces, ¿hay casos que vos decís porque trabajan tanto acá? ¿Qué paso?..... Hay una mejor conectividad... me gustaría que a veces..., cuando no hay una mejor conectividad,... que se trabaje un poco más”. “Con el equipo... como son dos o

²⁰⁸ La definición de reducción de daños se ha asociado a consecuencias de situaciones conflictivas con el uso eventual o crónico de alcohol o drogas. Disponible en la página web de la Asociación Civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas, Intercambios <http://www.intercambios.org.ar/reduccion-de-danos/%C2%BFque-es/%C2%BFque-es-reduccion-de-danos/>

²⁰⁹ Duschatzky (2013) define la intervención como “un acto de voluntad movido por un propósito”... “que pueden estar asociados con “movimientos de “baja intensidad” y al mismo tiempo de profunda sensibilidad”.

hasta cuatro...hay más elasticidad. “Creo que es muy positivo...han continuado la relación...cesada la tutela, (cuando)... el chico se encuentra desamparado...no es culpa de nosotros, es culpa del sistema... llegas hasta un determinado momento”...Se valora, se muestra como significativa esa relación. “Algunos son excelentes y comprometidos, otros, burocráticos con prácticas deficientes aprehendidas”. En la Cámara agregan ”por lo general, se valora poco...pareciera que si el Delegado (a veces) no puede hacer más allá es porque la culpa es de él y no del resto del universo del que es parte y del que es parte también el Poder Judicial”

Respecto del segundo grupo, en el curso de esta investigación, identificamos que muchos de los entrevistados comienzan a incorporar un discurso que les permite reorientar su trabajo al desarrollo de procesos de interpretación crítica de cada situación personal y social, habilitando la búsqueda de alternativas sociales e institucionales, que habiliten otros recorridos. Para ello, los Delegadxs, requieren hacer disponibles los recursos necesarios y promover comportamientos de auto cuidado. Si bien estas estrategias parten de una comprensión de situaciones de carácter individual, también comprenden las condiciones de vulnerabilidad en que los sujetos se encuentran. Estas estrategias, en los últimos años, tienden a involucrar a otros agentes del territorio en el que residen los jóvenes (vecinos, militantes sociales, instituciones públicas como las escuelas o los centros de atención sanitaria, etc.). Vínculo que desarrollan los profesionales pero que no se integra como parte de la construcción del llamado Sistema de Protección Integral ya que las instancias judiciales de las que estos agentes dependen han considerado escasamente estas actividades como una preocupación institucional sostenida

Ello es asociado por los entrevistados con un cambio en las condiciones en que se inscribe el desarrollo de su trabajo, en las políticas sociales de la Argentina reciente. Reorientadas en una perspectiva de inclusión, que podemos inscribir como políticas de reconocimiento y discriminación positiva²¹⁰, trayectoria inaugurada desde la Convención, tendientes a contrarrestar los niveles de desigualdad a la que los niños y jóvenes pueden ser expuestos por su condición etaria, que se agudiza a partir de su existencia situada en distintos estratos de la estructura social y en territorios de relegación (Wacquant, 2007), afectan de manera

²¹⁰ que enfrenta injusticias que se interpretan como culturales, enraizadas en patrones culturales de representación, interpretación y comunicación (Fraser, 2008)

notoria a la mayoritaria población que transita en la justicia penal juvenil. Si bien es notable el avance de los sistemas y programas de protección que las políticas de ingreso universal alentaron, este grupo de jóvenes suele encontrarse el grupo “testigo” de la mayor desprotección, suelen ser evidencia de los déficits y de necesidades adicionales de atención, como expusimos en el capítulo precedente.

La organización de los equipos de trabajo

Desde hace casi dos años los profesionales trabajan en equipos, a partir de una experiencia piloto alentada por la Cámara. Registramos que la integración de estos equipos se realizó de manera aleatoria y diversa en cada Juzgado²¹¹, con distintos criterios y según los nombramientos que realiza la Prosecretaría de Patronatos que asigna los reemplazos de profesionales a cada JNM desconociendo generalmente las necesidades de los equipos ya existentes²¹². Por ello se definen como equipos profesionales y no interdisciplinarios. Existen equipos donde sus tres integrantes son trabajadores sociales, otros integrados por trabajadores sociales y psicólogos, trabajadores sociales y abogados, trabajadores sociales psicólogos y abogados, etc. Cada equipo además tiene asignada una zona de trabajo en CABA y otra, en la provincia de Buenos Aires.

Esta iniciativa tuvo el propósito de concluir una tradición de trabajo solitario, cualificar la intervención de estos profesionales y optimizar la elaboración de los informes, según surge de las entrevistas realizadas a funcionarios de la Cámara. Para los profesionales implica, además, estar en conocimiento del doble o triple de expedientes, acordar criterios de trabajo, realizar entrevistas conjuntas en sede, consensuar el contenido de los informes porque se solicita la firma conjunta de esos documentos. Por ello consideran que también significa una economía institucional dado que los equipos asumen de manera conjunta el trabajo asignado y evita la designación de reemplazos cuando algún integrante del equipo toma licencias ordinarias, temporarias, por enfermedad, etc.

²¹¹ El 4 de mayo de 2015 se acaba de aprobar otra iniciativa tendiente a reorganizar estos equipos, elaborada por la Prosecretaría de Cámara

²¹² Un reclamo que fue presentado a la Cámara en un reclamo conjunto de los Delegados, en febrero 2014.

Los entrevistados expresan distintas opiniones ante esta propuesta. “Las actividades de los Delegadxs las define la Cámara.... operativamente es el Juez y el secretario o algún perfil de las Secretarías quien coordina esa “apoyatura” señalaba un juez del TOM que consideraba este aspecto como prioritario. Hay que ordenarlos... organizarlos... (desde la composición de los equipos, con la que está en desacuerdo), “no hay criterio de integración... no todos son interdisciplinarios, a veces son dos asistentes sociales y no coinciden”..., (establecer) pautas a seguir..., desde el comienzo, desde el acta provisoria. Hay siete JNM, siete criterios y luego tres TOM divididos en tres cada uno.... Lo bueno es que es el mismo Delegadx el que continúa con el chico desde el inicio”. Algunos Delegadxs comentan: “la interdisciplina es un cuento, los empleados de la secretarias no se suman para pensar una mirada integral”.

En su conjunto advierten que en el trabajo en contexto, las decisiones siguen siendo individuales, que evidencian criterios que no son compartidos. Cada profesional decide si concurre a domicilio, si cita en zona de los domicilios, en otras instituciones, en espacios públicos, o si realiza las entrevistas en sede. Los trabajadores sociales suelen suscribir que “El trabajo en zona es muy importante para poder mantener el vínculo, “son familias que se mueven, se desconectan” Se privilegia la decisión que toma la profesional que conoce la zona, la cual cada equipo respeta. Los trabajadores sociales señalan que los otros profesionales con que se integran estos equipos carecen de formación y tradición de trabajo en contexto. La decisión de integrar los equipos con distintas disciplinas para desempeñarse como Delegadxs contribuyó a evidenciar reticencias a realizar trabajo de campo o a desplazarse de la sede, que se confunden con el argumento de “zonas de peligrosidad”²¹³. El mandato de trabajo en el territorio es extraño al “oficio” de otras disciplinas, señalan las trabajadoras sociales. En los JNM se quejan de esta situación, pero no exhiben capacidad de incidir en este problema, las designaciones, explican, son atribución de la Cámara.

Los trabajadores sociales autoperceben un reconocimiento diferencial por parte de los otros agentes y los jóvenes asociado con su estatus disciplinar, respecto de otros integrantes del equipo, que fundan en distintos argumentos: a- haber ocupado tradicionalmente este espacio socio-ocupacional; b- la diferencia que aprecian cuando se presentan con los

²¹³ Una Delegada señala “es un tema, porque algunas pasaron situaciones “de terror”.

jóvenes, “No todas las personas han concurrido a un psicólogo por su voluntad pero la mayoría ha entablado alguna vez diálogo con una colega, no es frecuente que se observe un rechazo”; c- por las estrategias que despliegan en su relación con la población, “otros profesionales desarrollan un lenguaje específico para denotar especificidad, en ese sentido también somos más flexibles”; finalmente d-por un mandato institucional específico, “en los JNM y TOM, quieren que vayamos a las casas, como si allí pudiéramos develar todo lo que le pasa a la familia, a ese chico”. “Es que valoran mucho... que seamos los ojos del juez, y si opinas, mejor”. “En los equipos se ha dado una confusa integración, parece que todos hacemos lo mismo pero no es así y el informe social, el informe socio-ambiental es nuestro”.

La modalidad de integración de los equipos concita distintas opiniones., “tuve suerte en el armado del equipo²¹⁴”, “hay algunos colegas que trabajan con inercia, se quejan siempre”. Se reúnen “distintos estilos, sacar o poner el cuerpo, me adapto”. “Cada una tiene su forma, yo descontracturo, ¿Querés un café? “Inicialmente, nos complementamos” “Más que un equipo “es un encuentro” la relación entre nosotros es excelente, pero “a veces no estoy muy de acuerdo con las interpretaciones” (dice una trabajadora social cuando se refiere a la psicóloga del equipo). “Más allá de las disciplinas los Delegadxs hacen un trabajo social, la psicóloga no trata y el abogado no patrocina y tampoco asesora, a veces no me resulta muy claro cómo funciona”. Los procesos de integración han sido particulares y disimiles según este relevamiento, por lo que quienes no han logrado articular un equipo, la estrategia es continuar un trabajo individual: “Lo cito en Banchero, fuera de la sede judicial, un lugar que les gusta”.

Sin embargo, se les solicita la elaboración grupal de los informes. “Ahora tenemos que firmar los informes juntas”, “hablar en plural es difícil” es una pauta que suscita debates “negociamos, especialmente el uso de términos, menor, cómo se califica a las familias.... ¿Desintegradas?...como volvés de ahí? Cosas jodidas, no considero que sean útiles para pensar la intervención, ni encaminadas a proteger”. “No es fácil, me cuesta discutir criterios, pero aprendo”. En este sentido, los entrevistados coinciden en general, en que el trabajo colectivo potencia la capacidad profesional. “Se reúne muchas más información,... y puntos de vista. Antes se compartía en la guardia, pero era más una catarsis, como

²¹⁴ Ya señalamos que los equipos se integraron de manera aleatoria

anécdotas de la semana, ahora se trabaja más”. Coinciden en que se promueve una mirada más amplia.

“Las situaciones son complejas, compartimos, escuchamos, a veces no da el tiempo (por la única guardia semanal) para cotejar, pensar”. La complejidad y conflictividad de las situaciones que enfrentan encuentra mayor capacidad de recepción y procesamiento en estos equipos, en términos de captar el relieve de estas situaciones Schutz (2001). Valoran la oportunidad para “compartir la responsabilidad de las decisiones que se toman en la intervención, y para los chicos es mejor también”. “El equipo se construye con tiempo. Empezás a conocer y a entender que hace el otro, y a los empleados les pasó lo mismo”.

El trabajo en equipo exige un tiempo de reunión para reflexionar y consensuar distintas dimensiones del trabajo, que podemos considerar como un avance en términos de cohesión de este “cuerpo de Delegadxs” que hasta entonces solo compartía un mandato procedimental “estrategias de reproducción social como conjunto de prácticas por medio de las cuales consciente e inconscientemente se conserva y aumenta el capital y patrimonio para mejorar o mantener una posición en cierta estructura” (Bourdieu, 2000: 163,164).

Las reuniones de todos los Delegadxs en cada Juzgado son muy difíciles de sostener. Solo en un JNM se organizan reuniones periódicas de todos los Delegadxs. En otro JNM “nombraron informalmente una coordinación pero no desarrolla actividades sistemáticas, alguna reunión, es interlocutora ante la Cámara”. No hay lineamientos unívocos para la organización de los equipos ni para el trabajo que desarrollan, se construyen distintos criterios, aún en un mismo JNM.

Advertimos que la discontinuidad del interés de la Cámara como de las otras instancias involucradas, por repensar las funciones y la organización de este “cuerpo de profesionales” es evidencia de la escasa relevancia que la cuestión penal juvenil ocupa en el entramado judicial.

Las **condiciones de intervención** fue un aspecto que congregó nuestra atención y la de los entrevistados. Nuevamente las respuestas se concentran en dimensiones que se nombran de manera similar pero que se afrontan de distinta manera. Un grupo apenas mayor que el

otro, señala que las condiciones de la intervención son rígidas y burocráticas, ahogan la diversidad, no hay predisposición al trabajo en común entre los agentes judiciales y los Delegadxs. Ello provoca dos tipos de respuestas a entender de los profesionales consultados - unos que adaptan su intervención a esas características, se mimetizan y -otros consideran que se autonomizan, “vengo una vez por semana y la intervención en el territorio no está condicionada”. En ambos casos se observa una evidente dificultad para organizar reclamos, interpelar las condiciones institucionales, disputar en el campo. Se trata mayoritariamente de estrategias consideradas defensivas, que simultáneamente reeditan la insularización de su trabajo en este campo. Grupos que se asimilan a los agrupamientos realizados desde el capítulo tres.

La dinámica de trabajo, como ya mencionamos no tiene una directriz uniforme en todos los JNM²¹⁵ o TOM. El primer conjunto se lamenta por la multiplicidad de criterios en que se desenvuelve su trabajo en la trama institucional “las decisiones se toman por fuera de nuestro conocimiento”, “uno cumple lo que te piden”, “cuando tenés problemas con un chico, te tenés que arreglar sola”, y además “los espacios de trabajo no son apropiados”, etc.

El otro grupo, señala que las condiciones de la intervención se expresan en rigidez y formalidad pero los vinculan con otros argumentos: “la mirada es muy lineal”. Consideran que es difícil incorporar en este marco institucional, con los empleados de los JNM y los TOM, una lectura de la complejidad que presentan los jóvenes “no hay una justicia pensada para pibes”, “acá está faltando algo!, respeto por los chicos, desde el lugar adonde se los atiende y ventila su privacidad”, “yo los veo aparte siempre”. Inclusive consideran que la ausencia de un espacio físico adecuado y baja carga horaria asignada a los Delegadxs está vinculada al desinterés por desarrollar un trabajo compartido “para integrar la tarea se necesitaría más contacto”. “No hay vínculos con los jueces, más allá de los saludos de rigor”. Un juez de primera instancia reconoce que “el tema de que vengan un solo día es un mito, siguen trabajando afuera. Muchas veces no está valorado tanto, por acá, y en la Cámara pasa otro tanto”.

²¹⁵ Es más notable en los casos en que no cuentan con juez a cargo por períodos prolongados

Algunas entrevistadas se identifican con las críticas de la institución. Consideramos que de esa manera eluden las disputas y renuncian a otras respuestas posibles. “adscriben a la racionalidad instituida en el sentido instrumental... parecen validar...obedeciendo a una razón de tipo burocrática y normativa” (Aquín, et al 2008: 77). La mayoría opina “Nos critican siempre con lo mismo: Una vez a la semana pero hace 20 años!!!. Quieren disciplinarnos, que seamos obedientes”. “Más que libertad... una especie de indiferencia”.

Estos reclamos de los Delegadxs a los TOM, que surgen en las entrevistas y que han sido presentados a la Cámara pero no han encontrado una vía que los canalice, se concentran frecuentemente en torno a la ausencia de contacto organizado. “no conozco a ningún juez del TOM”, “nadie me dice que hacer, ni te explican nada” Los Delegadxs enfrentan realidades que pueden resultar abrumadoras, se reconoce que ello requiere de ciertos cuidados para mantener “su nivel operativo” (Sennett, 2003) y organizar la experiencia. Un grupo minoritario hizo referencia a los inadecuados espacios de trabajo y otros aspectos inherentes al desarrollo profesional como: - la ausencia de supervisión profesional y - la dificultad para articular los procesos de atención de los jóvenes con los organismos administrativos competentes.

A partir del análisis y cruce de entrevistas consideramos que la baja carga horaria es un factor que neutraliza los conflictos latentes, entre los agentes en el campo. En algunas entrevistas los Delegadxs exhiben sus reproches “Los abogados piensan que ellos hacen la teoría, interpretan la justicia y nosotras, estamos para cosas menores, contar qué vemos y además que vamos (fuera de la institución), consideran que nos ocupamos poco” “Creo que con la integración de los equipos algo cambio, no lo aseguro”, pero “No te consideran un compañero de laburo, no perteneces, no vas todos los días, no tenés un contacto diario, estrecho. Tenés que pedir permiso para usar hojas”. “Nunca tuve una devolución en los TOM, nunca sabes que opinan. Sí, hay problemas, si no entregas en fecha”.

Una Defensora señala: “ante los magistrados, el ámbito de actuación se acota (para todos)”, Otro entrevistado destaca “Lo deseable sería una planificación organizada del equipo interdisciplinario con acompañamiento del personal jerárquico del juzgado, teniendo presente en todas las ocasiones el conocimiento y reconocimiento profesional, de unos y otros.”

Sin embargo, más allá de los enunciados prescriptivos, observamos que en los tres JNM que permanecen organizados con secretarías tutelares, no se promueve el vínculo con los secretarios actuarios; y en los TOM es frecuente que a los Delegadxs no se les facilite el trato directo con Secretarios ni jueces, sí con empleados que “llevan la causa”. Ello sin duda dificulta un abordaje de carácter integral. Una entrevistada lo describe de la siguiente manera: “Si querés saber que pasa en el TOM tenés que ir oficina por oficina (TOM, Defensoría y Defensor) a preguntar, y ver quién te atiende”. “Es una forma de maltrato” Es frecuente que estas situaciones sean ejemplificadas con abundantes referencias empíricas, contadas como anécdotas, constituyen una expresión de las distintas relaciones que se establecen en este campo. Los Delegadxs que se perciben y son percibidos por los agentes en los TOM como personal que no pertenece al Tribunal. Por lo que es frecuente que se identifiquen con la población que atienden. Una Delegada lo expresa de la siguiente manera: “a nosotras nos tratan así y ellos fijaron que teníamos que ir a trabajar “colaborar” en esa instancias y establecen los días que tenemos que concurrir y con qué frecuencia. Tenemos que ir personalmente y no enviar los informes por terceros, excepcionalmente a través de los ordenanzas de los Juzgados. Para eso pusieron libros de firmas para que cada equipo tenga que concurrir al TOM. “Cuando se trata de un pibe, ¡imaginate!, que se levantó a las seis de la mañana, llegó al TOM después de dos horas de viajar y no entendió para que lo citaron o la respuesta que le dieron. La “batalla cultural”, “enfrente (tiene) un pibe casi igual, empleado judicial, un privilegiado, tal vez hijo de un juez”.

Los dispositivos instituidos rehúyen instancias de asociación, ello inhibe los espacios de reflexión sistemática. A ello se suma un habitus de trabajo individualizado con múltiple dependencia. Condiciones que confluyen a la opacidad de estas situaciones, lo cual entendemos constituye un nudo problemático.

La relación entre secretarios y jueces del JNM y el TOM, **funcionarios** de la Prosecretaría de Asistencia Social de la Cámara y **los Delegadxs**. En este estudio encontramos que si bien muchos de los Delegadxs ponderan favorablemente la relación de trabajo con los funcionarios en los JNM, en las entrevistas se relevan numerosos reclamos que se concentran en aspectos considerados deficitarios. La ausencia de instancias de coordinación y una comunicación organizada entre y con las múltiples instancias desde las

que son convocadas y dependen, Cámara, JNM y TOM, concentran la mayor atención. Esta ausencia es considerada a veces “un ninguneo”, un desinterés.

En más de uno de los JNMs, las Delegadxs manifestaron “El juez no nos habla, no podemos ir al despacho, la relación es con la secretaria tutelar”. En otro JNM refirieron que la Juez no las conoce pese a que se desempeñan en esa dependencia hace más de un año, “nos dan un pedacito de escritorio”, otras profesionales agregan que “antes era peor, no te decían nada. Te dan veinticinco chicos y... apurate con los informes”.

En los TOM, los Delegadxs coinciden en señalar que no se habilita una relación con Secretarios y jueces, a quienes pueden solicitar puntualmente entrevista. Esa modalidad dificulta la comunicación y el desarrollo del trabajo “Cuando estábamos asignadas a un TOM (un Juez X) nos recibía sin mediar pedido anticipado”. Este problema muchas veces se replica con los empleados “No te dejan llevar los expedientes (para leer) al bar que está en el mismo piso, al lado...los Secretarios lo saben y nadie dice nada”. Algunas señalan que cuando los Delegadxs estaban asignados a uno solo TOM la relación fue más productiva. Desde que cada TOM trabaja con todas, las noventa Delegadas, se complicó. Te llaman puntualmente “para tal cosa”. “No es posible armar una relación. Me pongo del otro lado, no tenés tiempo para conocerte, solo vas un ratito, (no tenés lugar)”

Las Delegadxs reiteran expresiones tales como: “Una reunión cada seis meses no vendría nada mal”, “Ni ellos saben que pedirnos” “En nueve años creo que fui convocada una sola vez a la Cámara”, “cuando te convocan son malas noticias últimamente²¹⁶”.

Las opiniones que reunimos en este estudio, en general, críticas a las formas de organización de las relaciones en que se insertan y a cómo se ejerce la autoridad en la trama institucional, no rebasan una opinión personal que, aunque compartida por otros agentes, no ha logrado afectar la situación que visibilizan. Esta “circulación circular” (Bourdieu, 2010: 196) consideramos consolida una modalidad que incluye arbitrariedades en el relacionamiento entre agentes en el campo.

²¹⁶ En referencia a que varios Delegados pasaron a la Prosecretaría de Patronatos para absorber el trabajo que antes realizaba el Patronato de liberados, con adultos.

Identificamos que parte de los Delegadxs no se perciben como “empleados” sino en un estatus de profesionales, posición desde la cual pretenderían reclamar mayor paridad en la topología de posiciones sociales en este campo. El correlato de esta aspiración de reciprocidad es que solo un igual, merece réplica, la no respuesta, la indiferencia puede ser leído como un indicador de rechazo o desprecio (Bourdieu, 2010, 161). La verticalidad es identificada como una característica constitutiva en la organización institucional, una “cosmovisión jerárquica imperante” (Martínez (2005) que se expresa en la relación asimétrica entre agentes.

Estas tensiones en la relación entre Delegadxs y funcionarios, se evidencian en situaciones que dan cuenta de malestar reiterado en los procesos de trabajo. Los entrevistados señalan que sus sugerencias no son siempre atendidas. Con “el tema egresos, a veces no tienen en cuenta mi opinión. Puedo opinar pero... Puedo sugerir (cuando se inicia la causa en que un profesional sugirió disposición tutelar, o que un joven permaneciera en dispositivos penales hasta que se pudiera organizar una alternativa, conseguir una vacante) pero no deshacer” o limitar las llamadas medidas excepcionales. “Y tenés que adaptarte a esa situación, seguir haciendo informes, cumplir²¹⁷”. La oposición no es materia de debate, se expresa como indiferencia “...no siempre escuchan”. Un funcionario explica esta situación de la siguiente manera: “leemos los informes, (insinúa a que algunos no los leen)...los agregan... les damos cierta autonomía en el trabajo diario, pero controlada, limitada”.

Algunas entrevistadas expresan que cuando son convocadas, se trata generalmente para comunicar problemas, “he visto situaciones de maltrato en varios JNM”. “Ahora mi compañera de equipo es Prosecretaria y “le paro el carro”. Por eso parte de las entrevistadas refieren evadir la relación con esos funcionarios que suplen a través de una relación fluida con los agentes de menor rango “evito la relación, sino te joden”. Cuando haces algún planteo, les molesta”, “Al Juzgado el tema de la protección y el cuidado del chico, a veces les molesta el plan de trabajo, la cosa integral...”. “A veces hay una mirada prejuiciosa de la población o del contenido de los informes”. “El discurso de los derechos humanos no siempre funciona”.

²¹⁷ Cuando los jóvenes están privados de su libertad, se solicitan a los Delegados que concurran a dichos establecimiento y presenten informes quincenales, una manera que encontraron los funcionarios judiciales de controlar la situación en estas instituciones y “evadir situaciones adversas”

Otras profesionales señalan que tienen un vínculo de respeto y reconocimiento, especialmente en los JNM donde formalmente tienen asignado su lugar de trabajo, por la Cámara. Señalan una relación con el Juez, “de ida y vuelta”. En general, refieren “hay buena predisposición con las Delegadxs pero hay muy poco trabajo integral y los equipos se integran entre nosotras, no incluyen a personal del Juzgado”. Es una meta poco instituida, aun cuando dichos profesionales tienen una larga trayectoria institucional.

“La relación de trabajo no es diaria”, con ese argumento validan las dificultades que advierten en estas relaciones, “Nos reconocen en lo personal”. Entendemos que les resulta más simple establecer un vínculo “social”, tomar café, que hablar de trabajo. Lo que Sennet (2003) denomina como la cultura burocrática, “hecha de té, chismes, consagrada por el tiempo, un lugar tranquilo donde estar”. Este autor nos advierte respecto de que cuanto más tiempo (los agentes) trabajan en una organización tanto más se implican en los problemas e intrigas de estos servicios. Empiezan a ser parte de “La creencia de que el que manda sabe lo que hace”, “Lo que Goffman y Foucault consideran un peligro para el yo libre: la aprobación burocrática., la alineación, la capacidad para regular el respeto por sí mismos”. (Sennet, 2003: 170). Los entrevistados lo resumen de esta forma: “Tu formación... tu experiencia... te permite organizar y definir estrategias.... un abordaje singular.... tu propio criterio”. Pero “paulatinamente “nos convencimos” de que alguien tiene que decirnos que hacer... Si nos dejamos llevar por lo que dice otro, esto lo puede hacer cualquiera”. Las afirmaciones precedentes dan cuenta de diferentes posiciones que asumen estos profesionales que oscila entre cierta sumisión y el cuestionamiento. Casi la mitad de las entrevistadas reproduce un discurso hegemónico que combina distintos argumentos, la escasa presencia en sede con la capacidad facultada para diseñar estrategias de trabajo como márgenes de autonomía que consideran favorece el desarrollo de su trabajo en este campo.

La autonomía, es definida por los Delegadxs entrevistados a partir del reconocimiento institucional que los habilita a: -Por un lado, a desarrollar un trabajo fuera del marco institucional, en el territorio “adonde otros agentes no van ni por casualidad”; -También por la especificidad de la tarea encomendada, establecer un lazo con los sujetos de la intervención judicial, construir accesos, que consideran diferenciada del mero control

social, muy diferente a la de los otros agentes en el marco institucional; Por último -la integración de equipos profesionales que fortaleció sus capacidades en la atención de estas situaciones complejas y frente a los otros agentes. Un grupo minoritario reconoce que el encuadre institucional prevalece, que representa la autoridad que inaugura y signa el conjunto de las intervenciones donde, además, los jóvenes se ven conminados a ser parte de esta relación²¹⁸.

Bourdieu 2010: 203 señala que “guardar las formas es hacer de la manera de actuar y de las formas exteriores de la acción la negación práctica del contenido de la acción y de la violencia potencial que ella puede encerrar....La dominación (y sus estrategias de reproducción)....debe disimularse bajo el velo de las relaciones encantadas... eufemizarse”

Los trabajadores sociales transitan y reconocen esa doble vía que combina autonomía con dependencia institucional que se manifiesta en distintas formas de disciplinamiento. Ello se expresa en el cumplimiento de reglas, procedimientos, tiempos, una exigencia del trabajo en zona y la dependencia a múltiples instancias. La falta de cumplimiento puede ocasionar sumarios²¹⁹, llamados de atención “Estas limitada por muchos factores... te tenés que hacer cargo de la intervención penal con el pibe y tenés que reunir material que avale tu trabajo para justificar por qué (informás) que el pibe anda bien”, “Vos podés organizar tu trabajo, porque las obligaciones establecen qué tenés que hacer pero no establecen cómo tenés que hacer el trabajo”. El trabajo fuera de sede requiere explicitar las actividades que se realizan “tenés que hacer una devolución (informes) al JNM, al TOM y al pibe, se supone”. La pertenencia institucional “me avala para ingresar a las casa, para presentarme en las instituciones pero no me siento avalada en las intervenciones”, son otras expresiones que manifiestan malestar, expresan tensión.

Todos los entrevistados, Delegadxs, Juez y Prosecretaria de Cámara, jueces del TOM y Defensores coinciden en señalar “la falta de coordinación entre los equipos con el resto de los involucrados, jueces, secretarios y empleados”. Aunque algunos de los funcionarios

²¹⁸ En los casos en que la relación se dificulta, los jóvenes no se presentan por distintos motivos, los profesionales no captan su atención, etc. En esas ocasiones los JNM y TOM dictan la llamada “rebeldía”.

²¹⁹ Algunos Delegadxs fueron sumariados por incumplimientos en los tiempos de entrega de informes a los TOM, especialmente cuando comenzaron a trabajar con estas instancias. De esta forma fue evidente, que no se trataba de “colaborar”, sino que debían cumplir obligaciones.

consultados atribuyeron la ausencia de comunicación y organización a los mismos Delegadxs. Ya que según explican, se organizan “como pueden,... depende de la voluntad puesta de manifiesto por los Delegados Inspectores” Otros funcionarios señalan que “la única manera sería que...tengamos encuentros... que se acerquen los Delegadxs para preguntarme”, “no lo han propuesto institucionalmente. No hay iniciativas”.

Los extractos de distintas entrevistas a funcionarios son útiles para exponer sus argumentos. Un Juez de un TOM manifiesta que “Tiene que haber un diálogo... pero solo con siete u ocho me han venido a ver...., hay una especie de barrera,... el juez parece algo (distante) perdido..., hablan con los empleados, el secretario, no con el Juez..., y (los Delegadxs) son colaboradores míos..., los ojos afuera..., ejecutores de muchas cosas”, “Nosotros (los jueces) tenemos que tutelar y juzgar ese doble rol ... no podemos tener trato directo total, ...los Delegadxs son los intermediarios”. “Nosotros pedimos lo que necesitamos (que hagan), no los citamos a juicio (a los Delegadxs), los informes nos resultan buenos.... no necesitas que venga el Delegadx..., el tiempo es valioso..., que declaren los testigos”. “Hay una tensión en la idea de que los Delegadxs colaboran con el TOM, a veces (les hacemos) pedidos como excepción que vayan... fuera de radio y se niegan, después siempre hay alguien que lo hace.... Lo ideal sería que los Delegadxs estuviesen con nosotros²²⁰. Es esquizofrénico que respondan a once partes. Y esa resolución la veo muy lejos. Falta quien organice”.

También la opinión de funcionarios de la Cámara reconocen la necesidad de clarificar dependencias y funciones, esa “atomización” es parte de un cansancio de los Delegadxs”. Es claro que debe suministrar una “primera impresión al Juez... cada uno interpreta...como hacer el seguimiento... de la manera que puede o que quiere,... no hay una coherencia... Hay juzgados que no les interesa la tarea tutelar pero tienen que cumplir con ciertas formalidades. Entonces el Delegado.... cumple formalmente eso”.

A su turno, la verticalidad del sistema es el argumento que las Delegadxs identifican como factor que inhibe la constitución de estos reclamos en la vía ascendente, pero no se han ensayado alternativas que descompriman esa situación. Efron (2003) señala que la idea de poder conlleva en sí misma la idea de resistencia, es decir que el poder se organiza y

²²⁰ Los equipos interdisciplinarios en los TOM fueron creados por ley, aunque no se materializaron.

reorganiza en función de la resistencia que encuentra. De tal manera que “la arbitrariedad está en relación inversa con la resistencia... a menor resistencia, mayor arbitrariedad”.

La ausencia de criterios institucionales opera en refuerzo de la autoridad del responsable de cada instancia y afecta los márgenes de autonomía en los términos definidos por Iamamoto (2001:87) quien considera la profesión bajo dos ángulos, no disociados, expresiones del mismo fenómeno: uno asociado a la realidad vivida y presentada por sus agentes profesionales expresada en el discurso teórico-ideológico sobre su propio ejercicio profesional; Otro, la actuación profesional como actividad socialmente determinada por circunstancias sociales objetivas que confieren una dirección social a la práctica profesional, lo que condiciona y al mismo tiempo sobrepasa la voluntad y/o conciencia de sus agentes individuales. Un procesamiento contradictorio, un desfasaje. A entender de la misma autora, se confrontan en términos de intenciones expresadas en el discurso y el propio ejercicio de esa actividad. Que se expresa en la atribución de cierta autonomía e independencia con que definen estos agentes su propio desempeño profesional. En contrapartida, compartimos la idea de que no es posible pensar la profesión por fuera de las organizaciones institucionales donde se inscriben. En este sentido, consideramos que la autonomía constituye una auto representación en tanto se trata de una profesión que desarrolla un proceso de intervención en que se congregan tendencias contradictorias, cuyo develamiento permite reconocer sus límites y posibilidades. Las llamadas formas “suaves o larvadas” (Bourdieu, 2010) de violencia tienen, según este autor, mayores posibilidades de imponerse como maneras de ejercer la dominación en un campo, que se perpetua a través de acciones que la reafirman por medio de la conformidad/aceptación de los valores que en un campo, los agentes reconocen.

En las entrevistas, los trabajadores sociales corren el velo sobre una carga de trabajo no prevista, ni registrada ni reconocida, sobre la que la justicia penal juvenil ni los funcionarios presentan interés. La preocupación por los sujetos de atención “hay un espacio en el que estamos solos, frente al otro, en el barrio. Se advierte que esa relación no se traslada a la institución. Pese a la existencia de equipos pervive la percepción de soledad, de un ejercicio profesional, el compromiso es personal.

Al respecto Cazzaniga (2000) señala: El mandato social de origen está signado por el disciplinamiento, el espacio de la vida cotidiana y más precisamente las condiciones de vida de determinados sectores sociales pasan a ser las variables centrales del registro e inspección, un control que va resignificándose en sus objetivos de acuerdo a las configuraciones que asume lo social, por una parte y a los posicionamientos teóricos y éticos que como tendencia se van dando al interior de la disciplina, por otro. ... el nudo conflictivo y de permanente tensión que ha suscitado fuertes debates en el colectivo profesional.... reconocer que existe un componente estructural de dependencia de Trabajo Social a los dispositivos hegemónicos de la intervención social, condición que según el tratamiento teórico a la que la sometamos nos ofrecerá la posibilidad de comprender los grados de autonomía que puede desplegar la intervención profesional.

Pese a una reiterada referencia a esta autonomía relativa encontramos una concentración de opiniones que identifican la mayor dificultad, en la trama institucional. Aspectos que se presentan como organizativos, procesales y formales, en los que se revela la verticalidad de la organización, de quien detenta el poder y hegemoniza la autoridad en el campo. Una sumisión dóxica (Bourdieu, 1997, 119) que las ata al orden establecido, arraigada en la consonancia inmediata entre las estructura incorporadas como las que organizan los ritmos temporales y las estructuras objetivas. Los Delegadxs reconocen un persistente cuestionamiento que se despliega como formas de control de su propio trabajo y de la población asignada, la institución expresa prejuicios sobre “qué hacen o cómo hacen su trabajo” (no alcanza con informar que el joven va a la escuela, se deben aportar certificados). En esta línea (Martínez, 2004) señala que el objetivo central de la minuciosidad del registro (en los expedientes) es la vocación de controlar el procedimiento por parte de los funcionarios en el marco de la pirámide judicial. Una sospecha que se materializa en una serie de aspectos formales connotados negativamente por los profesionales.

Coincidimos con Rozas Pagaza et al (2014) “....Las posibilidades de alinear las propias prácticas con otras concepciones...y respecto a la población a quienes dichas prácticas se dirigen, no siempre es posible”. Ello, en este caso se conjuga, con otra tensión “la intervención no está concebida de idéntica manera entre todos los agentes. En esos casos,

se configuran escenarios que se perciben, para algunos profesionales, como situaciones de subalternidad de los Delegadxs respecto del personal jerárquico.”

El interés en la tarea. Bourdieu (1997) presenta el interés como una noción que se opone a la de desinterés, pero también a la de indiferencia. Considera el interés como el hecho de estar metido en el juego que vale la pena, que lo que ocurre en él importa a quienes participan, fruto de una relación de “complicidad” que conjuga la disputa del capital simbólico con el conocimiento de distintas posiciones que expresan la existencia y el reconocimiento de estructuras objetivas e internalizadas en ese espacio social.

El dominio del juego, según este autor, es expresión de que los agentes han incorporado un sinfín de esquemas prácticos que funcionan a modo de *habitus* y les permiten estar imbuidos y desarrollar su quehacer. “Lo que se espera de los agentes no es que sigan las reglas al cien por cien, sino que se pongan en regla, que den muestras visibles de que, si pudieran respetarían las reglas” (Bourdieu, 1997: 167)

Los entrevistados presentan dilemas al momento de interrogarse acerca de su participación en el campo, *Delegadxs Inspectores*, ¿cómo se ejerce?, Evidencia de que ellos también producen/reproducen y no son meros participantes en un juego arbitrariamente instituido.

Los trabajadores sociales, como ya expusimos, concentran su interés en aquello que consideran su capital, la relevancia en el trabajo en territorio, el contexto comunitario. La especificidad profesional se identifica con la capacidad que se despliega en ese espacio, especialmente en el contexto actual en que verifican una mayor disponibilidad de recursos, “dejas de ser la responsable por no poder ofrecer nada²²¹”. Esta percepción está anclada en una autoevaluación positiva sobre el compromiso personal inherente a las situaciones de creciente complejidad que enfrentan, por fuera de la institución. “Buscamos el encuentro, vamos... a su casa. El trabajo en territorio permite habilitar un desmarcado de la institución,... aunque caracterizado por una fuerte incertidumbre”. Coinciden en señalar que en la última década hay muchos más recursos en términos de inclusión “para los padres, cooperativas, algunos militan en movimientos sociales”. “Era muy difícil cuando el padres no tenía nada...”, “hasta los cartoneros están siendo incorporados”. “Son excluidos

²²¹ La entrevistada alude a lo que sucedía en décadas precedentes.

en un sistema que empieza a incluir, hay más Estado, una trama donde recurrir en el territorio” “Tenés que ser muy ciego para no ver que las cosas cambiaron” “Hay más espacios de inclusión” “... un interés estatal y general porque los chicos estén en la escuela... no se supone que un menor de 18 años tenga que ir a trabajar” es una referencia a que “antes, se promovía estudiar o trabajar”. Aunque no siempre se “adecua” a las necesidades y demandas de esta población²²². La trama estatal “Varió un montón y también las intervenciones nuestras, pero nadie produce información, se pierde un trabajo valiosísimo”²²³. La mayoría de los entrevistados considera que es un trabajo que no está suficientemente valorizado.

De las entrevistas surge que los profesionales conjugan ese escenario con la mayor complejidad de las situaciones que se presentan. “Chicos en contexto muy hostiles”, “A veces tengo un poquito de miedo”. “La gravedad de los hechos por los que fueron detenidos se nota”, advierte una entrevistada que se desempeñó en el Instituto dependientes de la SENNAF y actualmente trabaja como Delegadx. Varios profesionales señalan que la complejidad de las situaciones que se presentan en el trabajo, les exige una creciente preparación, “no es posible eludir complicaciones”. Algunos profesionales exhiben cierta aprensión “a lo que puede surgir”, “como manejar algunas situaciones” dado el nivel de implicancia del trabajo extramuros, cara a cara. Estas expresiones encubren ciertos reclamos a los niveles jerárquicos de los que dependen, aluden en términos de déficit de cuidado y protección a los profesionales.

Coinciden en señalar que se trata de jóvenes que necesitan una orientación personalizada, “no contribuir al peloteo” son chicos que fueron a distintas escuelas, ya consultaron en centros de prevención de adicciones. Los Delegados conocen personalmente a los operadores²²⁴ que suelen tener una importante rotación. Realizan un seguimiento de las prestaciones, de la prosecución de los trámites, conocen los cambios en los formatos de los programas, aprovechan las distintas facetas de las ofertas que se encuentran vigentes.

²²² “Las instituciones educativas están pensadas para otro tipo de chicos”... “hay una indiferencia para con estos chicos”.

²²³ En otro sentido un juez señalaba “A un menor, lo puedes rescatar. Entonces, hagamos eso, porque si no trabajamos para eso, ¿para qué estamos acá?, para hacer estadísticas, no... Son personas... yo no hago estadísticas”

²²⁴ Se trata de agentes no profesionales: voluntarios, militantes, ex – consumidores, estudiantes de ciencias sociales, que trabajan con esta población de jóvenes, en las distintas jurisdicciones.

Además “Primero los contactos personales, sino “chapeo”²²⁵, cuando no me dan bola recurro al oficio judicial, se pide y se manda el oficio”. Por las condiciones de contratación ya aludidas, estabilidad e ingresos en el poder judicial, estos Delegados alcanzan trayectorias prolongadas en el espacio de trabajo a diferencia de las otras instancias estatales donde las condiciones de contratación son precarias por lo que la rotación es alta.

Es que los Delegadxs consultados evalúan que el llamado “Sistema de Protección” no funciona como tal, “si no nos juntamos entre nosotros, imagínate” La articulación es “por abajo, en el caso a caso”. Existe mayor cercanía histórica con programas e instancias nacionales, de la SENNAF²²⁶. En la CABA²²⁷ la relación es con el CDNNyA a través de las Defensorías Zonales especialmente cuando se trata de niños menores de 15 años (inimputables) y el Departamento de Jóvenes en conflicto con la ley. En provincia de Buenos Aires, según los municipios: servicios locales, centros preventivos asistenciales, Casa Joven, Programa Envión, etc. Estos agentes advierten limitaciones en el entramado institucional para trabajar situaciones de alta complejidad, donde se requieren respuestas integrales. Por eso plantean que “La meta es alcanzar un “clic”, dentro del desastre en el que ingresan las familias al sistema penal. Un cambio mínimo...”. “Es un trabajo marginal, en términos de incidencia” (en una plaza, en la localidad de Moreno, ejemplifica una entrevistada) “Sí hay incidencia en los chicos, que puedan correrse de situaciones de riesgo”. Aquí, considera “al agente como sujeto activo producto y a la vez productor”, cuya “práctica profesional es producto tanto de las estructuras en las que se inscribe, como de la acción consciente de sus agentes” (2008:62). El dispositivo institucional y los profesionales orientan su trabajo hacia los sujetos, la mirada en dirección a la misma institución en la que se insertan se rehúye, según encontramos, con el argumento de que su opinión es poco considerada. De esa manera consideramos se convalida esa supuesta homogeneidad en el campo que suelen atribuir algunos observadores externos.

Una de las Delegadxs, resume “Hay momentos que (estamos) muy compenetrados con la tarea y momentos que hay mucha desmotivación, ¿no?...remamos...hay recurso... no sé hasta donde son eficaces,...sobre todo lo que es provincia...En CABA es más fácil”. En

²²⁵ en referencia a exhibir la credencial del Poder Judicial

²²⁶ los programas como Derecho a la Identidad y Monitoreo territorial (ex Libertad Asistida) con sede en el Instituto Garrigós, etc.

²²⁷ también con otras instancias ejecutivas, instituciones escolares y programa Adolescencia.

otra dirección, una Delegada señalaba: “hace un par de años me parece que la autoridad nuestra estaba,... me parece que ahora, a veces cuesta más (con los pibes, las familias), a veces vas al domicilio y no están, acordás entrevistas y no van... paso otro tanto con las instituciones (es desmotivador)”. En la misma línea, una secretaria de un JNM entrevistada, explicaba “acá conversamos todo, a veces...no se sienten tan valorados por su trabajo...Eso, a veces cansa... ¿no? Haciendo referencia al desgaste inherente al trabajo al que están expuestos los Delegadxs y al escaso reconocimiento institucional”.

Relevamos preocupaciones persistentes que presentan distintas manifestaciones: - en primer lugar a cómo los agentes sitúan las metas de su intervención. “El trabajador social tiene que pensar como sigue... después de la intervención penal, una rearticulación hacia delante. Un combo, siempre estás buscando, empezar de nuevo, incidir.” “Un compromiso, una visión política de la intervención, una mirada más amplia de la realidad. Una intervención micro pero situada en un contexto más amplio.” “La complejidad de las situaciones, la incertidumbre del trabajo con jóvenes es considerada un desafío”, “siempre corremos atrás”, “apunto a más”, “siempre pienso que podría haber hecho más”. Otras preocupaciones inherentes al desconocimiento de un cumulo de trabajo que estos agentes realizan y la institución no reconoce, aquello que se planifica, la cadena que instituye la relación con los sujetos: ir varias veces para acordar un encuentro, el relevamiento para conocer y coordinar recursos, los esfuerzos reiterados para ubicar al coordinador de un servicio, etc., las intervenciones que fracasan. En los informes “se invisibiliza... (esa) parte del trabajo”. Para los JNM y TOM la demanda es idéntica, “Los objetivos están estandarizados (y ese parámetro se usa) para sancionar o no... ¿qué le estas pidiendo?”. Honneth (2007) cita a Dewey para explicar el proceso que denomina “elaboración” secundaria de una situación, que alude a aquello que surge del intento reflexivo de separar a posteriori los componentes que se experimentaron en conjunción. Esta elaboración ocurre cuando el desglose en elementos emocionales y cognitivos permite la destilación de un objeto de conocimiento. Ello le permite concentrar toda su atención, que estuvo diseminada en la totalidad de la experiencia directa. Estos autores dan relevancia a que en el proceso cognitivo de abstracción no se pierda el contenido de la experiencia cualitativa original.

Estas preocupaciones que escasamente encuentran un interlocutor, se traducen en un malestar que subyace en las opiniones de los Delegadx entrevistados, que a nuestro criterio manifiesta, una persistente demanda de reconocimiento. Su ausencia mella la relación con otros agentes. Ello se conjuga con el carácter históricamente atribuido a su intervención en la figura del “Delegadx Inspector”, asociados con el control de la vida cotidiana, que consideramos colisiona con las expectativas a repensar su intervención en el marco legal vigente. La capacidad y las formas de negociación entre los distintos actores institucionales y la construcción de estrategias no son resueltas de manera unívoca en este escenario institucional. Los Delegadx no han desarrollado estrategias reivindicativas como trabajadores, sea en organizaciones sindicales como en el espacio colegiado del CEDIM que ha sido una plataforma poco ejercitada en ese sentido. Las luchas simbólicas, son parte del asunto en juego (Bourdieu, 1997: 226) una lucha permanente entre aquellos agentes que tienen interés en modificar lo impuesto, no solo posiciones, también “categorías de pensamiento, de percepción y de apreciación de las distribuciones”.

Y de nuevo,...que dicen que dicen los jóvenes

Aunque no entrevistamos a jóvenes, por las razones ya expuestas, extrajimos fragmentos de las entrevistas a los trabajadores sociales y otros agentes que aluden a los jóvenes que transitan este campo, de manera similar a la que presentamos en el capítulo 4.

En general, lxs Delegadx refieren que estos jóvenes pertenecen a grupos “en situaciones de exclusión total... ellos y sus familias... organizan sistemas de supervivencia... (a veces, en la calle) deplorables, donde circulan drogas, armas,... no está muy claro... cuando los entrevistás que se trate de victimarios... muchas veces.... los ves como víctimas... mucho discurso transgresor” señalan que se advierte una suerte de provocación (como una reacción) cuando se encuentran en la instancia judicial. “Se está investigando o se les imputa un delito.... atraviesan una situación de conflicto que se denomina con “con la ley penal, infractores”...“sectores muy vulnerables... acusados”

Los chicos en situación de calle o quienes están trabajando en la calle son definidos como población que “la cana los elige”, muchos de ellos son derivados a institutos, “pasan hasta

veinte días hasta que aparece alguien”, a veces “no saben bien donde viven, ni los teléfonos²²⁸”. Los Delegadxs entrevistados consideran que se trata de un grupo para quienes, muchas veces “el delito es una posibilidad más... no tienen muy claro ese límite... no se plantea como una barrera”, “Son adolescentes.... (no tienen muy presente las consecuencias) creen que todo sale bien”. “El consumo de alcohol y drogas es relevante”.

“Les paso de todo, la última generación sindicalizada en la familia es el abuelo, con suerte”
“muchos problemas, una mochila importante para la edad que tienen”. “Cuesta insertarlos en los dispositivos tradicionales”.

Los funcionarios consultados exponen sus representaciones de la siguiente manera: “los chicos son difíciles, difíciles de abordar...por las características de las familias, las condiciones económicas, el consumo de droga, etc....No ven un futuro... una persona que no tiene futuro no la podes abordar fácilmente”. “El factor adicción a distintas drogas es preocupante”; “No sé si apático, sería la definición, no ven un futuro, los padres (de manera similar) responden: le dije que fuera”. “Trabajamos con las instituciones (locales), las escuelas, parroquias, según la cercanía, los intereses. Son adolescentes que... tienen condiciones deficitarias”. “En general vulnerables en todos los aspectos”; “Son jóvenes, acusados de delitos”... “los chicos... tienen consumo de droga, .. o de alcohol y que vienen muy perdidos, muy perdidos..., y... padres que... te piden a vos que los ayudes..., cómo hacer, ... cómo decirle que vengan. Lo llamo,.. está ... y son las 12 del ¡Mediodía!, son chicos que no pueden terminar el colegio, me parece que es básica la educación y que teniendo educación gratuita... el colegio es fundamental, ... no concibo que hoy en día se me presenten chicos de 17 años que no sepan ¡leer!.... hay un circuito institucional qué también es muy deficitario”

“Si son de clase media?...no dejan de ser macanas de adolescencia traducidas a delitos. Algunos graves. ...grupos vulnerables...cuyas necesidades básicas están insatisfechas, básicamente educación, salud, vivienda”...”Es muy difícil sostener la escolaridad a un niño

²²⁸ Cuando esto ocurre, si los jóvenes saben cómo llegar a su casa y pueden identificar referencias, la SENNAF dispone de un móvil que los acompaña para poder ubicar a adultos referentes y citarlos para que puedan realizar el egreso con ellos.

cuando viene de un hogar violento... no están fácil ir al colegio” “Esos informes...se leen con una liviandad...yo he escuchado a fiscales alegar con tanta liviandad “no logró las metas”...vos también sos representante de este Estado y vos te tenés que hacer cargo”

Por otro lado, los Delegadxs se refieren **a las representaciones que infieren que los jóvenes tienen de ellos** de la siguiente manera: “De repente estas en algún lado y escuchas: yo a Ud. la conozco”, “los chicos y las familias perciben una idea de cuidado, es una oficina donde no se los acusa de nada”.

Los Delegadxs reconocen que la primera imagen, previsible está asociada con el control y la vigilancia, una imagen negativa, que a veces coincide con una demanda de los adultos por reinstalar una autoridad. “Cuando me ven deben estar pensando, cheta boluda, vieja forra... sos la policía de la esquina... como me la saco de encima.... es que hay una distancia abismal. Por eso me re contra ocupo de tener una buena relación, la práctica te permite atravesar eso”.

Consideran que simultáneamente hay otra imagen que está asociada con el Asistente Social, “una chapa más aceptada y conocida”. “hace años que vengo escuchando ¿Cuándo va a ir a mi casa?, Ud. tendría que venir a mi casa. Muy bien, yo que tengo que ser los ojos del juez, y voy. Miramos la casa juntas, pensamos allí como mejorarla. Ella (se refiere a la madre, las familias) quiere que yo cuente (al juez) cómo viven, que es buena gente”. “Alguien que reconoce sus problemas, que puede pasar datos, recursos, nos esperan con naturalidad en el territorio”.

“Saben de dónde venimos, el juzgado, upa!” “Aunque siempre avisas para no robustecer la noción de control, no siempre te están esperando, a veces es difícil” Pero “el objetivo es empezar una relación. Es un trabajo, y cuando te llama se trata de estar disponible, tratando de aportar”.

La funcionaria de una Defensoría señala que: “Las opiniones que nos llegan de los Delegadxs son positivas... aunque depende qué Delegadxs les toque...Estos chicos, están tan acostumbrados a recibir indiferencia institucional, que ellos sólo registran lo que no es la indiferencia.... Yo creo que ellos registran cuando... uno le muestra otra faceta, un

mínimo de interés, de compromiso. Son muy receptivos los chicos en esos”; Otro Defensor coincide en valorar la tarea de los Delegadxs “el referente más cercano... muchas veces lo confunden con el abogado... es tan cercana la relación que tienen, cuando laburan bien... como que son el nexo entre ellos y nosotros. Porque (los chicos) nos ven (continúa el mismo Defensor) como que somos todo lo mismo..., la distinción entre Defensorías (Pública y Oficial)... que es una ¡ensalada total!.. A veces te llaman y te dicen hablo con el ¿Tribunal? No, es la Defensoría, ellos nos ven cómo todo lo mismo.”, (los Delegadxs) les facilitan ese acceso a la Justicia”

Al respecto un juez del TOM manifiesta que “Algunos (chicos) los perciben como un referente de orientación y de ayuda... algunos se han pronunciado que son una tabla de salvación” Para los TOM son “demasiados” (los chicos, los Delegadxs) entonces no se establece relación. Somos el único tribunal que tenemos guardia,... les damos un lugar. Y continúa refiriéndose a la relación entre los jóvenes y los Delegadxs, “A veces logran un vínculo y confiar y los ven como un referente y otras veces me parece que no, es una carga enorme....como un plomo que me pusieron acá y yo me tengo que reportar...por ahí...se logra...se siguen viendo”

c- Los informes sociales, el soporte escrito

La tarea de los Delegadxs se expone a través de la continua presentación de informes cuyo propósito central está relacionado con la disposición tutelar, el desarrollo de las medidas socio-educativas, por el plazo del tiempo que prevé el Art.4to. - ley 2.278, en cuyo lapso se espera que esta intervención reconozca ciertos “resultados” que promuevan la absolución de los jóvenes acusados, como hemos desarrollado precedentemente.

A partir del relevamiento realizado distinguimos distintos tipos de informes: -El primer informe donde se “traduce” la primera entrevista que permite conocer al joven y que contribuye a la decisión relativa a la imposición o no de la disposición tutelar, - los informes de seguimiento mensual que constituyen una serie y dan cuenta del proceso de trabajo a partir de la mencionada disposición, que deben presentarse al menos una vez al mes y que congregan las gestiones y toda alternativas desarrolladas en ese período, que en

ocasiones no presenta ninguna novedad²²⁹; - los informes de jóvenes “internados” quienes cumplen medidas excepcionales, privados de su libertad en instituciones dependientes de la SENNAF, que se requieren que se realicen en forma quincenal²³⁰; y - el llamado último informe, o retrospectivo, que se realiza a pedido de los Defensores, el TOM, ante una inminente resolución de la causa, o por que el joven alcanza la mayoría de edad, que se corresponde con el cese de la disposición tutelar.

En el llamado primer informe en el cual se espera abundante y detallada información de carácter descriptiva, fundado en un primer encuentro, en el que es frecuente que no se alcancen desarrollos analíticos sustantivos. Fue pautado por la Cámara desde 1937 y modificado, por última vez, en 2010 por la misma Cámara, como ya fuera expuesto, y denota una preocupación compartida por los funcionarios judiciales por consensuar sus expectativas y demandas a los Delegadxs. De esa manera se explicitan los contenidos que se deben incluir para ponderar la situación de los jóvenes acusados²³¹. Bourdieu (1998) señala que las categorías aparentemente descriptivas resultan tanto prescriptivas como preformativas, un procesamiento específicos de las vidas de personas concretas, que muchas veces aluden a situaciones consideradas “fallidas” en el proceso de socialización.

Como ya mencionamos, ese “modelo” en uso desde la acordada del pleno de la Cámara del año 2010, fue objetado por los profesionales vía una presentación organizada por el CEDIM y también por Defensores Oficiales, entre otras razones, porque en un apartado se incorporaba una referencia a la “responsabilidad penal juvenil” que incluía la firma del joven acusado. Oportunidad, en que a través del CEDIM se presentó una contrapropuesta que no fue aceptada pero permitió que ese “modelo” fuera considerado al partir del debate suscitado, como un esquema guía y no de uso obligatorio.

²²⁹ Eso constituye una queja por parte de los funcionarios, la ausencia de novedades refleja una rutina que no requiere de atención. Debería ser una plataforma para suspender la disposición tutelar.

²³⁰ Una forma en que los JNM y los TOM acceden al conocimiento de las condiciones en que se desarrolla la “internación”.

²³¹ Cuestión que fue abordada por la entonces Jueza de Cámara, Garrigós de Rébori, que reclamó incluir descripciones detalladas, lo que provocó reclamos y resistencias²³¹ por parte de los profesionales en el marco de una capacitación organizada por el Ministerio Público de la Defensa el 10/08/2011, convocado bajo el título de “El informe social, su producción y problematización”.

Foucault (1977) advertía acerca de la tendencia a la que designó como “redefinición de lo justiciable”. Se refirió a tal proceso como la reglamentación jurídica de los comportamientos en tanto modalidad de gobierno poblacional y propuso su comprensión como una evolución de las técnicas de poder en la sociedad contemporánea. El informe social puede ser considerado parte de estos instrumentos, se encuentra ampliamente difundido en el campo de la justicia penal juvenil. Allí los profesionales pueden visibilizar y comunicar, su posición respecto a aquellas cuestiones sobre las que se demanda que emitan una opinión profesional. “La capacidad socialmente reconocida de interpretar (de manera más o menos libre o autorizada)... visión legítima, recta, del mundo social” (Bourdieu, 2000: 160).

Se trata, asimismo, de un soporte privilegiado que históricamente el Trabajo Social ha reivindicado como parte de su especificidad de trabajo, un dispositivo en el que se procesa y elabora información que se interpreta y “lee” en distintas claves. Donde los profesionales exponen el conocimiento y expresan su opinión profesional respecto de la población con quien interactúan, puntualmente o en un período de trabajo. En los cuales se incluye información de esas personas y, muchas veces, se exhiben objetivos y estrategias de intervención que los agentes desarrollaron con estos sujetos, en un período de trabajo. El poder de nombrar (Bourdieu, 2000: 196) es un proceso que representa una puesta en escena paradigmática de la lucha simbólica, una confrontación de puntos de vista particulares, inseparablemente cognitivos y valorativos.

Estos informes que se incorporan en expedientes y luego son leídos por los otros agentes que incluye especialmente a abogados: secretarios, defensores y jueces responsables de tomar determinaciones en incidir en los procesos penales en los que estos sujetos son parte y considerados el registro privilegiado de la intervención judicial. Se observa que bajo una apariencia meramente descriptiva, una pretendida claridad, encubre o nos advierte sobre ciertas valoraciones y conceptos sobre la vida que desarrollan las personas con los que los profesionales se vinculan en este campo. Numerosos informes pretendidamente descriptivos combinan una especie de ping pong interpretativo, una especie de un mosaico, una yuxtaposición que tiende a producir en ocasiones una perspectiva relativista, visiones

que en ocasiones soslayan las diferencias de clase²³², y en los cuales advertimos que se apela a expresiones que simplifican la realidad, en los cuales podemos identificar la reiterada construcción de dualismos, una estructura que permite establecer simultáneamente jerarquías, donde el valor de uno radica en la devaluación del otro (Healy, 2004). En estos informes también es posible observar operaciones tendientes a calificar una situación, la designación alude al niño y su grupo conviviente como desorganizado, para poner un ejemplo, porque se sobreentiende un supuesto estado de orden. Se verifican alusiones de carácter normativo y normalizante de uso frecuente para describir la realidad compleja y heterogénea, que señalan una distancia respecto de otra que se valora en forma idealizada.

En el contexto de las prácticas de los Trabajadores sociales en el fuero penal juvenil los informes constituyen un registro relativo a un momento especialmente conflictivo de la biografía individual, “narrativas del padecimiento” (Carballeda, 2008), a partir del cual se construye una hilación hacia el pasado y presente de momentos de su biografía. Coincidimos con Pérez Laurino (2012) en que “dado que los adolescentes que llegan a la instancia judicial...²³³ provienen –en su gran mayoría– de sectores socialmente vulnerables, son las fragilidades individuales que la pobreza deja impresas en las personas las que quedan expuestas...., se deja impresa la caracterización individual y social de estos sectores sociales que quedan asociados a la contravención normativa”.

En Los Anormales, Foucault (2000) señala que los discursos de los peritos, los profesionales contratados por la justicia para “opinar”, tienen distintas propiedades, entre las que resalta la de incidir en la decisión de la justicia. Para ello estos discursos se constituyen/funcionan como discursos de verdad, dado su status científico, para lo que se apoya en “pruebas completas e incompletas, indicios”, en algo así como la íntima convicción, algo como una impresión que permite decir algo bajo el manto de verdad pero que puede ser perfectamente impreciso. Una especie de privilegio sobre el sujeto que enuncia, que este autor analiza a partir de la conjunción de dos instituciones: judicial y médica. De tal manera, los informes profesionales ponen de manifiesto, a modo de

²³² No como una distinción a la que se adhiere unívocamente a partir de cierta estructura económica sino y que especialmente remite a construcciones en términos de representaciones materiales y simbólicas.

²³³ Su análisis refiere a pericias judiciales realizadas por trabajadores sociales en Uruguay.

diagnósticos - rótulos que encuentra Foucault en los informes (pericias) que analiza. Al respecto, señala que estas nociones “funcionan” como una forma de inscribir la supuesta infracción y constituirla como un rasgo individual. “Permite pasar del acto a la conducta, del delito a la manera de ser” (Foucault 2000:29) emiten a calificaciones morales, ya no tratan de la infracción en el sentido legal sino de una irregularidad con respecto a otra serie de normas y reglas: psicológicas, morales, sociales, etc. Aunque sin tomar partido acerca de la realidad y el grado de culpabilidad se afecta la responsabilidad, a entender de este autor. En ocasiones el conocimiento “científico” facilita la extensión de castigar a otra cosa que la infracción: la inmadurez, falta de desarrollo, inestabilidad, pobreza. Posibilita operar un desdoblamiento que permiten “imponer a un individuo una serie de medidas correctivas, de medidas de readaptación, de medidas de reinserción. El bajo oficio de castigar se convierte así en el hermoso oficio de curar. La pericia..., entre otras cosas, sirve a esa inversión.” (Foucault 2000:35) Se pasó del problema jurídico de la atribución de responsabilidad a otro...distinto, responder si el individuo es peligroso, curable, adaptable. Estas operaciones, vinculadas con las técnicas de normalización, han sido tradicionalmente un problema. En muchos casos naturalizado en sus prácticas, en otros, una cuestión a visibilizar y cuestionar en este campo.

Los trabajadores sociales replican en esos escritos la tensión entre constelaciones ideológicas. En los informes es posible reconocer por un lado, la reproducción simbólica de la representación de familia y niñez tradicional, a partir de la cual origina un mandato que atribuye a la intervención profesional prácticas ligadas a la orientación de la familia en ciertos valores que se responden con la tutela y la perspectiva del riesgo a partir del cual se responsabiliza a los sujetos por sus trayectorias. Sin embargo, también resulta evidente en otros informes una ruptura con esa impronta conservadora, que convive como parte de los objetivos de control y disciplinamiento inherente al mandato institucional, que dificulta su reemplazo. La perspectiva de derechos que permea paulatinamente el discurso y las intervenciones institucionales cuenta con una incipiente evidencia de su desarrollo, en los informes profesionales consultados.

Asociamos esta dificultad como parte, al decir de Healy “pensar en los retos que supone una práctica social... en los contextos contemporáneos...” (2004:11) Aunque partimos del prejuicio relativo a la persistencia de una tendencia a la reproducción de ciertos discursos y

condiciones que se constituyen como parte del contexto de la práctica que no se problematiza sino que se naturaliza, se invisibiliza. Nos referimos a las características de la organización del trabajo en el Poder Judicial en el fuero de *menores* y la complejidad que implica su desarrollo cotidiano. Los profesionales se expresan generalmente a modo de queja puntual sobre estos aspectos.

Las intervenciones de los trabajadores sociales tienen una implicancia directa en la vida de las personas. “La intervención en ese sentido, no sólo pone en acto decisiones que se estructuran en la cadena de poder de las instituciones, sino también descubre los problemas específicos” (Rozas Pagaza et al, 2014). En el caso del Trabajo Social, ello se ha vinculado con una impronta histórica que caracterizó los procesos de institucionalización de la profesión, a partir de cuyo análisis es posible observar como la relación pensar/hacer, “se ha encapsulado en más de una ocasión, al Trabajo Social en el “hacer””, según estos mismos autores.

Si bien es frecuente observar que los trabajadores sociales suelen adherir a enfoques considerados críticos en el que se incluyen naciones relativas a (Healy, 2004:14) –un compromiso para estar al lado de las poblaciones oprimidas y empobrecidas;- la importancia de relaciones basadas en el dialogo entre Trabajador Social y sujetos con los que se relaciona; - la función que desempeñan los sistemas sociales, económicos y políticos en la configuración de las experiencias individuales y las relaciones sociales, incluyendo las interacciones en el contexto de la práctica; y finalmente, - un compromiso y provocación del cambio. Los informes se alinean con la rígida expectativa procedimental que difícilmente es desafiada en estos soportes escritos.

Aunque una práctica considerada crítica se orientaría hacia la transformación de los procesos y las estructuras que perpetúan la dominación, cotidianamente esta crítica no sobrepasa la dimensión discursiva, se insulariza en el trabajo de campo, por fuera de la institución y, como expresamos reiteradamente, se enuncia como queja y no es incorporada como demanda o disputa al interior del campo. Es frecuente leer informes escritos donde es difícil encontrar evidencia de esta posición / perspectiva crítica. Por el contrario, en esos documentos es posible distinguir una correlación con aquellos discursos que se interpelan en estas entrevistas como otros encuentros y charlas informales. Asociamos esta dificultad

a que “El Trabajo Social tiene una particularidad que deviene de su posición en la vida estatal; que implica (y muchas veces dificulta su capacidad para) indagar y construir argumentos como base de las acciones y decisiones concretas (Rozas et al, 2014)

En este sentido, coincidimos con Healy (2004) quien señala ciertas dificultades que se plantea al interior del Trabajo Social, en su conjunto, para poner de manifiesto contradicciones, incertidumbres, variabilidad contextual y demandas específicas. Esta dificultad inhibe su capacidad para sortear una posición que puede resultar evidentemente prescriptiva, y por tanto muy distante de lo que puede ser considerado como una práctica crítica. Justamente esta autora resalta la importancia de eludir posiciones dualista que simplifican los procesos en que las prácticas cotidianas del Trabajo Social se involucra, que son posiciones recurrentes en las adjetivaciones²³⁴ que los trabajadores sociales suelen incorporar en los informes que rubrican. Las prácticas del TS según esta misma autora, constituyen un ámbito de construcción de saber a partir de la preocupación por contextos cotidianos y situados- locales de la práctica.

Esta autora recurre a la obra de Foucault quien otorga relevancia a la capacidad de interrogar y diversificar los enfoques, como un aspecto que permitiría crear condiciones para el diálogo. Cita a Yeatman (Healy, 2004: 18) para advertir que la superación de la dominación incluye formas creativas de resistencia a los diversos tipos de dominación.

Al respecto, nos interesa señalar que la producción de informes de los trabajadores sociales es un insumo considerado necesario para el desarrollo de las intervenciones en el fuero penal juvenil. Si bien Healy (2004) destaca el carácter político de la intervención del Trabajo Social y, considera que el poder opera e impregna discursos y practicas institucionales; consideramos que la participación de los trabajadores sociales en estos procesos, en ocasiones, refleja y reproduce una relación desigual y jerárquica pese a los discursos a favor de los “oprimidos”, los “menores”, los pobres. De esta manera, se visibiliza una práctica históricamente vinculada con el ejercicio del control social, donde escasamente se instituye / utiliza la fuerza de la ley asociada con la oportunidad de

²³⁴ Las formas en que se adjetiva a las familias, muchas veces exhiben una carga valorativa que no necesariamente se correlaciona con los objetivos de presentar o describir la situación del niño/a o joven, ni con delinear procesos de intervención profesional a corto o mediano plazo.

garantizar niveles de bienestar crecientes a las personas más vulnerables, persiste una “sensibilidad” que no siempre se traduce en otra “productividad del poder”. (Foucault, 2000).

Cazzaniga (2000) afirma “participamos de los dispositivos de la intervención social contruidos en el escenario capitalista, y por lo tanto la impronta del control social es inherente a esos mismos dispositivos como forma de sostener el orden, lo que no debería significar mimetización profesional a los mismos. En todo caso, aquí entra en juego el concepto de límite como simultaneidad de lo que articula y separa, y la capacidad para construir categorías desde las cuales sea posible interpretar en forma adecuada esa zona gris e “indecidible”.

El análisis de estos escritos donde se expone la tarea y las opiniones de los Delegadxs, están centralmente referidos al conocimiento que elaboran sobre la población con la que trabajan, en formatos que delimitan aquello que le interesa a quienes lo diseñaron, presentan matices y posiciones que se conjugan con expectativas, prácticas e intervenciones profesionales. Su contenido está orientado a proveer a otros agentes, especialmente al Juez, un conocimiento nunca neutro, producido en su carácter de auxiliares del juez, en base a un requerimiento formalizado, que será anudado con otros aspectos (como la existencia de “antecedentes”, tipificación del hecho del que se lo acusa, etc.), que en su conjunto constituyen insumos puestos a disposición de los magistrados para pensar / fundamentar las decisiones que han de tomar que afectan a jóvenes. Estos informes visibilizan cómo y qué resalta cada agente involucrado, cómo se proyecten y rearticulan sujetos, opciones y trayectorias en cada caso y contexto específico. El fuero penal juvenil, como plateamos en esta tesis, es desde hace varios años un campo con mayor cantidad de agentes con capacidad de contrapeso, cuyas reglas de juego incorporaron formalmente: la escucha, protección y cuidado de los jóvenes como una premisa básica. Una transformación novedosa ante 100 años de un tratamiento tutelar que enfatizaba una dimensión moral asociada con un sinnúmero de prejuicios frente a esta población sobre la que se demandaba “intervención”. El análisis de los soportes escritos no nos permite aseverar que esa transformación sustancial haya ocurrido.

CONCLUSIONES

El proceso de elaboración de las conclusiones nuevamente nos enfrentó con la tensión que Elías (1990) sintetiza como “compromiso y distanciamiento”, que supone que deberíamos alcanzar un “grado relativamente elevado de autonomía frente a cuestiones cotidianas personales o sociales que nos permitirían *descubrir* o decir algo novedoso respecto de los fenómenos relevados, a partir de un sistemático ejercicio de reflexividad para abordar aquello que nos propusimos inicialmente. Como ese autor advierte, los investigadores que formamos parte de esos conjuntos de interrelaciones, mantenemos una relación que complejiza este trabajo de indagación y cuestionamiento. Sin embargo, y como ya hemos planteado, en ocasiones “para comprender como funcionan los grupos humanos es necesario conocer desde dentro como experimentan... los grupos de los que forman parte y los que les son ajenos; y esto no puede conocerse sin participación y compromiso” (Elías 1990:28).

Este estudio, condensa un itinerario personal de formación, docencia e investigación y el ejercicio de la profesión en esa búsqueda interactiva, en el sentido de que “cada uno de los componentes tiene implicaciones para los otros componentes,... (no hay) una determinación fija de la práctica de investigación” (Maxwell, 1996). La reflexión, los problemas cotidianos en estos espacios, cimentaron preguntas y cuestionamientos constantes, en cuyo marco, el paso del tiempo, el mayor conocimiento y supuesto dominio, lejos de disipar contrariedades han sido un incentivo constante que abre paso a otras controversias. Ellas, no solo se ligan a la aspiración de conocer y visibilizar la renombrada opacidad de la justicia sino que además procuran realizar aportes, contribuir en la cualificación de los procesos de los que somos parte, mandato ineludible que portamos los profesionales del Trabajo Social cuyo carácter vinculado a la intervención, nos acecha.

La noción de campo nos permitió desarrollar un análisis dando relieve a distintos puntos de observación: las dimensiones temporales, histórico-político y legislativa no fueron pensadas como un marco donde proyectar, situar o presentar el desarrollo de esta investigación; sino que esta perspectiva relacional resultó flexible a la complejidad y variedad que pretendimos visibilizar en la trama de la justicia penal juvenil. Reconociendo una inquietud relativa a que “en general la justicia en su conjunto se resiste a ser

observada, y en tal caso cuestionada... el fuero de menores no se presenta como excluyente en este aspecto” como señala Guemureman (2005, 12). Nuestra indagación pretendió visibilizar una variedad de tensiones en un “complejo engranaje de múltiples intercambios recíprocos, tanto directos como indirectos.... (donde) el individuo tiene cierto margen de elección” (Douglas, 1990, 55, 56).

Nos propusimos recuperar aspectos que atestiguan, tensiones, inconformismos, pequeñas evidencias de lucha entre saberes con distinta jerarquía – poder en este campo. Entre “sectores especializados de la erudición” (Foucault, 1979: 129) que hegemonizan el campo y otros saberes que ocupan una posición en los márgenes. Un redescubrimiento que nos permite advertir ciertos acoplamientos, disputas y silencios. “El silencio, o mejor dicho, la prudencia” (Foucault, 1979: 133) de agentes en distintas posiciones es considerado por este autor, por lo menos, un principio táctico que puede ser útil. Este autor considera que el poder no es principalmente mantenimiento ni reproducción sino, ante todo, una relación de fuerza, una especie de guerra silenciosa, inscrita en las instituciones, en el lenguaje de unos y otros, que corrobora esa tensión.

¿Veinte años, no es nada? Establecer este punto de partida nos permitió problematizar la continuidad, evitando una narración estrictamente histórica, pero también distinguir el inicio de otro momento, que se pretendía transformador. Bourdieu (1997) alienta como instrumento de ruptura la reconstrucción del campo, que permite un resurgir de conflictos y confrontaciones anudados a su génesis. Nuestro análisis entonces implicaba un desafío a eludir un posicionamiento binario. El pasado no se orienta a una “labor de restauración sino una transformación del presente... ese pasado hecho visible, retomado y transformado” (Matus, 2010) con la pretensión de adentrarnos en desentrañar la complejidad, quebrar esa línea de tiempo, descubrir lo atípico, repensar sus nexos con prácticas e intervenciones profesionales. Atentos además a la afirmación por la cual “sobre los espacios más tradicionales pesan las representaciones más conservadoras de la profesión (Cazzaniga, 2014).

A lo largo de estos capítulos, planteamos numerosos problemas y tensiones que hacen al relieve de nuestro objeto de estudio. En ningún caso logramos alcanzar cierres concluyentes. Este trabajo, en su conjunto, implicó un proceso de develamiento y

comprensión del problema que nos propusimos investigar. Nuestro hallazgo principal es el develamiento de este “suelo movedizo y concreto” (Foucault, 1992) en que se reformula la estructura de relaciones estables que lo constituyen. Nuestras conclusiones no pretenden, por ello, ser exhaustivas, sino exponer algunas situaciones que consideramos complejas, reconociendo que lo real es permanente movimiento y devenir y que cada elección y lectura implica, simultáneamente, renunciar a otras facetas de los mismos fenómenos, lo que señala límites en nuestro proceso de trabajo.

Este trabajo estuvo orientado a visibilizar y reflexionar sobre el funcionamiento de este “microcosmo burocrático” (Bourdieu, 1997), alertas a la “microfísica del poder” (Foucault, 1992). La gradualidad y lentitud que la reconfiguración del entramado en este campo, expresa el proceso de negociación de cada día. El desafío apunta a problematizar la inercia de esa trayectoria. En ese camino hemos recorrido distintos aspectos más y menos transitados de la crítica al fuero penal juvenil, en relación con las normas, la organización institucional, los estereotipos relacionados con la población a la que se dirige, la adherencia al funcionamiento habitualizado y especialmente, aquello que consideramos nuestra contribución específica, el análisis del relacionamiento entre agentes a partir del estudio del espacio, las limitaciones y contribuciones que despliegan los trabajadores sociales, Delegadxs, donde concentramos nuestra indagación.

En este apartado, damos cuenta de ‘hallazgos’ como otras líneas de investigación que representan inquietudes y preocupaciones casi como una continuidad en nuestra agenda de trabajo, a saber:

En primer lugar, advertimos que pese a que el lenguaje jurídico suele apelar al uso de expresiones vagas y ambiguas, un tono impersonal en los escritos y resoluciones que pretende cierta neutralidad, la evidente persistencia de las nominaciones engendradas por la Ley de Patronato aún impregna las prácticas cotidianas. La evidencia recurrente es la masiva utilización del término *menores*, entre otras nominaciones que muy paulatinamente ceden paso a las designaciones impulsadas desde la CDN. Los que los Delegadxs denominan como “el lenguaje de los derechos”. Ello daría cuenta tal como cita Douglas (1990, 183) a Durkheim, de que “cada comunidad es un mundo de pensamiento que se expresa en su propio estilo de pensamiento (que) penetra la mente de sus miembros, define su experiencia y fija polos de comprensión moral”. Ello se complementa, según la misma

autora con la advertencia respecto a que, “en una maquina compleja (las instituciones) el compromiso de los individuos con el grupo más amplio puede explicarse en buena medida, pero no del todo, en función de una combinación de coacciones, múltiples relaciones entrecruzadas, convenciones e intereses personales” (Douglas 1990,70).

Constatamos la existencia de aquello que Douglas denomina como “grupo latente”, otros estilos de pensamiento, que muchas veces activan controles invisibles que ejercen las instituciones a fin de reproducir la legitimación de su espacio consolidado, promover la adhesión a la autoridad, etc. Hemos apelado a la noción de autonomía y estrategias para recuperar la capacidad de algunos agentes que relevamos en la dinámica cotidiana de la gestión judicial. Esta capacidad fue anudada en ocasiones a los procesos de reforma normativa pero no se circunscribe a ello. Esa reforma operó como una plataforma que, en muchos casos, permite la construcción y el despliegue de novedosos argumentos, constituyó mucho más que una ventana de oportunidad, aunque aún muchos agentes lo perciban de esa manera, habilitó la visibilidad del persistente contrapunto, que en el plano de los discursos se consolida en el tiempo, mientras que observamos en el plano de las intervenciones, otros vestigios.

Como advertimos en el segundo capítulo, identificamos un primer grupo de tensiones persistentes que denominamos como amesetamiento (Marcon, 2013a) dado que el fuero de menores resucita a la atención pública a partir de situaciones expuestas en los medios de comunicación, pero se evidencia una ausencia sostenida del interés por movilizar distintas dimensiones que afectan la gestión judicial, entre los que consideramos merecen destacarse: 1- las reformas legislativas pendientes; 2- la ausencia de incentivos por parte de los organismos judiciales y administrativos a la formación, actualización y especialización de los agentes; 3- Las dificultades para dinamizar el sistema de protección como conjunto, que exhibe una particularidad asociada con lo que Guemureman (2010) y Daroqui, (2005) denominan como contingencia²³⁵ vinculada con: a) una conflictividad manifiesta (por las complejidad de las situaciones sociales que procesa que incluyen una violencia que consideramos estructural) y latente (en términos de la posible emergencia de situaciones problemáticas en cada caso) b) La provisionalidad, en términos de precariedad y transitoriedad de las resoluciones, la ausencia de protocolos, acuerdos, estándares de

²³⁵ Una “infinita” variedad de circunstancias azarosas, imprevistas y sorprendentes

atención, diversidad de modos y respuestas ante situaciones similares en cada una de las instancias que componen este entramado, cierta “espontaneidad, improvisación”, según el agente quien te toque, tal como ya advertía Daroqui (2005). 4- Esta contingencia/provisionalidad se contrapone con un entramado que se caracteriza por la rigidez burocrática propia de las instituciones que lo componen, “las regularidades” (Guemureman, 2005) manifiestas en formas procedimentales que se anudan en este campo. Que asociamos con el habitus (Bourdieu, (1997) de prácticas persistentes -como la disposición tutelar-, a partir de las cuales se explicita la autoridad de quien/es determinan y organizan los procesos de control social hacia los jóvenes, a quienes los jueces ocasionalmente han tratado de manera directa sino a través de otros agentes. 5- El poder y la autoridad como instrumento para imponer decisiones que difícilmente encuentran oposición en las otras figuras previstas a ese fin, que naturalizan, acompañan y suscriben la organización piramidal, donde tanto algunos agentes, los jóvenes, como otras voces disonantes difícilmente encuentran respaldo. Entre el persistente Patronato y la Protección.

Un campo que nos permite aprehender la intervención profesional del Trabajo Social de manera compleja y contradictoria, anclada en una institución de control social que promueve una intervención vía medidas socioeducativas, en el marco de la perspectiva de la protección integral. La particularidad de este campo y de los actores está asociada con las formas en que se juega y ejerce el poder de la intervención en un marco de relaciones no igualitarias, en ciertas condiciones, en el marco de una autoridad jerárquica, donde se explicita una relación de poder que involucra una relación laboral. Nuestra pretensión ha sido buscar aspectos significativos que nos permitan visibilizar, comprender e interpretar el complejo despliegue de agentes, posiciones, prácticas y estrategias en el campo de la justicia penal juvenil. “no se trata solo de las formas reguladas y legitimadas del poder en su centro, (sino) de coger al poder en sus extremidades, ...allí donde se vuelve capilar, donde ... se extiende ..., adopta la forma de técnicas y proporciona instrumentos de intervención material, En otros términos, asir siempre al poder en los límites menos jurídicos de su ejercicio” (Foucault, 1992: 142)

En este sentido la tarea de estos agentes “(La intervención) no debe ser vista sólo en relación con los "problemas particulares" a los que intenta dar respuesta, sino ... en el campo de los discursos institucionales y sociales ... intervención es "algo más" que el

trabajo teórico metodológico específico que se pone en acto frente a las demandas que se le plantean; los saberes profesionales participan en el campo simbólico dirimiendo (o consolidando....) las construcciones discursivas y las representaciones sociales acerca de ...los sujetos excluidos, las múltiples determinaciones que les dan origen y las consecuencias sociales que pueden aparecer si no se les da respuesta, entre otras cosas.” (Cazzaniga 2000).

Otro nudo que incorporamos está referido a los fundamentos en que tradicionalmente se afirmaron las prácticas y decisiones judiciales, si se respaldan en la aplicación del derecho o en una conjugación con el “hacer el bien” (Daroqui, Guemureman, Spatari, 2005), orientado por la moral y el sentido común. La presencia de nuevos actores que se incluyeron en este entramado, especialmente los defensores, debería respaldar el reemplazo o el desplazamiento de esta cuestión. Sin embargo, consideramos que se trata de una mirada que persiste en este complejo mosaico, que se conjuga con la certeza de que la población que circula por el fuero penal juvenil se corresponde con aquellos estratos más vulnerables de nuestra sociedad “sobre los cuales se tratará, en el mejor de los casos, administrar el daño menor” (ídem, 171). A partir de esta lectura se erige y justifica una posición paternalista que reproduce y retroalimenta los fundamentos del derogado Patronato. La indagación que realizamos nos conduce a pensar que este debate resulta cuestionador de las pautas de organización de este campo, por lo que es parte de los desafíos en el horizonte institucional.

La persistencia de la figura de la disposición y tratamiento tutelar en la que se inscriben las intervenciones que se despliegan con los jóvenes, en el que se conjuga la tarea de jueces, defensores y los Delegados, especialmente en los TOM, constituye un nudo de atención constante en el fuero penal juvenil, donde las prácticas no se han transformado suficientemente. Consideramos que ello se asocia privilegiadamente con un principio de autoridad poco cuestionado -antes asociado con la figura del Patronato-, donde la estructura jerárquica, la concentración del poder en la figura del juez que gobierna/regula las distintas instancias que integran el campo, resulta persistente. Se trata de “realidades” aceptadas por los agentes quienes se ajustan a las regulaciones que estas instituciones han desarrollado tradicionalmente, un efecto de enmascaramiento (Foucault, 1992) que opera como factor que debilitaría la resistencia de los agentes. El “capital” continúa concentrado

en pocos jugadores que conciben el poder a partir de la ley, mientras que otros jugadores se desplazan por un espacio más acotado y expectante ante el reconocimiento que la autoridad puede otorgar – en el caso de los Delegados, respecto a su trabajo -. Se trata de expresiones que dan cuenta de la tensión, espacios donde es posible observar la distancia entre el statu quo, las normas y los derechos. En esta línea hemos señalado distintas expresiones a lo largo de la tesis, donde destacamos dificultades en el reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derecho, cuyas consecuencias se asoman a través de la superposición entre medidas socioeducativas con dimensiones del reproche y la sanción, el recurso del juicio abreviado, la forma en que se “aplica” el Art. 4to, entre otros. El registro de esta dinámica nos permite reexaminar si se dirimen oportunidades para estos jóvenes o se reditan las desigualdades que “atrapan” a esta población.

El hito de los 20 años de ocurridas las reformas, recuerda la vigencia de las pretensiones referidas a limitar discrecionalidad, la imposición de tutelas y las restricciones a la privación de la libertad que consideramos continúan en el horizonte de los desafíos pendientes, en el cual las medidas socioeducativas ocurren en el marco de una posible sanción que no se ha dictado. Donde reaparece una ambigua tensión, un desfase, entre las relaciones y protecciones que asegura –o no – una sociedad, ante la expectativa construida y su puesta en funcionamiento (Castel, 2008). El análisis desarrollado nos permite conjeturar que la mayor demanda de intervención del ámbito socio – jurídico²³⁶, asociada con ese diagnóstico de mayor conflictividad social, manifiesta como emergen en este campo, las dificultades en la lucha por el reconocimiento de derechos que conciernen a los procesos de inclusión.

La conformación del Cuerpo de Delegadxs Inspectores desde su origen estuvo dispuesta a poder acompañar las directrices institucionales sistemáticamente organizadas, supervisadas y dependientes de funcionarios judiciales. Dado que, como advertimos, el aspecto principal de la intervención de estos profesionales se corresponde al registro ideológico, fundamentos y orientaciones a partir de los cuales desarrolla en su intervención (Karsz, 2007), consideramos que esa organización históricamente desalienta el desarrollo de

²³⁶ Puebla (2005) señaló la incidencia del contexto post-dictatorial en el periodo de retorno a la democracia para contrastar como estas configuraciones afectan y retroalimentan las formas en que se gestiona el derecho penal en cada momento.

instancias colectivas, apenas de reunión en equipos, que puedan albergar algún tipo de cuestionamiento.

Resulta ineludible reintroducir en este punto el concepto de intervención profesional, el desarrollo de Rozas Pagaza (2001) nos permite pensar este dilema en tanto la propia intervención no constituye un habitus sino una reflexión constante fundada en un proceso de comprensión crítica e histórica de la cuestión social en cada contexto inmediato. Una puesta en acto, una construcción social que se funda en el reconocimiento de las desigualdades sociales existentes a partir de las cuales se orientan decisiones y prioridades que enfrentar, que implica un esfuerzo tendiente al fortalecimiento del sujeto como constructor de relaciones sociales.

La noción de estrategia entendida como capacidad de una ruptura, implica visibilizar en este escenario de tensiones persistentes, la pregnancia de la derogada normativa que se anuda con demandas a la intervención profesional que apelan a una respuesta en términos de “saberes, información coyuntural, dominio de las reglas” institucionales²³⁷, y un quehacer específico con “la población, que los sitúa en una situación de frontera institucional” (Montaño, 2000). Las limitaciones o la solvencia de los agentes frecuentemente limitan y subordinan su autonomía profesional, en cuyo caso cristalizan prácticas profesionales. Los Delegadxs, efectivamente, se insertan en una posición “subordinada”, pero situada junto a un tipo de autoridad, una posición con cierto poder delegado, aunque no cuenten con capacidad de resolución. El reconocimiento de ese poder y su capacidad para subsistir en una posición de subordinación o presentar una actitud estratégica, “de resistencia” permitiría la construcción de estrategias superadoras frente a sus múltiples interlocutores, una arena desafiante, en que los profesionales interpretan y construyen, individual y colectivamente, el campo problemático.

En las preguntas iniciales cuestionamos la gestión judicial cotidiana en este campo, los resultados de este trabajo solo nos permiten explicar con mayor claridad los fundamentos de estas controversias.

²³⁷ Se apela a un “conformismo lógico” y un “conformismo moral” (expresiones de Durkheim)” (Bourdieu, 1997: 116)

BIBLIOGRAFIA

- Abramovich, V. (2006). Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo. *Revista de la CEPAL*, (88), 35-50. Recuperado de <http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/revista/noticias/articuloCEPAL/2/24342/P24342.xml&xsl=/revista/tpl/p39f.xsl&base=/revista/tpl/top-bottom.xsl>
- Alayon, N. y Grassi, E. (1983). *El trabajo social hoy y el mito de la asistente social*. Buenos Aires: Humanitas.
- Alday M., Ramljak de Bratti N., Nicolini, G. (2001). *El Trabajo Social en el Servicio de Justicia. Aportes desde y para la intervención*. Buenos Aires: Espacio.
- Aquín, N. (comp.) (2003). *Ensayos sobre ciudadanía: Reflexiones desde el trabajo social*. Buenos Aires: Espacio.
- Aquín, N. (org.) (2008). *El Trabajo Social, Estado y Sociedad: El Trabajo Social y las prácticas societarias*. Tomo 1. Buenos Aires: Espacio.
- Auyero, J. y Berti, M. (2013). *La violencia en los márgenes: Una maestra y un sociólogo en el conurbano bonaerense*. Buenos Aires: Katz.
- Baratta A. (2007). Democracia y derechos del niño. *Justicia y Derechos del Niño*, (9), 17-26. Recuperado de: http://www.unicef.org/argentina/spanish/Justicia_y_derechos_9.pdf
- Beloff, M. (2001). Algunas confusiones en torno a las consecuencias jurídicas de la conducta transgresora de la ley penal en los nuevos sistemas de justicia latinoamericanos. *Justicia y Derechos del Niño*, (3), 9-36. Recuperado de <http://www.unicef.org/argentina/spanish/JusticiayDerechos08.pdf>
- Beloff, M. (2007). ¿Son posibles mejores prácticas en la justicia juvenil? *Derechos de niños, niñas y adolescentes. Conceptos debates y experiencias en justicia penal juvenil* (pp. 31-40). Buenos Aires: UNICEF y Secretaria de derechos humanos de la Nación.
- Boaventura de Souza, S. (2006). *De la mano de Alicia: Lo social y lo político en la posmodernidad*. Buenos Aires: Siglo del hombre Editores (Ediciones Uniandes).
- Bourdieu, P. (1990). *Sociología y cultura*. México: Grijalbo.
- Bourdieu, P. (1997). *Razones prácticas, sobre la teoría de la acción*. Barcelona: Anagrama.

- Bourdieu, P. (1998). *La distinción: Criterio y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus.
- Bourdieu, P. (2010). *El sentido práctico*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- Bourdieu, P., Chaboredon, J. y Passeron, J. (1975). *El oficio del sociólogo*. México: Siglo XXI.
- Bourdieu, P. y Teubner, G. (2000). *La fuerza del derecho*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores (Ediciones Uniandes).
- Bourdieu, P. y Wacquant, L. (1995). *Respuestas por una antropología reflexiva*. México: Grijalbo.
- Bourgois, P. (1995) *In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio*. New York: Cambridge University Press.
- Bustos R. (2015). *¿Jóvenes en conflicto con la ley o ley en conflicto con los jóvenes?* Buenos Aires Espacio Editorial.
- Caimari, L. (2004). *Apenas un delincuente: Crimen castigo y cultura en la Argentina, 1880-1955*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Carballeda, A. (2002) *La intervención en lo social. Exclusión e integración en los nuevos escenarios sociales*. Buenos Aires: Paidós.
- Carballeda, A. (2008) *Los cuerpos fragmentados. La intervención en lo social en los escenarios de la exclusión y el desencanto*. Buenos Aires: Paidós.
- Castel, R. (1999). *La metamorfosis de la Cuestión Social: Crónica de un asalariado*. Buenos Aires: Paidós.
- Castel, R. (2008). *La inseguridad social ¿Qué es estar protegido?* Buenos Aires: Manantial.
- Cazzaniga, S. (2000). Acerca del control, la autonomía y el reconocimiento de derechos. *Desde el Fondo*, (20), 32-35.
- Cazzaniga, S. (2001). El abordaje desde la singularidad. *Desde el Fondo*, (22), 15-21.
- Cazzaniga, S. (2006). Reflexiones sobre la Ideología, la Ética y la Política en Trabajo Social. *Sociedade em Debate*, 12(2), 209-229. Recuperado de <http://revistas.ucpel.tche.br/index.php/rsd/issue/view/38>
- Cazzaniga, S. (2015). Trabajo social: Entre diferencias y potencialidades. *Tendencias y Retos*, 20(1), 93-104. Recuperado de <http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/te/article/view/3461>

- Chaves, M. (2005). Juventud negada y negativizada: Representaciones y formaciones discursivas vigentes en la Argentina contemporánea. *Última Década*, 13(23), 9-32. <http://www.cidpa.cl/?p=276>
- Chaves, M. (2009). Investigaciones sobre juventudes en la Argentina: Estado del arte en Ciencias sociales 1983-2006. *Papeles de Trabajo*, 3(5), 1-111. Recuperado de http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/Documentos/05_15_Informedeinvestigacion_MarianaChaves.pdf
- Chaves, M. (2014). Haciendo trámites con los pibes y las familias: Barreras de acceso y micro políticas públicas. *Escenarios*, 14 (21), 15-23.
- Chaves, M. y Fidalgo Zeballos, E. (2013). *Políticas de infancia y juventud: Producir sujetos y construir Estado*. Buenos Aires: Espacio.
- Cohen, S. (1988). *Visiones de control Social*. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias.
- Corea, C. y Lewkowicz, I. (2005). *¿Se acabó La infancia? Ensayo sobre la destitución de la niñez*. Buenos Aires: Lumen Humanitas.
- Criado Boado, M. (1998). *Producir la juventud: Crítica de la sociología de la juventud*. Madrid: Istmo.
- Dammert, L (2009). Políticas Públicas de seguridad ciudadana: Innovaciones y desafíos. En Kessler G. (comp.) *Seguridad y ciudadanía*. Buenos Aires: Edhasa
- Daroqui, A. (2003). Las seguridades perdidas. *Argumentos*, 1(2). Recuperado de <http://revistasiiigg.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/issue/view/3>
- Daroqui, A. (2005). Hagamos de cuenta... Entre el azar y la contingencia. En Guemureman, S. (Comp.) (2005), *Erase una vez... En un tribunal de menores* (pp. 81-94). Observatorio de demandas y respuestas judiciales en los tribunales de la provincia de Buenos Aires. Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho, UBA.
- Daroqui, A., Guemureman, S. y Spatari (2005). Hacer justicia con la justicia ¿Otro modo de hacer el bien? En Guemureman, S. (Comp.) (2005), *Erase una vez... en un tribunal de menores* (pp. 165-184). Observatorio de demandas y respuestas judiciales en los tribunales de la provincia de Buenos Aires. Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho, UBA.
- Donzelot, J. (2008). *La policía de las Familias*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Douglas, M. (1996). *Como piensan las instituciones*. Madrid: Alianza.

- Duschatzky, S. (2013). *Notas sobre Inter-venciones: Un asunto de la intuición*. Recuperado de: https://docs.google.com/file/d/0B5xpMB_fji6VZ0JBdEdmT0ZHWIU/preview
- Duschatzky, S. y Corea, C. (2013). *Chicos en banda: Los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones*. Buenos Aires: Paidós.
- Efron, R. (2006). Arbitrariedades punitivas: Subjetividad de la esquina. En G. Frigerio y G. Diker (Coord.) (1ra. Ed. 1ra. reimp.), *Infancias y adolescencias: Teorías y experiencias en el borde cuando la educación discute la noción de destino* (pp. 53-58). Buenos Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico.
- Elías, N. (1990). *Compromiso y Distanciamiento: Ensayos de sociología de conocimiento*. Barcelona: Ediciones Península.
- Elías, N. (2006). *Sociología fundamental*. Barcelona: Gedisa.
- Elizalde, S. (2005). *La otra mitad. Retóricas de la 'peligrosidad' juvenil: Un análisis desde el género* (Tesis Doctoral). Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Argentina.
- Engels, F. (2007). *Los orígenes de la familia, de la propiedad privada y del Estado*. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg.
- Escolar, C. (Comp.) (2000). *Topografías e la Investigación: Métodos, espacios y prácticas profesionales*. Buenos Aires: Eudeba.
- Faleiros, V. (1986). *Trabajo Social e Instituciones*. Buenos Aires: Humanitas.
- Farrall, S. (2002). *Rethinking What Works with Offenders: Probation, Social Context and Desistance from Crime*. UK: Willan Publishing.
- Fielding, N. & Fielding, J. (1986). *Linking Data: The Articulation of Qualitative and Quantitative Methods in Social Research*. Beverly Hills, CA: Sage. (Qualitative Research Methods Series, Vol. 4).
- Foucault, M. (1968). *Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias humanas*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Foucault, M. (1979) *Microfísica del poder*. Madrid, Las Ediciones de La Piqueta.
- Foucault, M. (1999) *La arqueología del saber*. México. Siglo veintiuno editores.
- Foucault, M. (2004). La redéfinition du judiciaire. *Revista Vacarme*, (29), 4-57.
Recuperado de: <http://www.vacarme.org/article1371.html>
- Foucault, M. (2008). *La verdad y sus formas Jurídicas*. Buenos Aires: Gedisa.
- Foucault, M. (2011). *Los anormales*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

- Fraser, N. (2008). La justicia social en la era de la política de identidad: Redistribución, reconocimiento y participación. *Revista de Trabajo*, 4(6), 83-99.
- García Méndez, E. (2004). *Infancia: De los derechos y de la justicia*. Buenos Aires: Editores Del Puerto.
- Garfinkel, H. (2006). *Estudios en etnometodología*. Barcelona: Anthropos.
- Gayol, S. y Kessler, G. (comps.) (2002). *Violencias, delitos y justicias en la Argentina*. Buenos Aires: Manantial-UNGS.
- Genolet, A., Lera, C., Gelsi, M., Musso, S. y Schoenfeld, Z. (2005). *La Profesión del Trabajo Social ¿cosa de mujeres? Estudio sobre el campo profesional desde la perspectiva de los trabajadores sociales*. Buenos Aires: UNER, Facultad de Trabajo Social y Espacio Editorial.
- Glaser, B. y Strauss, A. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. (Trad. F. Forni). New York: Aldine Publishing Company.
- González Laurino, C. (2011). El peritaje experto en el área de la infracción adolescente. *Escenarios*, 11(16), 51-58.
- González Laurino, C. (2013). *Los discursos expertos sobre la responsabilidad en la infracción adolescente*. Montevideo, Uruguay: Departamento de Publicaciones, Unidad de Comunicación de la Universidad de la Republica.
- González Laurino, C., Leopold Costáble, S., López Gallego, L. y Martinis, P. (coord.) (2013). *Los sentidos del castigo: El debate uruguayo sobre la responsabilidad en la infracción adolescente*. Montevideo, Uruguay: Ediciones Trilce.
- Gramsci, A (2003). *Antología II*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Grassi, E. (1989). *La mujer y la profesión del asistente social: El control de la vida cotidiana*. Buenos Aires: Humanitas.
- Graziano, F. y Jorolinsly, K. (2010). Los juicios orales a personas menores de edad. *Intersecciones en Antropología*, 11(2), 173-184. Recuperado de <http://observatoriojovenes.com.ar/nueva/wp-content/uploads/Graziano-Jorolinsky-Intersecciones-2010-13-.pdf>
- Grimson, A. (2011). *Los límites de la cultura*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Guber, R. (2005). *El salvaje metropolitano*. Buenos Aires: Paidós.
- Guemureman, S. (comp.) (2005). *Érase una vez... En un tribunal de menores: Observatorio de demandas y respuestas judiciales en los tribunales de la provincia de Buenos Aires*. Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho, UBA.

- Guemureman, S. (2011). *La cartografía moral de las prácticas judiciales en los Tribunales de Menores: Los Tribunales Orales de la Ciudad de Buenos Aires*. Buenos Aires: Editores del Puerto.
- Guemureman, S. y Daroqui, A. (2001). *La Niñez Ajusticiada*. Buenos Aires: Editores del Puerto.
- Gutiérrez, A. (1997). *Pierre Bourdieu: Las prácticas sociales*. Posadas: Editorial Universitaria. UNaM.
- Gutiérrez, A. (2004). Poder, habitus y representaciones: Recorrido por el concepto de violencia simbólica en Pierre Bourdieu. *Revista Complutense de Educación*, 15(1), 289-300.
- Healy, K. (2001). *Propuestas contemporáneas en Trabajo Social*. Madrid: Morata.
- Heler, M. (2001). La toma de decisiones responsables en la práctica del Trabajo Social: La reflexión ética como recurso. *Conciencia Social*, 1(1), 29-36.
- Heller, A. (1970). *Historia y vida cotidiana*. Buenos Aires: Grijalbo.
- Honneth, A. (2007). *Reificación: Un estudio en la teoría del reconocimiento*. (Trad. G. Calderón) Buenos Aires: Katz. (Colección Conocimiento No. 3012)
- Honneth, A. (2009). *La Teoría del agravio moral*. Madrid: Trotta.
- Iamamoto, V. M. (2001). *Servicio Social y División del Trabajo*. Sao Pablo: Cortez.
- Iamamoto, V. M. (2003). *El Servicio Social en la Contemporaneidad: Trabajo y formación profesional*. San Pablo: Cortez. (Colección Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social No. 9).
- Ionna de Escobio S. y Santamaría S., A. (2011). La aplicación de la "Probation" en menores. *La Ley. Revista Jurídica Argentina*, 2011(F), 1053-1054.
- Jameson, F. y Zizek, S. (1998). *Estudios culturales: Reflexiones sobre el multiculturalismo*. Buenos Aires: Paidós.
- Jick, T. (1979). Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action. *Administrative Science Quarterly*, 24(4), 602-611.
- Jodelet, D. (1984) LA representación social: fenómenos, concepto y teoría. En Moscovici, S (1984) *Psicología Social II. Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales*. Buenos Aires, Paidós.
- Jorolinsky K. (2008). "Retornar a la buena senda". *Administración de justicia penal para adolescentes en los Tribunales Orales de Menores de la Ciudad de Buenos Aires (2000-2008)*. Tesis de Maestría. Manuscrito no publicado.

- Karsz, S. (2007). *Problematizar el Trabajo Social: Definición, figuras, clínica*. Barcelona: Gedisa.
- Kessler, G. (2004). *Sociología del delito Amateur*. Buenos Aires: Paidós. (Colección Tramas Sociales No. 25).
- Llovet, V. (2013). La producción de la categoría “niño-sujeto-de-derechos” y el discurso PSI en las políticas sociales en Argentina: Una reflexión sobre el proceso de transición institucional. En V. Llovet (comp.), *Pensar la Infancia desde América Latina: Un estado de la cuestión* (pp. 209-235). Buenos Aires: CLACSO. (Red de posgrados en Ciencias Sociales).
- Marcon, O. (2013a). Justicia Juvenil e Interdisciplina: Tensiones y Perspectivas. *Revista Debate Público*, 3(5), 113-126. Recuperado de http://trabajosocial.sociales.uba.ar/web_revista_5/PDF/13_Marcon.pdf
- Marcon, O. (2013b). *La responsabilización penal juvenil como nuevo relato cultural ¿Del “amor por los niños” al “odio hacia los menores”?* Buenos Aires: Espacio.
- Margulis, M. y Urresti, M. (1996). *La juventud es más que una palabra*. Buenos Aires: Biblos.
- Martinelli, M. L. (1987). *Servicio Social: Identidad y alineación*. Sao Pablo: Cortez. (Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social No. 3).
- Martínez, M. J. (2004). Expedientes. *Sistemas Judiciales*, 4(7), 4-7. Recuperado de <http://sistemasjudiciales.org/content/jud/archivos/revpdf/33.pdf>
- Martínez, M. J. (2005). Viaje a los territorios de las burocracias judiciales: Cosmovisiones jerárquicas y apropiación de los espacios tribunalicios. En S. Tiscornia y M. V. Pita (Eds.), *Derechos humanos, tribunales y Policías en Argentina y Brasil: Estudios de antropología jurídica* (pp. 167-183). Buenos Aires: Antropofagia.
- Martínez Franzoni, J. (2005). Regímenes de bienestar en América Latina: Consideraciones generales e itinerarios regionales. *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales*, 2(2), 41-77. Recuperado de http://www.flacso.or.cr/images/flippingbook/pdfs/rccs/rccs_2005_02.pdf
- Matus, T. (diciembre, 2003). La intervención social como gramática: Hacia una semántica propositiva del Trabajo Social frente a los desafíos de la Globalización. En Escuela Nacional de Trabajo Social. UNAM (Org.), *Dilemas y Perspectivas de la cuestión*

- social ante los embates de la pobreza y la exclusión social*. Conferencia presentada al Foro Internacional, México.
- Matus, T. (2009). *Modernidad y Trabajo Social: Un continente bajo sospecha*. Manuscrito no publicado.
- Maxwell, J. (1996). *Qualitative research design: An interactive approach*. Los Angeles, C.A.: Sage. (Applied Social Research Methods Vol. 41).
- Mayer, L. (2009). *Hijos de la democracia ¿Cómo piensan y viven los jóvenes?* Buenos Aires: Paidós. (Colección Tramas Sociales No. 56).
- Merklen, D. (2005). *Pobres ciudadanos: Las clases populares en la era democrática. (Argentina, 1983-2003)*. Buenos Aires: Gorla.
- Miguez, D. (2008). *Delito y Cultura: Los códigos de la ilegalidad en la juventud marginal urbana*. Buenos Aires: Biblos. (Colección CULTURALIA).
- Miguez, D. (2010). *Los pibes chorros: Estigma y marginación*. Buenos Aires: Capital intelectual. (Claves para todos No. 15).
- Minnicelli, M. (2010). *Infancias en estado de excepción: Derechos del niño y psicoanálisis*. Buenos Aires: NOVEDUC.
- Molina Bravo, J. (2010). Vidas juveniles y subjetividades nulas: elementos para una analítica de los dispositivos de control estatal. En: V. Lemm (Ed.) *Michel Foucault: Neoliberalismo y biopolítica* (pp.123-150). Santiago de Chile: Universidad Diego Portales. (Colección Pensamiento Contemporáneo).
- Montaño, C. (2000). *La naturaleza del Servicio Social: Un ensayo sobre su génesis, su especificidad y su reproducción*. Brasil: Cortez. (Colección Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social No. 4. Serie Ensayos).
- Montesquieu (2007). *Del espíritu de las leyes*. Buenos Aires: Losada.
- Nicolini, G. (2011). *Judicialización de la vida familiar*. Buenos Aires: Espacio.
- Ost, F. (2011). Júpiter, Hércules, Hermes: Tres modelos de Juez. *Revista pensamiento penal*, (120), 169-194. Recuperado de <http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2011/03/doctrina28052.pdf>
- Oyhandy, Á. (2006). Otra mirada al Patronato de Menores: un examen desde la sociología a la construcción de diagnósticos de riesgo social. *Revista Cuestiones de Sociología* (3), 275-297. Recuperado de <http://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/issue/view/225>

- Pasin, J. (2015). Una reflexión sobre los riesgos de los usos de la noción de riesgo en las políticas públicas orientadas al tratamiento de la “juventud en conflicto con la ley”. En Guemureman S (2015) *Políticas Penales y de seguridad dirigidas hacia adolescentes y jóvenes*. Buenos Aires: Rubinzal - Culzoni
- Pasin, J. y López, A. (2014). Prácticas policiales sobre jóvenes bonaerenses en los márgenes urbanos: Delimitando clientelas. *Revista Plaza Pública*, 7(11), 156-174. Recuperado de <https://revistaplazapublica.files.wordpress.com/2015/03/11-10.pdf>
- Ponce de León, A. y Krmpotic, C. (2012). *Trabajo Social Forense*. Buenos Aires: Espacio.
- Puebla, M. (2005). *Democracia y Justicia Penal juvenil: Doctrina e Intervención*. San Juan, Argentina: Banco Mundial (PROAME-Dirección de Protección al Menor de San Juan) y EFU.
- Reguillo, R. (2003). Ciudadanías juveniles en América Latina. *Revista Última Década* (19), 1-20.
- Rousseaux, F. (2014 diciembre 11). El lazo desaparecido. *Diario Página 12*. Recuperado de: <http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-261677-2014-12-11.html>
- Rozas Pagaza, M. (1998). *Una perspectiva teórico - metodológica en la intervención profesional*. Buenos Aires: Espacio.
- Rozas Pagaza, M. (2000). Algunas reflexiones sobre “la intervención profesional” desde una perspectiva ética. (pp. 13-31). En *Trabajo Social y Compromiso Ético. Asistencia o Resistencia* (2000) Buenos Aires: Espacio
- Rozas Pagaza, M. (2001). *La intervención profesional en relación con la cuestión social. El caso del Trabajo Social*. Buenos Aires: Espacio.
- Rozas Pagaza, M. (2004). Tendencias teórico-epistemológicas y metodológicas en la formación profesional. En M. L. Molina (Org.), *La cuestión social y la formación profesional en Trabajo Social en el contexto de las nuevas relaciones de poder y la diversidad latinoamericana* (pp. 95-117). Buenos Aires: Espacio.
- Rozas Pagaza, M., Diloretto, M., Ríos, C., Lugano, C., Velurtas, M., Oyhandy, M., Lozano, S. (2008). El desarrollo profesional del Trabajo Social: Notas para su comprensión en relación con la formación y la inserción laboral. En Facultad de Trabajo Social, UNLP (Org.), *Escenarios de la vida social, el Trabajo Social y las Ciencias Sociales en el Siglo XXI*. Trabajo presentado en el II Foro Latinoamericano. [CD-ROM]. La Plata, Argentina.
- Rozas Pagaza, M., Diloretto, M., Ríos, C., Lugano, C., Velurtas, M., Oyhandy M. y Danel,

- P. (2010). *La incidencia de la formación en la inserción laboral y desarrollo profesional de los graduados de la Escuela Superior de Trabajo Social en la ciudad de La Plata: Período 1990-2005* (Informe final del Proyecto de Investigación: Programas Incentivos). Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
- Rozas Pagaza, M., Gabrinetti, M., Calvo M. y Campagna, V. (En prensa). Condiciones actuales de la intervención en Trabajo Social: Representaciones, autonomía y subalternidad. *Escenarios*.
- Saltalamacchia, H. (1992). *Historia de vida*. Puerto Rico: Ediciones CIJUP.
- Silva Balerio, D., Rosich M (2002) La Educación Social y el control de los adolescentes en conflicto con la ley penal (Parte I). España. *Revista Monitor Educador*, (94) 51-63
- Schmitt, C. (1991). *El concepto de lo político*. (Trad. R. Agapito). Madrid: Alianza (Original en Alemán, 1932).
- Sennett, R. (2003). *El respeto: Sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad*. Barcelona: Anagrama.
- Skinner, Q. (1985). *Los fundamentos del pensamiento político moderno*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Tenti Fanfani, E. (1989). *Estado y pobreza: Estrategias típicas de intervención*. Tomo 1. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. (Colección Biblioteca Política Argentina No. 255).
- Terragni, M. (2009). La justicia federal y el principio de justicia especializada: Tensiones en la jurisprudencia. *Revista de Derecho Penal y Procesal Penal*, (5), 833- 841.
- Terragni, M. (2010). *Justicia Penal de Menores: Manual de Práctica Profesional*. Buenos Aires: La Ley.
- Terragni, M. (2010) Justicia de Menores: La facultad de disposición tutelar y la garantía de imparcialidad. El inconstitucional expediente tutelar. Solicitud de cese. Recusación. Imposibilidad probatoria. Recuperado de: <http://www.terragnijurista.com.ar/doctrina/articulo.htm>
- Torres Victoria L. y Castro Gómez G. (2009). Acerca de la categoría sujeto En Rodríguez Pizarro, A. (Comp.) (2009), *Sujetos sociales, acciones colectivas y trabajo social* (pp. 17-24). Colombia. Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Fac. de Humanidades. Universidad del Valle.

- Vegh Weiss V. (2012). La suspensión del juicio a prueba en niños y adolescentes. *Revista de Derecho Penal y Criminología*, II (8), 227-240.
- Wacquant, L. (2007). *Los condenados de la ciudad: Gueto, periferias y Estado*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Weber, M. (2007). *El político y el científico: La ciencia y la política como vocación*. Buenos Aires: Retórica Ediciones, Altamira.
- Willis P. (1977). *Learning to Labor*. Westmead: Saxon house.
- Zaffaroni, E. (2011). En Prólogo a la obra: Marcón, O. *Jóvenes en situación de conflicto penal: ¿Cómo relatan sus historias?* Buenos Aires, Teseo.
- Zaffaroni, Eugenio (2012). *La cuestión criminal*. Buenos Aires. Planeta
- Zimmermann, E. (1995). *Los liberales reformistas: La cuestión social en la Argentina 1890-1916*. Buenos Aires: Sudamericana, Universidad de San Andrés.
- UNICEF, *Glosario para el correcto tratamiento de la información sobre infancia y adolescencia. Herramientas para un periodismo con enfoque de derechos (III)*. Recuperado de: <http://www.unicef.org/argentina/spanish/3.Glosario.pdf>

LEYES Y NORMATIVA CONSULTADA

- Ley no. 114 (1998). Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Boletín oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Ley no. 10903 (1919). Patronato de Menores. Boletín Oficial de la República Argentina.
- Ley no. 24050 (1991). Ley de Organización y competencia penal del poder judicial de la Nación. Boletín Oficial de la República Argentina.
- Ley no. 22278 (1980). Régimen penal de la minoridad. Boletín oficial de la República Argentina.
- Ley no. 23849 (1990). Convención de los Derechos del Niño. Boletín Oficial de la República Argentina.
- Ley no. 26061 (2005). Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Boletín Oficial de la República Argentina.
- Ley no. 24.121 (1992). Implementación y Organización de la Justicia Penal. Boletín Oficial de la República Argentina.

Proyecto de Ley 4348-D-2008 (Trámite parlamentario 103 del 20/08/08). Sistema legal aplicable a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Recuperado de <http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=4348-D-2008>

Zaffaroni, E. (Firmante) (2009). *Proyecto de Ley penal juvenil*.

Resolución no. 45/112 (1990). Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad). Asamblea General de las Naciones Unidas. Recuperado de <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/45/112>

Resolución no. 40/33 (1985). Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores ("Reglas de Beijing"). Asamblea General de las Naciones Unidas. Recuperado de <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/40/33>

Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (2007). Poder Judicial de la Nación. Recuperado de http://pjn.gov.ar/02_Central/Index100.Asp?Nodo=705&Rubro=162&TipInf=104

Resolución no. 44/25 (1989). Convención sobre los derechos del niño (CIDN). Asamblea General de las Naciones Unidas. Recuperado de http://www.unicef.org/ecuador/convencion_2.pdf

FUENTES DE DATOS OFICIALES

- BGD. Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes BGD-NNyA, Corte Suprema de Justicia
- INDEC
- Oficina de estadísticas Poder Judicial de la Nación

ANEXOS

a- Guía de pautas para entrevistas a trabajadores sociales, Delegados

1- ¿Cómo fue su inserción en el campo? ¿Cuándo fue?

Pauta de profundización (PP): identificar si espontáneamente se refiere a “campo”, “área”, “sector”, otros.

2- Si suele utilizar otra denominación: ¿por qué aplica la noción de (nombrarla)?

3- Usted/es ¿suele/n utilizar la denominación de “campo”? ¿Por qué? ¿Con qué aspectos asocia/n la noción de “campo”?

4-En el estudio que realizamos, nos referimos a “campo” en tanto en él se despliega una dinámica de poderes, de intereses en juego y posiciones que pueden limitar o facilitar la intervención del trabajo social, ¿lo ha pensado así o lo han pensado de este modo en su equipo de trabajo?

5-Respecto a la intervención profesional, si le preguntan qué aspectos pueden favorecer a dicha intervención, ¿qué es lo primero que piensa?

PP: ¿por qué?

6-Si en cambio se le pregunta por los aspectos que limitan a la intervención, ¿qué piensa en primer lugar?

PP: ¿por qué?

7-Si tuviera que caracterizar las condiciones de intervención que hoy se presentan en el campo ¿cómo lo haría?

PP: identificar respuesta espontánea y luego profundizar sobre la dinámica, las relaciones de poder que se presentan, identificando cómo es el entramado en el que se desarrolla la intervención profesional

8-Siempre ha trabajado en este campo?, ¿Ha ido pasando por diferentes espacios?

9- En esta institución, ¿qué función/es desarrolla?

10- ¿Cuándo ha ingresado? ¿Siempre ocupó este mismo cargo? ¿Cuáles?

11-¿Cómo fue delineando su formación en el campo?

PP: a través de la experiencia profesional, a través de capacitaciones específicas, etc.

12-En relación a las condiciones en las que desarrolla su trabajo, ¿cuáles son tiempos y horarios de trabajo?

16- Le habíamos preguntado por su función/es en el marco de esta organización. ¿Cómo le parece que se vinculan estas funciones con las de la institución?

PP: -Identificar coincidencias, o tensiones entre los objetivos institucionales y los profesionales del entrevistado/a. - Capturar el engranaje de decisiones en el que se inscribe la intervención profesional.

17- ¿Cuáles son las tareas prescriptas para el cargo que desempeña actualmente?

18- ¿Cómo / quién / es definen las actividades a realizar?

19- Las actividades que habitualmente se llevan a cabo en cualquier trabajo, tienden a distanciarse de las prescriptas. ¿Cuáles son las actividades habituales y que efectivamente se llevan adelante?

PP: identificar las distancias

20- ¿Cuáles serían para usted las condiciones de intervención ideales en el campo?

21-¿Qué diferencias encuentra entre ese ideal y las que hoy se presentan en su campo de inserción?

22-¿Qué opinión tiene en relación a la intervención profesional que actualmente puede desarrollar?

PP: registrar la distancia entre el trabajo ideal y el que se despliega (por ejemplo: en términos de satisfacción- insatisfacción por la distancia con el ideal).

23- Respecto al personal jerárquico, ¿cómo es la relación con el personal jerárquico?

- indagar si la relación favorece o limita la intervención del profesional y cuáles son los motivos.

- indagar sobre intereses en juego de los diferentes actores, qué relaciones de poder se presentan, cuál es la dinámica de esta relación.

25- ¿Cómo es la relación con pares? Los equipos

PP: - indagar si la relación favorece o limita la intervención del profesional y cuáles son los motivos. - indagar sobre intereses en juego de los diferentes actores, qué relaciones de poder se presentan, la dinámica de esta relación.

26- En la práctica profesional, ¿Cómo se realiza la articulación con profesionales de otras disciplinas? ¿Cómo resultan estas experiencias?, ¿Qué puede rescatar?

- si la relación con otros profesionales se da en un marco de simetría o no, por qué, cómo estas experiencias facilitan o limitan la intervención profesional en el campo.

27- ¿Quiénes son los sujetos o los actores a quienes se orienta la intervención profesional?

PP: identificación de los diferentes actores.

28- ¿Cómo ve la situación de dichos sujetos o actores?

PP: - ¿se mantiene estable, se ha modificado en los últimos años? ¿En qué varió? ¿A qué lo atribuye? ¿Desde cuándo? - profundizar en las implicancias que puede generar en las condiciones de intervención.

29- ¿Cuáles son los dispositivos y recursos con los que cuentan para la intervención profesional?

PP: sondear en los recursos tanto materiales como simbólicos; el acceso a ellos.

30- Pensando en lo que venimos hablando desde el inicio de la entrevista, puede considerar que dispone de autonomía en el desarrollo de su intervención profesional. ¿Por qué?

31- ¿Considera que se dan las posibilidades para incidir en la producción de condiciones para trabajar sobre las manifestaciones de lo social en el campo? ¿Por qué?

32- Representaciones sobre la intervención profesional:

a. ¿Qué representaciones le parece que tienen los sujetos o actores a quienes se orienta la intervención sobre el TS?

b. ¿qué representaciones le parece que tiene la intervención profesional del TS para otros agentes con los que interactúa?

c. ¿qué representaciones considera que los TS le asignan a su propia intervención?

34-¿Quisiera agregar algo más?

Muchas gracias por su participación.

b. Guía de pautas para entrevistas a jueces y funcionarios

- 1- ¿Cómo fue su inserción en el la justicia? ¿Cuándo fue?
- 2- Siempre ha trabajado en este campo?
- 3- ¿Siempre se ocupó de aspectos vinculados a menores de edad? ¿desde qué espacios?
- 4- ¿Cómo fue delineando su formación en el campo?
- 5- Que denominación suele utilizar para referirse a ese espacio de trabajo? ¿Por qué aplica esa noción/denominación?
- 6- ¿Qué función/es desarrollan los Delegados?
- 7- ¿Cómo le parece que organiza el vínculo entre las funciones de los Delegados y las de la institución?
- 8- ¿Cuáles son las tareas prescriptas- preestablecidas para el cargo de Delegado?
- 9- ¿Cómo / quién / es definen las actividades a realizar?
- 10- Respecto a la intervención profesional de los Delegados Inspectores, si le preguntan qué aspectos pueden favorecer a dicha intervención, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Por qué?
- 11- Si en cambio se le pregunta por los aspectos que limitan a la intervención de dichos agentes, ¿qué piensa en primer lugar? ¿Por qué?
- 12- Si tuviera que caracterizar las condiciones de intervención que hoy se presentan en el campo de trabajo de los Delegados Inspectores, cómo lo haría?
- 13- Las actividades que habitualmente se llevan a cabo en cualquier trabajo, tienden a distanciarse de las prescriptas. ¿Cuáles considera son las actividades habituales y cuáles efectivamente se llevan adelante?
- 14- ¿Cuáles serían, para usted, las condiciones de intervención ideales en el campo?
- 15-¿Qué diferencias, a su criterio, se observan entre ese ideal y las que hoy se presentan?
- 16-¿Cómo valora la intervención profesional que actualmente desarrollan estos agentes?
- 17- ¿cómo se establece la relación entre los Delegados y las instancias jerárquicas, los jueces y la propia Cámara?
- 18- Esa relación favorece o limita la intervención del profesional, cuáles seria los motivos a su criterio.
- 19 - ¿Considera que la reciente experiencia de integración de equipos de Delegados favorece la intervención del profesional? ¿Qué aspectos podría destacar?
- 20- ¿Cómo identifica/caracteriza a los sujetos o los actores a quienes se orienta la intervención profesional de los Delegados?

21- ¿Cómo ve la situación de dichos sujetos o actores? - *¿se mantiene estable, se ha modificado en los últimos años? ¿En qué varió? ¿A qué lo atribuye?*

22- ¿Cuáles son los dispositivos y recursos institucionales en los que se apoyan –más frecuentemente- los Delegados para su intervención profesional?

23- Considera que los Delegados disponen de autonomía en el desarrollo de su intervención profesional. ¿Por qué?

24 a. ¿Qué representaciones considera que tienen los sujetos a quienes se orienta la intervención sobre los Delegados?

b. ¿qué representaciones considera que tienen, de la intervención profesional de los Delegados, los otros agentes institucionales con los que ellos interactúan?

25-¿Quisiera agregar algo más?

Muchas gracias por su participación.

c- Cuestionario auto-suministrado para Delegados Inspectores de Menores de la Justicia Nacional Penal

1. Identificación

1. Edad
2. Sexo
3. Profesión

OPTATIVO

NUCLEO DE CONVIVENCIA: SEÑALE CON UNA CRUZ:

Solo/ en pareja

Ocupación

HIJOS (edades)

Ocupación

PADRES

OTROS FAMILIARES (ESPECIFIQUE)

4. La vivienda que ocupa es: Propia Alquilada Familiar OTRO
(ESPECIFIQUE)
5. Nivel de educación alcanzada: Secundario, terciario, universitario de grado,
universitario de posgrado
6. Fecha de obtención de título de grado
7. Facultad y Universidad que expidió el diploma
8. Otra formación de posgrado?
9. Ha realizado cursos universitarios en la especialidad?
10. Otra capacitación O CURSOS DE ACTUALIZACION? Especificar

2. Poder Judicial: ingreso y condiciones institucionales

11. Año de Ingreso al Poder Judicial
12. Describir brevemente la modalidad de ingreso (contacto directo, familiar,
entrevista, etc.)

13. Antigüedad en el cuerpo de delegados

Cámara , Juzgado/s

ellos?_____

2. Medio ambiente y medios de trabajo

24. Describa el espacio físico de trabajo. Se trata de una habitación/despacho de uso exclusivo para los profesionales:

25. Es compartido por otros agentes? Con Quienes?

26. Cuentan con mobiliario acorde a las necesidades que requiere el trabajo solicitado?

27. Cuentan con equipamiento para la elaboración e impresión de informes

28. Como es el medio ambiente, marque con una cruz:

Hay ruidos externos, calefacción, refrigeración, ventilación, luz
adecuada

29. Explique u agregue detalles que le interese visibilizar, agregar, señalar

30. Se encuentra en condiciones de mantenimiento y limpieza? Si No

31. Ha encontrado posibilidad de participar en la mejora de las Condiciones y Medio
Ambiente de trabajo Si No Como?

32. . Describa como repercute su trabajo en la organización de su vida doméstica y vida familiar.

33. Ha padecido enfermedades que fueron asociadas con su trabajo? SI.... NO

34. En caso afirmativo, Que enfermedad? (EN CASO NEGATIVO, pase A PREG. 37)

35. Cuál/Cuáles tratamiento/s recibió?

36. Ha padecido accidentes de trabajo? SI.....No

37. En caso afirmativo: ¿cuál/es?..... (en caso de que
haya respondido negativamente, pase al siguiente bloque)

38. ¿qué derivación/es tuvo/vieron?

3. Condiciones de trabajo. Organización y contenido del trabajo

39. Cual/ es el propósito de su intervención profesional en este campo.

40. Como aprendió a hacer el trabajo de Delegado Inspector

41. Que tareas realiza en su trabajo como delegada inspectora:

- Entrevistas con niños y jóvenes en sede, en domicilio, en institutos, hogares otros
 - Entrevistas con miembros de los grupos familiares/convivientes en sede en domicilio en otros lugares, cuales
 - Entrevistas con profesionales, operadores u otros agentes implicados en l atención de los sujetos
 - Elaboración de informes
 - Otros (desagregar):
-
-

42. Señala que otros aspectos o actividades configuran la carga de trabajo:

43. Que aporte considera es específico de su intervención profesional

44. Cuántas días dedica a este trabajo por semana, son días fijos/preestablecidos, cómo y por quién? cómo se organiza? Señalar si trabaja en fines de semana y/o feriados

45. Aproximadamente cuántas horas dedica por semana a este trabajo? Señale -de mayor a menor- que actividades concentran su mayor atención/dedicación

46. Considera que el tiempo que insume este trabajo es acorde al salario que percibe
Si NO

47. Existe una tarea prescripta, cuál es?

48. Existe una modalidad instituida para desarrollarlas?

49. Señale si alguien/quien le da indicaciones respecto a las tareas a realizar.

50. Alguien supervisa, controla el trabajo que Ud. realiza Si o NO

51. Le parece que esa supervisión es adecuada Si o NO

52. Existen espacios colectivos, de cooperación para el desarrollo de su trabajo

53. Cree que sería necesaria alguna instancia de reflexión que permita solventar la soledad del trabajo

54. Ha tenido problemas en el desempeño de su trabajo: con pares, empleados o funcionarios de los Juzgados, niños/jóvenes y sus familias, otros agentes involucrados (cuales) autoridades de la Cámara. Otros aclarar

55. Como se desarrolla la evaluación de su desempeño en los Juzgados

56. Cómo calificaría la tarea que Ud. Desarrolla

57. Cuáles son los aspectos de su trabajo que más le gustan

58. Cuáles son los aspectos de su trabajo que menos le gustan

59. Ud. Siente que su trabajo es reconocido por:

- funcionarios del Juzgado/TOM,
- colegas pares de trabajo
- los jóvenes con los que trabaja,
- Las familias de los jóvenes con los que trabaja
- Por su pareja/su familia
- Por Ud. Misma.

d- Relevamiento de los espacios de trabajo

Juzgado N° 1

Se trata de una oficina amplia a la que se accede de manera directa. Considerada de “uso exclusivo de los profesionales”. Este espacio fue subdividido por tabiques que posibilitan que cada uno de los tres profesionales que cumplen su trabajo cada día cuente con un escritorio, sillas, PC e impresora donde desarrollar entrevistas, elaborar e imprimir sus informes.

Allí también está localizado el archivo, en el fondo detrás de otro tabique, consultado por personal de las distintas secretarías con cierta frecuencia. Por ello, algunos Delegadxs señalan que es un espacio de uso exclusivo y otros contradicen esta afirmación. El primer puesto de trabajo se ubica frente a la puerta de entrada y es simultáneamente la recepción de la oficina, el acceso a los otros dos boxes se realiza previo paso por este primero. Se realizan entrevistas simultáneas con cierta dificultad y limitada privacidad.

Se trata de la única sala del Juzgado que carece de ventana a la calle. Cuenta con calefacción, aire acondicionado y ventiladores.

Juzgado N° 2

No tiene acceso directo, se debe atravesar una sala que ocupan otras empleadas del Juzgado. En este caso se trata de dos boxes pequeños separadas por un tabique parcial. Cuentan con dos escritorios y sillas. El equipamiento es escaso.

En este espacio también se localizan los insumos del Juzgado. No es considerado por los profesionales como de uso exclusivo. Realizar hasta dos entrevistas simultáneas, no es posible considerar estándares de privacidad.

Juzgado N° 3

Se ingresa a través de otra oficina. Se trata de un espacio específico para los Delegados, reducido. Cuenta con dos escritorios y seis sillas. Dos computadoras y un perchero de pie. No se pueden realizar entrevistas simultáneas por las dimensiones. No hay privacidad. Además, en la Sec. 8 disponen de “un lugar” compartido con el resto de los empleados. Un escritorio y tres sillas, una Pc con impresora. No hay privacidad. En la Sec. 7 no cuentan con espacio, si es urgente utilizan algún escritorio y una Pc.

Juzgado N° 4

No se accede de manera directa, sino luego de transitar pasillos internos en el mismo Juzgado. Se trata de un espacio muy reducido con un escritorio y una pequeña mesita y sillas, cuenta con una PC. Tiene una ventilación pequeña.

Es de uso exclusivo

No es factible realizar entrevistas simultáneas, si fuera así recurren a espacios transitoriamente libres en otras oficinas del Juzgado.

Juzgado N° 5

Se accede de manera directa. Se trata de un espacio que se encuentra subdividido en dos, ambos cuentan con dos escritorios y sillas. Cuentan con una PC. Tiene ventilación a la calle.

Es de uso exclusivo para las profesionales. Es posible realizar entrevistas simultáneas, la privacidad es reducida ante la presencia de varios profesionales.

Juzgado N° 6

No se accede de manera directa, sino luego de transitar pasillos internos en el mismo Juzgado. Se trata de un espacio que no se encuentra subdividido, cuenta con una mesa grande y sillas donde suelen realizar las entrevistas denominadas “en sede” No cuenta con equipamiento informático.

Es de uso exclusivo pero es utilizado por frecuencia por otros agentes del Juzgado. Por no contar con divisores las entrevistas se realizan en presencia de otros profesionales por lo que la privacidad en las entrevistas se ve muy afectada.

Juzgado N° 7

No se accede de manera directa, sino luego de transitar pasillos internos en el mismo Juzgado, cuenta con escritorios y sillas. Está ubicado en un lugar que “se usa de paso” dentro del Juzgado, un pasillo que conecta oficinas.

Se trata de un lugar destinado al uso para dos Delegads. No es posible considerar la privacidad en las entrevistas ya que la puerta es usada para el paso de otros agentes.

En ningún caso, en el espacio físico, fue prevista la realización de entrevistas por parte de equipos profesionales, por lo que se observa que la disposición general es de tres sillas. Un profesional y el joven con un adulto referente.

- e- **Acuerdo General** celebrado el 23/10/2010 por los jueces que integraban la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

"Año del Bicentenario"
///nos Aires, 23 de abril de 2010.-

Reunido el tribunal en acuerdo general celebrado en la fecha:
Y Vistos y Considerando:

El proyecto elevado a la presidencia de la Cámara por las juezas que integran la Comisión de Menores, doctoras María Laura Garrigós de Rébora y Mirta López González, ha sido puesto a consideración del pleno, cuyos miembros avalaron los fundamentos de la presentación aludida compartiendo los argumentos expuestos por las mencionadas magistradas en el sentido de que, como consecuencia de la reciente reforma legislativa que modifica la edad en que las personas alcanzan la mayoría de edad, los tiempos de que dispone la justicia de menores para llevar a cabo el tratamiento previsto por la ley 22.278 se han acortado sensiblemente.

En virtud de lo expuesto, el informe socio ambiental que prevé el artículo 127 del Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal se deberá adecuar al siguiente modelo:

En el marco del proyecto de abordaje interdisciplinario de jóvenes que han tenido conflicto con la ley penal, se realizará un diagnóstico primario a los fines de la evaluación del tipo de tratamiento que resulta aconsejable según las variables a considerar. Se destaca la importancia de que ese diagnóstico quede plasmado siguiendo lineamientos uniformes para facilitar (de) la tarea de los magistrados intervinientes, así como de los profesionales de los distintos equipos y del propio joven, quienes eventualmente en una segunda etapa (en caso de elevarse la causa a juicio) deban continuar con el seguimiento.

Los ítems a desarrollar -algunos ya se consignan en la actualidad- serán los siguientes:

- I. DATOS PERSONALES
- II. DATOS FAMILIARES
- III. HISTORIA INSTITUCIONAL y ANTECEDENTES
- IV. RESEÑA FAMILIAR: grupo familiar conviviente y no conviviente
- V. EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL: estudios cursados con detalle de toda circunstancia que denote la relación entre el nivel de estudios alcanzado con la edad cronológica y motivos de abandono escolar
- VI. AREA LABORAL: actividades que ha desempeñado o desempeña

VII. AREA SALUD: Antecedentes de patologías y tratamientos realizados tanto por el joven como por su grupo convivencial.

Diagnóstico integral: clínico, neurológico, psiquiátrico y psicológico del joven

VIII. SITUACION ECONOMICA: consignar si están cubiertas las necesidades del grupo familiar

IX. DATOS AMBIENTALES: Barrio, servicios y recursos comunitarios de la zona en que el joven reside
Vivienda

X. AREA SOCIAL

Relaciones con la comunidad

Actividades recreativas: individuales y compartidas con la familia

XI. GESTIONES REALIZADAS TENDIENTES A LOGRAR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA DEL JOVEN: articulación de las redes institucionales

XII. CONCLUSIONES

Evaluación diagnóstica de la situación individual, familiar y comunitaria del joven

XIII. OBJETIVOS

En base a las conclusiones a que se arriben en cada caso se establecerán metas de trabajo con el joven, la familia y las redes comunitarias en las áreas familia, educación, salud y trabajo, tendientes a evitar futuras situaciones de vulnerabilidad social

XIV. FIRMA DEL CONVENIO DE RESPONSABILIDADES

Una vez establecidos y priorizados los objetivos se redactará entre las partes interesadas un convenio de compromiso y acuerdo de responsabilidades para restablecer los derechos

Comuníquese.

Mario Filozof
Presidente

Carlos Alberto González

Alfredo Barbarosch

Si///

Poder Judicial de la Nación
"Año del Bicentenario"

///guen las firmas:

Gustavo A. Bruzzone

María Laura Garrigós de Rétori

Juan Esteban Cicciaro

Rodolfo Pociello Argerich

Jorge Luis Rimondi

(Nicolás)

Alberto Seijas

Mirna López González

Mauro Antonio Divito

Ante mí:

AGOSTÍN COLLADOS STOLA
PROSECRETARIO DE CÁMARA

USO OFICIAL

f- Mapa de zonas, provincia de Buenos Aires - Reglamento para la Jurisdicción

Solicitud de Informes, art. 111

